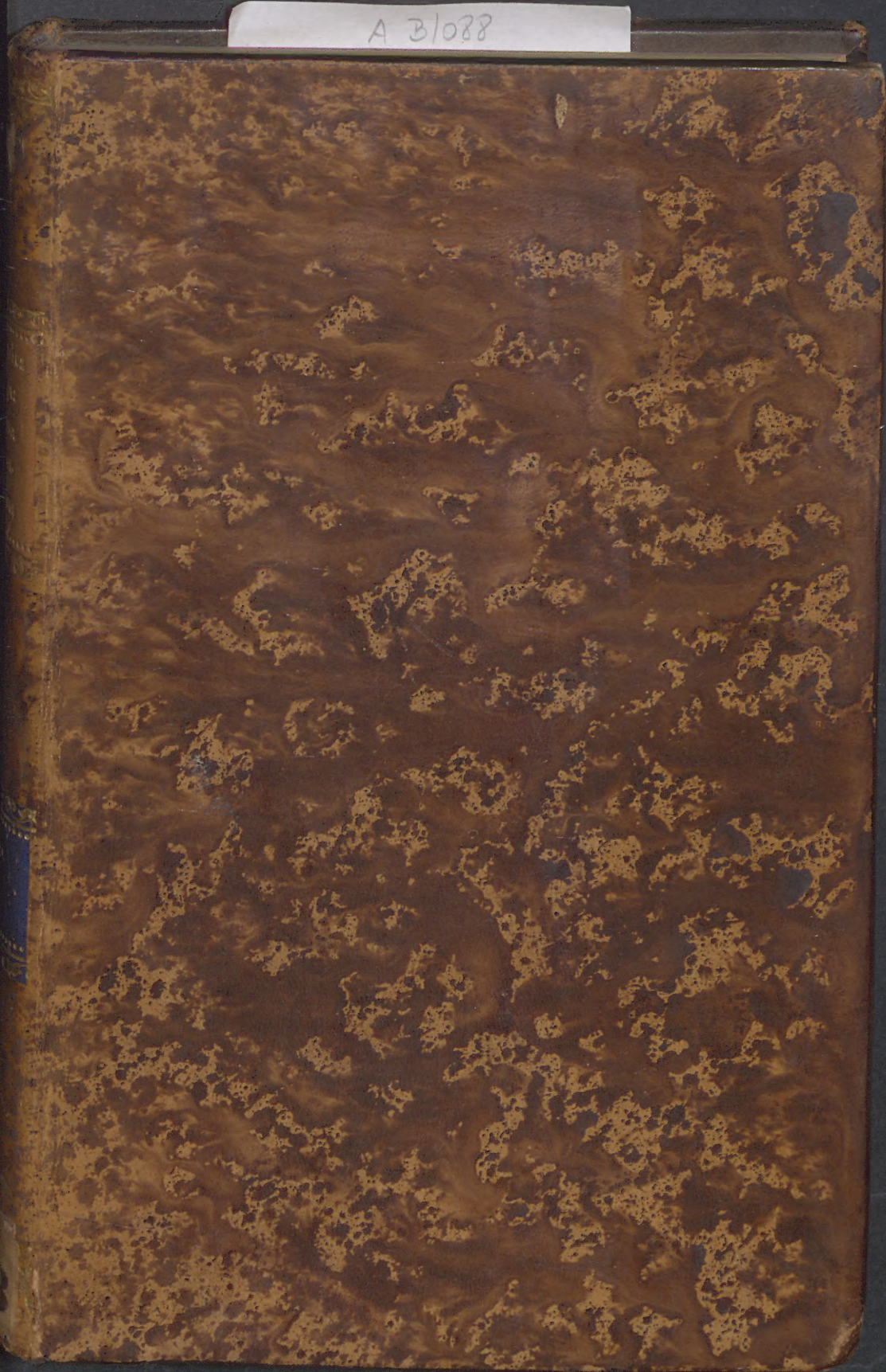
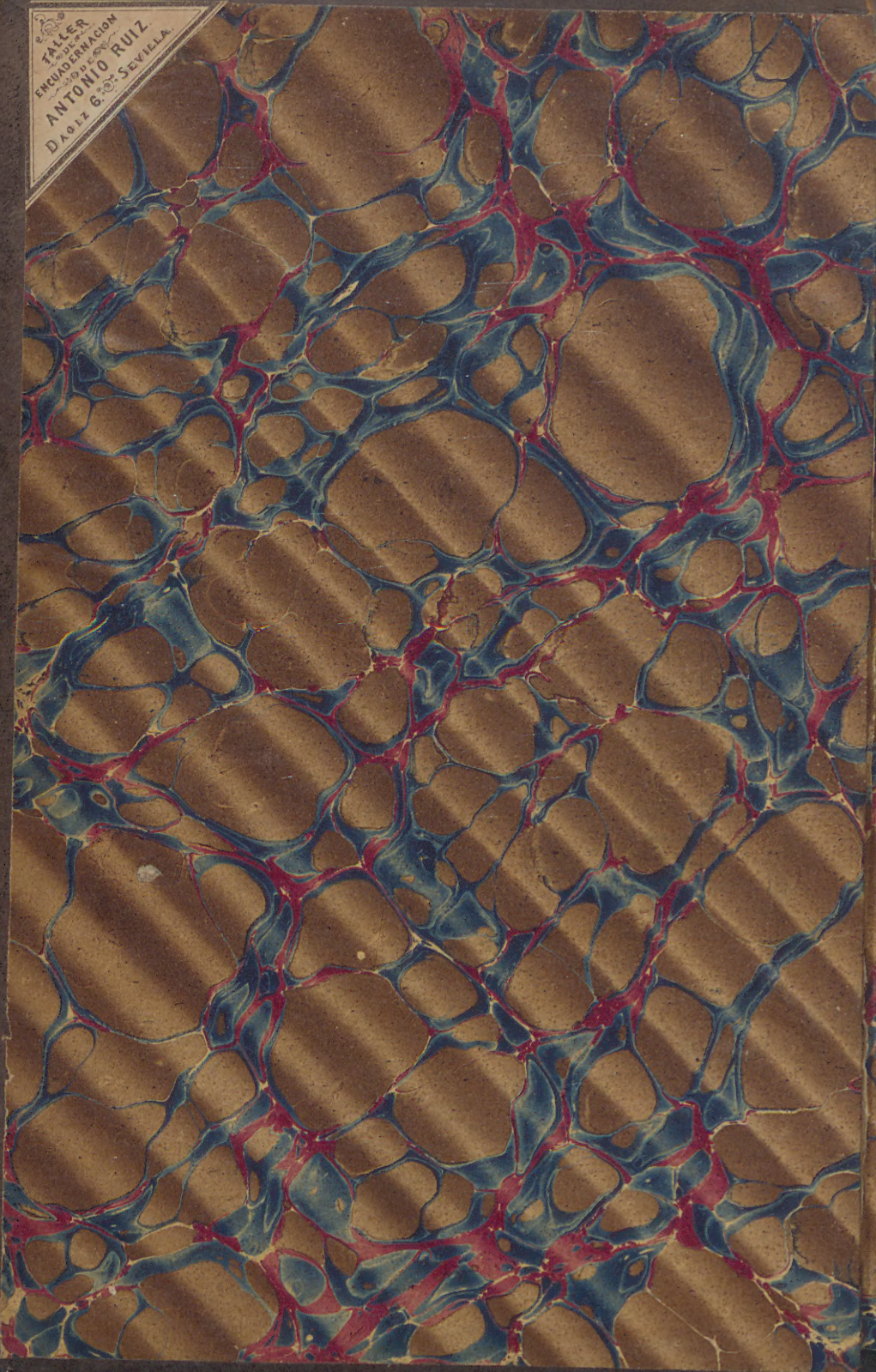


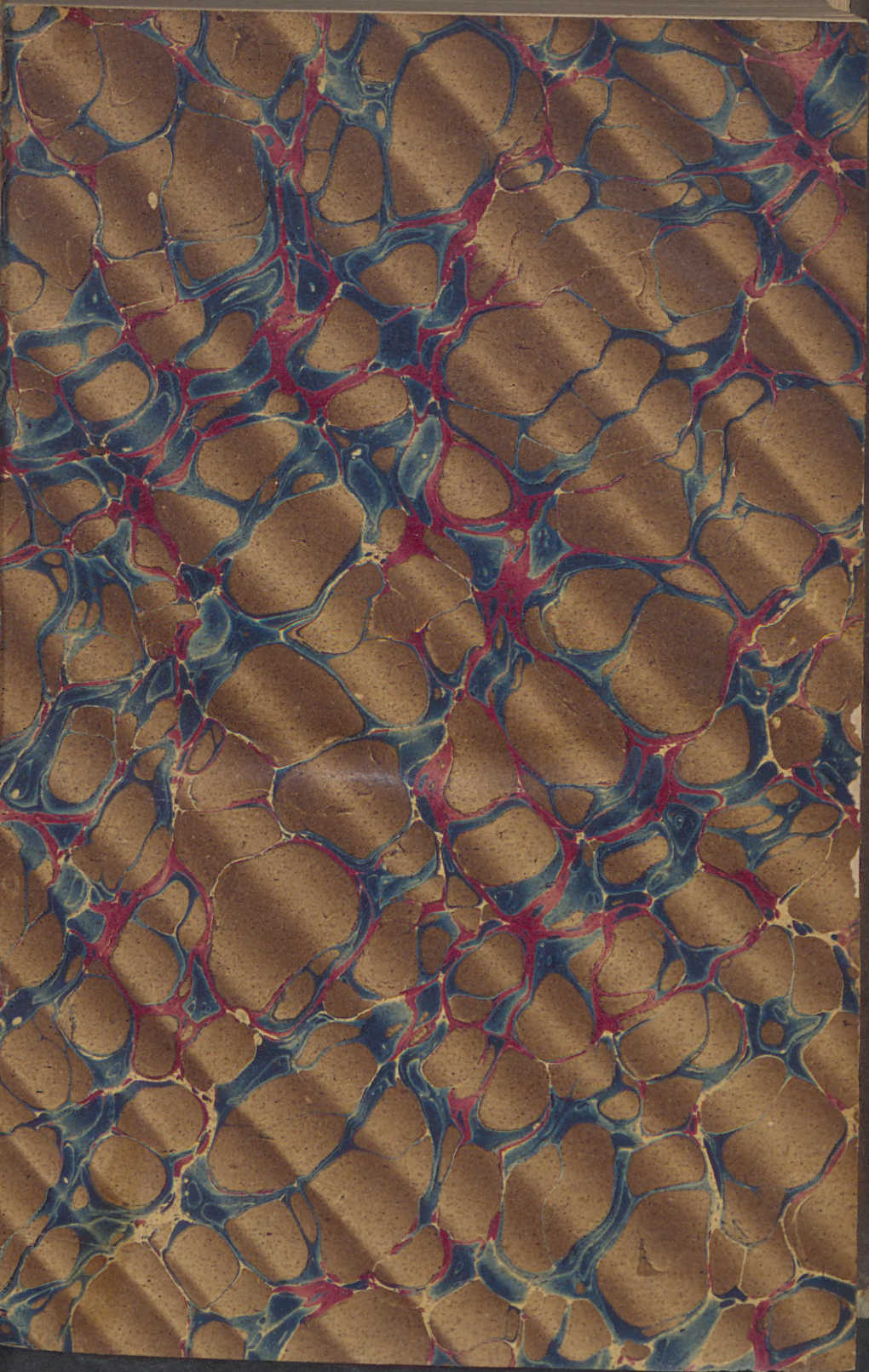
A 31088



TALLER
de
ENCUADERACION
de D. J. CORTES
ANTONIO RUIZ
DAGIZ 6. 2.ª PL. SEVILLA.



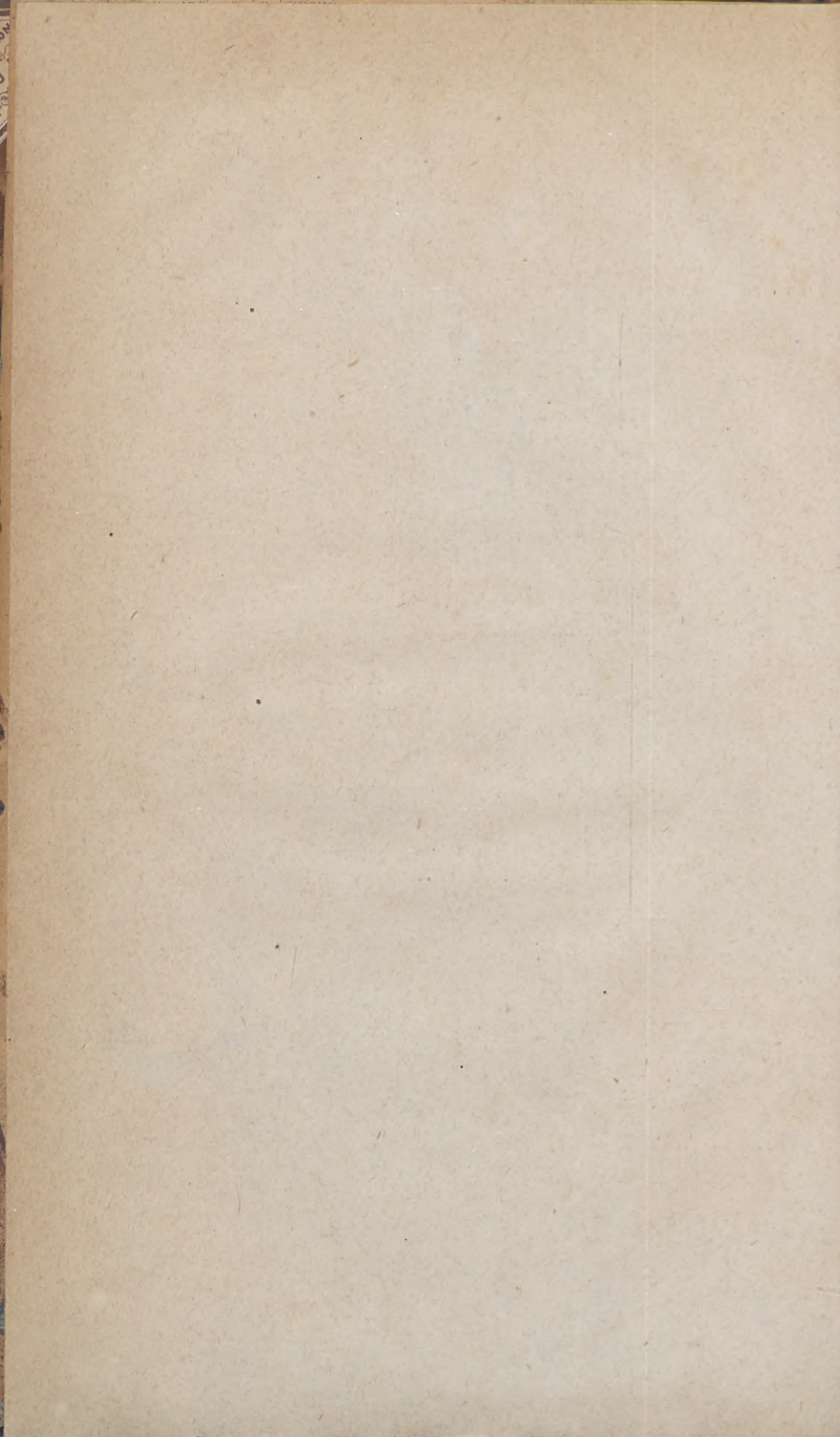
A 31088



TALLER
ENCUADERNACION
ANTONIO
D. 012 6.



In B
n 88



ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS.



ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS



ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS,

POR

MONSIEUR VIVIEN,

miembro del instituto,

TRADUCIDOS DE LA ÚLTIMA EDICIÓN FRANCESA

POR DON ANTONIO HERNANDEZ AMORES

Y

DON JUAN LOPEZ SOMALO.

TOMO II.



MADRID.

Imprenta á cargo de JOAQUIN RENÉ, *Travesía de la Parada,*
núm. 8, cuarto bajo.

—
1854.

ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS

MONSIEUR VIVIER

TRADUCCION DE LA LINGUA FRANCESA

TRADUCCION DE LA LINGUA FRANCESA

POR DON ANTONIO HERNANDEZ ABORES

DON JUAN LOPEZ SOMALO

TOMO II



MADRID

Imprenta de los Señores Ruiz, Tercera de la Puerta,
calle de Toledo 10.

1887

ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS.

SEGUNDA PARTE.

BRAZOS ESPECIALES DE LA ADMINISTRACION.

TITULO PRIMERO.

LA ADMINISTRACION LOCAL.

CAPITULO I.

DEL SISTEMA GENERAL DE LA LEGISLACION RELATIVAMENTE A LA ADMINISTRACION LOCAL.

LA legislacion relativa á la administracion local se remonta hasta los primeros trabajos de la inmortal Asamblea que en 1789 puso los fundamentos de todas nuestras instituciones modernas. La Asamblea constituyente consagró á este objeto sus primeras deliberaciones. En él empleó todo el tiempo que le dejaban libre los acontecimientos exteriores y las dificultades políticas. El grito de la opinion, los poderes de los electores y las necesidades reales del pueblo le imponian este deber.

La situacion de las provincias y municipios reclamaba una reforma pronta y radical.

En lo concerniente á las provincias, para hablar desde luego de ellas, sabido es que la mayor parte del reino se componia de paises de eleccion donde los intendentes ejercian una autoridad tan absoluta como la del monarca de quien

eran delegados. Cuando estos intendentes se llamaban *Trudaine* ó *Turgot*, la provincia se administraba con equidad, sabiduría y vigilancia. Mas para algunos hombres cuyos esfuerzos impulsaba la virtud, ¡cuántos pensaban solo en complacer al monarca y oprimir á las provincias! Las poblaciones sin medios de hacer oír sus quejas, veían sus necesidades descuidadas y sus intereses desatendidos. Al estallar la revolución el estado de los países de elección deponía contra sus administradores. En las otras provincias, los Estados mantenidos por las actas de reunion dirigian la administracion con cierta especie de independencia. Se ejecutaban trabajos útiles y de importancia. Su prosperidad real contrastaba grandemente con los países de elección; pero al lado de estos grandes resultados que honran á los Estados provinciales, los documentos históricos prueban que su administracion era con frecuencia ruinosa para las poblaciones y opresiva para las clases inferiores. Por otra parte, su independencia habia recibido grandes ataques. En 1629 los Estados de Languedoc fueron obligados á someter sus presupuestos á la aprobacion del Rey, y á no reunirse mas que quince dias cada año. En tiempo de Luis XIV se les autorizó únicamente para reunirse cada dos años, y bajo la presidencia de un comisario régio. Los Estados de la Bretaña compuestos casi esclusivamente de miembros dependientes de la corona, habian visto desaparecer sus prerogativas mas queridas. Casi lo mismo sucedia en todos los Estados provinciales con corta diferencia. En los últimos tiempos sus Asambleas no eran mas que reuniones de placer, en las que los grandes señores hacian ostentacion de sus riquezas, donde los agentes del monarca prodigaban las amenazas, la astucia ó la corrupcion, para arrancar el don gratuito que la monarquia, cuyas usurpaciones no se habian estendido hasta establecer el impuesto en su provecho, se veia obligada á solicitar. (1)

(1) «La costumbre habia sido hasta entonces, no solo pedirles (á los Estados del Languedoc y á otros) grandes sumas para obtenerlas medianas,

En los municipios, la libertad formaba también escepcion. Las villas dependian de señores y no poseian organizacion alguna. Solo á las ciudades, aquellas al menos que habian conquistado el título de Municipios, pertenecian privilegios harto estensos en su origen, pero restringidos sucesivamente. Su emancipacion en el siglo xii y el xiii, habia sido esclusivamente política; habian conquistado por la fuerza, y por la derrota de sus señores feudales, la facultad de armar tropas, de administrar justicia, de levantar impuestos, atributos del poder central, que poseen en la actualidad, y de que nadie propone despojarle. A esta emancipacion habia sucedido el establecimiento sucesivo y continuo de la centralizacion administrativa. Para facilitar su desarrollo el interés fiscal secundaba al interés político. Los cargos municipales convertidos en oficios reales y venales no estaban encomendados á la eleccion sino en el pequeño número de ciudades que los habian vuelto á comprar. El poder municipal mutilado en sus depositarios lo habia sido tambien en sus atribuciones. Por un edicto de agosto de 1764 se sometian las cuentas, los empréstitos, las contribuciones á la aprobacion de los agentes del rey. Los municipios no podian litigar sin una autorizacion. En algunas provincias lejanas solamente, á favor de fueros especiales, la libertad de ciertos municipios, muy cortos en número, se conservaba mas entera.

Los municipios estan colocados bajo la autoridad del Estado, en cuanto á los poderes que sus representantes ejercen como delegados de su poder, y bajo su vigilancia en cuanto á los que le son propios. Esta vigilancia va muy lejos; tiene por sino tambien sufrir que pusiesen condiciones á todo, que se lo prometiesen todo, y eludir bien pronto bajo fútiles pretextos lo que se les habia prometido; hacer tambien un gran número de edictos sin otro objeto que concederles ó mejor dicho venderles su revocacion poco despues. En este sistema encontré poca dignidad para el soberano y poco atractivo para los súbditos. Adopté uno opuesto que he seguido siempre desde entonces, que fué pedirles solo lo que tenia deseo de obtener; prometer poco, pero cumplirlo, mas tambien acordar sus peticiones cuando por medio de súplicas se confiaban á mi justicia y mi bondad.» (Obras de Luis XIV.—1—160.)

sancion el derecho de anular los actos que hieren los intereses privados y la necesidad de una aprobacion prévia para los que afectan el porvenir ó atañen á los intereses comunes de una importancia especial, por ejemplo á la propiedad.

Los departamentos, considerados solamente como una division territorial, dependen enteramente del poder ejecutivo, al que tienen obligacion de prestar obediencia sus administradores.

La deliberacion está separada de la accion.

Todas las partes de la administracion, están subordinadas al poder central encargado de darles impulso.

Estos principios eran verdaderos; pero la Asamblea Constituyente que tuvo la honra de consagrarlos, no supo asegurar su aplicacion.

El gobierno colocado en la cúspide carecia del poder necesario para hacer prevalecer su supremacía; sus únicos instrumentos, eran los cuerpos colectivos elegidos por los ciudadanos, ó agentes tambien electivos, sin atribuciones claramente definidas y que escapaban á su autoridad. La máquina administrativa, sábiamente construida, era una máquina regular, y sus ruedas distribuidas con arte; pero ningun lazo ligaba el conjunto, y los resortes que debian comunicar el movimiento, no existian en manera alguna.

La Asamblea constituyente tenia la mision de suprimir distinciones contrarias á la igualdad, y de reemplazar la arbitrariedad con la regla; debia sobre todo establecer esta ley comun y homogénea que la Francia reclamaba por todas partes, que los reyes procuraban hacer prevalecer desde muchos siglos, y que desde entonces sancionada por los elegidos de la nacion y asociada á la libertad, estaba destinada á inaugurar y consolidar el nuevo régimen.

Por las leyes de 1789 y 1790, todas las antiguas comunidades de habitantes, desde la parroquia rural hasta la ciudad mas populosa, reciben una existencia legal, el mismo nombre los mismos derechos. Los municipios son propietarios; admi-

nistran sus bienes, tienen su policia, ejercen atribuciones que se rozan con los intereses del Estado, dependen es cierto de él, mas componen cuerpos secundarios, distintos, dotados de vida propia, y forman como pequeñas familias, en la gran familia nacional.

La Francia se divide en departamentos, subdivididos en distritos; pero los departamentos, no tienen ni la estension, ni los poderes que las provincias de Estado. Lejos de encaminarse al restablecimiento de las antiguas provincias, las nuevas circunscripciones tienen por objeto abolirlas, y no son mas que divisiones puramente administrativas, creadas para facilitar el servicio público, sin derechos particulares, sin existencia diferente.

Las leyes de la Asamblea Constituyente, proclaman ademas, principios que atestan de parte de los que los escribieron en ellas, un estudio profundo de las condiciones orgánicas de los poderes públicos.

La experiencia, tanto mas decisiva, cuanto que las circunstancias eran muy graves, no tardó en demostrar que en efecto, las fuerzas del Estado estaban, por falta de cohesion en el conjunto, paralizadas. La Constitucion de 1795 ensayó unir las colocando á la cabeza de las municipalidades de canton, que creó, y de los departamentos, una administracion compuesta de un pequeño número de miembros, junto á los que colocó comisarios del gobierno, nombrados por este, revocables y asalariados.

La nueva organizacion no corregia los vicios de la obra de la Asamblea constituyente y le privaba de algunas de sus mas preciosas ventajas. La mayor parte de los municipios reducidos á un agente municipal y á un adjunto, perdian en cierta manera su vida propia. Los departamentos no tenian ya á su cabeza sino cinco administradores encargados de todas las funciones, de la deliberacion, del juicio de lo contencioso, de la administracion. El gobierno central no encontraba mas que una representacion imperfecta en los comisarios

á quienes la Constitución solo encargaba «vigilar y requerir para que se ejecutasen las leyes.» Todos los poderes se hallaban confundidos, y el Estado no heredaba en manera alguna los derechos de que despojaba á las administraciones locales.

La ley de 18 de pluvioso del año viii por medio de una dichosa vuelta á los principios de la legislación de 1789 hizo cesar esta confusion y restableció la justa distribucion de los poderes y de las funciones. Todos los municipios adquieren existencia propia; un consejo municipal delibera sobre sus negocios; un *maire* está encargado de la administracion activa; en cada departamento un consejo general para la deliberacion, un prefecto para la administracion, un consejo de prefectura para el juicio de las dificultades contenciosas relativas á ciertas materias especiales, por ejemplo, las contribuciones y los trabajos públicos; repartimiento conforme á la naturaleza de las cosas y propio á satisfacer todas las necesidades. Sobre todo importaba sustituir un administrador único á los poderes colectivos creados por las leyes de 1789 á 1795. (1)

Mas si era bueno suprimir los agentes colectivos y por otra parte reducir las atribuciones demasiado estensas que las leyes de 1789 habian dado á los consejos de los municipios y de los departamentos, la ley del año viii traspasó la medida cuando reemplazó la eleccion de estos consejos por un sistema de candidatura cuya pronta abolicion dejó al gobierno la eleccion de sus miembros, y cuando limitó los consejos de departamento á la sola operacion de repartir las contribuciones, y á los consejos municipales al derecho de deliberar en solo una sesion anual sobre algunos intereses comunes de una importancia especial.

Las leyes de 1789, en su pensamiento general, al crear una centralizacion necesaria, habian puesto el sello al trabajo de unidad que la Francia realizaba despues de muchos siglos. La ley de 28 de pluvioso del año viii sacrificaba com-

(1) V. tomo primero, los capítulos de las reglas generales de la organizacion administrativa y de la accion administrativa.

pletamente la libertad al orden y la vida local á la omnipotencia del gobierno central.

Sin embargo, la Francia se hallaba cansada de los desórdenes por que acababa de pasar, la libertad habia con frecuencia degenerado en licencia, y un gran prestigio se juntaba al nombre del hombre que fundó este régimen nuevo; la ley de 28 de pluvioso del año viii imprimia á la administracion tanta fuerza y sencillez, se adaptaba tan bien á las necesidades del momento, no menos que á los instintos tradicionales del pais, que pasó sin oposicion.

Cuando la Restauracion volvió á abrir la tribuna parlamentaria, los departamentos y los municipios hicieron oír sus quejas por medio de sus representantes. Las oposiciones reivindicaron las libertades locales, tanto en nombre de los principios del 89 como en nombre de los recuerdos poco fieles del antiguo régimen. A estas reclamaciones contestó el gobierno con las proposiciones presentadas en 1821 y 1829, en las que se encontraba una tímida y limitada vuelta al sistema electivo, y que los acontecimientos políticos hicieron abortar. La ley de 28 de pluvioso estaba aun en vigor cuando apareció la revolucion de 1830.

Entre las promesas insertas en la nueva Constitucion, se encuentra la de «proveer, lo mas pronto posible, al establecimiento de instituciones departamentales y municipales fundadas en un régimen electivo.»

Para cumplir esta promesa, la ley de 21 de marzo de 1831 estableció, en efecto, en cuanto á la composicion de los consejos municipales, un régimen electivo, y creó colegios en los que hizo entrar, en armonía con los principios de la Constitucion de 1830, electores contribuyentes: todavia la cuota, reglada segun la poblacion, fué mucho mas reducida que la de los electores políticos. Esta ley dejó al jefe del Estado, el nombramiento de los *maires* y de los adjuntos, pero exigia que fuesen elegidos entre los consejeros municipales. La ley de 22 de junio de 1833, hizo igualmente electivas las funciones de los

miembros de los consejos de departamento. y confió el derecho de elegirlos á los ciudadanos inscritos en la lista del jurado.

Algunos años mas tarde, despues de largos ensayos y de liberaciones repetidas, las leyes de 18 de julio de 1857 y 10 de mayo de 1858, reglaron las atribuciones de los consejos municipales y generales. Estas atribuciones, fueron enumeradas detalladamente en las leyes anteriores, reunidas, coordinadas, y redactadas asimismo. Los consejos municipales obtuvieron por la vez primera el derecho de tomar en ciertos objetos resoluciones que eran definitivas, sino se anulaban por la autoridad superior dentro de cierto término, y con las formalidades establecidas. Los departamentos que habian adquirido la propiedad de ciertos inmuebles por concesion del gobierno, por compras, por servicios públicos. ó por donaciones autorizadas, fueron espresamente declarados aptos para poseer; cualidad que la Asamblea Constituyente les habia negado en 1789, pero que resultaba de hechos consumados y no ofrecia inconvenientes. Los consejos generales obtuvieron las atribuciones que llevaba consigo esta nueva situacion.

Así se hallaron reunidas todas las disposiciones de las leyes anteriores, que habian pasado por el crisol de la experiencia: se tomó de la de 1789, la escala, la gerarquía, la division de poderes, el origen electivo de los consejos locales; de la ley del año viii la unidad de accion. La jurisdiccion contenciosa organizada por esta ley, se conservaba; la libertad que habia hecho brotar de las administraciones locales, volvía á entrar en ellas con las garantías que reclamaba el orden general. El poder central conservaba sus prerogativas necesarias; pero estaba encerrado en límites mas estrechos y rodeado de garantías mas protectoras de la independencia de los poderes locales.

Al estallar la revolucion de 1848, las leyes de 1851, 1855, 1857 y 1858 recibian su ejecucion. Por un decreto de 5 de julio de 1848, la Asamblea Constituyente mandó aplicar á la eleccion de los consejos municipales y generales

el sufragio universal, que era el principio del gobierno republicano. El nombramiento de los *maires*, fué encomendado por el mismo decreto, á los consejos municipales en todos los municipios, salvo aquellos cuya poblacion escediese de 6000 almas, ó que fuesen capitales de departamento ó de distrito; en los que se conservó el órden de nombramiento establecido por la ley de 1851. Mas tarde, la Constitucion consagró la organizacion administrativa del departamento y municipio de conformidad con la ley del año VIII, manteniendo la eleccion de los miembros de sus consejos por el sufragio universal; creó los consejos cantonales, y remitió á una ley orgánica, el cuidado de completar su obra, y principalmente determinar las atribuciones respectivas de los consejos, encargados de los negocios locales en el municipio, el canton y el departamento.—La Constitucion de 1852, no contiene ninguna determinacion referente á la administracion local. Se limita á encomendar á una ley el cuidado de «determinar la organizacion municipal, y á declarar que los *maires* serán nombrados por el poder ejecutivo y elegidos fuera del consejo municipal.» Una ley de 7 de julio de 1852, ha conservado el sufragio universal para la eleccion de los miembros de los consejos generales, de los de distrito y de los municipales.

Tal es en sus términos mas generales la legislacion relativa á la administracion local. Antes de esponerla mas detalladamente y de discutir sus disposiciones, es necesario examinar su sistema.

La administracion local está sometida á condiciones que tienen su naturaleza propia. Debe combinarse con los intereses generales, y obedecer á los principios que rigen la sociedad en su conjunto.

Contra sus estravíos deben tomarse precauciones.

Es preciso que las leyes del Estado se observen y apliquen por los poderes locales.

Es necesario que las propiedades comunes, recibidas de las generaciones pasadas por las presentes como un depósito que

debe transmitir á las que han de sucederles, no se disipen, y no puedan enagenarse sino en casos de imperiosa y justificada necesidad.

Es necesario tambien, cuando el gobierno debe levantar impuestos sobre la propiedad privada, que no esté ya gravada por contribuciones locales, que cieguen de antemano las fuentes donde el Estado debe tomar para sus necesidades propias.

En fin, es indispensable que los poderes locales no puedan perjudicar en nada los derechos de los particulares, sacrificar el interés de la comunidad que administran á su interés privado, dar rienda á sus venganzas, á sus celos, al espíritu enredador, intolerable, sobre todo cuando se ejerce en un teatro muy pequeño.

Sin la observancia de estas reglas no hay orden posible en el Estado, ni garantía para las asociaciones locales, ni seguridad ni libertad para los ciudadanos.

Todas las legislaciones se han limitado á prevenir este peligro.

Los unos buscan sus garantías en prescripciones minuciosas y detalladas, cuya aplicacion entregan á la autoridad judicial, que, cuando la ley se infringe, pronuncia la pena.

Los otros instituyen consejos locales, magistrados administrativos que vigilan, autorizan, defienden.

Con frecuencia estos dos sistemas se combinan: la intervencion de los vigilantes ó de los consejos administrativos locales tiene por sancion la de la autoridad judicial.

El sistema de la legislacion francesa, adoptado en muchos Estados de Europa, consiste en el establecimiento de un poder administrativo distinto y separado de la autoridad judicial, el cual, por la gerarquía, se eleva hasta la autoridad central, ejerce sobre todas las asociaciones provinciales y comunales una inspeccion y vigilancia habituales, puede anular los actos que están autorizadas á ejecutar, é impedir, negando su autorizacion, la ejecucion de aquellos respecto de los que solo tienen el derecho de iniciativa ó de deliberacion preliminar.

Este sistema es el que constituye la centralizacion administrativa, distinta de la centralizacion politica, de la que nos hemos ocupado antes (1).

Preciso es convenir en que la centralizacion administrativa se recomienda por ciertas ventajas que le son propias. Asegura la unidad de aplicacion de las leyes, beneficio inmenso por que es una condicion de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que les mantiene en posesion de los mismos derechos y los somete á las mismas cargas, cualquiera que sea la provincia en que se hallen; liga la totalidad de las partes del territorio por la comunidad de principios; permite al gobierno ejercer por todas partes una vigilancia permanente, velar sin cesar sobre los intereses de los departamentos y de los municipios, ilustrarlos, prevenir sus estravíos y proteger las minorías contra los abusos de las tiranías locales.

Mas al lado de estas ventajas la centralizacion administrativa ha tenido consecuencias muy peligrosas para el pais.

En primer lugar, y mucho mas aun que la centralizacion politica, ha colocado al gobierno bajo el peso de una solidaridad que no ha sido estraña á las agitaciones de estos últimos tiempos. Por decirlo asi nada se hacia en el municipio y el departamento sin la autorizacion, por órden ó á nombre del gobierno; se le ha mezclado en todos los negocios, y, por una consecuencia necesaria, se le han imputado todas las faltas cometidas, todos los retardos experimentados, todos los accidentes que han sobrevenido: como su mano estaba en todas partes, se le ha tomado en todo y por todo; se le ha acusado de los estravíos de sus agentes, de las operaciones que habia autorizado, aun cediendo á la obseccion, de las contribuciones escesivas, de los déficit del presupuesto, de los desórdenes financieros, del mal estado de los caminos, de la ruina de los edificios, de la mala policia y hasta del mal arreglo de la escuela; ha venido á ser el único objeto de los descontentos. Un ministro inglés ha pronunciado no hace mucho tiempo, con

(1) Véase tomo I, de *la Centralizacion*.

este objeto, palabras que merecen reproducirse y meditar-se. «Si quisiera atraer sobre la Inglaterra una revolucion social, pediria ante todo la centralizacion. Si la responsabilidad de todo lo malo que sucede en cualquier rincon del reino pudiera imputarse al gobierno, resultaria un descontento general, un peso de impopularidad, bajo el que el gobierno seria aplastado muy pronto. Tengo la conviccion mas profunda de que la tranquilidad de este pais depende del gran número de personas que, en todos los puntos del territorio, toman parte en la administracion de sus negocios, y que á los magistrados locales, á los jurados, á las oficinas de guardias, de empedrados de calles y caminos, de alumbrado y de hacienda es á quienes debemos continuar pidiendo el mejor sistema de administracion.»

Las doctrinas socialistas, que han producido tan gran desorden, tanto entre sus sectarios, que se han entregado á las mas locas ilusiones, como entre sus adversarios, á los que han penetrado de terrores los mas exagerados, y que han conducido á un gran número de hombres al campamento de los enemigos de la libertad, son hijas de la centralizacion administrativa. Esta es quien ha propagado las ideas mas falsas sobre la mision reservada al gobierno, sobre sus derechos y sus poderes. Al ver reunidos en sus manos todos los intereses locales, su autoridad sustituida á la de los órganos y representantes de los ciudadanos, se ha creido hallar en él el regulador universal, el señor soberano, y se ha llegado á pedirle que corrija la sociedad, que haga desaparecer las desigualdades naturales, y que constituya por medio de su omnipotencia el bienestar universal. En el pais en que cada cual se siente señor de su destino, donde los ciudadanos se administran por sí mismos, el socialismo, falto de base, no descansa sobre ningun principio reconocido. En el pais de centralizacion, al contrario, basta para desarrollarlo, deducir consecuencias de un principio inserito en sus leyes, principio del que puede considerarse como la suprema y última expresion.

Mientras que el gobierno gime bajo una responsabilidad sin límites y se propagan las teorías mas perversas, los poderes departamentales y municipales se sienten desprovistos de fuerza y de independencia, ceden al desfallecimiento y pierden esa actividad vivificante que excita las imaginaciones, que enardece el celo y aviva el patriotismo local, patriotismo con frecuencia estrecho, pero que es como la iniciación de este noble amor á la patria misma sin el cual no hay mas que hombres reunidos en un territorio comun, pero no existe nacion.

La centralización administrativa ha sido necesaria por mucho tiempo; cuando la Francia estaba en lucha con las clases que la revolucion habia despojado de sus privilegios, con el antiguo espíritu provincial, con las preocupaciones de raza; cuando estaba en guerra con toda Europa, necesitaba juntar todas sus fuerzas en manos de su gobierno: estas eran otros tantos elementos de poderío que le confiaba, le armaba en cierto modo para el combate, y rehusándolo habria tal vez comprometido su seguridad. Gracias á Dios estos tiempos han pasado; el derecho nuevo, fundado en 1789, ha triunfado definitivamente; ni en el exterior ni en el interior tiene la Francia enemigos conjurados para humillarla, y los sacrificios que se resignaba á hacer para asegurar el nuevo régimen no serian ya mas que un holocausto gratuito de la libertad.

Bajo una forma política que hace al gobierno entero, á sus actos y á sus agentes justiciables, por decirlo así, por el poder parlamentario, se encuentra una razon de existencia á la centralización administrativa. Se derivaba en efecto de los representantes mismos del pais; podia decirse que era el pais mismo quien se administraba por medio de sus delegados. Este *self government* demasiado indirecto, estaba demasiado lejano de las cosas que abrazaba, mas en principio el pais se gobernaba por su propias manos. Despues que la Constitución de 1852 ha abolido el régimen parlamentario, suprimido

la responsabilidad política de los ministros, y encerrado el cuerpo legislativo en los límites que hoy le encierran, no se puede invocar en favor de la centralizacion administrativa el último argumento en que se apoyaba; no se puede ver en ella mas que la abdicacion de los derechos de las comunidades locales en manos del Presidente de la República.

Ha llegado el momento de investigar si las ventajas de la centralizacion pueden encontrarse por otros medios, de encerrarla en límites mas estrechos, y de no conservar sino lo que interesa á la vida misma del Estado.

¿Quiere decir esto que convenga tomar de los Estados-Unidos y de Inglaterra el régimen que estos pueblos han adoptado relativamente á las administraciones locales? No es ciertamente este nuestro pensamiento. Semejantes imitaciones son siempre peligrosas, y no se sabria trasplantar á un pais la legislacion de otro. Cada pueblo, en efecto, tiene sus costumbres, sus tradiciones históricas, su condicion política.

La república federal de los Estados-Unidos puede darnos ejemplos que imitar, pero no sabria servir de modelo á nuestra república una é indivisible. Ademas los Estados-Unidos acostumbrados en todos tiempos á gobernarse por sí mismos, pueden abandonarse á sus propias inspiraciones con mas facilidad, que un pueblo habituado á considerar el cuidado de los negocios públicos como el mandato natural y legítimo de su gobierno. Las creencias religiosas que encuentran su consagracion en las costumbres y su apoyo en las leyes, oponen en las repúblicas de la América del Norte una sólida barrera al desórden de los ánimos. El gobierno central exento de sostener un ejército numeroso, rico con el producto de las aduanas, con el que cubre una gran parte de los gastos necesarios, no tiene un interés directo en manejar los recursos de los municipios, de las provincias ni de los Estados para subvenir á sus necesidades.

La Inglaterra, donde el respeto de las tradiciones es tan inveterado que las innovaciones se consagran por las costum-

bres antes de tener entrada en las leyes, donde la influencia de una aristocracia hábil y popular está establecida y aceptada, no experimenta la misma necesidad que la Francia de encontrar un contrapeso en la intervencion del poder central. Sin embargo, á medida que sus poderes locales van escapando de las manos de la aristocracia, experimenta la necesidad de aproximarse al sistema de la centralizacion. Desde algunos años á esta parte las cárceles, la instruccion pública, las medidas relativas á la aplicacion de la tasa de pobres, se han colocado en gran parte bajo la autoridad del gobierno, y despues que la reforma de las corporaciones municipales ha estendido el círculo de los electores y arrancado la administracion de las ciudades á los privilegiados que antes la poseian, los reglamentos generales que sus consejos podian hacer, necesitan recibir la aprobacion del ministro del Interior.

No es en manera alguna á Inglaterra ni á los Estados-Unidos donde conviene ir á buscar las reformas que deben modificar el sistema de nuestra administracion interior. El antiguo régimen de nuestras provincias y municipios tampoco ofrece modelos que copiar. En lo que se refiere á los abusos, las injusticias, las desigualdades, que eran, por decirlo asi, sus signos distintivos, se puede afirmar que nuestras leyes actuales, á pesar de sus imperfecciones, hacen imposible toda comparacion.

Ademas, aun admitiendo que las franquicias cuyo restablecimiento se solicita perteneciese en otra época á las administraciones locales, seria imposible separarlas del conjunto de las instituciones de que formaban parte. Todo se liga en la organizacion política. Si se le priva de sus estribos el edificio viene á tierra. Pero la administracion provincial de los paises de *Etat* se combinaba con los tres órdenes: un clero poderoso cuyos primeros dignatarios presidian los Estados; una nobleza hereditaria cuya influencia se apoyaba en la posesion del suelo, las tradiciones y las costumbres; una clase media constituida en brazo del Estado por los magisterios, los

gremios y las corporaciones. Si los municipios no estaban administrados por los tres órdenes, sus oficiales, cuando no estaban provistos de un cargo venal, salían de una elección muy restringida y que no penetraba en el corazón de las poblaciones. En fin la libertad de que gozaban algunas provincias únicamente y que no habrían podido en otras ocasiones concederse á todas, serían incompatibles con los derechos que nadie niega hoy al gobierno central, que forman su esencia y á los que se une su existencia propia.

No tenemos que interrogar sino á nuestra misma legislación para investigar las modificaciones que ha sufrido. Después de 1789, ó mejor dicho, después del año VIII en cuya época la centralización tocó su apogeo, las leyes la han restringido y encerrado sucesivamente en límites más estrechos. Bajo el gobierno de julio se ha verificado principalmente este trabajo. Las leyes de 1831 á 1858 se han discutido y votado con objeto de restituir á los municipios y departamentos cierta independencia; ellas han hecho electivos los concejos locales, conquista preciosa sobre el Consulado y el Imperio que habían conferido su composición al poder ejecutivo, y sobre la Restauración que no había querido despojarse de esta prerrogativa. La elección está encomendada desde 1848 al sufragio universal. Ya tendremos ocasión de examinar si el sufragio universal satisface las condiciones del problema; pero la elección en sí misma, es una preciosa y primera garantía contra los abusos de la centralización. En efecto, la elección vivifica todos los poderes de que es origen, aumenta sus fuerzas, ensancha sus atribuciones y dá una sanción á sus derechos.

En virtud de las mismas leyes los consejos locales son llamados á intervenir por vía de resolución, de deliberación, de informe en todas las cuestiones que se refieren á la propiedad, á los ingresos, á los gastos, y que aun los mismos servicios generales del Estado; tocan de lejos ó cerca al interés comunal ó departamental; solo la ley en nombre del inte-

rés público crea sus deberes ó les impone obligaciones. Fuera de las que les obliga á soportar no pueden ser gravados con otras que con las que ellos mismos se imponen.

Verdad es, como veremos, que muy pocos negocios son encomendados á su decision, y por lo mismo un gran número depende del gobierno, siendo la administracion local condenada asi á retardos y repulsas, y colocada respecto del poder central en una dependencia cuyos funestos efectos hemos indicado. No obstante seria una injusticia, y por decirlo asi, una ingratitud desconocer que se han hecho grandes cosas bajo el imperio de las leyes actuales. En los departamentos caminos abiertos ó acabados, multiplicados y subvencionados los generales; edificios construidos para las prefecturas y subprefecturas, escuelas normales primarias, asilos de enagenados, prisiones celulares edificadas con grandes gastos, premios distribuidos á la agricultura, garantías acordadas á los caminos de hierro, á los establecimientos de descuento, alocaiones dadas á las sociedades científicas, recursos departamentales aplicados á secundar el territorio, á difundir la instruccion y alentar la industria. En los municipios, las *mairies* y las casas de escuela edificadas con el concurso del Estado que por una especie de socorro mútuo les acordaba una cantidad del tesoro público; las calles ensanchadas, las plazas agrandadas, las habitaciones convertidas en mas salubres, los *mataderos* ó casas de *rastró*, los mercados, los teatros, las bibliotecas, proveyendo á la vez á las necesidades materiales, morales é intelectuales. Hé aquí nobles y bellos resultados, y la legislacion que los ha obtenido no es ciertamente digna de desprecio. ¿Pero los departamentos y municipios no estarian mas satisfechos de estos resultados si solo los debieran á su libre accion? ¿No puede decirse tambien, que se han llevado á cabo á pesar de los obstáculos suscitados por la centralizacion, mas bien que por su influencia, y que el moviminto general de los ánimos, las necesidades creadas por una paz larga, el desarrollo de la industria, los

progresos de las artes y la difusion de la riqueza pública han tenido la mayor parte en ello?

De cualquier modo que sea no repudiamos las leyes hajo cuyo imperio-los departamentos y municipios han estado tanto tiempo regidos. Corrijámoslas, desarrollemos los gérmenes de libertad que contienen, emancipémoslas de la servidumbre. Esta es la conducta mas sencilla y mas prudente, este es el ejemplo que nos ha dado la Bélgica. Cuando á su vez esta nacion inauguró sobre su territorio el reinado de la libertad, supo encontrar en las leyes que la Francia le habia dejado los gérmenes de las instituciones mas liberales; en vez destruirlos, los ha aprovechado con una previsora habilidad. Gracias á reformas que no por ser profundas estaban meditadas con menos sabiduría, ha destruido la centralizacion, enfranquecido sus provincias y sus municipios y asegurado asi su tranquilidad en el interior. Es muy notable en efecto que en el movimiento revolucionario que ha perturbado á la Europa en 1848, la Inglaterra con sus instituciones locales, y la Bélgica con el nuevo régimen provincial y municipal que se ha dado, son casi los únicos paises que han escapado á la universal conflagracion.

Imitemos este ejemplo, no para apropiarnos las leyes que pueden ser inconvenientes en Francia, sino para introducir en las que nos rigen las reformas compatibles con nuestro estado social y político, reformas susceptibles de dar á nuestras provincias vida propia y una actividad fecunda y espontánea.

Tal es el espíritu con que nos proponemos recorrer rápidamente el conjunto de leyes relativas al municipio, al canton, al distrito y al departamento.

CAPITULO II.

EL MUNICIPIO.

El municipio no es en manera alguna una simple division administrativa, obra artificial del legislador. Mr. Royer-

Collard decia en 1848: «El municipio es como la familia anterior al Estado; la ley política le encuentra hecho, no le crea.» En él nacen los primeros sentimientos que ligan los hombres al suelo natal. Allí encuentran los recuerdos de su infancia, las emociones de la familia, los pensamientos del porvenir, las relaciones de afeccion y de vecindad, los intereses comunes, las necesidades mútuas, un teatro donde ejercitar sus facultades, donde se desarrollan sus disposiciones, donde viven los jueces habituales de su vida, y la mayor parte de los individuos jamás salen de este recinto por estrecho que sea.

La organizacion del municipio es el objeto mas digno de la atencion del legislador, y el poder municipal ocupa un lugar inmenso en las instituciones públicas. Un gran jurisconsulto que fué al mismo tiempo un escelente ciudadano, Mr. Henrion de Pansey, se ha espresado en estos términos: «debajo del poder legislativo, ejecutivo y judicial, dice, hay un cuarto que á un mismo tiempo público y privado, reúne la autoridad del juez á la del padre de familia, y este poder es el poder municipal. Aunque colocado mas bajo que los otros tres, sin embargo, es mas antiguo que ellos: es sin duda el primero cuya necesidad se hace sentir. No hay aldea que desde el momento de su formacion no halla reconocido la necesidad de una administracion interior. Sobre este cimiento los legisladores de los pueblos han levantado el edificio social.»

En nuestros dias, el escritor que primero ha dado á conocer á la Francia la organizacion y los rasgos distintivos de la democracia americana, Mr. de Tocqueville, ha caracterizado con rasgos vigorosos las instituciones comunales. «En el municipio, dice, es donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las instituciones municipales son á la libertad, lo que las escuelas primarias á la ciencia; ellas la ponen al alcance del pueblo, le hacen gustar su uso moderado y le habitan á hacer buen uso de ella.»

El carácter de las instituciones comunales se modifica con los tiempos y los países. En Francia las instituciones comunales no se presentan ya bajo el mismo aspecto que en la época en que la emancipación de los Comunes marcó el primer período de la de los pueblos.

Las cartas concedidas á los municipios de la edad media consagraban una conquista política. Las garantías que estipulaban comprendían todos los derechos, cuyo goce constituye el reinado de las libertades públicas. Abolían la servidumbre personal y los impuestos arbitrarios. Los magistrados elegidos por los habitantes poseían todos los atributos del poder público; sus funciones abrazaban, no solo el mantenimiento de los asuntos del Común y de la policía, sino también la administración de justicia, el poder de imponer castigos, y en ciertos casos, el derecho de paz y de guerra (1). Las instituciones comunales ostentaban entonces un carácter principalmente político y se ligaban al gobierno mismo, del que formaban en cierto modo un desmembramiento.

Hoy, y de mucho tiempo á esta parte, gracias á los progresos de la civilización, los últimos vestigios de la servidumbre han desaparecido de nuestro suelo; las leyes garantizan la libertad individual; los representantes de la nación votan el impuesto y arreglan el repartimiento y la proporción.

Por su parte el poder central goza de todas las prerogativas que exigen el movimiento del cuerpo social y la seguridad del Estado. En el ejercicio de su autoridad, alcanza directamente y sin intermediarios á todos y á cada uno de los ciudadanos, sometidos á la obediencia de las leyes.

Así lo que las cartas de la edad media concedían á título de privilegio á los habitantes de los municipios emancipados, las Constituciones modernas lo han asegurado á toda la nación; lo que daban á los oficiales municipales, fuera de los

(1) Henrion de Pansey, *del poder municipal*, lib. I, cap. 2.º—Rainouard, *historia del derecho municipal en Francia*, tomo II p. 330.—Augustin Thierry, *cartas sobre la historia de Francia*.

intereses puramente comunales, el poder central lo ha recogido.

Bajo esta nueva forma las leyes municipales han cambiado de objeto.

Despojadas de sus antiguas prerogativas, las municipalidades no son mas, en cuanto al gobierno general del Estado, que una simple division administrativa del territorio; forman la última circunscripcion á que desciende la autoridad pública. Contribuyen á la accion del poder ejecutivo, á la ejecucion de las leyes y reglamentos; pero las atribuciones de que sus magistrados están investidos con este titulo, pudieran colocarse en otras manos y se les encomiendan solo por delegacion. Estas atribuciones dependen de la administracion pública y no constituyen la comunal.

La administracion comunal, propiamente dicha, tiene por objeto segun los términos de la Constitucion de 1791, *las relaciones sociales de la reunion de los habitantes en las ciudades y en ciertos distritos del territorio de los campos.*

Los intereses que abrazan son de diversa naturaleza.

Enlazados por una residencia comun, los ciudadanos tienen derecho á la seguridad personal, al reposo, al bienestar.

Poseen de mancomun bienes, y rentas; tienen que hacer tambien gastos para proveer á sus comunes necesidades.

Satisfacer estas necesidades es el objeto de la administracion comunal.

Las atribuciones que ejerce son distintas de las del gobierno; distintas de los derechos políticos é individuales de los ciudadanos; son esclusivamente comunales.

A la verdad el magistrado del municipio posee derechos que pertenecen tambien al gobierno; sus reglamentos hacen ley; requiere la fuerza pública para asegurar su ejecucion; los delegados de los habitantes reunidos en consejo municipal votan impuestos. Pero estas atribuciones especiales no son mas que el desarrollo y los medios de accion del poder municipal, y de que el municipio y el Estado, para satisfacer necesidades aná-

logas, recurran á los mismos medios, no resulta qué deba confundirseles.

Así, en la organizacion política actual de la Francia, el municipio se encuentra colocado entre el gobierno central, provisto de derechos y de medios de accion que no dependen de él, y los ciudadanos cuya capacidad política y civil reposa en el derecho público.

Una vez demostrado este estado, el poder municipal puede ser reconocido y asentado sobre anchas bases sin peligro para la unidad de la nacion, ni para los derechos, bien del poder central, bien de los mismos ciudadanos.

Pero ya lo hemos indicado; las mas altas consideraciones militan para establecer un sistema comunal muy libre.

La libertad de la administracion municipal debe contribuir poderosamente al desarrollo del espíritu público, esta virtud tan rara, tan deseada y tan fecunda. Cuántos hombres no pueden elevarse hasta el sentimiento de la patria, noble manantial de las abnegaciones y de los sacrificios del interés individual. Sus pensamientos, ya que no se extiendan mas lejos, pueden al menos abrazar la esfera del municipio; este les hace comprender el valor del interés público y les separa del vil egoismo; en su seno obtienen la recompensa de su celo, unen á su nombre el reconocimiento público, aprovechan los servicios prestados por sus antecesores, y legan á sus sucesores el recuerdo de los suyos propios. Que se les presente la ocasion de obtener estas satisfacciones, y sus talentos se consagrarán al pais, el espíritu público se desarrollará sobre todos los puntos de la República, y cesando de tenerlos encerrados en los estrechos límites de una pequeña villa, recibirá las generosas inspiraciones del interés nacional y del patriotismo.

El gobierno no tiene por qué alarmarse de esta libertad. Los poderes á que dará origen nunca podrán entrar en lucha con él, y muchas veces le serán útiles. Por una dichosa combinacion, aunque muy débiles para quebrantarle, serán qui-

zäs asaz poderosos para prevenir los escesos de la democracia, constituyéndola sobre sus verdaderas bases. En contacto con todos los ciudadanos, ejerciendo la influencia que va unida al patriotismo experimentado, tanto mas imponentes cuanto que reciben sus poderes de los ciudadanos mismos, estas autoridades intermedias pueden, en caso de necesidad, colocarse entre los ciudadanos y el poder central, prevenir los conflictos y hacer abortar las discordias civiles. El poder central tiene necesidad de estos puntos de apoyo; las instituciones que el imperio organizó para la dictadura, y que le han sobrevivido, le han aislado en demasía. Dos fuerzas solas se encuentran frente á frente: el gobierno y las masas del pueblo. El primero con los recursos del tesoro público, con sus ejércitos y sus innumerables agentes; las segundas con la fuerza material que dá el número. En los tiempos normales el poder central reina sin participacion, alcanza individualmente á los ciudadanos, sin que ninguna resistencia se le oponga. En los dias de tempestad, cuando las pasiones políticas se inflaman, cuando el torrente popular se desborda, el gobierno se desploma, ningun apoyo le detiene en su caida; ha rechazado los frenos intermediarios, y no puede acudir á ellos para detener el carro triunfal que le precipita. La suerte de los gobiernos que de cincuenta años á esta parte se han sucedido en Francia, revelan la debilidad de este régimen.

Una organizacion municipal que diese destino á todas las capacidades, repartiria por todas partes útiles luces. Nosotros no tenemos bastantes escuelas políticas donde se enseñe la ciencia de los negocios públicos. Por otra parte, la teoría no puede sustituir nunca á la práctica. Las clases medias que por la fuerza de las cosas, por la introduccion sucesiva de todas las capacidades y de todas las inteligencias en sus filas, son llamadas á los deberes de la administracion, no poseen absolutamente los hombres hábiles y ejercitados que la Inglaterra forma sin cesar, mezclándolos en todos los actos de interés colectivo. Las costumbres municipales suplirán esta falta. Es-

tas darán á cada uno la inteligencia de los intereses generales. ¿Quién ignora las ventajas de esta aplicacion usual? Ejercita los talentos, los familiariza con la realidad, los pone en guardia contra las doctrinas falsas; las imaginaciones volcánicas, que se lanzarian á vanas especulaciones, se penetran de las necesidades sociales.

Así, demos al municipio una organizacion poderosa, y el municipio se convertirá en una garantía de orden y de libertad; démosle una constitucion que aproveche el celo de todos, y ningun sacrificio será estéril. ¿Pero en qué principios debe fundarse esta organizacion?

El municipio posee derechos. Tiene una existencia propia; y si satisface condiciones necesarias, si provee á necesidades reales, si compone una de esas familias secundarias que forman como un pequeño Estado en el grande, esta existencia debe respetarse. Sus propiedades son tan sagradas como las del individuo; sus productos le pertenecen esclusivamente. Dispone de sus rentas y puede elevarlas con ayuda de contribuciones impuestas á sus miembros. Goza de una administracion especial encargada de asegurar la ejecucion de las leyes, y de proveer al interés comun, á la seguridad, á la tranquilidad de sus habitantes.

Pero no hay derechos sin deberes correspondientes. El municipio debe obedecer las leyes generales, tomar parte en las cargas públicas, satisfacer las necesidades morales de sus habitantes, necesidades religiosas é intelectuales; conciliar sus intereses particulares con los del resto de la sociedad, y tener presente al imponer tributos que el poder público los saca de las mismas fuentes, que no debe abrumar á los contribuyentes, y que las reglas de la justicia distributiva deben respetarse.

Para dar una sancion á estos derechos y á estos deberes, se ha instituido el régimen de la administracion municipal; y no responde á su objeto sino en tanto que los concilia en una medida justa, sin sacrificar los unos á los otros.

El municipio se personifica en los poderes que lo representan y que le sirven de órganos. ¿Cuáles son estos poderes? ¿Cuál es su origen? ¿De qué autoridad están investidos? ¿Qué derechos reconocen las leyes á los Comunes? ¿Qué obligaciones les imponen? Contestar á estas cuestiones será presentar el cuadro completo de la administracion municipal.

§ 1.º *Organizacion del poder municipal.*

Se sabe que la autoridad municipal en cada *Comun*, está confiada á un consejo municipal (*ayuntamiento*) y á un Maire (alcalde). Digamos desde luego como se nombran.

El consejo municipal, representante de la comunidad, debe emanar de ella. La ley del año viii que encargaba su nombramiento al gobierno, consagraba en provecho del poder central una usurpacion injustificable. Despues de la ley de 7 de julio de 1852, como ya hemos visto, los consejos municipales son elegidos por el sufragio universal; la ley no ha puesto ningun límite á la representacion comunal; todos los habitantes en posesion de sus derechos civiles concurren á ella. Puede preguntarse si para conferir tales funciones no deberia someterse el sufragio á ciertas restricciones. Todos los intereses administrativos del *Comun* se remiten al consejo municipal, y si hay algunos que no ordena solo, no existe ninguno como se verá, á menos que la ley no halla decidido, que le sea estraño, y sobre el que no deba ejercer su iniciativa, ó intervenir su consentimiento. ¿Pero cuáles son estos intereses? Los bienes que posee en *Comun*, el modo de disfrutarlos, los gastos que haya que hacer en provecho de la asociacion, los impuestos que establecer etc. Elejir los hombres que resuelvan mejor estas cuestiones es un acto que exige tanto discernimiento como independendencia, y tanto talento como solidaridad. ¿Poseen todos los ciudadanos estas cualidades? ¿No los habrá á quienes su posicion aconseje esclusiones injustas, á quienes, por la circunstancia de estar á cargo del *Comun* de quien reciben socorros, puede considerárseles con

dificultad órganos de sus necesidades reales, que no pertenciéndose á sí mismos, por decirlo así, no representarán sino un sufragio servil? Las mismas leyes de 1789 exigian que los electores estuvieren inscriptos en el padron de contribuciones directas, y esluian á los que su estado de domésticos y asalariados, privaba de independencia. En 1851 el Consejo de Estado y la comision de la Asamblea legislativa no admitieron á votar á « los individuos que no pagaban contribucion, y á los socorridos por los establecimientos de beneficencia. » Estas escepciones se apoyan en razones muy atendibles. Cuanto mas dispuesto se esté á estender los poderes de los consejos municipales, tanto mas necesario es no descuidar cosa alguna para que su composicion sea sábia, por que el legislador medirá siempre sus derechos por su aptitud, y no querrá conferirles sino los poderes de cuyo ejercicio sean dignos y capaces.

La eleccion tiene lugar con mas frecuencia por escrutinio. Esto no obstante, los grandes municipios pueden dividirse en distritos ó secciones en las que cada una elige uno ó muchos miembros. Esta division ofrece á las diversas porciones de un mismo municipio que pueden tener intereses distintos, sino es que opuestos, el medio de hacerse representar en el consejo municipal, é impide que los cuarteles, en las ciudades, y los partidos rurales, en los campos, se vean privados de órganos en el seno de la Asamblea donde se discuten los asuntos de todos.

La ley fija con arreglo á la poblacion el número de miembros del consejo municipal. Este es de 10 en los Comunes que no esceden de 500 habitantes;

De 12 en los de 500 á 1,500;

De 16 en los de 1,500 á 2,500;

De 21 en los de 2,500 á 3,500;

De 23 en los de 3,500 á 10,000;

De 27 en los de 10,000 á 50,000;

Y de 56 en todas las que esceden de 50.000.

El modo de elegir los consejos municipales ha producido pocas dificultades. No ha sucedido así respecto del nombramiento de los *maires*. A la verdad la Constitución de 1852 ha cortado la cuestión; mas como este punto es uno de los que pueden modificarse por senados-consultos, permitido nos es discutir los diversos sistemas que se han propuesto.

Primeramente conviene apreciar el adoptado en la Constitución de 1852, es decir, el nombramiento de todos los *maires* por el gobierno: es evidente que esta delegación atenta profundamente al derecho de los municipios, y consagra la centralización en lo que tiene de mas ofensivo para la vida municipal; podrá llegar el caso en que se coloque frente de un municipio al hombre que satisfaga menos sus necesidades y sus votos, y como no es preciso que se elija del seno del consejo municipal, podrá sentarse en él y deliberar, empeñar el comun, firmar créditos en pro ó en contra de él, hablar en su nombre, sin otro título que la elección del Presidente de la República, ó de un prefecto. ¿No es de esencia en toda asociación elegir su administrador y no reconocer al mandatario sino en tanto que ha recibido de ella misma el mandato? Mas aun hay otro orden de consideraciones que merece la atención particular de los que se han erigido en los últimos tiempos en apóstoles del principio de autoridad. ¿Es servir bien á este principio, ó no es, por el contrario, comprometer al gobierno sin utilidad, introducirle en cosa tan delicada como el nombramiento de un *maire*? Hacerse responsable en 37,000 municipios por 74,000 nombramientos, no contando mas que un adjunto para cada *maire*, de todas las elecciones hechas por sus agentes, y estas confiadas á 86 prefectos, animados con frecuencia de diversas ideas, y muchas veces contrarias, le espondrán por todas partes á la crítica mas viva, y descontentos que no siempre serán infundados. Despues de tantas revoluciones, cuando las opiniones se han abandonado á todos los vientos, la mayor parte de los individuos no juzgan el gobierno mas que por el carácter de los

hombres que se asocia. Segun los nombramientos se le considera en un departamento como sometido á la dominacion del clero, en otro como partidario de los defensores del antiguo régimen; aqui pasará por adversario de la libertad, allí por demagogo y socialista. ¡Qué manantial de irritaciones, de quejas, de juicios injustos! ¿Es esponerse á tales cosas seguir los consejos de una política prudente? Las recriminaciones, los celos, las sospechas no se limitarán á algunas palabras imprudentes, que podrian despreciarse sino fueran un síntoma de la opinion general. En el consejo municipal es donde se verán desplegarse las oposiciones; soportando con impaciencia á su cabeza un jefe nombrado sin su consentimiento, á pesar suyo, tal vez, el consejo municipal querrá sacudir un yugo importuno, y su hostilidad se mostrará tanto mas viva cuanto que, producto del sufragio universal, se sentirá mas independiente y mas profundamente arraigado en la poblacion. Es verdad que la ley del año VIII encomendaba al gobierno el nombramiento de los maires, pero le daba tambien el de los consejeros municipales. No colocaba frente por frente un maire elegido por el poder central y consejeros municipales elegidos por los ciudadanos.

El sistema que encarga al gobierno el nombramiento de los maires, no tanto nos parece objetable en interés de los municipios, cuanto en el del gobierno mismo.

No creemos que abandonado este sistema deba volverse á la ley de 1831 y mantener el nombramiento de los maires por el gobierno á condicion de que la eleccion se haga en un individuo del consejo municipal. En los municipios donde la mayoría del consejo merece confianza, si el gobierno elije al mismo que la mayoría hubiese nombrado, interviene sin utilidad en los negocios del municipio; y si elige otro, crea resistencias y corre el riesgo de dividir las mayorías. En los otros municipios no puede hacer la eleccion sino entre la minoría; la administracion del maire se encuentra entonces entorpecida. contradicha, llena de obstáculos. Puede llegar el caso de que

el municipio no tenga un solo individuo á quien el gobierno pueda confiar las funciones de maire. El sistema de la ley de 1851 tiene el inconveniente que lleva toda transaccion, no satisfacer plenamente á ninguno de los intereses que tiene por objeto aproximar.

Se ha propuesto entregar la eleccion del maire al sufragio universal; pero estas funciones son demasiado complexas y exigen muchas cualidades de una apreciacion delicada, para entregarlas á los azares y consecuencias de esta forma de eleccion. Tampoco adoptamos el sistema de las listas de candidatos, bien las formen los electores bien el consejo municipal. Este sistema reúne los inconvenientes del nombramiento hecho por el gobierno en razon á la responsabilidad que pesa sobre él, y los de la eleccion en virtud de la facultad que deja siempre á los electores para componer la lista de tal modo, que el nombramiento recaiga en el candidato de su predileccion.

El consejo municipal, como lo habia dispuesto la ley de 1848 es, en nuestro entender, el que debe nombrar el maire. Creemos tambien que aun las escepciones admitidas por esta ley debian restringirse. Es necesario quizás, que para algunas ciudades muy populosas que, sin presentar la importancia de París y de Lion, ya fuera de la regla comun, se encuentran no obstante en una situacion análoga; la eleccion del maire corresponda al gobierno, pero no á todos los municipios cuya poblacion pasa de 6,000 almas y á todas las cabezas de partido, departamento ó distrito, se pueden aplicar las mismas consideraciones. En fin, segun nuestra opinion, salvo un pequeño número de escepciones harto limitado, los maires deben nombrarse por los consejos municipales.

Pero se dirá: el interés del órden exige que el gobierno nombre los maires: solo con esta condicion puede responder de la tranquilidad pública. Convendremos sin vacilar en que si es cierto que las necesidades públicas obliguen á la ley á hacer pesar sobre el gobierno la responsabilidad del nombra-

miento de los maires, y á retirar al municipio el derecho de proceder á él, este sistema, cualquiera que sean sus inconvenientes, debe prevalecer. ¿Pero es así? Esto es lo que vamos á examinar.

Primeramente nos creemos autorizados para afirmar que en muchos departamentos, todos los municipios sin escepcion, y en los otros la mayor parte ofrecen garantías suficientes de orden para que no se tema que llegue á peligrar á consecuencia de los nombramientos que hicieran los consejos municipales. En estos municipios las pasiones políticas no juegan ningun papel, se respetan las leyes, y el gobierno está seguro de encontrar allí un concurso sincero y leal.

Respecto de este punto se puede recurrir á la experiencia del pasado. La ley de 1831 que encerraba la eleccion del gobierno en el consejo municipal y le obligaba hasta cierto punto á subordinar el nombramiento del maire á la mayoría de este consejo, se ejecutó casi en todas partes sin dificultad alguna, y son bien pocos los puntos donde produjo conflictos, sobre todo si se exceptuan los debidos á las torpezas de los prefectos.

La ley de 1848 que á escepcion de los municipios mas populosos, cuyos número es harto limitado, dejaba el nombramiento del maire al consejo municipal, es una prueba mas de que en todas las localidades este modo de nombrar puede adoptarse sin peligro para el orden público. Un gran número de revocaciones se decretaron á propuesta del Consejo de Estado, pero relativamente al número total de municipios no eran escesivas, y entre los maires cuyo nombramiento se reservó al gobierno las revocaciones fueron proporcionalmente mucho mas numerosas.

No obstante, aunque se admita que pocos municipios ofrecen peligros, para obviarlos, deben adoptarse disposiciones. Porque sea parcial el desorden no merece menos fijar la consideracion de la ley. ¿Mas en qué consisten los peligros á que se verian espuestos bien los municipios bien el gobierno?

¿El poder público estaria desarmado? Hé aquí lo que debe investigarse.

Se puede temer, convenimos en ello, que las elecciones hechas por el consejo municipal comprometan los intereses comunales, y no satisfagan en nada á los de orden y policia, respecto de los que el gobierno ha tenido por mucho tiempo el encargo de elegir. Procuremos responder á esta doble aprension.

En cuanto á los intereses comunales, no tenemos noticia de que en los cuatro años que la ley de 1848 ha sido aplicada se hayan sacrificado. Tampoco lo hubiesen sido en lo sucesivo : los consejos municipales pudieran haber hecho una mala eleccion ; pero ¿no sucede tambien á los prefectos? Se ha comparado el número de revocaciones de maires electivos con el de las ejecutadas con los nombrados por el gobierno bajo el imperio de la ley de 1851, y esta comparacion no ha dado la ventaja á los últimos. Los poderes de los maires, relativamente á la administracion, aunque estensos, están siempre limitados ó por las deliberaciones del consejo municipal ó por la ley, y el abuso ni puede ser frecuente ni en verdad peligroso. No obstante, puede acontecer que en mas de un lugar la administracion se entregue á manos poco hábiles. En este caso los ciudadanos no tendrian que dirigir cargos sino á su consejo municipal, y las primeras elecciones les ofreceria ocaion de hacer justicia. Bueno es que cada cual encuentre un interés en usar bien de su derecho, y si bajo todos los sistemas, sea el que quiera el modo de nombrar al maire, los municipios están condenados á sufrir sus faltas, vale mas ciertamente que la responsabilidad pese sobre ellos que sobre el gobierno. Se ha propuesto ademas en el seno de la comision legislativa en 1851 dar á los intereses comunales una garantía particular, imponiendo las condiciones mas duras al consejo municipal para el nombramiento del maire. La mayoría de la comision adoptó al principio esta proposicion. digna del exámen mas sério.

Respecto de los intereses de seguridad, de orden y de policía general, si se atribuye á los maires tan grande influencia es por falta de una idea completa de la naturaleza de sus poderes como representantes del gobierno central. Estos poderes les están delegados simplemente, y por consecuencia el gobierno puede siempre ejercerlos directamente y suplir con sus propios agentes la negligencia ó malicia de los maires. Ahora bien, todas las ciudades de alguna importancia, con ligeras escepciones, son capitales de un departamento ó de un distrito; por consiguiente cerca del maire y mas alto que él, se encuentra para las funciones políticas, un prefecto ó un subprefecto que puede sustituirse al maire que no cumpla con su deber. En verdad, los municipios rurales no ofrecen la misma garantía, pero conviene advertir desde luego que en la mayor parte de ellos las funciones delegadas al maire, ú ofrecen poca importancia, ó exigen tanta firmeza, resolucion y abnegacion que no puede esperarse de ellos el cumplimiento riguroso y completo dispuestos, como lo están siempre, á no crearse enemigos, y por lo tanto, el origen de su poder, siendo nombrados por el gobierno, será mas bien un principio de debilidad que de fuerza y de confianza. El gobierno lo sabe, y una institucion reciente tiene por objeto prestarles apoyo en todos los puntos en que los maires le falten con el suyo. Un decreto de 28 de marzo de 1852 ha creado «para donde haya necesidad,» comisarios cantonales de policía, encargados de la ejecucion de las leyes, de mantener la tranquilidad pública y autorizados para requerir á los guardas rurales. Esta institucion protectora ha disminuido singularmente la importancia que el gobierno podia dar al derecho de nombrar por sí mismo los maires de los municipios. En aquellos donde la eleccion, encargada al consejo municipal, pueda ofrecer algun peligro, el comisario de policía cantonal reemplazará al maire; y nosotros repetimos que el número de estos comunes es proporcionalmente poco elevado.

Mas las garantías que acabamos de indicar no son las

únicas. Privado del poder preventivo, en virtud del cual procedía á los nombramientos, el gobierno debería estar armado de una autoridad represiva, enérgica y eficaz. Nadie le niega el derecho de revocar los maires elegidos. La ley por otra parte puede contener prescripciones imperativas sobre los objetos que atañen al orden público, y ninguna razon plausible se opone á que sin adoptar el sistema seguido en Inglaterra y los Estados-Unidos, se tomen de allí las penas que aseguran la exactitud y la obediencia de los agentes locales. Algunas disposiciones de este género se encuentran ya en las leyes relativas á los actos del estado civil. El municipio mismo puede convertirse en solidario del representante que se habrá dado, y aprenderá á su propia costa á hacer buenas elecciones. Ninguna precaucion debe en efecto omitirse en interés de la sociedad, y el legislador que consagra una libertad, está obligado á unir á ella todas las condiciones propias para impedir que degeneren en licencia.

Tal es el sistema que nos parece debe adoptarse para el nombramiento de los maires. Devolvérsele á los municipios seria la medida mas conveniente y propia para levantar el espíritu municipal. Suponiendo que al principio no todos se mostrasen dignos de esta franquicia, el tiempo y la esperiencia no tardarian en aclarar los que hubiesen hecho traicion á la confianza de la ley. El sentimiento de la responsabilidad produciria sus efectos ordinarios.

No hace mucho tiempo que un ministro inglés rodeado de los maires de las ciudades principales de los tres reinos les daba gracias en medio de un banquete por los testimonios de adhesion y reconocimiento que habian prodigado al gobierno, y con un lenguaje lleno de grandeza, se felicitaba de encontrar en ellos, no las hechuras del poder, sino los órganos independientes y libres de los ciudadanos que representaban. ¿Cuándo podrán los depositarios del poder en Francia experimentar esta noble satisfaccion?

El poder municipal está organizado por la eleccion del

consejo y del maire. Tracemos sus respectivas atribuciones.

§. 2. *Atribuciones del maire y del consejo municipal.*

Las atribuciones del maire son tan numerosas como importantes. El maire toma disposiciones, 1.º para ordenar las medidas locales concernientes á los objetos confiados por las leyes á su vigilancia y su autoridad; 2.º para publicar de nuevo las leyes y reglamentos de policía y obligar á los ciudadanos á su observancia. Ya hemos hablado de esta parte de los poderes del maire. (1)

El maire, segun los términos de la ley, está encargado esclusivamente de la administracion; sin embargo, puede delegar una parte á sus adjuntos. En este concepto tiene á su cargo la policía, el cuidado de las vias públicas, la policía rural, la conservacion y la administracion de las propiedades del comun, la gestion de las rentas, la vigilancia de los establecimientos comunales, y la contabilidad; dirige los trabajos del municipio, suscribe las compras, visa las adjudicaciones, signa los contratos de venta, cambio, particion; acepta los de donacion y legado cuando estos actos se han autorizado en forma, y representa en juicio al municipio.

Todos estos poderes forman parte de la ejecucion propia-mente dicha, y en los municipios rurales pueden encomendarse al maire únicamente sin dificultad alguna; pero en las ciudades esceden con frecuencia á las fuerzas de un hombre. Verdad es que el maire tiene por auxiliares á sus adjuntos; pero no está obligado, por decirlo así, á emplearlos, y la ley no reconoce á otro que á él. Con razon, el consejo municipal, poder deliberante, está exento de todo lo relativo á la ejecucion. Estos dos órdenes de funciones deben siempre permanecer separados, mas de esta separacion necesaria no resulta por cierto que se concentren tantos deberes en una sola persona. Para cumplirlos es preciso que el maire posea los cono-

(1) Véase tomo primero, capítulo, *formas de los actos del poder reglamentario.*

cimientos mas variados y llene las condiciones mas opuestas.

Reuniendo tal conjunto de funciones se corre el riesgo de verlas mal desempeñadas, se imposibilita el concurso de numerosos auxiliares que pudieran utilizarse, y se desconoce la utilísima regla de la division del trabajo, tan aplicable á la administracion como á la industria. El buen juicio práctico de los ingleses y de los americanos les ha sugerido métodos muy diferentes. Los negocios de los municipios no están allí acumulados en una persona. Cada ciudad tiene agentes especiales para el empedrado, el alumbrado, los socorros etc... y ya hemos visto antes (1) los beneficios que de ello reportan y con qué orgullo se felicitan de que así suceda. Hay bien pocos hombres en estado de abrazar muchos objetos. El trabajo á que se dedica por sí mismo sin participacion de nadie, lo ejecuta mejor, con mayor habilidad y rapidez, y el éxito que en él obtiene escita su vanidad y le procura una dulce satisfaccion. Cuántos atacan y maldicen la administracion porque no toman parte en ella. Cuántos consumen su actividad en vanas agitaciones, mientras que si se les invitase la emplearian en utilidad del público. En lugar pues de un maire, del que hacéis el intendente, el notario, el consejo judicial, el arquitecto, el ingeniero, el director de empedrados, el hacendista, el legislador del municipio, elegir diversos agentes con su responsabilidad propia, en actitud de pretender el honor de las cosas útiles, y el castigo personal de sus faltas, y hareis á la vez un servicio al público y al municipio. ¿Se dirá que falta el celo? Que se le ponga á prueba; porque se puede preguntar con razon, si no faltan mas bien al celo ocasiones de servir que este á aquellas.

El maire y los que le asisten no son mas que los ejecutores de los acuerdos del consejo municipal; este es el que representa el municipio y dispone de sus derechos. Examinemos de qué manera llena sus funciones y hasta dónde se estienden.

Los consejos municipales se reunen cuatro veces al año:

(1) Véase la página 16.

en primero de febrero, mayo, agosto y noviembre. Cada sesion puede durar diez dias. Ademas pueden celebrar sesiones estraordinarias siempre que los intereses generales del municipio lo exijan en virtud de una órden ó con autorizacion del prefecto ó subprefecto. En las sesiones ordinarias pueden ocuparse de todos los asuntos que están en sus atribuciones. En caso de reunion estraordinaria, no puede deliberar sino sobre los objetos para que haya sido convocado especialmente. La convocacion puede igualmente autorizarse para un objeto especial y determinado á peticion de la tercera parte de los individuos del consejo municipal, dirigida directamente al prefecto. En este caso el prefecto no puede negar la autorizacion sino por un decreto que se notifica á los reclamantes y del que pueden apelar ante el jefe del poder ejecutivo.

Está prohibido á los consejos municipales deliberar fuera de sus reuniones legales, ó sobre materias estrañas á sus atribuciones, asi como ponerse en correspondencia con otros consejos y publicar proclamas ó alocuciones á los ciudadanos.

Tales son las disposiciones de la ley vigente aun. Las hemos reproducido casi testualmente. En contra de ellas se alegran críticas fundadas.

La conveniencia de impedir á los consejos municipales que se salgan del círculo de sus atribuciones, de turbar al Estado, de convertirse en un manantial de agitacion, nadie la contradice. Las primeras leyes de la Asamblea constituyente adolecian de falta de prevision bajo este aspecto, y los desórdenes que autorizaban sirvieron de advertencia al legislador; ¿pero no han sido exageradas las precauciones que se han adoptado despues?

¿Por qué, fuera de las sesiones ordinarias, subordinar toda reunion del consejo municipal á la buena voluntad del prefecto ó del subprefecto? En los municipios populosos el número de negocios exige reuniones muy frecuentes; el consejo municipal está, por decirlo asi, en sesion permanente. Las formalidades prescritas por la ley son minuciosas y embara-

zan, pero este es, sin embargo, su menor defecto; tienen el inconveniente mayor aun, de llevar consigo una lentitud perjudicial con frecuencia, y el de hacer al municipio demasiado dependiente; crean tambien un antagonismo que perjudica á las buenas relaciones, tan necesarias para la marcha regular de la administracion. No se sabe bastante bien lo mucho que pierde la ley entregándose á una desconfianza escensiva. Enjendra la envidia, provoca la oposicion y suscita resistencias.

El Consejo de Estado y la comision de la Asamblea legislativa habian propuesto en 1851 autorizar la reunion del consejo municipal en caso de necesidad, por la simple convocacion del maire, adoptando precauciones para que el gobierno pudiese impedir una reunion que no tuviese realmente por objeto el interés comunal. Debia informarse al subprefecto con tres dias de anticipacion de la reunion y de su objeto especial, y estaba autorizado á suspenderla, si las cuestiones que iban á tratarse no estaban legalmente comprendidas en las atribuciones de los consejos municipales: ningun asunto estraño á la órden del dia podia someterse á deliberacion.

¿No son bastantes á protejer los intereses del Estado estas precauciones? La facultad de suspender las reuniones que no tuvieran por objeto los intereses comunales se ejerceria en caso que la autorizacion, en el régimen actual, debiese negarse. La diferencia principal de los dos sistemas consiste en que hoy el prefecto puede, absteniéndose de resolver, suspender de hecho el consejo municipal, al menos hasta la primera sesion ordinaria; y si resuelve, su negativa no se somete á ninguna condicion, mientras que con las innovaciones propuestas, el derecho del municipio se ejercia desde luego, sin que el prefecto pudiera impedirlo, á no ser por una interdicion formal, en un plazo designado y por una causa definida. Por lo demas en ambos sistemas puede impedir las reuniones cuya naturaleza pudiera perturbar el órden. Señalar esta diferen-

cia es indicar lo bastante, que el gobierno nada tendria que deplorar por los derechos mas ámplios que se proponia conferir á los consejos municipales.

Aun hay otro punto sobre el cual creemos á la ley susceptible de modificacion. Concebida en el principio de las autorizaciones prévias y previendo apenas que los consejos municipales podrian romper los lazos que los oprimen, se ha limitado, para el caso en que las reuniones se tuviesen de un modo irregular y para el en que las deliberaciones versasen sobre objetos estraños al municipio, en una palabra á autorizar la suspension ó disolucion del consejo municipal y pronunciar la nulidad de sus acuerdos siempre que se viole la ley. Esta represion es incompleta é insuficiente para contener al consejo que se halle animado de sentimientos hostiles. En efecto, qué importa á sus miembros con frecuencia, una suspension que no puede esceder de un plazo muy corto, una disolucion que será tal vez seguida de su reeleccion, y la anulacion tardia de unos acuerdos que, dirijiéndose casi siempre á la opinion pública, habrán producido todo su efecto. Si se estienden los derechos de los consejos municipales, si se facilitan sus reuniones, este desarrollo de sus franquicias debe llevar consigo un castigo mas directo y mas severo para sus estravíos. Deberian acordarse penas contra los consejeros municipales que hubiesen tomado parte en el acuerdo que violase la ley. El órden público es aqui el interesado, y cuanto mas liberal sea la ley, mas severa debe mostrarse contra los que la menosprecien. Que nadie se crea en Francia exento de la regla comun; no descuidemos ningun medio de asegurar el respecto á las leyes. En esto estriba nuestra seguridad y la salvacion del porvenir. Si el último de los ciudadanos está obligado á esta sumision, le importa sobre todo obtener la de los hombres que, salidos de la eleccion, imprimen á la desobediencia una gravedad particular y que parecen tener por cómplices á todos los que los han elegido. Es verdad que el castigo impuesto á las infracciones cometidas

por los consejos municipales lo pronunciarían los tribunales de justicia, mas como se referirían á la ley, con independencia de todo acto administrativo, no resultaría de ningun modo confusion de poderes. Al contrario, la intervencion de los tribunales prestaria fuerza á la administracion, la descargaria de una parte de la responsabilidad que pesa hoy sobre ella, y la dispensaria de recurrir á medidas que la ponen hasta cierto punto en pugna con todo el cuerpo electoral.

Las sesiones de los consejos municipales se dirigen de la misma manera que las de todos los cuerpo deliberantes. El mai-re las preside; un individuo nombrado por escrutinio al empezar las sesiones, llena las funciones de secretario. Para que los acuerdos sean válidos, es preciso que la mayoria de los individuos de la corporacion asista á la discusion. Las decisiones se toman por mayoria de votos, el del presidente decide en caso de empate. Los acuerdos se estampan en un registro foliado y rubricado por el subprefecto y lo firman todos los individuos que han tomado parte en ellos. La ley prohibe la publicidad de las sesiones: con razon se ha creido que de este modo las discusiones serian mas tranquilas, menos apasionadas, y mas verdaderamente libres, por que con frecuencia los consejos municipales se ocupan de cuestiones que podrian ocasionar tumultos si el público se admitiese á presenciárlas.

Hasta ahora no nos hemos ocupado sino de las disposiciones legales referentes á la convocacion de los consejos municipales y á la celebracion de sus sesiones. Su importancia es grande, pero la de los derechos conferidos á estos consejos es mas considerable aun.

Los votos de los consejos municipales se dividen en tres distintas categorías. Deliberan, acuerdan é informan.

Esta division creada por la ley de 18 de julio de 1857, corresponde á la naturaleza de las diversas cuestiones deferidas al exámen de los consejos municipales. Las mas se refieren solo al goce de sus bienes, no afectan sino al presente, y entran en la administracion propiamente dicha. El

consejo municipal puede resolverlas á condicion de respetar las leyes, los reglamentos de administracion pública y de conservar los intereses privados que están interesados en ellos. Otras versan sobre la propiedad misma de los bienes y abrazan el porvenir, ó bien tienen por resultado someter los ciudadanos á impuestos, y acordar gastos que gravarán el presupuesto comunal. El consejo municipal debe deliberar sobre esto; fuera de los casos en que las leyes han impuesto obligaciones á los municipios, la administracion no puede si ellos no consienten por medio del consejo municipal, ni disponer de sus bienes, ni someter á los ciudadanos á cargas especiales. El consejo debe ejercer, pues, su iniciativa, mas los acuerdos que toma no tienen fuerza sin la sancion del gobierno, á quien pertenece representar las generaciones venideras, impedir la creacion de impuestos ó contribuciones que agotasen la riqueza imponible, y mantener el orden en los negocios financieros del municipio. En fin, hay cuestiones mistas que interesan á la vez al municipio y á establecimientos públicos, estraños á él ó á la administracion general. Cuando el consejo municipal no tiene el derecho ni de imponer sus resoluciones, ni de ligar al poder público con sus deliberaciones, da solo simples informes.

En los casos en que los consejos municipales reglan un objeto cualquiera con su deliberacion, toman una decision verdadera; solo que la deliberacion debe trasmitirse al prefecto que tiene siempre el derecho de anularla, derecho que puede ejercer de oficio si una disposicion legal ó reglamentaria de administracion pública se ha violado, y á instancia de parte si se ataca el fondo mismo de ella. Cuando el prefecto no ha hecho uso de este derecho en el término de treinta dias, la deliberacion causa ejecutoria.

En los casos en que los consejos municipales están autorizados únicamente para deliberar, su acuerdo no es ejecutivo hasta que ha obtenido la aprobacion del gobierno.

En fin, cuando los consejos municipales dan un dictámen.

su deliberacion se trasmite á la autoridad encargada de resolver sobre el punto en cuestion, y forma únicamente una parte de la instruccion administrativa.

Los consejos municipales reglamentan los siguientes objetos comprendidos en la primera categoría :

1.º La manera de administrar los bienes del comun:

2.º Las condiciones sobre los alquileres y arrendamientos cuya duracion no escede de diez y ocho años cuando versa sobre fincas rústicas, y de nueve en las demas:

3.º La reparticion de pastos y frutos comunales, distintos de los bosques, asi como las condiciones que deben imponerse á las partes que los utilizan:

4.º Los cortes de madera, ateniéndose á las leyes de bosques:

El simple derecho de deliberacion se concede á los consejos municipales respecto de los objetos cuya nomenclatura es esta :

1.º El presupuesto municipal, y en general, todos los ingresos y gastos ya sean ordinarios ó estraordinarios:

2.º Las tarifas y reglamentos de percepcion de todas las rentas comunales:

3.º Las adquisiciones, enagenaciones y cambios de las propiedades comunales, sus relaciones con los diferentes servicios públicos, y en general todo lo que interesa á su conservacion y mejoramiento:

4.º El apeo y particion de los bienes indivisos entre dos ó muchos municipios ó secciones de municipios:

5.º Las condiciones sobre alquileres y arrendamientos cuya duracion esceda de diez y ocho años para los bienes rústicos, y de nueve para los demas, asi como las de los bienes tomados en arrendamiento por el municipio, sea su duracion la que quiera:

6.º Los proyectos de construcciones, de reparaciones de importancia, de demoliciones, y en general todos los trabajos que haya que ejecutar:

7.º La construccion de calles y plazas públicas y los proyectos de alineacion del plano municipal:

8.º El aprovechamiento de los terrenos incultos:

9.º La aceptacion de las donaciones y legados hechos al municipio y á los establecimientos municipales:

10.º Las acciones judiciales y las transacciones.

En fin, los consejos comunales son llamados siempre á emitir su dictámen sobre los objetos siguientes:

1.º Las circunsericiones relativas al culto:

2.º Las circunsericiones relativas á los socorros públicos.

3.º Los proyectos de alineacion de gran cuantía en el interior de las ciudades, villas y lugares.

4.º La aceptacion de los dones y legados hechos á los establecimientos de caridad y beneficencia:

5.º Las autorizaciones para tomar á préstamo, adquirir, cambiar, enajenar, litigar, ó transigir, pedidas por los mismos establecimientos, y por las fábricas de las iglesias y otras administraciones encargadas del mantenimiento de los cultos cuyos ministros retribuye el Estado:

6.º Los presupuestos y cuentas de los establecimientos de caridad y beneficencia:

7.º Los presupuestos y cuentas de las fábricas y administraciones encargadas del mantenimiento de los cultos cuyos ministros están retribuidos por el Estado, aunque reciben socorros de los fondos comunales.

Tal es la parte que la ley de 18 de julio de 1857 da á los consejos municipales en la administracion comunal.

Este sistema debe considerarse bajo un doble aspecto: en primer lugar, en cuanto al derecho conferido á la administracion respecto de las tres clases de atribuciones de los consejos municipales; y en segundo lugar, en cuanto á la reparticion que se ha hecho entre estas clases de los diversos objetos de que deben dichos consejos ocuparse: se comprende en efecto que si de un lado el derecho de anulacion conferido al prefecto respecto de los acuerdos reglamentarios, no estuyese some-

tido á ninguna garantía , podria llegar á ser abusivo y arbitrario; y si por otro , el de reglar ciertos objetos reservados al consejo se ejerciese en muy estrechos límites , vendria á ser ilusorio y vano.

En lo concerniente á los derechos conferidos á la administracion , no puede suscitarse dificultad alguna respecto á los votos que solo son un dictámen. La administracion obra en este caso como mejor le parece ; puede exigírsele que lo pese atentamente, pero este consejo no es del dominio de la ley. No sucede lo mismo en los votos que forman reglamento ó deliberacion.

El Consejo de Estado en 1851 habia conservado la ley de 1857 , mas la comision de la Asamblea legislativa introdujo en ella una innovacion importante. No autorizaba al prefecto para anular los acuerdos reglamentarios , sino en el caso en que la nulidad se fundase en la violacion de una ley ó de un reglamento de administracion general , y sometia la decision del prefecto al recurso del consejo municipal ante el Consejo de Estado, decidiendo como en materia administrativa. Si la anulacion la provocaba una parte interesada, deferia la citada ley al consejo de prefectura la deliberacion que resolvia soberanamente , si no nos equivocamos. Los acuerdos deliberativos no eran ejecutorios nunca sino los aprobaba el prefecto ó el consejo de prefectura ; pero la aprobacion no podia el prefecto dejar de darla sino en el caso de violacion de una ley ó de un reglamento de administracion pública , y cuando creyese que alguna otra causa se oponia á su aprobacion, debia dirigirse al consejo de prefectura para que resolviese. La sola diferencia que existe entre las formalidades seguidas para los acuerdos reglamentarios y los deliberativos , consiste en que respecto de los últimos no se admite la circunstancia de un plazo , trascurrido el que vienen á ser ejecutorios de pleno derecho , y la aprobacion podia denegarse por el consejo de prefectura en toda clase de asuntos y sin que fuese á instancia de parte interesada.

Los poderes que se proponia conferir por este medio á los consejos de prefectura se ejercen en una forma mas directa y mas simple , por las diputaciones permanentes de los consejos provinciales en Bélgica, y este ejemplo arrastró sin duda á la comision de la Asamblea legislativa. Atreviéndonos á oponer nuestras opiniones á las suyas, diremos que no habia pesado suficientemente las diferencias que existen entre la institucion belga y nuestros consejos de prefectura. Las diputaciones permanentes son una emanacion directa del consejo provincial que las nombra de su seno, y su mision principal, por no decir esclusiva, es dirigir la administracion municipal; se sustituyen en esta parte al gobernador de la provincia, esto es, al prefecto, y no entienden de los negocios contenciosos. Independientes y distintas, han podido sin inconveniente proponerse para las funciones que ejercen sin que de ello resulte conflicto alguno ni se ataque el órden gerárquico. No sucede del mismo modo en nuestros consejos de prefectura nombrados por el poder central , subordinados al prefecto, jueces de lo contencioso, y concurriendo con aquella autoridad á la ejecucion de un gran número de actos administrativos. Seria de temer, aun cuando se cambiase la forma de su eleccion, como lo proponia la comision, el que de las atribuciones con que se les queria investir, resultase una oposicion de miras que introdujese el desórden en la administracion de las prefecturas, ó bien contemplaciones que desquiciasen la responsabilidad sin ventaja para los municipios.

Podriamos señalar otras dificultades inherentes al sistema propuesto: complicaciones numerosas, grandes entorpecimientos, un esceso de trabajo para los consejos de prefectura harto ocupados ya, y para el Consejo de Estado un ataque á los principios constitutivos de nuestra administracion y un trastorno lamentable de poderes.

Por otra parte justo es reconocer que el derecho acordado á la administracion respecto á los votos reglamentarios, no ha provocado quejas. Los prefectos se han encerrado en el

círculo de la ley. Relativamente á los votos deliberativos se ha podido acusar de omisos á estos funcionarios, y sobre todo á los ministros; pero estos últimos no han sido llamados á votar, desde el decreto de 25 de marzo de 1852, sino en casos muy raros. La mayor parte de los negocios se terminan en las prefecturas; y como los plazos á que se proponía sujetar los consejos de prefectura eran puramente comminatorios; como los negocios antes de serles sometidos, habrían necesariamente pasado por las oficinas, todo esto inclina á creer que su expedición hubiera sido menos pronta en sus manos que en las del prefecto.

No creemos, pues, que las proposiciones de la comisión de la Asamblea legislativa deban adoptarse, y preferimos la ley de 1837. Para relevar á los prefectos de las funciones que ejercen respecto de los municipios, sería preciso que en nuestra organización administrativa, se encontrase una autoridad capaz de reemplazarlos, como por ejemplo, las disputaciones permanentes de la Bélgica, ó las Asambleas de jueces de paz de la Inglaterra, pero al presente, esta autoridad no existe. No será difícil que en adelante, los consejos de cantón de que nos ocuparemos en breve, se hallen en estado de tomar parte en los negocios comunales; pero antes de llamarles á este fin, la prudencia aconseja, suponiéndoles creados, ponerlos primero á prueba.

Nuestra opinión es, pues, mantener en la ley de 1837, los poderes que esta dá á los prefectos acerca de los votos de los consejos municipales; mas no es lo mismo en la repartición de los negocios comunales entre las tres clases de votos que los consejos municipales están autorizados á emitir; la de los reglamentarios, debe recibir notables adiciones.

En efecto, si se trasporta uno á las disposiciones que acabamos de transcribir, es fácil conocer que muchos de los objetos acerca de los cuales los consejos municipales son llamados solamente á deliberar, pueden pasar á la categoría de los que tienen el derecho de reglar. El Consejo de Estado, en 1851.

y aun mas la comision de la Asamblea legislativa, se habian decidido á hacer esta clasificacion, para agrandar el poder de los comunes. Seria demasiado largo y de poca utilidad, reproducir la serie detallada de sus proposiciones. Nos limitamos á decir que son dignas de la mas seria atencion, y que por este medio se encontraria el modo de limitar la centralizacion por lo que respecta á los municipios procurando en esta parte conservar todo lo que merece serlo.

Gastos.—Ingresos.—Presupuestos.—Contabilidad.

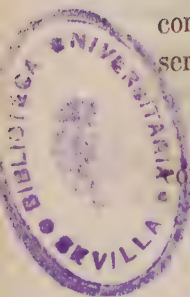
En los negocios municipales, como en los del Estado y de los particulares, los intereses financieros, ocupan un lugar considerable. Hay muy pocas medidas administrativas que no se resuelvan en gastos y que por consecuencia, no empuñen las rentas hasta el punto de dar con frecuencia lugar á la creacion de nuevos impuestos. Respecto á esto es, sobre todo, en lo que los comunes están colocados bajo la dependencia de la ley y del gobierno, dependencia estricta y casi siempre necesaria.

Los gastos se dividen en dos clases: obligatorios y facultativos. El municipio no puede sustraerse á los primeros, porque estos tienen por objeto satisfacer necesidades y obligaciones que el legislador debia tomar bajo su inmediata proteccion; los segundos, al contrario, se dejan á discrecion del municipio que puede hacerlos ó evitarlos.

Ningun gasto es obligatorio sino cuando la ley lo ha declarado tal y cuando la lista de los que han recibido esta clasificacion se ha formado con un cuidado minucioso.

El mayor número de los gastos obligatorios, tiene relacion con la existencia misma del municipio y con su necesario servicio: hé aquí los que le conciernen :

- 1.º La conservacion de la casa de ayuntamiento.
- 2.º Los gastos de oficina y de impresion para el servicio municipal.
- 3.º El sueldo de sus agentes, recaudador municipal.



comisionados , comisarios de policia , guardas rurales.

4.º Las grandes reparaciones de los edificios comunales que el municipio no puede , bajo ningun pretesto , dejar arruinar.

5.º La cerca de los cementerios y su conservacion.

6.º La apertura y conservacion de los caminos vecinales.

Se habia propuesto añadir á estos gastos los de empedrado , alumbrado y riego etc. , mas se ha creido que respecto á estos últimos , cualquiera que fuese su utilidad , era conveniente confiarlo al cuidado de los municipios , y solo hacemos mencion de ellos para marcar la diferencia que hay entre las dos clases de gastos.

El municipio está sujeto á otros gastos , que al mismo tiempo que á él , interesan tambien al Estado.

Asi es que están obligados á suscribirse al *Boletin de las leyes* , ó á tomar parte en los gastos de las publicaciones que por un acto reciente , en los municipios que no son cabezas de canton , han sustituido á este *Boletin*.

Soportan los gastos del censo de poblacion , que se renueva cada cinco años ; los de empadronamiento , y otra porcion de gastos de los estados de estos registros que se forman cada diez años.

Subvienen asimismo al gasto de los planos de alineamiento , como interesante á la circulacion general.

Algunos comunes poseen establecimientos unidos á ellos , aunque no esclusivamente , pero que les es ventajoso conservar , y en este concepto soportan las cargas que ocasionan : tales son los jueces de paz , los consejos de hombres buenos y las cámaras consultivas de artes y manufacturas.

Hay tambien gastos obligatorios concernientes á los intereses morales : tales son los de instruccion pública , los de las iglesias de los diversos cultos reconocidos por la ley , cuando no pueden bastarse á sí mismas , y las del alojamiento de sus ministros. La caridad tiene igualmente una parte en los gastos obligatorios : asi de los que ocasionan los niños huérfanos ó es-

pósitos y de los enagenados, está á cargo de los municipios; pero el gasto de los hospitales y de los establecimientos de beneficencia es puramente facultativo.

La guardia nacional, es una institucion que tiene por objeto el sostenimiento del órden; los gastos que ocasiona, son obligatorios.

En fin, la ley ha debido hacer obligatorio el pago de las deudas contraidas por el municipio. En este concepto tienen obligacion de pagar las pensiones que regularmente han concedido á sus empleados, y las contribuciones y pagos establecidos por las leyes, en provecho del Estado, sobre sus bienes ó rentas.

Estos gastos son numerosos y algunos bastante erecidos. Si se añade á esto los gastos facultativos, entre los cuales se encuentran algunos que los municipios pueden dificilmente evadir, es fácil hacerse cargo de lo gravoso que es la carga que pesa sobre el presupuesto municipal.

Para hacerlas frente, los municipios poseen recursos que se componen de ingresos ordinarios y estraordinarios.

Los ingresos ordinarios, comprenden:

- 1.º Las rentas de todos los bienes comunales que los habitantes no disfrutan en comun.
- 2.º Las cuotas impuestas anualmente por razon de los disfrutes en comun de los bienes del municipio.
- 3.º El producto de los céntimos ordinarios destinados á los municipios por las leyes de Hacienda.
- 4.º El producto de la porcion que les está concedida en el impuesto de patentes.
- 5.º El producto de los arbitrios municipales.
- 6.º El producto de los derechos de puestos autorizados en las plazas, ferias, mercados, mataderos etc.
- 7.º El producto de los permisos de estancia y alocaiones en los caminos públicos, en los puertos, rios y otros lugares.
- 8.º El producto de los portazgos comunales, de los de-

rechos de peso , medida y aforamiento , de los de tránsito y otros legalmente establecidos.

9.º El precio de las concesiones en los cementerios.

10.º El de las concesiones de agua , transporte de basuras é inmundicias de las calles públicas y otras concesiones autorizadas para los servicios comunales.

11.º El producto de las expediciones de las actas administrativas y de las del estado civil.

12.º La porcion que las leyes conceden á los municipios en el producto de las multas impuestas por los tribunales de simple policía , por los de policía correccional , y por los consejos de disciplina de la guardia nacional.

Y generalmente el producto de todas las tasas de obligacion y de policía , cuya percepcion está autorizada por la ley.

Los ingresos extraordinarios se componen :

1.º De las contribuciones extraordinarias debidamente autorizadas.

2.º Del precio de los bienes enagenados.

3.º De las donaciones y legados.

4.º Del reembolso de los capitales exigibles y de las rentas adquiridas.

5.º Del producto de los cortes extraordinarios de maderas.

6.º Del de empréstitos.

Y de todos los demas ingresos accidentales.

Todos los gastos , todos los ingresos , se anotan en el presupuesto comunal. Lo mismo para el municipio que para el Estado , la administracion entera se reasume en el presupuesto , y solo por él pueden satisfacerse los intereses mas graves y numerosos.

Proyectado por el maire el presupuesto , el consejo municipal delibera acerca de él ; el prefecto lo decreta. Cuando dá lugar á contribuciones extraordinarias ; pronuncia el gobierno. Los derechos respectivos del maire , del consejo municipal y del prefecto están exactamente definidos. El maire presenta un trabajo preparatorio , cuyo solo objeto es el de

guiar al consejo municipal, simplificar su mision sin imponerle ningun lazo. El consejo municipal pronuncia con toda libertad escepto dos restricciones: primera, está obligado á votar los gastos obligatorios; segunda, no puede votar una imposicion extraordinaria sino con el concurso de los mayores contribuyentes, en número igual al de sus miembros; circunstancia prescrita para que los que deben soportar la mayor parte de la imposicion den su adhesion y pueden intervenir en la deliberacion, apreciar la necesidad y concurrir al establecimiento de este nuevo tributo. En cuanto al prefecto, sus derechos son limitados. No puede inscribir en el presupuesto ningun gasto que no esté votado por el consejo municipal, sino está declarado obligatorio por la ley. Puede suprimir los gastos facultativos ó reducir la suma de estos.

Las reglas seguidas para el presupuesto, son aplicables á los créditos extraordinarios, cuya necesidad se haga sentir despues de su votacion.

Así es como la ley arregla los intereses financieros de los municipios. Se puede decir que se ejecuta con facilidad y que ha promovido pocas quejas. Sin embargo, se ha pedido que aun en este punto los municipios tuviesen mayor libertad. Las reclamaciones no atentaban al principio, ni á los gastos obligatorios, ni contra el modo establecido para la votacion de las imposiciones extraordinarias: pero el consejo de Estado y la comision de la Asamblea legislativa, en los trabajos de que hemos hablado ya, han propuesto dar al Consejo municipal, el voto definitivo de los presupuestos cuando no recurriesen á ningun ingreso extraordinario, que proveyesen á todos los gastos obligatorios, y no contuvieran ninguno que se extendiese á los ejercicios siguientes: el resultado de esta concession, seria reconocer en el municipio un derecho que, limitado de este modo, parece incontestable, y evitarle la lentitud que la necesidad de la aprobacion trae consigo frecuentemente. Resultaria de aquí que en estos presupuestos, el prefecto no tendria el derecho de separar ni reducir ningun gasto

facultativo; pero cuando el municipio satisface á todas las prescripciones de la ley, cuando no compromete el porvenir, ¿qué peligro puede encontrarse, en reconocerle el derecho de arreglar el empleo de sus recursos disponibles

Esta innovacion podia ejercer una benéfica influencia en la administraciones comunales, invitándoles á emancipar sus presupuestos de la inspeccion administrativa, y á que se esforzasen en encerrar sus gastos en el círculo de sus recursos ordinarios.

Desgraciadamente la situacion financiera de los municipios es mala. Leyes imprevisoras ó inícuas han destruido los recursos que poseian.

La del 10 de junio de 1795, autorizando la reparticion de sus bienes, ha podido aprovechar á la agricultura y á las clases pobres; pero ha privado á las generaciones siguientes de propiedades que representarian hoy un gran valor.

La ley de 24 de agosto de 1795 los hirió con una verdadera confiscacion. No se puede decir otro tanto de la ley del 20 de marzo de 1815, que ha cedido á la caja de amortizacion, en cambio de rentas de un valor muy inferior, las propiedades que escaparon del repartimiento de la primera confiscacion. Un número muy pequeño de municipios conserva hoy bienes de alguna importancia; otros no tienen mas que terrenos comunales de nign producto, que se niegan á poner en arrendamiento. Otros, y estos son los mas numerosos, están reducidos al producto de las contribuciones que imponen. Los céntimos ordinarios puestos á su disposicion por las leyes de Hacienda y comprendidos en estos los céntimos especiales afectos á los caminos vecinales y á la instruccion pública, ascienden al número de 45. Los céntimos estraordinarios están establecidos casi en todas partes. Resulta de documentos oficiales, que estos céntimos habian llegado en 1850 á las proporciones siguientes:

1,129 municipios estaban impuestos á 20 c. y menos.

2,639. de 20 á 30

15,540.	de 50 á 40
5,913.	de 40 á 50
5,047.	de 50 á 60
2,665.	de 60 á 70
2,909.	de 70 á 80
916.	de 80 á 90
1,224.	de 90 á 1 fr.
1,017.	á mas de 1 fr.

No hay derecho para atribuir esta situacion deplorable á la centralizacion, y tal vez sin ella, el desórden seria todavia mayor. Con todo un régimen bajo el cual los municipios no tienen sino recursos estraordinarios, para subvenir á unos gastos, tan onerosos para sus habitantes, no posee todas las virtudes que se le atribuyen. Se pregunta al mismo tiempo si, mas libres en su accion, obligados á contar mas consigo mismo, exentos de una influencia que mas de una vez les ha escitado á grandes sacrificios, menos oprimidos para la creacion de los recursos necesarios, mas íntimamente penetrados de que el peso del presente y del porvenir gravita sobre ellos, y obligados á arrostrarlo todo, los municipios no hubieran llegado ya á introducir el órden en su hacienda.

No proponemos por tanto romper los lazos que los unen al poder central. ¿Pero no pudieran aflojarse? Y en lo que respecta particularmente al presupuesto, ¿no seria una medida útil y sábia dar á los municipios el derecho de arreglarlo con toda libertad como recompensa del órden, de la economía y de la buena administracion que les permitiria satisfacer las condiciones á que algunos proponen se subordine este derecho?

Despues del voto del presupuesto, pertenece al maire asegurar el cobro de las contribuciones, y hacer los gastos para que se han abierto créditos. Solo él puede librar mandamientos. Si se niega á reglamentar un gasto regularmente autorizado, el prefecto lo decreta, y este decreto reemplaza completamente al mandato del maire. Las cuentas de administracion

del maire del ejercicio cerrado, antes de la deliberacion del nuevo presupuesto, se presentan al consejo municipal, que delibera y emite su dictámen, en cuyo momento el maire debe retirarse. Los ingresos y los gastos se efectúan por un tesorero único, encargado bajo su responsabilidad, de hacer efectivo el ingreso de todas las rentas del comun y de todas las sumas que se le deban, asi como de satisfacer los gastos decretados por el maire por todas las cantidades de los créditos regularmente abiertos. En los municipios donde la renta es inferior á 50,000 frs., las funciones de tesorero municipal las desempeña el recaudador de las contribuciones directas del Estado. En los demas, estas funciones se confian, si el consejo municipal lo exige, á su tesorero especial, cuyo nombramiento es atribucion del prefecto en virtud de una lista de tres candidatos, formada por el consejo municipal. Las cuentas del tesorero las examina el consejo de prefectura ó el tribunal de cuentas, segun la importancia de la gestion.

Tal es, dejando á un lado cierto número de disposiciones secundarias, el sistema de legislacion respecto á los municipios. Como se ha podido observar, les deja todavia una grande independencia. Exige nuevas ampliaciones y las ha recibido en algunos puntos bastante notables. Estas se deben todas al gobierno de julio. Desde 1848, los únicos cambios introducidos han consistido en el modo de nombrar los maires, como se ha visto anteriormente.

Hagamos votos para que el gobierno se esfuerce en dar mayor elasticidad, con moderacion, pero con perseverancia, á las franquicias comunales. No se puede menos de reconocer que se opondrán siempre grandes obstáculos al cumplimiento de este designio, mientras que los municipios permanezcan diseminados como lo fueron en 1789 y que se les aplique el mismo régimen uniforme.

En todos los paises donde la libertad comunal ha echado profundas raices, las ciudades están sometidas á otras formas é investidas de diferentes poderes que los campos. Las ciuda-

des de la Gran Bretaña que han conseguido el título de corporaciones, se administran á sí mismas; las poblaciones rurales están sujetas á la intervencion de los magistrados públicos. La misma distincion existe en Prusia y en un grado menor en Bélgica: tambien existia en Francia, antes de la revolucion. Los grandes municipios emancipados, gozaban de una libertad propia; los pueblos, las simples parroquias permanecian bajo la autoridad de los señores ó de los delegados del rey. En los Estados-Unidos donde la organizacion municipal ha podido establecerse sobre un plan teórico, y ha precedido en algun modo á los municipios mismos, los campos estan unidos á las ciudades respecto al régimen municipal; cada circunscricion ocupa allí un espacio de siete leguas, mientras en Francia el territorio repartido entre los municipios, no daria á cada uno sino tres cuartos de legua de superficie.

En la Asamblea constituyente, un diputado proponia que se examinase si las ciudades no deberian tener municipalidades superiores, á las cuales se subordinasen las de los pueblos y aldeas, consideradas como secundarias. Esta proposicion fué rechazada; la Asamblea, no quiso tocar á la circunscricion de los municipios; la adoptó como la habia hecho la casualidad de los acontecimientos, los títulos de las comunidades ó de los antiguos propietarios señoriales, las cartas reales y las circunscripciones del culto. Los inconvenientes de esta multitud de municipios no tardaron en aparecer. Fueron señalados desde 1795 por Condorcet, en su proyecto de Constitucion, como un obstáculo al ejercicio de los derechos de muchos; no pudiendo estenderse estos derechos, sin esponerse á carecer de hombres capaces de ejercerlos, proponia crear administraciones municipales que debian, bajo el título de secciones, abrazar muchas de las antiguas parroquias.

Esta Constitucion no llegó á votarse; la que la Convencion adoptó, presentada por Herault Sechelles, mantenía todas las municipalidades, constituidas en 1789. Los términos

en que el informante combatia el proyecto de Cordorcet, merecen referirse.

«¿Podemos, decia, no conservar las municipalidades? esto fuera una ingratitud hácia la revolucion, y un crimen contra la libertad... La idea de coartar las municipalidades no ha podido nacer mas que en la cabeza de los aristócratas, de los cuales ha sido trasmitida á la de los moderados.»

Despues de esta época, las proposiciones hechas en diversas ocasiones para someter á un régimen diferente los municipios urbanos y los rurales han fracasado, y hoy parece imposible, subordinar los unos á los otros, ó reunir los que no encierran una poblacion suficiente ó que carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus obligaciones. Ideas de igualdad se opondrian á la primera de de estas medidas, costumbres antiguas á la segunda. Pero es posible corregir el vicio de la ley con instituciones cantonales, que serán el objeto del capítulo siguiente.

CAPITULO III.

EL CANTON Y EL DISTRITO.

Hasta aqui, el Canton, no ha ocupado lugar en nuestras leyes, sino como una simple division territorial. La ley de 22 de enero de 1790, inserta despues en la Constitucion de 1791, lo estableció por primera vez en concepto de subdivision del distrito, y formó con ellos la primera circunscricion para las Asambleas electorales; pero no les dá ni representacion ni administracion propia: la del 24 de agosto de 1790, establece en él un juzgado de paz; la del 14 de octubre de 1791, se sirve del mismo para la organizacion de la guardia nacional; pero ni la una ni la otra modifican su carácter. Lo mismo sucede con la Constitucion de 24 de junio de 1795, que por lo demas, como se sabe, no llegó nunca á practica.

Sin embargo, desde 1790, se reconoció que la division municipal, adoptada por la Asamblea constituyente, ofrecia

graves dificultades. Todas las antiguas parroquias, como se acaba de ver, habian sido erigidas en municipios; su número era considerable; y por sus pocos habitantes, por su pobreza, por la falta de luces, sin las cuales es imposible toda administracion, la mayor parte se veian en la imposibilidad de atender á sus obligaciones, de administrar sus intereses, de ejercer los derechos de que estaban investidos. Otros al contrario, por su estension, su poblacion, la agitacion de que eran foco, inquietaban al gobierno. La Constitucion de 1795, sucediendo á las borrascas revolucionarias, buscaba todos los medios de restablecer la calma á que aspiraba la nacion; para prevenir los peligros que presentaban los municipios demasiado considerables, decidió que en donde la poblacion escudiese de 100,000 habitantes, habria al menos tres administraciones municipales; para remediar la debilidad de los municipios demasiado pequeños, determinó que todos aquellos donde la poblacion era inferior á 5,000 habitantes, se reuniesen en una municipalidad de canton, y no tuviesen mas que un simple agente municipal y un adjunto.

Estas medidas eran sobre todo dictadas por consideraciones de política interior: la relacion de Boissy d'Anglas, que acompaña la Constitucion de 1795, muestra que el interés particular de los municipios y el de la buena administracion de sus negocios no entraban para nada en la nueva organizacion.

Se le podia hacer producir frutos en que la legislatura no habia soñado. Una administracion especial y colectiva, formada en el canton, permitia satisfacer necesidades locales que los municipios tomados individualmente se veian obligados á desatender. Muchas leyes de esta época lo prueban, y consagraron útilmente la division cantonal. Asi el reglamento de los gastos locales y la distribucion de los socorros públicos, se acomodaron á esta circunsericion con gran ventaja para los municipios rurales. Pero se escudieron del objeto á que se dirigian, suerte ordinaria de todas las leyes dictadas bajo el

imperio de los acontecimientos políticos. Se atentó á la individualidad comunal; el canton absorbió al municipio, y esta absorcion heria justas susceptibilidades y ofendia sentimientos legítimos.

Asi, cuando el Consulado, preludiando las grandes destrucciones políticas del Imperio, quiso abolir la libertad comunal, imprimió cierta popularidad á las leyes, por las cuales suprimió la eleccion de los poderes municipales, restableciendo en la plenitud de sus derechos á todos los municipios constituidos en 1789, y suprimiendo el canton como base de la administracion comunal. El canton habia ya sido rechazado por el partido exaltado de la Convencion. De este modo el despotismo y la demagogia recurrian al mismo proceder para un objeto opuesto, y todos mantenian la diseminacion del poder comunal; el uno como elemento de servidumbre, y la otra como instrumentos de turbulencia.

Durante el Imperio, no hubo tiempo de lamentar la supresion de los cantones y el restablecimiento de 37,000 municipios; la buena distribucion de los poderes interesa sobre todo en las épocas y en las leyes de libertad. En los tiempos de servidumbre, ¿qué importa que la autoridad se distribuya con mas ó menos sabiduría? La restauracion de las municipalidades de 1789 no era mas que una mentira, no existia ya poder municipal. Las divisiones habian reaparecido, pero sin los consejos electivos, sin atribuciones propias.

En 1828, el sistema cantonal se discutió de nuevo. Un acuerdo de la Cámara de diputados suprimió los distritos, pero fué dictado principalmente por la política, y no puede invocarse como un precedente.

Cuando en 1857 la Cámara de los diputados se ocupó de un proyecto de ley sobre la administracion comunal, la comision encargada de examinar este proyecto proponia, por un artículo que habia introducido en él, formar todos los años, en la cabeza de cada canton, una reunion de maires de todos los municipios del mismo, que diese su dictámen acerca de los

intereses comunes y sobre los diferentes objetos que el prefecto propusiese á su exámen», y que deliberasen en fin «acerca de los objetos que las leyes especiales le confiriesen.» La comision invocaba la necesidad de reunir los intereses que la multiplicidad demasiado grande de municipios desatendia, de darles órganos y una espresion colectiva; pero esta proposicion no se aceptó.

La Constitucion de 1848, admitia un principio nuevo. Disponia, por el art. 77 «que habria en cada canton un consejo cantonal», y encargaba á la ley la determinacion de sus atribuciones. Para satisfacer á esta prescripcion, se encargó al Consejo de Estado, primeramente por el gobierno en 1849, despues por la misma Asamblea legislativa, la redaccion de un proyecto de ley de los consejos cantonales. Este proyecto, transmitido á la Asamblea, y elaborado por una comision que lo habia adoptado con algunas enmiendas, iba á discutirse, cuando sobrevinieron los acontecimientos del mes de diciembre de 1851.

La Constitucion de 1852 nada dispone respecto á los consejos cantonales ni á los consejos de distrito. Las cuestiones relativas á estos consejos permanecen sin resolver, y se reproducirán necesariamente en el debate de las leyes concernientes á la administracion interior.

¿La creacion de los consejos cantonales está justificada por una necesidad pública? En otros términos: ¿existen intereses cantonales que reclamen un órgano? Este es el primer punto que se debe examinar.

Conviene observar primeramente que los consejos cantonales quedarian en algun modo estraños á los grandes municipios; á aquellos que encierran muchos cantones, ó que constituyen por sí solos un canton. Para estos, el interés cantonal se confunde con el interés municipal. La circunsercion es la misma, y el ojo mas suspicaz no podria descubrir ningun signo que distinguiese en este caso el canton del municipio.

Asi es que, en realidad, los consejos cantonales no ten-

drian importancia sino para los municipios reunidos en una circunscricion cantonal. ¿Estos municipios tienen necesidades, asuntos que, estendiéndose á la coleccion, deben considerarse en conjunto y dirigirse en comun? Tal es la cuestion que debe resolverse.

Pues bien, ninguna duda fundada puede suscitarse acerca de este punto. Es cierto que las relaciones de vecindario, la identidad de los intereses, los auxilios recíprocos en virtud de los cuales, recursos módicos pueden emplearse con mas utilidad y economía, crean en los pequeños municipios relaciones necesarias y habituales. Su existencia no está encerrada en los límites de su recinto; sienten cada dia la necesidad de traspasarlos para espaciarse esteriormente.

La ley del año VIII, al crear el distrito, imitacion de lo establecido por la ley de 1790, reconocia la necesidad de reanudar ciertos intereses comunales: este era el objeto del distrito (*arrondissement*) que llamaba comunal; pero tenia una grande elasticidad y ocupaba demasiado espacio para el objeto en vista del cual la ley le instituia. Puede haber para todos los municipios de un mismo distrito, intereses comunes, pero los hay mucho mayores de naturaleza opuesta. El distrito que ocupa por término medio, un territorio de setenta y cinco leguas, comprende á la vez, grandes y pequeños municipios, poblaciones urbanas y poblaciones rurales, cantones industriales y cantones agrícolas; sus habitantes están separados por distancias demasiado grandes para que se conozcan entre sí y para que los una el lazo de las relaciones habituales y frecuentes. Al contrario el canton, por su territorio reducido, aproxima los ciudadanos. Como las ciudades componen en general un canton entero ó la mayor parte de un canton, casi todos los municipios rurales se encuentran reunidos en sus cantones respectivos, y sus intereses especiales se distinguen de este modo; de suerte que no puedan empeñar una lucha funesta y sí aproximarse y entenderse.

Esta distincion entre los negocios de las circunscripciones

urbanas y de las rurales, tiene la ventaja de nacer naturalmente de los hechos y no de una combinacion arbitraria de la ley.

Para apreciar las ventajas respectivas de la division por distritos y de la division por cantones, se puede recurrir á la esperiencia.

La esperiencia, en efecto, ha probado que el distrito, no formaba un centro donde los ciudadanos pudieran reunirse, encontrarse, prestarse mútuos socorros y hallar ayuda y asistencia en los actos ordinarios de la vida pública; el distrito no ha subsistido sino como un medio de accion para el gobierno, como uno de los escalones empleados para la trasmision de las órdenes; no ha llegado á ser la base de la administracion comunal.

Los municipios populosos se bastan á sí mismos; la mayor parte son ya cabezas de distrito, y gozan en este concepto las ventajas unidas á la presencia de los agentes de la administracion; encierran en su seno hombres capaces y adictos; poseen rentas que les bastan para todas sus necesidades.

Pero inferiores á estos, los municipios rurales, pobres, con pocas habitaciones, exhaustos de los recursos mas indispensables, carecen todos ellos de instruccion, de rentas y de establecimientos que asegurarian el bienestar de sus habitantes; se hallan heridos de cierta especie de interdiccion, que no se aplica, es cierto, en cada punto sino á poblaciones poco numerosas, pero que en su conjunto, afecta á una parte notable de la nacion.

Asi el distrito es demasiado estenso, la mayor parte de los municipios no lo son bastante. La vida comunal no puede abrazar los limites del uno, y es demasiado estrecha en las del otro. Nuestra organizacion ofrece respecto á esto una laguna manifiesta.

Nosotros apelamos siempre á la esperiencia. La esperiencia, no nos cansaremos de repetirlo, es la mejor guia del legislador. Indica á la vez los vicios de las leyes y los medios

de aplicarles remedio. Satisfacer las necesidades de los municipios rurales, es el problema que hay que resolver. Estas necesidades han debido ya ponerse de manifiesto. Veamos cómo se ha provisto á ellas.

La justicia, demasiado distante en la cabeza del distrito debia acercarse mas á los ciudadanos.

Para la instruccion primaria, para el recemplazo del ejército, para el catastro, la guardia nacional, las elecciones de los consejos generales y de los consejos de distrito, era preciso salir tambien de la cabeza del distrito, sin diseminar por tanto la accion entre todos los municipios.

Y ¿qué ha sucedido? La justicia, la instruccion primaria, la guardia nacional, las listas de reclutamiento, las elecciones, distintas de las municipales, y el catastro, se han comprendido en una organizacion especial. No pudiendo cada municipio rural suministrar por sí solo los instrumentos que la autoridad necesitaba se han reunido varios, con el fin de facilitar por medio de la asociacion el desempeño de las obligaciones que no podian cumplimentar individualmente; el canton admitido en el año III, como única division comunal, se ha presentado de nuevo, para servir de centro á estos intereses colectivos especiales; se ofrecia naturalmente como para llenar el espacio que restaba entre el distrito y el municipio. Además, se han creado últimamente, por decretos, comisarios de policia y comisiones de estadística para cada canton.

El canton es, pues, la division intermedia por la que los municipios rurales pueden prestarse un apoyo recíproco, ocupa una superficie reducida, se estiende á un territorio que los ciudadanos conocen y en el que los reunen frecuentes relaciones. Por medio de estas relaciones los ciudadanos se ven, se conocen entre sí, y de aqui han nacido las costumbres que han hecho del canton una nueva familia, mas dilatada que la familia comunal, por todas partes donde quiera que el canton comprende mas de un municipio.

No es esto una ficcion legal, una de esas creaciones ima-

ginarias que los legisladores imponen á una nacion, por capricho ó por pasion y contra las cuales protesta la esperiencia. Obsérvese á la vez la suerte del distrito y del canton, desde que el uno de ellos ha entrado en la division administrativa del territorio y el otro se ha borrado de ella. El distrito no ha podido recibir atribucion real; siempre que se trató de constituirle todos los esfuerzos para darle una existencia propia fueron inútiles. El canton, al contrario, ha visto en todas ocasiones multiplicarse sus atribuciones y acrecentar su importancia.

El hecho ha venido de este modo á protestar contra las combinaciones legales.

La importancia del canton y su vitalidad, han sido probadas, no solamente por disposiciones legales, sino tambien por hechos numerosos que están fuera de la legislacion. Bajo la Constitucion de 1795, las oficinas de beneficencia habian sido organizadas por cantones; esta organizacion, dura todavía en algunos departamentos; en otros, los edictos acerca de las vendimias, las medidas relativas á la escarda y á otros usos rurales, se determinan por canton; este es mas fuerte que la ley; domina la administracion.

El distrito y el municipio, ¿han podido al menos hacer frente á las grandes crisis que hemos atravesado? de ningun modo. Cuando el pais ha sido presa de grandes calamidades, cuando la invasion, la mas detestable de todas las plagas, ha hollado el suelo nacional, cuando á falta de subsistencias ha entregado las labores á todas las exigencias de una mendicidad á veces amenazadora, ¿de dónde vinieron los socorros? La administracion central con sus medios regulares y lentos, no pudo atender á estas necesidades: las poblaciones rurales se organizaron espontáneamente por cantones: el canton es el que ha hecho frente á las exigencias del extranjero y contenido sus violencias; el canton el que ha regularizado los socorros concedidos al hambre, el que ha tomado parte en la verdadera desgracia y resistido las pasiones maléficas que se eubrian con su manto.

Los consejos cantonales, responderian pues á una necesidad verdadera. Mr. Odilon Barrot, encargado del informe de la comision de la Asamblea legislativa, indicaba con exactitud su doble destino : « 1.º Remediar en cuanto fuese posible los inconvenientes de la extrema division de los municipios rurales sin tocar á su individualidad, ilustrarlos y fortificarlos creando entre ellos un lazo comun y dotándolos de una especie de representacion cantonal que les proporcionase el medio de debatir y defender sus intereses comunes. 2.º Crear entre el municipio y el departamento, entre la autoridad municipal y la departamental, un consejo intermediario bastante unido á los municipios para conocer perfectamente sus necesidades y aun para ejercer sobre ellos una influencia favorable, pero no obstante suficientemente apartada para eximirse de las prevenciones y rutinas locales. »

No habiendo tenido consecuencias los proyectos elaborados en el seno del Consejo de Estado y de la Asamblea legislativa, no entraremos á detallar las disposiciones que contenian. Bastarán algunas indicaciones generales.

En los municipios que constituian por sí solos uno ó mas cantones, las funciones del consejo cantonal, debian desempeñarse por el consejo municipal, unido á los consejeros generales de la localidad. Hablando con propiedad, el consejo cantonal no existia allí donde este se confundia con el municipal. Fuera de este caso, estaba compuesto; primero del individuo del consejo general, elegido por el canton y de un delegado de cada uno de los municipios de la misma circunscricion. En el proyecto del Consejo de Estado, que habia remitido al gobierno el nombramiento de los maires, el consejo municipal elegia este delegado; en el proyecto de la comision legislativa, que atribuia al consejo municipal el nombramiento del maire, este funcionario representaba al comun en el consejo cantonal. El Consejo de Estado añadia á estos miembros, el juez de paz del canton, como la persona mas á propósito para introducir en ellos la costumbre de los negocios. el espíritu

de orden, la ciencia de las leyes, el conocimiento de los intereses canton, y el sentimiento de la justicia. Por un respecto, á nuestro parecer, exagerado del principio de la separacion de poderes, la comision legislativa habia eliminado al juez de paz.

Las atribuciones del consejo cantonal, eran casi esclusivamente consultivas. Abrazaban todos los intereses del canton, y en particular aquellos acerca de los cuales los consejos de distrito deliberan hoy.

El Consejo cantonal, debía consultarse en todas las cuestiones que interesaban, en la esfera del canton, á la agricultura, la higienne y sanidad pública: debía todos los años hacer al prefecto una relacion especial acerca de la policía rural del canton, y trasmitirle sus observaciones sobre el servicio de los peones camineros y guardas rurales. Esta relacion se elevaba al consejo general.

En dos puntos solamente estaba investido el consejo cantonal de una autoridad propia. En primer lugar, la comision legislativa proponia que se le confiase la distribucion del contingente cantonal de las contribuciones directas entre los municipios del canton. En segundo lugar, podia recibir las donaciones y liberalidades destinadas á fundar establecimientos de utilidad cantonal: respecto á estos establecimientos consagrados á la asistencia pública, ejercia los derechos devueltos al consejo municipal y al maire en los establecimientos municipales del mismo género, y distribuia entre ellos la reparticion de los fondos que se les acordaban, sin atribucion especial por el Estado, el departamento ó los municipios. Distribuia tambien entre estos últimos los fondos de socorros ó de reparaciones, que el consejo general ó el gobierno ponian á su disposicion.

Se puede ver por estas indicaciones sumarias, los servicios que los consejos cantonales estaban destinados á prestar un dia. A decir verdad, la ley que los creaba no hacia mas que arrojar una semilla que el porvenir debia fecundar. Pero este gérmen encubria una institucion poderosa, favorable á un

mismo tiempo á los municipios, que debia sacar de un aislamiento que aumenta sus cargas y les priva de fuerza; y al poder central, cuya accion hubiera facilitado, aminorando su responsabilidad. Pero no desesperemos, se volverá á estos proyectos. Mientras tanto, entre los consejos generales y los municipios, los únicos órganos de la administracion local, son los consejos de distrito cuya composicion y principales funciones debemos reseñar rápidamente.

El consejo de distrito se compone de tantos miembros como cantones.

Estos miembros, segun la ley de 7 de julio de 1852, son elegidos por el sufragio universal; deben segun la de 3 de julio de 1848, ser mayores de 25 años, tener su domicilio en el distrito, ó pagar en él una contribucion directa. En otro tiempo nombraban ellos mismos su presidente, en el dia este nombramiento se hace por el prefecto.

Cada año el consejo de distrito celebra una sesion ordinaria, la cual se divide en dos partes; la primera precede, la segunda sigue á la del consejo general.

En la primera parte de su sesion, el consejo de distrito delibera sobre las reclamaciones á que dá lugar la fijacion del contingente del distrito en las contribuciones directas.

Delibera igualmente sobre las reclamaciones que tienen por objeto reducir las contribuciones impuestas por los municipios.

El consejo de distrito da su parecer especialmente:

1.º Sobre los cambios propuestos á la circunscripcion del territorio del distrito, de los cantones y de los municipios, y á la designacion de las cabezas de partido.

2.º Sobre la clasifiacion y la direccion de los caminos vecinales de gran comunicacion.

5.º Sobre el establecimiento y la supresion ó el cambio de las ferias y mercados.

4.º Sobre las reclamaciones que se elevan con motivo de la parte contributiva de los municipios respectivos. en los tra-

bajos que interesan á la vez á muchos de ellos, ó á los municipios y al departamento.

El consejo de distrito puede dar su parecer:

1.º Sobre los trabajos de caminos, de navegacion y otros objetos de utilidad pública que interesan al distrito.

2.º Sobre la clasificacion y direccion de los caminos departamentales que afectan al distrito.

3.º Sobre las adquisiciones, enagenaciones, cambios, construcciones y reconstrucciones de los edificios y obras destinadas á servicios públicos especiales al distrito, como tambien á los cambios de destino de estos edificios.

El consejo de distrito puede dirigir directamente al prefecto, por medio de su presidente, su opinion acerca del estado y las necesidades de los diferentes servicios públicos, por lo que respecta al distrito.

En la segunda parte de su sesion, el consejo de distrito distribuye entre los comunes las contribuciones directas.— Está obligado á conformarse en esta reparticion con las decisiones del del consejo general, acerca de las reclamaciones de los municipios. Si no se conforman con ellas, el prefecto en el consejo de prefectura, establece la reparticion con arreglo á estas decisiones. En este caso la suma de que el municipio reclamante ha sido relevado, se distribuye entre los demas proporcionalmente.

CAPÍTULO IV.

EL DEPARTAMENTO.

La Asamblea constituyente, como hemos visto ya, no creó los departamentos, sino como una simple division del territorio, destinado á facilitar la administracion: «El Estado es uno, decian las instrucciones anejas á la ley de 22 de diciembre de 1789, los departamentos, no son mas que las secciones del mismo todo.» A las verdad, las Asambleas administrativas, colocadas á la cabeza de cada departamento, estaban reves-

tidas de los poderes mas estensos. Pero estos poderes se referian todos á los intereses generales y no ofrecian nada de especial á los mismos departamentos.

Por el curso natural de las cosas los departamentos han cambiado poco á poco de carácter.

Para las necesidades mismas de la administracion el gobierno ha colocado en ellos agentes, ha organizado servicios, creado consejos. Los intereses encerrados en su recinto, se han constituido y agrupado alli. Como decia Mr. de la Boulie, en la Asamblea legislativa (1): «La fraccion se ha animado; la division territorial se ha convertido en una persona civil, con sus intereses distintos y sus derechos particulares que defender.» Los acontecimientos han probado, que el pensamiento de la Asamblea constituyente, no respondia á las necesidades públicas, y que una organizacion intermedia sustituyéndose en cierto modo á las antiguas provincias, sin resucitarlas, debia colocarse entre el Estado y el municipio. En 1811, un decreto, que era menos un acto de munificencia, que un alivio indirecto al presupuesto del Estado, daba á los departamentos, edificios y caminos, á cargo de conservarlos, creándoles de este modo propiedades y gastos propios; la ley del 10 de mayo de 1858, ha consagrado su individualidad; con la aprobacion del gobierno, muchas donaciones y legados han acrecido su patrimonio, y de hoy mas forman séres colectivos, y como grandes municipios que poseen bienes y rentas, tienen á su cargo necesidades que satisfacer.

La administracion departamental, difiere por tanto, profundamente de la de los municipios, y no puede regirse enteramente por los mismos principios. El departamento ocupa demasiado lugar en el Estado, por el territorio que abraza, y las poblaciones que encierra, para que el mantenimiento de la unidad política no exija que la mano del Estado pese mucho mas sobre él.

(1) Informe sobre el proyecto de ley concerniente á los departamentos (Sesion de la Asamblea legislativa del 5 de noviembre de 1851.)

«Lo que importa, lo que es difícil de arreglar, decía el encargado de informar sobre este punto á la Asamblea legislativa, es la acción combinada de la administración departamental y del poder central, acerca de los intereses particulares del departamento; lo que es importante y difícil, es detener la centralización en este límite, mas allá del que cesa de ser la unidad política para convertirse en opresión departamental; es dar á cada uno la parte que justamente le pertenece y que impide al Estado oprimir al departamento, y á este dañar á aquel cuando los intereses particulares del primero y los generales del segundo se encuentran y confunden; es en fin en la administración de los mismos intereses departamentales reservar al Estado un derecho de vigilancia y de protección necesaria para impedir que el egoísmo ó los extravíos de las generaciones actuales comprometan de un modo grave los intereses del porvenir.»

Sin admitir todas las expresiones de este programa adoptamos el pensamiento general y le tomamos por guía en la exposición que vamos á presentar.

A la cabeza del departamento hay un prefecto nombrado por el jefe del Estado. Solo él está encargado de la administración, según los términos de la ley del 28 de pluvioso año VIII. Sería de desear que se impusiesen condiciones de aptitud á los hombres llamados á desempeñar estas altas funciones. Ya hemos hablado de esto (1); pero la necesidad de dejar al poder central la elección de este administrador, está casi unánimemente reconocida. Es verdad que se ha propuesto colocar cerca del prefecto, y en algún modo en paralelo con él, un delegado elegido por el consejo general y encargado de la dirección de los intereses materiales del departamento. Esta proposición fué desatendida. El delegado del consejo general ó estaría subordinado, y por consiguiente desprovisto de autoridad, ó independiente, y por tanto en lucha y rivalidad permanente. Por otra parte, esta división de poderes tan com-

(1) Véase el tomo primero, página 187.

plexos, ofrece dificultades casi irresolubles; así es que la Bélgica misma ha conservado en cada provincia un gobernador cuyo nombramiento corresponde al jefe del Estado.

Dos consejos asisten al prefecto; el uno es el de prefectura, cuya misión hemos descrito ya (1); el otro es el general del departamento, institución que se remonta al año VIII y que se ha desarrollado progresivamente, á medida que los departamentos iban adquiriendo una existencia mas distinta y mas fuerte.

Segun la ley del 7 de julio de 1852, el consejo general es elegido por el sufragio universal. Las observaciones que hemos hecho acerca del modo de elegir los consejos municipales se presentan aquí de nuevo aunque no tan fuertes (2). Cada canton elige un miembro. La ley establece ciertas incompatibilidades, como para todos los consejos electivos en razon á otras funciones, cuyos deberes no podrian conciliarse con los de consejero general (diputado de provincia). Precauciones análogas á las que se toman respecto á los consejos municipales, tienen por objeto impedir á los generales reunirse fuera de sus sesiones legales, deliberar sobre asuntos que no estén en el círculo de sus atribuciones, hacer ó publicar proclamas ó alocuciones y entrar en correspondencia con otros consejos generales; lo que hemos dicho con este objeto acerca de los municipales, es igualmente aplicable á los generales (3). La comisión legislativa propuso que se les autorizase para emitir su voto en asuntos de interés general para el país, y no circunscribir este derecho á los intereses departamentales. En efecto, la experiencia ha probado que este límite se traspasaba siempre, y el gobierno mismo cuando ha tenido interés en ello ha consultado á los consejos generales acerca de cuestiones que no concernian únicamente á sus departamentos respectivos.

(1) Véase tomo primero: *los consejos de prefectura y las jurisdicciones administrativas de primer grado.*

(2) Véase anteriormente página 29.

(3) Véase página 40.

¿Pero la estension propuesta no tendria entre otros inconvenientes, el de introducir de derecho en estos consejos las discusiones políticas, con frecuencia irritantes, y no convendria á pesar de los ataques que ha recibido, conservar el principio?

Las sesiones de los consejos generales se efectúan cada año, en la época fijada por el gobierno, quien determina asimismo su duracion. Tienen lugar despues de la sesion del cuerpo legislativo y la votacion del presupuesto, á continuacion del cual los consejos generales, tienen como se verá medidas que tomar. Desde la ley de 7 de julio de 1852, el presidente del consejo general es nombrado por el de la república; esta es una innovacion muy notable. Hacia mas de 20 años que los consejeros generales elegian por sí mismos su presidente, y no parece que el gobierno haya tenido jamás motivo para quejarse; nombrado de este modo, gozaba de mas autoridad; la confianza de sus colegas facilitaba su mision. Es de temer que el nuevo sistema de nombramiento cree dificultades que no existian, y es muy lamentable esta tendencia á usurpar á los ciudadanos derechos que constituyen la mas simple y legítima aplicacion del principio representativo. Hace muchos años que en Francia se manifiestan dos disposiciones contrarias que se han sostenido recíprocamente, y que han tenido mas parte de lo que generalmente se cree en la inestabilidad del poder. Los gobiernos han desconfiado casi siempre de las poblaciones y han procurado tenerlas bajo su tutela. Las poblaciones por su parte, considerando las mas veces al gobierno como su enemigo, y no como su guia benéfica, han buscado todas las ocasiones de contrariarle en su marcha. ¿Será con el engrandecimiento del poder central con lo que podrá vencerse esta disposicion? Nosotros no lo creemos así. Estos recursos pueden tener buen éxito por un momento en las horas de laxitud y de postracion; pero traen en pos de si violentas reacciones, en que por haber querido la autoridad estenderse demasiado, se le disputan y arreba-

tan sus atributos mas necesarios. Asi se hace perder á los ciudadanos, no nos cansaremos de repetirlo, el sentimiento de la responsabilidad; se crea el espíritu de servidumbre y el de oposicion, y se destruye la solidaridad ilustrada que uniria con los lazos de la confianza y del afecto á los gobiernos y los gobernados.

Fuera de las sesiones, el consejo general no ejerce ninguna autoridad. ¿Se opone este principio á que se nombren comisiones encargadas, en el intervalo de las sesiones, de vigilar ciertos actos del servicio público y de darle cuenta de ellos? Pudiera temerse que resultasen conflictos en perjuicio de la accion del gobierno ó de la autoridad del consejo general. Pero no resultaria el mismo inconveniente con la formacion de comisiones, encargadas, como se habia propuesto, de preparar é instruir los negocios de que conoce el consejo general. Estas comisiones se ocuparian en utilísimas investigaciones é ilustrarian las deliberaciones, pues la brevedad de las sesiones impide frecuentemente las reseñas y estudios mas indispensables.

Las atribuciones del consejo general se encierran en los limites del departamento; todas se refieren á los intereses particulares de la circunscripcion, y aunque de naturaleza distinta, tienden al mismo fin. El consejo general pronuncia acerca de las cuestiones que se le someten, bien como delegado del poder legislativo, bien como representante legal del departamento, bien en fin como simple consejo del gobierno. La estension de sus poderes depende de la naturaleza de estas diferentes atribuciones. Como delegado del poder legislativo, reparte las contribuciones directas. El cuerpo legislativo hace por sí mismo esta reparticion entre los departamentos; el cuidado de efectuarlo entre los distritos está confiado al consejo general.

A esta atribucion se unen otras dos igualmente relativas al impuesto.

Los distritos se quejan con frecuencia de los contingentes que se les imponen y piden su rebaja. Estas reclamaciones se

llevan naturalmente ante el consejo general. Los municipios á su vez , pueden reclamar contra la reparticion , hecha por el consejo de distrito ; á él es á quien se dirigen desde luego con sus recursos ; este delibera , y el consejo general decide.

Todas las cuestiones relativas á la reparticion del impuesto directo entre los distritos y los municipios se resuelven en definitiva por el consejo general , soberanamente y sin apelacion. Solo en el caso en que hubiera traslimitado sus poderes , el Consejo de Estado podria , en virtud del derecho de que está investido respecto á los actos de todas las autoridades administrativas , anular las disposiciones que llevasen este vicio.

Esta atribucion del consejo general es inmensa , y por tanto se ha ejercido siempre , sin que resulte de ello inconveniente para el gobierno ni daño grave para los intereses privados. Se puede invocar este ejemplo en apoyo de los sistemas que tienden al alivio de la responsabilidad del gobierno por la estension de las de los cuerpos electivos. Habria ciertamente poderosas razones para sostener que una operacion tan importante como la del repartimiento del impuesto no podia salir de las manos del poder central ; se podian suponer una porcion de abusos , de estravíos , de injusticias , con mas justo título aun que para tantos otros actos administrativos de que el gobierno se ha apoderado.

Encargado á la administracion el repartimiento , habria promovido numerosas quejas , y al contrario , por medio de la delegacion hecha á los consejos generales , se opera sin ruido , sin reclamacion , y el gobierno puede felicitarse de haber sido exonerado de esta pesada responsabilidad.

La segunda clase de contribuciones de los consejos generales , comprende las que ejercen como representantes del departamento , en los intereses de cualquier naturaleza que le son especiales. Los poderes que poseen en este concepto , son , ya soberanos ya subordinados. En el primer caso , los consejos generales acuerdan ; en el segundo , deliberan solamente.

Cada año , la ley de presupuestos determina cierta canti-

dad de céntimos adicionales en el total de las contribuciones directas, que los departamentos pueden imponerse y que han recibido, en consecuencia, el nombre de céntimos facultativos. Pueden establecerse otros, ya en virtud de leyes generales que los han destinado á diversas partes al servicio público, tales como el registro, la instruccion pública, los caminos vecinales de gran comunicacion; ya en virtud de leyes particulares que los autorizan en algunos casos, y para objetos extraordinarios; los primeros son calificados por céntimos especiales, los segundos de céntimos extraordinarios. Al consejo general toca votar estos diversos céntimos; su voto es indispensable, y el gobierno no puede suplirlos, sino en casos definidos y en virtud de leyes formales, como por ejemplo, la ley sobre instruccion primaria, que le autoriza á imponer de oficio los céntimos destinados á sufragar este gasto.

Las deliberaciones del consejo general recaen sobre numerosos objetos; abrazan todo lo que debiendo interesar al departamento, no puede resolverse definitivamente sino con la aprobacion de la ley ó del gobierno.

Asi delibera:

1.º Sobre las contribuciones extraordinarias que se han de establecer y los empréstitos que se han de contratar.

2.º Sobre las adquisiciones, enagenaciones y cambios de propiedades.

3.º Sobre el cambio del destino ó uso de los edificios.

4.º Sobre el modo de administrar las propiedades.

5.º Sobre el modo de sostener ó intentar acciones, excepto en los casos urgentes.

6.º Sobre transacciones.

7.º Sobre aceptacion de donaciones y legados.

8.º Sobre la clasificacion y direccion de los caminos departamentales.

9.º Sobre los proyectos, planes y cuentas de todos los demas trabajos ejecutados con los fondos del departamento.

10. Sobre los ofrecimientos hechos por algunos munici-

prios, por asociaciones ó particulares para concurrir al gasto de caminos departamentales ó de otros trabajos de que está encargado el departamento.

11. Sobre la concesion á asociaciones, compañías ó particulares de trabajos de interés departamental.

12. Sobre la parte contributiva que se ha de imponer al departamento, en el gasto de los trabajos ejecutados por el Estado, y que interesan al primero.

13. Sobre la parte contributiva del departamento en los gastos de los trabajos que interesan á la vez á este y á los municipios.

14. Sobre el establecimiento y la organizacion de las cajas de pensiones ó de otros establecimientos renumerativos en favor de los empleados de las prefecturas ó de las subprefecturas.

15. Sobre la parte del gasto de los enagenados y de los niños espósitos y abandonados, que se imponga á los municipios y sobre las bases de la reparticion que se hace entre ellos.

Las deliberaciones del consejo general, se someten á la aprobacion del presidente de la República, del ministro ó del prefecto, segun los casos; estos han sido arreglados con precision por el decreto de 25 de marzo de que hemos hablado ya y que ha dado una elasticidad notable á las atribuciones de los prefectos.

La última clase de las atribuciones del consejo general, comprende los casos en que es llamado á dar su parecer.

Es consultado:

1.º Sobre los cambios propuestos á la circunscricion del territorio del departamento, de los distritos, de los cantones y de los municipios, y sobre la designacion de las cabezas de partido.

2.º Acerca de las dificultades suscitadas con relacion al repartimiento del gasto de los trabajos que interesan á muchos municipios.

3.º Sobre el establecimiento, la supresion ó el cambio de las ferias y mercados.

Tales son, segun la ley de 10 de mayo de 1838, y sin hacer mencion de las adiciones que se han hecho por leyes posteriores, las diversas atribuciones de los consejos generales; se ve que respecto á estos, las leyes no han admitido, como en lo concerniente á los consejos municipales, el derecho de arreglar, ciertos objetos por su voto. En 1838, la comision de la Cámara de los diputados, habia propuesto acordarles este derecho, relativamente al modo de administrar propiedades departamentales productivas de rentas; pero esta proposicion fué desechada. En 1851, la comision de la Asamblea legislativa, la ha vuelto á adoptar de acuerdo con el Consejo de Estado, dándole un estenso desarrollo. Segun su proyecto, el consejo general habria sido llamado á fallar sobre un gran número de objetos, y sus resoluciones se habrian dividido en dos categorías: la primera comprenderia aquellas acerca de las cuales, el consejo general hubiera fallado definitivamente, salvo el recurso de nulidad por violacion de una disposicion legal ó reglamentaria de administracion pública; la segunda comprenderia las resoluciones que podrian anularse en interés del departamento.

En la primera categoría estaban colocados el modo de administrar las propiedades departamentales, los arrendamientos al menos de 18 años, las acciones judiciales, las ofertas hechas sin condicion por algunos municipios, asociaciones, ó particulares, para concurrir al gasto de trabajos á cargo del departamento; en fin, la clasificacion y la direccion de los caminos vecinales de gran comunicacion, y su clasificacion, antes de principiar á ejecutarse las obras.

En la segunda categoría, se encontraban la mayor parte de los objetos, acerca de los cuales los consejos generales no tienen hoy mas que el simple derecho de deliberar.

Los únicos objetos acerca de los cuales solo podian deliberar, son los siguientes:

1.º La clasificacion y direccion de los caminos departamentales;

2.º Las contribuciones extraordinarias que se hubiesen de establecer y los empréstitos que se hubiesen de contratar en favor del departamento;

3.º La aceptacion ó renuncia de las donaciones y legados que contuviesen cargas, condicion ó afectacion de inmuebles y que diesen lugar á reclamaciones;

4.º El cambio de destino de los edificios departamentales afectos á un servicio público;

5.º Las dificultades que ocurriesen relativamente á la reparticion de trabajos que interesan á muchos municipios.

Por estos detalles se comprende todo el sistema. No es nuestro ánimo analizarlos, pero aventuraremos algunas observaciones acerca del principio que le sirve de base.

No reservar al gobierno el derecho de anular las determinaciones del consejo general mas que cuando se viole la ley ó los reglamentos, es en realidad declararlas soberanas; admitir esta soberanía relativamente al modo de administrar las propiedades departamentales y en los arrendamientos de menos de diez y ocho años; solo tendria el inconveniente de perjudicar en algunas ocasiones intereses privados muy respetables cerrándoles de este modo toda via de apelacion. Pero las acciones judiciales, las ofertas de subvencion, la clasificacion y la direccion de los caminos vecinales de gran comunicacion, son de tal importancia, que es difícil respecto á esto confiar al consejo general el poder de que se proponian investirlo.

En un litigio pueden encontrarse comprometidos los derechos del departamento, sus propiedades, el interés de las generaciones venideras, cosas de que el consejo general no puede disponer en manera alguna; las subvenciones ofrecidas, tienen necesidad de ser apreciadas en su objeto, su destino y su fundamento; en fin, los caminos vecinales de gran comunicacion pueden ejercer en los municipios y aun en las

relaciones de un departamento con los departamentos vecinos, una influencia que impide que su clasificacion y direccion se remita al consejo general únicamente: la ley del 2 de mayo de 1856, le ha dado ya relativamente á este punto una participacion suficiente; le concede en efecto, la clasificacion de los caminos vecinales, pero subordinando su deliberacion á la iniciativa necesaria del poder central; falla, pero solo cuando el prefecto propone y sobre su propuesta.

Creemos en consecuencia que la primera categoría introducida en el proyecto de la comision legislativa no deberia admitirse. Los objetos á que se refiere, deberian entrar en la segunda, que puede conservarse sin inconveniente, aun cuando comprenda casi todo lo que no es en la ley actual, para el consejo general sino materia de deliberacion. En efecto, ¿cuál seria la consecuencia de esta innovacion? El consejo general ordena, es verdad, pero el gobierno puede en el término de tres meses anular la deliberacion, si la encuentra contraria á los intereses del departamento. El derecho del gobierno queda intacto; en los casos en que, bajo el régimen actual, hubiera rehusado la aprobacion, la anulará. Pero si el resultado es el mismo, se conservan mejor las condiciones respectivas de los dos poderes. Pertenece, en efecto, al consejo general, por una parte pronunciar directamente sobre los intereses departamentales; pertenece al gobierno, por otra impedir la ejecucion de los acuerdos contrarios al interés del departamento. Merece notarse otra ventaja. La combinacion propuesta, tendria por efecto obligar al gobierno á decidir en un plazo determinado, evitando al departamento, las dilaciones, demasiado comunes en el régimen actual; dilaciones que pueden aun temerse, á pesar de lo dispuesto en el decreto de 25 de marzo. Las simplificaciones mismas que resultan de este decreto y los poderes que ha trasferido á los prefectos, disipan los temores que podia engendrar, la obligacion impuesta á la administracion de resolver, en un plazo de tres meses, acerca las deliberaciones del consejo general.

Las cuestiones que acabamos de indicar tocan esencialmente á los derechos del consejo general y del departamento; pero son de menos importancia que las que promueven los ingresos y los gastos; es decir, el presupuesto. El órden de las ideas nos conduce á ocuparnos ahora de este asunto.

Desde su formacion, los departamentos, como llevamos dicho, no formaban legalmente mas que una division administrativa. La Asamblea constituyente, es verdad habia confiado á las Asambleas administrativas el cuidado de ordenar los gastos y de percibir las contribuciones públicas en cada departamento, pero esto no era sino un mandato de que los investia, y estas disposiciones, no constituian un presupuesto departamental, propiamente dicho.

La ley del 28 mesidor año iv, puso ciertos gastos á cargo de los departamentos, afectando para su pago un número determinado de sueldos adicionales al principal de la contribucion. Pero estos gastos constituian verdaderamente una carga del Estado, y el régimen nuevo tenia menos por objeto crear recursos financieros distintos para los departamentos cuanto aliviar y disminuir, en la apariencia el presupuesto del Estado, ejemplo seguido despues como se ha visto, por el Emperador, en el decreto que cedia ciertas propiedades á los departamentos.

Estas disposiciones fueron confirmadas por las leyes de 15 frimario, año vi y 11 frimario año viii.

Los departamentos tuvieron de este modo su presupuesto; pero aun despues del establecimiento de los consejos generales, el gobierno conservó una completa autoridad en el arreglo y direccion de sus gastos.

Las leyes de 28 pluvioso año xiii y 28 de abril de 1816 crearon otro sistema. Los consejos generales fueron autorizados para establecer impuestos facultativos dentro de ciertos limites, y para emplearlos en los gastos que juzgasen conveniente cubrir con ayuda de este recurso. A contar desde este momento, y al lado de su primer presupuesto, anejo y com-

plemento de el del Estado, los departamentos poseyeron otro verdaderamente departamental, donde se asentaron los gastos á cubrir con los céntimos facultativos y, mas tarde los que debian serlo con los céntimos especiales y los estraordinarios.

Los gastos que figuraban en el presupuesto creado en el año iv se dividieron posteriormente en dos categorías: los gastos permanentes y comunes á muchos departamentos, los cuales estaban enteramente dirigidos y pagados por el gobierno; y los que, por oposicion, se llamaban variables, los cuales desde 1816 se sometieron al voto del consejo general, y tomaron nombre de lo variable de su proporeion.

Los céntimos destinados á hacer frente á esta doble categoría de gastos, incluidos en la ley de presupuestos, recibieron la misma calificacion que los gastos á que estaban destinados, y se denominaron en consecucencia ó céntimos fijos ó céntimos variables.

La ley de presupuestos de 1857 ha introducido una útil simplificacion: los gastos y los céntimos fijos, á los que el consejo general permanecia completamente estraño, se han eliminado de los presupuestos departamentales y transferido al del Estado, su verdadero lugar. A consecucencia de este cambio, la ley de 10 de mayo de 1858, ha dado á los gastos variables, cuya calificacion no tenia sentido, el título de gastos ordinarios, y los céntimos que les estaban señalados, han cesado igualmente de llamarse céntimos variables. Resulta de esto, que los gastos departamentales no son mas que de dos especies: ordinarios y facultativos.

Los gastos ordinarios que se habian propuesto llamar obligatorios á ejemplo de la ley municipal, comprenden todos los objetos que se refieren á las necesidades materiales del departamento, ó á los intereses públicos colocados bajo la salvaguardia de la ley. Hé aqui su nomenclatura:

1.º Las reparaciones de consideracion y la conservacion de los edificios y construcciones departamentales.

2.º Las contribuciones que adeudan las propiedades departamentales.

3.º El alquiler, si ha lugar, de las casas de prefectura y de subprefectura.

4.º El mueblage y reparacion de los efectos de la casa de prefectura y de las oficinas de subprefectura.

5.º El acuartelamiento ordinario de la gendarmería.

6.º Los gastos ordinarios de las prisiones departamentales.

7.º Los gastos de traslacion de los presos, vagabundos y de los presidarios cumplidos.

8.º El alquiler, mueblage y gastos menudos de los tribunales, y los de los jueces de paz.

9.º El fuego y alumbrado para los cuerpos de guardia de los establecimientos departamentales.

10. Los trabajos de recomposicion de los caminos departamentales y de las obras artisticas que forman parte de los mismos.

11. Los gastos de niños espósitos y abandonados, asi como de los dementes por lo que respecta al departamento, con arreglo á las leyes.

12. Los socorros concedidos á los viajeros indigentes.

13. Los gastos de impresion y de publicacion de las listas electorales y el del jurado.

14. Los gastos de impresion y publicacion de las listas de los electores para los tribunales de comercio; los de impresion de los estados para la formacion de las listas electorales y del jurado, las papeletas para las elecciones.

15. Los de impresion de los presupuestos y de las cuentas, ingresos y gastos del departamento.

16. La porcion á cargo de los departamentos, en los gastos de las tablas decenales del estado civil.

17. Los relativos á las medidas que tienen por objeto contener el curso de las epidemias y epizotias.

18. Las primas acordadas por los reglamentos de admi-

nistracion pública , para la destruccion de los animales dañosos.

19. Los gastos de guarda y conservacion de los efectos del departamento.

Todos los demas gastos son facultativos, y por consiguiente subordinados á los acuerdos del consejo general. A esta clase pertenece, por ejemplo, la construccion de edificios, bibliotecas, las subvenciones en favor de las sociedades de caridad ó de los hospicios, las medidas para fomentar la agricultura, para la cria caballar etc. Se ha visto á un departamento conceder una garantia de intereses á una empresa de caminos de hierro, y obligado en 1851, á recurrir á un impuesto estraordinario para sostener este empeño. Otro departamento fué autorizado á tomar acciones por valor de un millon.

El departamento subviene á los gastos facultativos por medio de los céntimos de esta clase, que está autorizado á votar todos los años, en los limites determinados por la ley de presupuestos. El producto de sus propiedades particulares, tanto muebles como inmuebles está igualmente destinado á este uso.

En cuanto á los gastos ordinarios se satisfacen:

1.º Con el producto de los céntimos adiceionales, destinados á este objeto anualmente por la ley de presupuestos y con la parte acordada al departamento, en el fondo comun, establecido por la misma ley; 2.º, con el producto de las propiedades destinadas á un servicio departamental y que producen una renta; 3.º, con el de los derechos de las certificaciones de documentos antiguos archivados en la prefectura; 4.º, con el producto de los derechos y percepciones concedidas al departamento.

Compuesto de estos elementos bastante complexos, el presupuesto se divide en dos secciones. La primera comprende los gastos ordinarios; la segunda, los gastos facultativos; y secciones particulares los gastos imputados sobre céntimos

especiales ó extraordinarios. Esta division se estableció á fin de que cada gasto salga esclusivamente de los céntimos destinados por la ley á sufragarlo.

El presupuesto del departamento, propuesto por el prefecto y votado por el consejo general, lo aprueba el gobierno.

El decreto que arregla el presupuesto puede inscribir ó aumentar de oficio, hasta la suma de los ingresos destinados á sufragar los gastos ordinarios que deben inscribirse en la primera seccion. Ningun gasto facultativo puede incluirse en ella.

Tampoco pueden inscribirse de oficio en la segunda seccion, y las allocations que el consejo general hace en esta no pueden cambiarse ni modificarse por el decreto que arregla definitivamente el presupuesto; solo pueden borrarse.

Asi es como la ley de 10 de mayo de 1858, ha reglado los derechos del consejo general y los del gobierno, relativamente á los presupuestos de los departamentos. Este régimen que se aplica desde 1858, es generalmente aceptado; la comision de la Asamblea legislativa, no ha tratado de modificarlos mas que en algunos puntos, entre los cuales hay uno de grande importancia, y por cuya razon conviene hablar de él con alguna minuciosidad.

Hemos visto que entre los recursos acordados á los departamentos para hacer frente á sus gastos ordinarios figura la parte que se les concede del fondo comun establecido por la ley de presupuestos. El modo de distribuir este fondo ha provocado innumerables reclamaciones y preocupado los ánimos de la comision legislativa.

El origen del fondo comun departamental, se remonta á la ley del 9 germinal año v, que prescribió la reunion del producto de los céntimos de la contribucion territorial en una masa comun, destinada á emplearse hasta la suma de 15½ en socorro de siniestros, y hasta la de 24½ en gastos de administracion á cargo de los departamentos. La ley de 15 brumario, año vi, apoderándose de esta idea, creó el fondo comun en el sentido actual de esta denominacion.

Consistia desde luego en un crecido número de céntimos centralizados en el ministerio del Interior, y cuyo producto se destinaba al socorro de los departamentos que no tenian bastante para cubrir sus gastos obligatorios.

Despues de la ley del año vi, el fondo comun desapareció temporalmente, y se proveyó por otros medios á los gastos obligatorios de los departamentos demasiado pobres para poder subvenir á ellos con sus propios recursos. La ley de 28 de abril de 1816, restableció el fondo comun, y lo compuso de 2 céntimos centralizados tambien de los cuales el ministro del Interior acudia al socorro de los departamentos que no tenian bastante con los diez céntimos que esta ley habia puesto á su disposicion.

El fondo comun fué sucesivamente elevado á cinco céntimos, por la ley de 15 de mayo de 1818, y á 7 por las leyes posteriores. Está comprendido en el presupuesto de 1855, y ha producido la cantidad de 14.728,100 (7. c. 172.)

No se puede menos de aplaudir el pensamiento que ha presidido á la creacion del fondo comun. El estado es una vasta asociacion en que los departamentos forman las diversas partes. Siendo de utilidad general y pública, todos los gastos ordinarios departamentales, es justo y conveniente que se repartan con equidad entre las diversas fracciones del territorio. Por una especie de seguro mútuo, los mas ricos acuden al socorro de los mas pobres, y se establece entre todos el equilibrio.

La ley de 10 de mayo de 1858, al separar con cuidado los gastos ordinarios de todos los demás, destinando á estos esclusivamente el fondo comun, salvo una escepcion borrada por la ley de presupuestos de 1851, se habia propuesto asegurar su distribucion fiel y exacta; lo empleaba en llenar en todos los departamentos, la diferencia que se encontraba entre sus gastos ordinarios y sus recursos propios destinados á cubrirlos, á fin de nivelar por todas partes el ingreso con el gasto. El derecho de cada departamento, tomando de este

modo su origen en una necesidad justificada, alejaba toda idea de arbitrariedad.

Pero el equilibrio esperado, no se ha podido conseguir jamás: mientras que el fondo comun permanecia estacionario ó aumentaba poco, los gastos no cesaban de acrecerse, ya en razon de nuevas y mas costosas necesidades, ó bien por el interés mismo que tenian los departamentos en que se les atribuyese, estendiendo sus gastos ordinarios ó creando, por ejemplo, caminos departamentales, una parte mayor de los fondos comunes. El inconveniente del fondo comun, inconveniente real, pero que se ha exagerado, era escitar á los departamentos á hacer gastos, de que esperaban reintegrarse de este modo sin imponerse nuevas cargas. A consecuencia de estas combinaciones, el nivel de los gastos se ha elevado constantemente sobre el de las sumas que suministraba el fondo comun; y los consejos generales, en lugar de encontrar en ellos los recursos que esperaban, se han visto en la necesidad de cubrir el déficit de muchos servicios de la primera seccion, con los céntimos facultativos, céntimos que se han aumentado de año en año.

El pensamiento de la ley de 10 mayo de 1838, no ha podido pues realizarse, y es fácil comprender que en la distribucion del fondo comun, cometida al gobierno sin condicion, sin regla, sin otra garantia que una publicidad efimera en el *Boletin de las leyes* y en el *Monitor*, se hayan podido cometer abusos, y que, sobre todo, halla dado lugar á reclamaciones mucho mas vivas que el escándalo de los abusos: otro ejemplo de las consecuencias inevitables del poder discrecional que se confia al gobierno.

Para corregir un régimen, objeto de tantas quejas la comision legislativa (1) proponia, imponer reglas al gobierno

(1) En el momento en que hacemos mencion, por última vez, de los trabajos de esta comision, creemos llenar un deber recomendándolos á la atencion pública. Las informes de Mr. de Valimesnil acerca de los municipios, de M. O. Barrot, sobre los cantones, de Mr. de Larcy, sobre los consejos de prefectura y de Mr. de Laboulie, sobre los consejos generales, son tan nota-

en la distribucion del fondo comun, pedian: 1.º que sobre los siete céntimos adicionales, ordinariamente destinados al fondo comun, se repartiesen cinco, entre los departamentos, á proporcion del déficit de la primera seccion de su presupuesto; 2.º que la reparticion de los otros dos céntimos, se hiciese solo entre los departamentos que hubieran votado todos los céntimos facultativos autorizados por la ley, y que hubieran empleado la mitad al menos en el pago de los gastos de la primera seccion del presupuesto. Estas proposiciones no podian llenar el objeto propuesto. Atribuir á los departamentos cierta parte del fondo comun, en proporcion del escedente de gastos ordinarios con los recursos correspondientes, era todavia crear un estímulo para los gastos excesivos; repartir el resto del fondo comun, aun bajo condiciones determinadas, era en la situacion financiera actual de los departamentos, consagrar la arbitrariedad que se queria destruir. Por otra parte las proposiciones de la comision eran lo mas á propósito para producir resultados enteramente opuestos á sus deseos. Quería, en efecto, disminuir la parte atribuida precedentemente á los departamentos ricos, y aumentar la de los departamentos pobres. De su sistema resultaba lo contrario; un ejemplo lo demostrará: En 1852, el déficit de la primera seccion del departamento del Norte, ha sido de 177,628 fr., el de la Córcega de 215,724 fr. Los cinco céntimos repartidos en las mismas proporciones entre estos dos departamentos hubieran producido al primero 88,864 fr., mientras que no se le han consignado mas que 45,000 fr. en la distribucion hecha por el gobierno. El departamento de la Córcega por su parte, que ha obtenido 215,000 fr., no hubiera percibido mas que 106,862 fr. El paso de Calais, hubiera recibido 47,000 francos en vez de 15,000, y el Puy-de-Dôme 66,000 fr. en vez de 70,000. Los departamentos pobres no hubieran en-

bles por la ciencia y como por la sabiduria de las ideas, y el deseo sincero de dar á los poderes locales, todas las franquicias compatibles con los derechos del poder central. Los trabajos de la comision habian sido dirigidos, con mucha habilidad por su presidente, M. el general de Lamoricière.

contrado una compensacion con su mayor participacion en los dos céntimos distribuidos discrecionalmente, tanto que la participacion en este segundo fondo se hubiera encontrado sujeta á condiciones mas onerosas, así para ellos, como para los otros departamentos.

De aqui se puede concluir que la reparticion del fondo comun, no puede someterse á reglas fijas. Es de su esencia depender de circunstancias variadas y complexas, que escapan á toda condicion precisa. Sin embargo, esta reparticion podria confiarse á una comision, como se ha propuesto con frecuencia. Si la comision estuviese compuesta, por ejemplo, de miembros del Consejo de Estado y del tribunal de cuentas, ofreceria garantias que no se encuentra en la autoridad discrecional é irresponsable del ministro, que prepara la operacion y hace que la firme el presidente de la República.

Se ha visto en lo espuesto, que los departamentos, sacan la mayor parte de sus rentas, de céntimos adicionales á las contribuciones directas. Resulta de esto, que sus ingresos se unen estrechamente á los del Estado; de modo que la percepcion y el gasto están confiadas á las mismas manos. Se ha creido que esta especie de confusion producía el efecto de privar al departamento de una existencia propia y de identificarle, por decirlo así, con el Estado: opinion errónea, pues la confusion es mas aparente que real, y por otra parte, la situacion especial de los departamentos, se presta á la solidaridad que los une al gobierno mismo. Pero se ha señalado un inconveniente mucho mayor. Aplicándose los mismos recursos al Estado y á los departamentos, inscribiéndose la cifra en el presupuesto y operándose la percepcion por conducto de los mismos agentes, los contribuyentes no siempre distinguen los impuestos decretados para el Estado y los que lo son para los departamentos, y esto los predispone á acusar al primero de gravámenes que les imponen los segundos. Para obviar este inconveniente, para asignar al mismo tiempo á los departamentos un presupuesto mas personal, si es permitido

decirlo así, un honorable representante propuso que se hiciese entre el Estado, los departamentos y aun los municipios, que, por razón de los céntimos ordinarios se encuentran en el mismo caso, una especie de repartición de las diversas naturalezas de impuestos, y que se atribuyese á cada cual exclusivamente el producto del uno ó del otro de estos impuestos. Pero era tan difícil en esta repartición designar los impuestos cuya percepción convenia mas al Estado, al departamento ó al municipio, como encontrar donde el producto correspondiese á las necesidades respectivas. Examinado este proyecto por una comisión especial, no ha tenido consecuencias. Por lo demás, justo es reconocer que el sistema rentístico de los departamentos, así como el del Estado, es susceptible de profundas reformas; pero esta es una cuestión que no puede tratarse incidentalmente.

Tal es la constitución administrativa del departamento. ¿Seria posible constituir en él, una de esas fuerzas intermedias de que hemos hablado, y que podrian colocar nuestra organización política sobre bases mas sólidas? Grave cuestión; proponerla solamente escita la inquietud de aquellos que penetrados de la necesidad de mantener la unidad política, rechazan toda idea de federalismo; resolverla teniendo en consideración estas preocupaciones, es el objeto de los que procuran oponer un muro á las bruscas revoluciones que con tanta frecuencia han trastornado la faz entera del país. Nosotros no participamos del temor de los primeros. La Constitución de departamentos fuertes y dotados de una verdadera independencia podia ser un peligro para el Estado al principio de la revolución, cuando las antiguas provincias, borradas del mapa por un simple artículo de ley, vivian aun de sus recuerdos, de sus tradiciones y podian de nuevo formar estados en el Estado. Pero todo ha variado, y cualquiera que fuesen los cambios que la organización departamental recibiese, de aquí en adelante no hay ni habrá mas que una Francia á la cual sus hijos tienen á honra pertenecer y de la

sola que ninguno soñaría separarse. La Constituyente concibió un gran pensamiento, el día en que sustituyó los departamentos á las provincias y lo ejecutó con resolución y energía; pero en aquella ocasion como en otras muchas las circunstancias dominaron á la Asamblea. Esto es lo que sucede con frecuencia. Los principios abstractos no juegan sino el segundo papel en las resoluciones legislativas. Sin dejar de admirar los trabajos de la Asamblea constituyente, permitido es preguntarse hoy sino traspasó con frecuencia su objeto para mejor conseguirlo. Asi es como la regla de la separacion de la autoridad administrativa y de la autoridad judicial, ha recibido ya modificaciones, que no serán las últimas; asi tambien como el principio de la libertad, de la industria y del trabajo, no ha quedado tampoco intacto. En muchos puntos, nos hemos acercado á las instituciones mismas que la Asamblea constituyente habia destruido. La administracion departamental exige un retorno semejante. Ya se ha adelantado mucho en esta via, y el departamento actual dista mucho del que salió de las leyes de 1789. Constituir los poderes locales, revestidos de estensas atribuciones, no seria restablecer las antiguas provincias, como volver á los tribunales su jurisdiccion sobre ciertos actos de la administracion, no seria restablecer los antiguos parlamentos. Se puede muy bien asociar útilmente las antiguas instituciones, que tenian su razon de existencia y respondian á necesidades verdaderas, con las nuevas que les inculcarian distinto espíritu. Lo que hace sesenta años ofrecia peligros, hoy no presenta inconveniente alguno.

No temamos pues de crear sobre el territorio estos poderes intermedios, cuya falta se ha sentido con tanta frecuencia. Pero se pregunta, si la division actual de los departamentos, se presta al cumplimiento de esta idea. Nosotros creemos que no. Su territorio es muy estrecho, y por consiguiente su número demasiado grande. Circunscripciones mas estensas se han adoptado ya para la administracion militar, para la jus-

ticia, para la instruccion pública y, recientemente, para la organizacion de la policia, que examinamos separadamente. ¿Por qué no seguir este ejemplo; respecto á la administracion local? De la reunion de muchos departamentos agrupados por la comunidad de intereses, la posicion geográfica, el clima, resultaria una concentracion de esfuerzos, de capacidades, de recursos financieros y por consiguiente la creacion de grandes trabajos, de establecimientos importantes, un mejoramiento fecundo del territorio y una fuerza política sobre la cual se apoyarian, el gobierno en épocas normales, y el órden en las de turbulencias. El tiempo solamente puede traer esta nueva distribucion, y nosotros reconocemos que aun no se ha apoderado de los espíritus. Arrojamus aqui el pensamiento; puede que se tome en consideracion cuando el legislador medite acerca de las nuevas condiciones que tienden á consolidar las instituciones de 1789, y á darlas una sancion y las fuerzas cuya ausencia se ha hecho sentir tan dolorosamente (1).

(1) No hemos hablado en este título de la ciudad de Paris y del departamento del Sena, que están como se sabe, sujetos á un régimen especial. El cuadro de la organizacion de la policia de Paris, se hallará en el capítulo siguiente.

TÍTULO SEGUNDO.

LA POLICIA (1).

La policia, si no se encierra esta palabra en la estrecha y con frecuencia injuriosa significacion que le presta la lengua de los partidos, es el orden mismo que preside á una sociedad. Su perfeccion se considera como el atributo de la civilizacion, y la historia ha hecho célebres á los jefes de Estado que establecieron en su nacion una buena policia.

En un sentido mas restringido, la policia abraza todo lo que interesa al bienestar habitual, á la seguridad, y si nos es permitido decirlo asi, á la comodidad de los ciudadanos.

De esta manera se vé pues, cuán grande y cuán estenso es su dominio, y á qué multitud de intereses toca. Confiada á manos honradas y puras, encerrada en justos límites, es tutelar y protectora, vela sobre la sociedad como una providencia; ejercida violentamente, entregada á sí misma, dirigida por miras de partido, arroja la discordia en los espíritus, siembra el terror, y, cómplice del despotismo, le presta un detestable apoyo.

(1) V tomo 1.º pág. 38 y siguientes, y pag. 239 y siguientes.

Si se quisiera estudiar la policia en todos los objetos que comprende, seria necesario pasar revista á la administracion entera, pues no hay un ramo de está que no tenga su policia, es decir, sus reglas, sus usos, sus máximas, sus leyes escritas ó no escritas. Encerrándonos en un círculo mas estrecho, solo consideraremos la policia en sus relaciones con los intereses generales, que no entran en ninguna de las partes del servicio público, y respecto á los cuales forma ella sola como un poder distinto. Estos intereses pueden dividirse en tres categorias principales: la seguridad del Estado, la proteccion de las personas y la salubridad publica.

La policia interviene asimismo en la industria y el comercio, estos dos dominios de la autoridad privada, que no dependen de la administracion; pero en las cuales el Estado debe, con un cuidado constante, ejercer una vigilancia de órden y de tutela general.

Nosotros indicaremos los poderes que ejerce á nombre de estos diversos intereses; despues de haberla observado en las leyes generales que la rigen, la mostraremos en la práctica, por decirlo asi, en el lugar donde se ejerce sobre la mas estensa escala, es decir, en París.

I.

POLICIA GENERAL.

CAPITULO I.

POLICIA RELATIVA A LA SEGURIDAD DEL ESTADO.

La seguridad del Estado, tiene por garantía principal las leyes destinadas á castigar los atentados que pueden comprometer su seguridad. El efecto de las leyes penales no es solo castigar los crímenes cometidos, es tambien inspirar á los que

podrian meditar otros nuevos, un terror saludable. Las leyes represivas tienen por complemento necesario ciertas medidas que constituyen mas especialmente la policia pública, medidas cuyo carácter es mas directamente preventivo y su efecto mas inmediato. En una sociedad en que reinan la justicia y la moderacion, el legislador y el gobierno se proponen sobre todo prevenir el mal, á fin de evitar al pais inquietudes y á la humanidad el dolor de levantar cadalsos.

Mantener el órden, é impedir las rebeliones, los motines, las insurrecciones, es el objeto de la policia relativa á la seguridad del Estado. Estos crímenes pueden ser escitados por las publicaciones de la prensa, preparados en reuniones públicas ó secretas, ayudados por comunicaciones que burlasen la actividad del poder, ejecutados á mano armada. Para prevenirlos, la ley ha colocado bajo un régimen escepcional la prensa, las reuniones, las correspondencias telegráficas, las armas y municiones de guerra.

Las leyes de imprenta atañen desde luego á sus primitivos instrumentos. Nadie puede poseer ni usar prensas sino en virtud de una licencia espedida por la autoridad pública. Agentes del gobierno, destinados á este efecto, reciben en el momento mismo de su publicacion el depósito de todas las obras impresas; el nombre y las señas del impresor aparecen estampadas en cada ejemplar. Las mas restrictivas disposiciones sujetan á la prensa periódica. Una fianza representa de antemano la suma de las multas pecuniarias en que pudiera incurrir: un editor responde de las infracciones que se cometan. Los artículos de discusion deben firmarse por su autor, en virtud de un decreto reciente, renovado de los tiempos del Imperio y de los primeros años de la Restauracion; aun el periódico diario necesita para su aparicion la vénia del gobierno, y puede ademas suprimirse administrativamente, sea en virtud de una condena, sea por razones de seguridad pública.

No es nuestro objeto discutir leyes que se refieren á un órden de ideas estraño á la administracion propiamente dicha.

Nos limitaremos á una observacion general. No considerando mas que el interés de la seguridad pública, se podrian aprobar todas las medidas tomadas respecto á la prensa. Pero es esponerse á graves errores no considerar las cuestiones sino bajo un solo punto de vista, y un legislador ilustrado debe abstenerse de esta ciega preocupacion. La prensa puede hacerse culpable de provocaciones peligrosas ; puede llegar á ser causa de turbulencias y el gérmen de las discordias civiles, pero tambien es el manantial mas fecundo de los progresos de la inteligencia, la garantía mas preciosa de los derechos de los ciudadanos, y su libertad es de tan alto precio, que se ha propuesto, no sin razon plausible, conservarla sola, como capaz de suplir á todas las demás libertades. Declarar la prensa inviolable, hasta en sus estravíos, seria esponer la la tranquilidad pública ; pero colocarla bajo el régimen de la arbitrariedad y del antojo , seria consagrar el despotismo.

Al régimen de la prensa se ligan las medidas relativas á los *carteleros* y *gaceteros*. Ningun edicto, salvo los de la autoridad pública, puede contener noticias ó tratar de asuntos políticos. Un decreto del 25 de agosto de 1852 exige además, que se obtenga el competente permiso de la autoridad municipal, para fijar anuncios, y en París del prefecto de policía. El interés fiscal que ha dado márgen á este decreto, no reclamaba semejantes medidas, y ningun abuso ha dado lugar á la abrogacion de la ley que dispensaba la autorizacion para fijar carteles. Aun, sin embargo, queda subsistente la libre profesion de cartelero. Cualquiera que desee ejercer aunque sea temporalmente esta profesion, solo se le obliga á declararlo previamente á la autoridad municipal y dar las señas de su domicilio ; mas aun se exige de los repartidores ó espendedores de libros y escritos. Necesitan una autorizacion del prefecto que puede retirárseles en todo tiempo. Esta precaucion, aun cuando restringe la libertad industrial, se explica fácilmente. La autoridad debe vigilar á los hombres que recorren todos los puntos del territorio repartiendo en él publicaciones

en que con frecuencia se ultrajan, no solo la moral y la razon, si que tambien los principios mas sagrados de orden y el respeto debido á las leyes. Justo era por otra parte imponer á los repartidores prescripciones análogas á las que están sometidos los libreros, cuya industria es tan semejante, y que no pueden ejercer su profesion sin una licencia de la autoridad.

Conocidos son los diversos sistemas que se han sucedido respecto á las asociaciones políticas. Siempre sus delirios acarrearón commociones populares; sus escesos ocasionaron violentas reacciones. Los clubs, las reuniones políticas, han sido con frecuencia el foco de las agitaciones y el taller de la insurreccion. La revolucion de 1848 empezó por consagrar el derecho de asociacion, en los términos mas ilimitados; pronto se conoció la necesidad de restringirlo, aunque solo fuese por via de escepcion y como una medida temporal. En este momento ya no existe, merced á un decreto que pone de nuevo en vigor los artículos 291, 292 y 294 del código penal, como tambien la ley de 1834. El ejercicio del derecho de reunion y de asociacion está subordinado á una autorizacion previa.

Por un decreto del 29 de diciembre de 1851, los cafés, tabernas, y casas de bebidas se han sometido al mismo régimen, á causa de que su multiplicacion era un motivo de desorden y desmoralizacion; que en los campos sobre todo, estos establecimientos se habian hecho en gran número punto de reunion y de afiliacion para las sociedades secretas, y habian favorecido de un modo deplorable los progresos de las malas pasiones. La administracion dispone así de la suerte, de la fortuna y de la existencia de una multitud de individuos; los valores mas importantes dependen enteramente de ella.

Poder inmenso, cuyo uso mesurado puede contribuir al sostenimiento de la tranquilidad pública, pero que es demasiado arbitrario para no estraviarse, y que constituye la mas lata invasion del gobierno en el dominio de las industrias pri-

vadas; temible precedente, porque puede servir de pretesto á otras medidas del mismo género, que apoyadas en razones semejantes, ocasionarian nuevos ataques á la libertad de las transacciones privadas.

El interés de la seguridad pública ha exigido disposiciones especiales respecto á las líneas telegráficas, aéreas ó eléctricas. Ninguna de estas líneas puede establecerse ni usarse sino por el gobierno ó con su autorizacion (decreto de 27 de diciembre de 1851). La rapidez de este medio de comunicacion no permitia que se dejase á la libre disposicion de los particulares. De esto podian resultar graves perjuicios, no solamente para el orden, que comunicaciones concertadas con miras criminales podian trastornar, sino que tambien para las transacciones mercantiles, espuestas á sorpresas fraudulentas. Sin embargo, los telégrafos eléctricos establecidos por el Estado, pueden servir tambien para las correspondencias privadas, mediante una tarifa establecida por la ley (19 de noviembre de 1850); pero los despachos deben escribirse en lenguaje ordinario é inteligible, y la administracion, interesada por el orden y las buenas costumbres, queda siempre autorizada á denegar su trasmision. Por lo demas le está prescrito el secreto mas inviolable, bajo las penas marcadas por el artículo 187 del código penal. No hay un crimen público mas odioso que la violacion de la correspondencia; la conciencia de los hombres honrados ha lanzado su anatema mas indeleble contra los poderes que la violaron y contra sus viles agentes. Recuérdense las elocuentes palabras de Mirabeau. Se propuso á la Asamblea constituyente que retuviese para un caso de necesidad, ciertas correspondencias diplomáticas interceptadas y que por su naturaleza parecian comprometer á grandes personajes. Mirabeau exclamó: «Un pueblo que aspira á ser libre, ¿irá á pedir prestadas sus máximas y sus prácticas á la tiranía? ¿Puede convenirle atacar la moral despues de haber sido por tanto tiempo víctima de los que la violan? ¿Qué esos políticos vulgares que en sus mezquinas

combinaciones anteponen á la justicia lo que osan llamar utilidad pública, que esos políticos nos digan al menos qué interés puede disculpar esta violacion de la probidad nacional. ¿Qué sabremos con la vergonzosa inquisicion de esas cartas? Viles y asquerosas intrigas, anécdotas escandalosas, frivolidades despreciables. ¿Se cree por ventura que los complots circulen en los correos ordinarios?... Los secretos de las familias no hay duda, se violarian sin ninguna utilidad, las relaciones de los ausentes, las confidencias de la amistad, la confianza entre los hombres. Un proceder tan culpable ni siquiera tendria excusa, y la Europa diria de nosotros: En Francia, bajo el pretexto de la seguridad pública, se priva á los ciudadanos de todo derecho de propiedad sobre las cartas, que son las producciones del corazon y el tesoro de la confianza. Este último asilo de la libertad, ha sido impunemente violado por los mismos que la nacion habia delegado para asegurar todos sus derechos. Han decidido de hecho, que las comunicaciones mas secretas del alma, las congeturas mas aventuradas del espíritu, las emociones de una cólera frecuentemente infundada, los errores de un momento, podian trasformarse en deposiciones contra terceros; que el ciudadano, el amigo, el hijo, el padre, vendrian de este modo sin saberlo, á ser los jueces unos de otros que podrán perecer un dia el uno por causa del otro; porque la Asamblea nacional ha declarado que tomará por base de sus juicios comunicaciones equívocas, adquiridas por sorpresa y que solo un crimen ha podido procurarlas.»

Otro orden de medidas establecido en favor de la seguridad pública, se refiere á las armas y la pólvora.

Las armas por el criminal empleo de que son susceptibles, pueden atentar al orden, á la seguridad individual. Para prevenir este peligro las leyes han instituido un régimen particular, relativamente á la fabricacion, á la venta, á la importacion ó esportacion de las armas de guerra, al ejercicio de la profesion de armero y al uso de armas.

Por armas de guerra se designan, por oposicion á las armas de comercio, las blancas ó de fuego usadas por las tropas francesas. Un modelo ó calibre, esclusivo de estas armas, sirve para reconocerlas. No pueden fabricarse sino en los talleres del Estado ó con la prévia autorizacion del ministro de la Guerra. La fabricacion se rodea de todas las precauciones que reclama el interés de la defensa pública, de la propiedad nacional y de la seguridad privada. La esportacion de armas de guerra está prohibida á los particulares. El gobierno puede ordenar á las fábricas del Estado el suministro de ellas á las potencias extranjeras que las pidan. La importacion no puede verificarse, sino en virtud de una órden del ministro de la Guerra. Nadie puede poseer armas de guerra. Pertenece esclusivamente á la ley ó al gobierno permitir ó confiar su posesion á cierta clase de ciudadanos y en ciertos límites; por ejemplo, á los guardias nacionales, y á los guardas rurales y de montes, para el servicio público.

La profesion de armero es libre; una sola restriccion limita su ejercicio. El armero está obligado á llevar un registro rubricado por el maire, y visado todos los meses por este magistrado, en el cual debe sentar la especie y el número de armas que fabrique, compre ó venda, con los nombres y domicilio de los vendedores y compradores. Están, además, sujetos á todas las medidas que les imponen los reglamentos de policia, asi es que en varias épocas en Paris se ha mandado á los armeros no tener en su casa mas que fusiles desarmados é inutilizados para un uso inmediato. Las armas de comercio no deben tener nunca el calibre de las de guerra, si su calibre no es al menos de dos milímetros, mayor ó menor que el de estas, pueden considerarse como pertenecientes al gobierno y caen en comiso. El comercio de armas secretas está prohibido. Se designan con este nombre los puñales, los cuchillos en figura de puñal, bien de bolsillo ó de monte, las bayonetas, las pistolas de bolsillo, bastones de estoque y ferrados, escepto los que lo están por la contera, y las armas disimuladas y secre-

tas.» (Declaracion del Rey de 25 de marzo de 1728;—Ordenanza del 25 de febrero de 1837).

Aparte de estas prohibiciones, la facultad de usar armas se ha restringido en diferentes ocasiones. El uso de armas está prohibido á las personas sin crédito, sin oficio, ni profesion, sin domicilio, así como á todas las que han perdido los derechos civiles por una condena. Los ciudadanos no pueden presentarse armados ante ninguna autoridad. Está prohibido llevar armas sean de la clase que quieran, ni aun bastones á las asambleas electorales, á las iglesias, á las ferias, mercados y á otros sitios de reunion. En fin, el hecho solo de haber encontrado á uno con armas, aparentes ú ocultas en un movimiento insurreccional, agrava notablemente la pena.

Aun rigen disposiciones mas restrictivas acerca de la fabricacion, el comercio y el uso de la pólvora.

Está reservado solamente al gobierno el derecho de su fabricacion. El interés fiscal se ha unido al de la seguridad pública para crear este privilegio, cuya renta figura en el presupuesto por una suma importante. Está prohibida y se castigan con severas penas, toda fabricacion de pólvora fuera de las fábricas nacionales. No habiendo determinado la ley los elementos de que se compone la pólvora, sus disposiciones se estienden á todas las preparaciones fulminantes, que se obtienen por la combinacion de ciertos ácidos con sustancias diversas, tales como el papel, el algodón, la goma, el almidón etc. La pólvora de guerra no puede venderse en el comercio; el gobierno tiene sus comisionados para la venta; la administracion determina las obligaciones que se imponen á los compradores; puede al mismo tiempo suspender ó prohibir su espendicion en ciertos distritos, y retirarla de los estancos. Reglas particulares facilitan, con las precauciones convenientes, la venta de la pólvora destinada á los trabajos públicos y con particularidad á los de minas.

Para completar esta reseña debemos analizar aun en breves palabras las disposiciones escepcionales relativas á los

pasaportes, á los extranjeros que se encuentran en Francia, y á las ciudades de París y de Lyon.

Los pasaportes se instituyeron, tanto para la seguridad personal de los que los obtienen, como por la de la sociedad; tienen por objeto asegurar la identidad del poseedor; como la facultad de viajar, es un derecho natural, no se pueden negar sino á los perseguidos criminalmente. Los pasaportes designan el punto á donde el ciudadano se dirige. Toda autoridad que se niega á espedir un pasaporte, ó á darlo para el punto designado, comete un abuso de poder. El pasaporte espedido á un indigente le dá derecho á un socorro de viaje de 15 céntimos por legua; pero el pasaporte de esta especie puede denegarse y fija él el itinerario que se debe seguir; la causa de esta diferencia se comprende fácilmente. El impuesto, que no olvida ningun manantial de productos, se adhiere tambien á los pasaportes; por cada uno se exige dos francos para el interior y diez para el extranjero; este derecho es en el dia exorbitante respecto á lo que sucede en otros países. Se concilia tampoco con la facilidad actual de las comunicaciones, que el gobierno en ciertos casos, particularmente en tiempo de la esposicion de Lóndres, tuvo que renunciar provisionalmente á él y limitarse á espedir pases temporales.

En Francia se aplica una legislacion especial para los extranjeros residentes ó transeuntes. Se les ha visto con frecuencia, tomar parte en las asonadas que han turbado la tranquilidad pública; no ofrecen las mismas garantías materiales, personales y morales que los ciudadanos franceses, y no puede invocar los derechos unidos á la cualidad de francés. Asi es que en todas épocas se ha dejado al gobierno la facultad de espulsarlos del territorio. Esta facultad, durante mucho tiempo, ha sido solo escepcional y temporal; pero la ley de 3 de diciembre de 1849, la consagra de una manera definitiva y permanente.

En consideracion á los peligros que trae consigo la reunion de un gran número de habitantes y particularmente de

obreros en un mismo punto, la ley (de 5 de julio 1852) adopta una medida, no autorizada hasta hoy legalmente. La residencia en el departamento del Sena y en los municipios que constituyen la circunscripcion de Lyon, puede prohibirse temporalmente á los individuos á quienes la falta de medios de subsistencia, ó ciertas condenas sufridas por rebelion, mendicidad, vagancia ó coalicion de obreros, hace sospechosos de ser autores habituales de desórdenes.

Tal es el conjunto de las principales leyes que tienen por objeto garantizar la seguridad del Estado. Las turbulencias repetidas de que la Francia ha sido teatro, demasiado sangrientas con frecuencia, las han subcesivamente provocado. La mayor parte son necesarias, pero algunas pueden tacharse de escesivamente rigurosas.

Un gobierno moderado puede solo impedir que degeneren en instrumentos de opresion y de tiranía. Aplicadas al antojo, su resultado seria destruir nuestras mas caras libertades. Puede decirse que crean dos deberes: el primero el de someterse á ellas mientras existan; el segundo preparar la reforma ó la atencion por el desarrollo del espíritu de concordia y del sentimiento de respeto á la ley. Contraigamos todos en la esfera en que nos haya colocado la suerte, la costumbre de no procurar mas que por vias legales y pacíficas la mejora de las leyes, los progresos de la libertad, la conquista de las garantias políticas, y estas medidas restrictivas desaparecerán ó caerán en deshuso, por la fuerza natural de las cosas. La nacion entera dejará de verse colocada hasta cierto punto, bajo el régimen de un estado de sitio.

En presencia de las leyes que acaban de enumerarse, no se puede trasladar la imaginacion, sin una dolorosa envidia, y si nos atrevieramos á decirlo, sin humillacion, á contemplar la venturosa Inglaterra, donde estas trabas son desconocidas. La prensa libre, el derecho de reunion consagrado, las industrias emancipadas del régimen de las autorizaciones, desconocidos los pasaportes, todo el mundo, salvo los dias escep-

tuados, cuyo término está rigurosamente señalado, extranjero ó indigena, pudiéndose trasladarse donde le plazca, y sintiendo que pisa el suelo de una nacion libre: ¡Qué condicion tan noble para un pueblo! Pero ¿no es digno de ella el que inclina su frente con respeto ante el simple baston de un *constable*; que se muestra tan celoso de las reformas como enemigo de las revoluciones, y que, cuando grita, viva la Reina, no saluda en ella, á la dispensadora de los destinos públicos de los socorros y de los honores, sino á la custodia de sus libertades, de sus derechos, de su grandeza, y de su independencia?

CAPITULO II.

POLICIA RELATIVA A LA PROTECCION DE LAS PERSONAS.

La proteccion de las personas, asi como la seguridad del Estado, encuentra su principal garantia en las leyes que castigan, con penas proporcionales á la gravedad de los hechos, los atentados cometidos contra algun ciudadano, y aun los actos involuntarios de negligencia ó imprudencia que ocasionan muerte ó herida; pero la ley francesa no se satisface con estas medidas represivas, y ha organizado un sistema de precauciones, testimonio de la mas loable solicitud. Si alguna de estas precauciones parece exagerada, no hay quien se atreva á censurar unas medidas inspiradas por el celo ardiente hácia la existencia de los hombres, y que forman, de acuerdo con el régimen que se sigue en otros paises y muy particulamente en los Estados-Unidos, un contraste honorífico para la Francia.

Seria muy difícil reunir todas las disposiciones de las leyes ó reglamentos que se refieren á este orden de intereses; son tan numerosas como detalladas. Nos limitaremos á indicar las principales y á esponer su objeto general.

Para conocer estas disposiciones en su conjunto, se puede considerar al ciudadano en el seno de su familia, en la

ciudad que habita y en los viajes, que le obligan á recurrir á los diversos medios de transporte.

En el seno de su familia, el ciudadano debe protegerse á sí mismo, y el respeto del hogar doméstico se opone á las medidas que tendiesen á preservarle del peligro con auxilio de la intervencion del poder público. Pero su vida, su salud, pueden verse amenazadas por la introduccion de sustancias venenosas, y la ley ha provisto para este caso. Cualquiera que se proponga dedicarse al comercio de estas sustancias, está obligado á manifestarlo con anticipacion y á observar las precauciones que la ley ha establecido con un cuidado minucioso y esquisito. La venta de sustancias venenosas no puede hacerse sino á personas conocidas, y para usos determinados. El nombre de los compradores debe anotarse en un registro. Los farmacéuticos tienen obligacion de satisfacer condiciones de aptitud comprobadas por un exámen, y no pueden despachar venenos sino en virtud de la receta de un médico. La venta de remedios secretos, es decir, de aquellos cuya composicion se desconoce, está formalmente prohibida. En los mercados se observa una vigilancia constante; se escluyen de ellos ciertos productos que pueden encerrar gérmenes de muerte. Como la visita de mendigos importunos que imploran la caridad con amenazas de palabra, ó con armas podria incomodar á los ciudadanos, penas especiales castigan la mendicidad á domicilio y la que recurre á la violencia. Los locos á quien el sentimiento de la responsabilidad no puede contener, podrian igualmente introducirse en las casas; aquellos cuyo estado furioso amenaza á las personas, pueden ser encerrados por via administrativa. Hay hospicios especiales destinados á estos desgraciados, y cada departamento está obligado, con ayuda de los municipios, á sostener un establecimiento de este género. Por último, el edificio mismo, donde el ciudadano mora, puede no presentar la suficiente solidez. La administracion tiene derecho en este caso á decretar su derribo.

El ciudadano encuentra fuera de su morada una protec-

cion análoga. La demolicion de los edificios ruinosos evita, al mismo tiempo que la muerte de los que los habitan, la de aquellos que podrian quedar sepultados en sus escombros al pasar. Los sitios de mala nota y que pueden servir de refugio á los malhechores, se vigilan muy especialmente, y pueden mandarse cerrar. Si la policía se vé obligada á tolerar ciertas casas, asilos vergonzosos de libertinaje, les destina un sitio especial y las somete á un régimen severo. Los establecimientos que podrian ocasionar explosiones, como veremos bien pronto, necesitan para su establecimiento una autorizacion especial.

La solicitud de las leyes se nota sobre todo en sus precauciones respecto á los diversos medios de transporte. Los wagones de los caminos de hierro, los buques de vapor y los carruajes públicos, no pueden prestar el servicio á que están destinados sino despues de reconocidos repetidas veces y declarados útiles. Los reglamentos determinan el número de viajeros que pueden admitirse en cada uno de aquellos, ordenan la prueba de las máquinas de vapor, fijan las dimensiones de los carruajes, el peso del cargamento y la manera de hacerse. Reconocimientos periódicos tienen por objeto examinar el estado de conservacion ó deterioro de los diversos vehículos. El conjunto de estas disposiciones, aconsejadas sucesivamente por la esperiencia, y que seria largo describir, manifiesta la inquieta preocupacion de la ley respecto á las personas. En muchos casos se exigen autorizaciones previas; pero sin hablar de las consideraciones de seguridad que justifican este régimen, conviene observar, que solo se dirigen á los instrumentos de la industria, y de ningun modo á la industria misma. Nadie necesita permiso de la autoridad para ejercer la profesion de carruajero ó de empresario de transportes, y el régimen preventivo, aplicado solamente á objetos materiales, ilustrado por verificaciones de hecho y por el informe de las comisiones, no dá lugar á las objeciones que promueve cuando se ejerce en las personas.

CAPITULO III.

POLICIA DE SANIDAD.

Las medidas de sanidad son principalmente atribuciones de la autoridad municipal; dependen de tal modo de los sitios y de las circunstancias, y encierran una variedad tan grande, que la ley debe casi siempre descansar en el poder que se halla en mejor posicion para conocer las necesidades públicas y para discernir los medios mas adecuados de satisfacerlas. A la autoridad municipal pues, es á quien corresponde hacer que desaparezcan todas las causas de insalubridad, asegurar el libre curso de las aguas, arreglar las condiciones á que deben sujetarse los fosos, los depósitos de inmundicia etc. Esta autoridad es la que construyendo mataderos, prohíbe los de los particulares; la que vigila los mercados, construye fuentes; en fin, la que adopta todas las precauciones que exige el interés de sanidad pública.

Pero aparte de las diversas medidas que reclama el estado particular de cada municipio, hay otras necesidades generales de que la ley ó los reglamentos de administracion pública han debido ocuparse. Esperimentando el pais entero las mismas necesidades, el legislador ó la administracion tenían el deber de prescribir disposiciones aplicables á todos los puntos del territorio. A este órden de medidas pertenecen las que conciernen en los municipios rurales, al curso de las aguas y á los desecamientos, y en todos los municipios, pero principalmente en las ciudades, las relativas á los establecimientos insalubres ó incómodos y á las habitaciones malas. Procuremos analizarlas.

A los propietarios ribereños de corrientes de agua no navegables ni flotables, se los obligaba á efectuar la monda segun los reglamentos y los usos locales. El interés de la agricultura y el de la propiedad, se adunan con el de la salubridad, para imponer esta obligacion. Los gastos de

monda se reparten entre los propietarios en proporecion á sus intereses ; y el deber de la administracion es vigilar con cuidado el cumplimiento de obligacion tan esencial, y hacer ejecutar de oficio los trabajos que los propietarios rehusaren ó descuidasen efectuar por sí mismos.

Las lagunas infestan el aire con los vapores pestilentes que se desprenden sin cesar de sus aguas corrompidas ; causan enfermedades peligrosas y atacan de un modo grave la salud pública. La agricultura se vé además privada de terrenos considerables , interés que podria no ser suficiente para motivar las medidas prescritas por la ley , pero que prueba tanto mas su legitimidad. Es pues de utilidad pública el que se verifiquen las desecaciones. Pero con frecuencia el número de propietarios á quienes pertenece un terreno pantanoso , su mala voluntad , su abandono , la falta de armonía y de los fondos necesarios, son obstáculos que solo el poder público puede allanar. La administracion interviene y tiene derecho de ordenar las desecaciones «que crea útiles ó necesarias». Estas se ejecutan por el Estado ó por concesionarios. Los propietarios de los pantanos obtienen siempre la preferencia si aceptan las condiciones de la concesion. En caso contrario, esta se efectúa en favor de los licitadores , cuyas proposiciones juzga el gobierno mas ventajosas ; en igualdad de circunstancias las proposiciones hechas por municipios propietarios , ó por un cierto número de propietarios reunidos obtienen la preferencia. Estos elijen un sindicato para nombrar peritos. Los terrenos pantanosos se tasan préviamente, y despues de hecha la desecacion , el aumento de valor que resulta de estos trabajos, se reparte en las proporeiones determinadas en el acta de concesion. Los propietarios se eximen de la indemnizacion á su cargo por el abandono de una porcion relativa del terreno, evaluada al precio de la última tasacion , ó si lo prefieren, por la constitucion de un censo al 4 por 100. Si la limpia se ha ejecutado por el gobierno, su parte en la mayor tasacion, no puede esceder de los gastos que haya hecho. Tal es la eco-

nomía general de la ley acerca de los desecamientos, ley cuya ejecución ha ofrecido grandes dificultades que, sin satisfacer á los propietarios, ha desalentado á los empresarios, y que ha mucho tiempo se estudia en los consejos del gobierno y en las Asambleas para preparar su reforma. Hay pocas cuestiones que ofrezcan tan grande importancia, pues se calcula que en Francia están inundadas por las aguas 800,000 hectáreas, con gran detrimento de la salubridad pública y de la agricultura; pero existen tambien pocas leyes que encierren problemas mas delicados, por la necesidad que hay de conciliar los derechos de la propiedad con las justas pretensiones de los empresarios que le transforman y le atribuyen á un valor nuevo.

La legislación relativa á los « establecimientos peligrosos mal sanos é incomodos » se refiere, como lo prueba su denominacion, á la seguridad, sanidad y bienestar de los ciudadanos. La mayor parte de las medidas prescritas con miras de utilidad pública, y que constituyen el conjunto de las leyes de policía, presentan de este modo un carácter misto; y si para esponerlas con claridad y en un orden lógico, es preciso, constituir con frecuencia categorías distintas, esta clasificacion nunca es rigurosa. Como el objeto principal de las disposiciones de que vamos á hablar, es la sanidad pública, hemos creído deber colocarlas en este lugar; pero apenas si hay necesidad de advertir que las diversas materias que componen el dominio de la policía, no se clasifican de la manera dicha sino en razón de su carácter dominante, y que conservan no obstante sus rasgos casi siempre complexos.

Hay ciertos establecimientos industriales que por su naturaleza pueden alterar la salud ó incomodar á los hombres y los animales domésticos, comprometer la seguridad de las habitaciones, dañar á las cosechas y á los frutos de la tierra, ó á los productos artificiales. « El de primera necesidad, decia el Instituto, consultado en el año viii por el gobierno, que se pongan limites dentro de los cuales el manufacturero pueda

ejercer su industria con seguridad y libertad, y que garanticen al propietario vecino que no peligran ni su salud, ni las producciones de su suelo. » Tal es el principio en que reposa la ley relativa á los establecimientos perjudiciales é insalubres.

La regla es la libertad del trabajo; las disposiciones que la restringen forman la escepcion; de donde se sigue, primero, que las medidas restrictivas de la ley no pueden aplicarse sino á establecimientos especialmente clasificados á este efecto, y que todos aquellos que no están designados como tales, quedan bajo el imperio del derecho comun. Pero ¿cómo se ordena esta clasificacion? En el estado actual de la legislacion, basta un simple reglamento de administracion pública. Esta legislacion, en efecto, tiene por base un decreto dado por el emperador el 15 de octubre de 1810, época en que habia usurpado el poder legislativo. Unida á este decreto va una lista de los establecimientos sujetos al régimen escepcional, y despues se ha creido poder, en la misma forma, añadir sucesivamente á ella todos los establecimientos que se supuso debian someterse al mismo régimen. Parece sin embargo, que solo la ley deberia poner á las industrias trabas, á veces demasiado onerosas.

De los establecimientos perjudiciales, insalubres ó incómodos, se han formado tres clases y estas, tres clases se refieren poco mas ó menos á esas diversas denominaciones.

La primera comprende los establecimientos que deben alejarse de las habitaciones. No pueden fundarse sino en virtud de una autorizacion acordada por el jefe del gobierno, en Consejo de Estado, previo el llamamiento, por edictos á terceros interesados, informacion *de cómodo et incómodo*, dictámen de peritos, consejo de sanidad y autoridades locales.

En la segunda clase, están colocadas las manufacturas y talleres para los que no es rigurosamente necesario el alejamiento de las habitaciones, pero que no obstante conviene prohibir su fundacion hasta haber adquirido la certeza de que las operaciones que se practican en ellos no incomodarán á los

propietarios de la vecindad ni les causáran perjuicios. «El prefecto concede la autorizacion» despues del cumplimiento de las mismas formalidades que se exigen respecto á los de la primera clase. El decreto del prefecto, por una de esas anomalias que hemos observado, (1) puede deferirse al Consejo de Estado por la via contenciosa.

De la tercera clase, dependen los establecimientos que pueden en todo caso, colocarse sin inconveniente cerca de las habitaciones, pero que deben someterse á la vigilancia de la administracion. Se practican los mismos informes que para los establecimientos de las dos primeras clases, pero sin edictos, ni informacion. La autorizacion se concede en Paris por el prefecto de policia; y en los departamentos, por el subprefecto, que una ordenanza de 14 de enero de 1815 ha sustituido, bastante irregularmente, al maire que designaba el decreto de 1810. En caso de oposicion, el consejo de prefectura resuelve, salvo el recurso al consejo de Estado.

La autorizacion puede retirarse, con formas poco diferentes de las que se han seguido para la concesion, sino se cumplen sus condiciones.

¿Cuáles son, respecto á los vecinos, los efectos de la autorizacion? ¿Si experimentan un perjuicio, pueden reclamar su indemnizacion? La respuesta no es dudosa. Pero el Consejo de Estado, ha decidido que estas indemnizaciones, no podian concederse sino por el perjuicio material ocasionado por el establecimiento autorizado y de ninguna manera por la depreciacion ó menos valor que resultase de su vecindad. El tribunal de Casacion por el contrario, ha decidido que en todo caso habia derecho á una indemnizacion, y su opinion nos parece la mas conforme á la lógica y á las reglas de la equidad.

Hemos presentado estos detalles un poco estensos para manifestar cuán confusa é incoherente es la legislacion relativa á los establecimientos insalubres. Crea competencias excepcionales, confunde lo contencioso con la administracion

(1) Véase tomo 1.º, página 104.

pura, despues de haber promovido dificultades que atañen á los derechos de la propiedad, los deja indecisos; pero estas son las menores objecciones que se le pueden hacer. Hay una que domina á todas las demás, y debemos al menos indicarla.

Si la autorizacion concedida á los establecimientos malos los pusiese al abrigo de los recursos de los propietarios vecinos se comprenderia su utilidad; pero la ley no podia autorizar una inmunidad tan exorbitante; por consiguiente, en caso de perjuicio causado á otro, el propietario está obligado á indemnizar. No goza, pues, de la seguridad y de la libertad que el instituto, en el informe del año xiii, queria darle. Los innumerables pleitos promovidos con motivo de los establecimientos clasificados, prueban además que los vecinos no obtienen tampoco las seguridades que se les prometian. Ahora bien, se pregunta: ¿cuál es en este caso la utilidad de la autorizacion? Si el establecimiento no causa ningun perjuicio, ¿qué necesidad hay de la autorizacion? ¿Perjudica á los vecinos? ¿Por qué no descansar en estos, que podrán obtener de los tribunales las indemnizaciones legítimas, indemnizaciones cuyo efecto necesario será impedir los establecimientos que, demasiado dañosos para las propiedades vecinas, prohibiria la administracion, ú obligar á los dueños de los nuevos establecimientos á imponerse por sí mismos las condiciones que ella les dicta?

El inconveniente del régimen actual es poner trabas á la industria, enganar á los vecinos que creen con frecuencia que la autorizacion dada al establecimiento, les priva del recurso de indemnizacion, y mezclar á la administracion en los intereses privados.

Se puede oponer á la legislacion francesa sobre esta materia la de muchos paises, donde la industria no está menos desarrollada, ni la propiedad menos protegida, y donde la ley no contiene ninguna disposicion del mismo género. El industrial y el propietario usan cada uno de su derecho, bajo la condicion comun á todos los paises, porque es de derecho

natural no perjudicar á otro; en caso de cuestion, los tribunales deciden. Este sistema es mucho mas sencillo y mucho mas propio para satisfacer las necesidades diversas á que intenta proveer.

Algunas objeciones del mismo género podian dirigirse contra la ley reciente (13 de abril de 1850) que se ocupa de las habitaciones insalubres; pero consideraciones de humanidad y la gravedad de los hechos dolorosos que la han hecho necesaria, basta para su justificacion.

El estado deplorable de un gran número de habitaciones ocupadas la mayor parte por pobres y artesanos, sobre todo en las ciudades industriales, hacia mucho tiempo que preocupaba la opinion pública y servia de testo á quejas tan fundadas, que el mismo espíritu de partido podia apenas exagerarlas. Muchos infelices yacian hacinados en casas donde las leyes de sanidad no se veian menos violadas que las de la decencia y las buenas costumbres. En las habitaciones ordinarias, cuevas mal sanas, alcobas que carecian de ventilacion estaban destinadas para habitacion de los hombres. Especuladores infames cobraban alquiler de los terrenos mas estrechos y menos dispuestos para contener las familias enteras que se albergaban en ellos. El abuso era cruel y la humanidad solicitaba un remedio inmediato y pronto.

La ley no ha querido atribuir á la administracion central los poderes que organizaba; al contrario, los ha confiado al consejo municipal. Este nombra una comision, cuando declara esta necesidad por un acuerdo especial, para investigar é indicar las medidas indispensables, para mejorar las habitaciones mal sanas, habitadas ú ocupadas por otras personas que el propietario, el usufructuario ó el inquilino. Se reputan insalubres, los alojamientos con condiciones de tal naturaleza que pueden comprometer la vida ó la salud de sus habitantes. En la comision deben entrar necesariamente un médico, un arquitecto ú otro sugeto del arte, como asimismo un individuo de la junta de beneficencia, y del consejo de

hombres buenos, si existen estas instituciones en el municipio. Despues del informe de la comision que debe visitar los lugares y proponer, el consejo municipal determina: 1.º Los trabajos de sanidad y los lugares en que deben ejecutarse: 2.º Las habitaciones que no son suceptibles de mejora. Contra estas decisiones, los interesados pueden acudir al consejo de prefectura.

Si la habitacion es susceptible de mejora, el propietario está obligado á ejecutarla en el término que se le señale, bajo pena de una multa, en el caso en que la habitacion continuase siendo ocupada por un tercero. La multa en caso de persistir el propietario, puede ascender hasta el doble del valor de los trabajos ordenados.

Si se vé que la habitacion no es susceptible de mejora, la autoridad municipal puede prohibir provisionalmente su ocupacion. El consejo de prefectura puede decretar la prohibicion absoluta.

Tales son las principales divisiones de esta ley, que nos parece haber conciliado con sabiduría y discernimiento, los diversos intereses que debia amalgamar, y que tiene el mérito de dirigirse no al gobierno, sino al poder municipal.

Así es como nuestras leyes velan por la salubridad pública. En los campos, la limpia de las corrientes de agua y los desecamientos; en todas partes, y particularmente en las ciudades, medidas relativas á los establecimientos peligrosos, insalubres é incómodos y á las habitaciones mal sanas, son los principales monumentos de su solicitud; por lo demás, como los hemos visto, es casi eselusivamente de la atribucion de la autoridad municipal, revestida para este objeto de estensos poderes, y en cuyo ejercicio, la autoridad judicial, llamada á sancionar sus determinaciones, le ha prestado siempre una asistencia eficaz é ilustrada.

CAPÍTULO IV.

POLICIA RELATIVA A LA INDUSTRIA.

La industria, en sus relaciones con las leyes que la rigen, abraza dos elementos distintos: los agentes y los productos del trabajo, ó los artesanos y las obras: considerémoslos separadamente.

La industria tiene necesidad de niños que la auxilian con sus pequeños esfuerzos. Hay ciertos trabajos para los cuales tienen una aptitud especial. El salario que se exige es corto; familias pobres condenadas á una existencia miserable, encuentran en ese salario, aunque módico, un recurso precioso. Bueno es que el hombre, sobre todo, cuando su existencia debe consagrarse al trabajo, se acostumbre á él desde jóven, pues la ociosidad es perjudicial en todas las edades de la vida. El trabajo de los niños es una necesidad para la industria, un socorro para sus familias, una garantía para ellos mismos. La ley no podria impedirlo y lo deja libre, tanto para el que lo presta como para el que lo alquila; pero la fatiga impuesta á estos brazos todavía tiernos, tiene marcados sus límites por la naturaleza. En vano un padre, en vista de su autoridad, pretenderia traspasar ó solamente marcar por sí mismo estos límites. El poder de padre espira en el momento en que habla la humanidad. La sociedad no puede permitir que las generaciones nuevas se marchiten antes de tiempo, y la misma industria está interesada en que estas fuerzas que deben un día fecundarla, por decirlo así, no se ahoguen en germen. La ley interviene pues para marcar el tiempo, durante el cual los niños podrán ocuparse en las manufacturas, y para asegurarles el descanso de la noche y la expansion de los domingos y fiestas: hace todavía mas; exige que la escuela se les abra al mismo tiempo que el taller, colocando á igual altura por una generosa asociacion, su inteligencia y su salud.

Al niño que se dedica al oficio de artesano le está reservado con frecuencia un ingrato porvenir: agente pasivo, casi maquinal, asociado al motor que secundá y completa. Otros mas felices, entran en casa de un maestro á quien sacrifican su tiempo, que es el único capital del pobre, y algunas veces tambien un pequeño peculio, fruto de largas economías, en cambio de la instruccion técnica que se les ofrece. Una nueva casa recibe al aprendiz; su maestro queda temporalmente revestido de la autoridad paternal. ¡Haga el cielo que la ejerza como buen padre de familia; severo sin dureza, benevolente sin debilidad, solícito en vigilar sus costumbres, formar su carácter y cultivar el talento del pobre é interesante discípulo, confiado á sus cuidados! La ley no puede dar al maestro las virtudes, las costumbres morales; y al aprendiz la docilidad, la aplicacion, que son sus deberes respectivos; pero debe prescribir las condiciones sustanciales de un contrato, cuya ejecucion toca tan de cerca al órden público y al bienestar de las familias, y asegurar su estricto cumplimiento. No hay necesidad, como bajo el imperio de los antiguos reglamentos, de pasar por el aprendizaje para ingresar en la clase de obreiro, condicion crizada de obstáculos, de dificultades y trabas; pero si el operario puede legalmente dispensarse de este noviciado, el aprendizaje no es menos necesario para su educacion profesional, y en este concepto digna de la solicitud del Estado. Una ley de la última Asamblea legislativa (22 de febrero 1851), contiene acerca del aprendizaje disposiciones llenas del interés que las clases laboriosas inspiraban á esta Asamblea; prescribe con gran cuidado los deberes del maestro. «Debe, con arreglo al artículo 8.º, conducirse con el aprendiz como un buen padre de familia, vigilar su conducta y sus costumbres dentro y fuera de casa, y dar parte á sus padres ó tutores de las faltas graves que cometa ó de la inclinacion á los vicios que manifieste.» Se fija la duracion del trabajo obligatorio para el aprendiz, el tiempo necesario para su educacion religiosa, y si no la ha concluido, deben concedér-

sele para este objeto al menos dos horas diarias. «El aprendiz segun el artículo 11, debe á su maestro fidelidad, obediencia y respeto; ayudarle en su trabajo con arreglo á su aptitud y fuerza.» Por su parte el maestro debe enseñar al aprendiz progresiva y completamente el arte, el oficio ó la profesion especial que constituye el objeto del contrato. Está prohibido al maestro, celibatario ó viudo, tener como aprendizas en su casa jóvenes solteras y menores de edad; por esta falta incurren en ciertas penas. Los casos que autorizan la rescision de los contratos están marcados con claridad. Muchas de estas disposiciones parecerán mas especulativas que prácticas; pero se asegura su aplicacion con el concurso del consejo de hombres buenos, llamado á decidir en todas las demandas que tienen por objeto la rescision ó ejecucion del contrato.

Sin embargo, el niño llega á hombre, cesa de prestar á la máquina ciega el auxilio de sus brazos declinados y sale del aprendizaje: á su vista se abre una nueva carrera. La sociedad reune y respeta en él los derechos de un hombre libre. Trabaja donde le agrada; elige su trabajo, su maestro, sus horas. Vive cubierto con la egida del derecho comun, puede hacer con el que le ocupa el convenio que le plazca, y si es de buena fé, la ley garantiza su ejecucion. Solo para proteger su debilidad se separa la ley de la estricta igualdad que observa con todos y anula los compromisos que se hacen por mas de un año. Por tanto esta independencia, exige precauciones; precauciones necesarias á la sociedad y al mismo obrero. La sociedad necesita vigilar sobre una clase numerosa, frecuentemente nómada, sin lazos que la unan al suelo y cuyas agitaciones podrian turbar la paz pública. En cuanto al artesano, puede mudar de taller y de maestro: ¿pero cómo probará que no ha faltado á la fé prometida? Necesita anticipos pecuniarios para subvenir á necesidades estraordinarias, á la compra de instrumentos, á su establecimiento, á ciertas desgracias domésticas, que cayendo sobre él disipan sus economías y devoran por largo tiempo el fruto de sus trabajos:

¿cuál es la garantía que ofrecerá al maestro que le adelanta algun dinero, el que no tiene otros recursos que el trabajo de sus manos? La ley acude á su socorro; le da una libreta, especie de cuenta corriente de su vida industrial, diario fiel de lo que ha prometido y de lo que ha cumplido. Esta libreta no es el signo de la servidumbre, sino un título de libertad, la prenda pretoria de la deuda del operario, si toma á préstamo, y su saldo cuando paga. Imprime en sus relaciones con el jefe del establecimiento el sello de la probidad; atestigua la lealtad del uno y libra la responsabilidad del otro respecto á los que hubiesen empleado precedentemente al mismo obrero; el trabajador que está provisto de este documento marcha con su cabeza erguida, y no teme ni la sospecha ni los cargos. Se creó una ley el 24 de mayo 1851, con el objeto de poner término á los abusos que la libreta habia ocasionado. Hubo maestros que se negaron á entregarla, cuando por consecuencia de adelantos se habian constituido acreedores, y tenian de este modo al obrero en una dependencia cuya duracion se perpetuaba, con empréstitos siempre superiores al trabajo efectuado. La ley nueva arregla los casos en que el operario tiene derecho de exigir la devolucion de su libreta, como tambien los en que el maestro tiene derecho de negarla, y dispone principalmente que los adelantos no son reembolsables por medio de la retencion sino hasta la cantidad de treinta francos.

El legislador, sin intervenir en los convenios privados, se complace en proteger al operario contra las sorpresas á que pueda esponerle su debilidad ó su ignorancia. Con este objeto se ha promulgado una ley en 7 de marzo de 1850, cuyas medidas tienen por objeto acreditar con precision los convenios entre maestros y obreros, en materia de tegidos é hilados, y para desterrar los abusos introducidos en este género de operaciones, con gran perjuicio de los obreros. Bajo la influencia de un sentimiento análogo, la ley ha sometido á la autorizacion prévia todas las *agencias de colocacion para*

obreros (decreto de 15 de marzo 1852). Esta medida, de que el imperio habia dado el ejemplo, es además una aplicacion del sistema preventivo, acerca del cual hemos espuesto ya nuestra opinion en varias ocasiones, y no nos parece de ningun modo justificable.

El salario del trabajo industrial, se fija de grado en grado entre el obrero y el que lo emplea, asi lo exige el principio de la libertad de los contratos. Para asegurar esta libertad, la ley prohibe, bajo penas severas las coaliciones que pudieran tener por objeto sustituirles una influencia arbitraria; considera que natural y necesariamente, el arancel del salario se arreglará al estado de decaimiento ó de prosperidad de la industria, á la capacidad y los cargos del obrero, á los recursos y utilidades del fabricante: esta proposicion ¿es infalible? ¿no puede fallar alguna vez? No nos atreveriamos á afirmarlo. El maestro puede abusar del ascendiente que le dan los capitales de que dispone, y del número de trabajadores, superior con frecuencia, á las necesidades de la industria. Pero si el principio de la ley no carece alguna vez de inconvenientes, ¿qué otra solucion se puede dar al problema tan complejo de la fijacion del salario? ¿Dónde encontrar una regla legal que se adapte á las circunstancias, á las necesidades y á las aptitudes? ¿Es posible un arbitraje oficial? ¿Y á quién confiarle? ¿Se dejará libre el campo á las coaliciones que siembran el desórden y la miseria entre los trabajadores, la pertubacion en los cálculos de los fabricantes, á las coaliciones donde los mas atrevidos dan la ley, donde los que menos valen, exigen mas; donde la victoria pertenece tanto al que la obtiene por el miedo que inspira, como al que puede esperar mas tiempo y agotar la paciencia y los recursos del otro?.... Bien considerado todo esto, el mejor sistema descubierto hasta hoy parece ser el de la ley.

Si la ley no puede intervenir en la fijacion del salario, al menos ¿le pertenece determinar, tanto para los adultos como para los niños, la duracion del trabajo diario? No lo creemos.

¿Quién no vé el íntimo enlace de estos dos objetos? Si once horas de trabajo obtienen el mismo precio que doce, esto es en realidad aumentar el salario; pero ¿cómo prohibir al fabricante el derecho de reducir proporcionalmente su precio, y de compensar la reduccion del trabajo de cada uno por la admision de un número mayor de operarios? ¿Cuántos inconvenientes se oponen por otra parte á esta fijacion, y cómo aplicarla, por ejemplo á todo lo que se hace á destajo? Con esto se introduce una desigualdad lamentable en la condicion de los obreros; los mas fuertes y animosos no pueden emplear útilmente su vigor y su energía; se aumentan los gastos del fabricante con detrimento de la industria y de los mismos operarios. Es cruel sin duda, que un trabajo esceseivo debilita las fuerzas de un gran número de hombres que viven solamente de sus brazos; pero ¿es á la ley y al poder público á quien está reservado corregir estos abusos? No obstante, un decreto del gobierno provisional, (2 de marzo de 1848), creyó poder reducir la duracion del trabajo de los obreros, y por una rareza singular lo fijó en diez horas para París, y en once para las provincias. Esta diferencia inesplicable se ha suprimido por la ley del 9 de setiembre de 1848; pero el principio ha quedado en pié, y las horas de trabajo se han fijado de un modo uniforme en once, lo mismo para París que para los departamentos. Un reglamento de administracion pública (1) fija las escepciones á que debia quedar sujeta necesariamente esta ley, y estas escepciones son tan numerosas, que la aplicacion de la regla queda reducida á categorias bastante raras. Manteniéndose fuera de las estipulaciones que reglan el precio y la duracion del trabajo, y limitándose á declarar su incompetencia, seria lo bastante para que no se la acusase de indiferencia respecto á una clase de ciudadanos tan numerosa y tan digna de interés. Además de esto, dos instituciones organizadas por la Asamblea legislativa, manifiestan la benevolencia de los poderes públicos para con las poblaciones in-

(1) 17 de mayo de 1851.

dustriales. La primera es la de sociedades de socorros mútuos, que se habian ya creado espontáneamente, y que la ley ha regularizado, dotado y sometido á reglas protectoras. La segunda es la de la caja de ahorros y pensiones, fundada bajo la garantia del Estado, y que merced á economías muy escasas aunque no interrumpidas, puede, gracias á tarifas crecidas y al poder del interés compuesto, asegurar á aquellos que depositan en ellas sus ahorros, un honrado descanso en su vejez.

Tal es pues, en la parte que concierne á los agentes del trabajo industrial, la economía de la legislacion. El niño puede ser empleado en el taller, pero con la condicion de que sus fuerzas se economicen y su inteligencia se cultive por medio de la instruccion elemental. Los derechos del padre pueden delegarse al jefe del establecimiento que recibe al aprendiz, pero debe protegerle, vigilarle é iniciarle en el trabajo de su futura profesion. El adulto, dispone á su albedrío de su tiempo y de sus fuerzas; pero debe proveerse de un título oficial, que le recomiende á la confianza del que lo emplea, y ponga á este último al abrigo de toda sospecha: libre el operario, no puede por lo mismo atentar contra la libertad de otro con violentas coaliciones. La ley vela sobre él, protege y fomenta los establecimientos fundados para ponerle al abrigo de los azares de la suerte mientras pueda trabajar, y de la miseria cuando sus fuerzas le abandonen. Los trabajadores están de esta suerte colocados, entre el régimen de 1791, que no les imponia ningun freno, y el régimen anterior que les ponia grandes trabas. Su franquicia tiene límites marcados, y su independencia concluye donde empieza la necesidad del órden.

El mismo sistema se aplica á los productos del trabajo.

La fabricacion es tan libre como la mano que fabrica. La mezcla de materias, el tejido, los dibujos, los colores, la dimension, el peso, la disposicion de los objetos, todo se deja á eleccion del fabricante. Su única regla es el gusto, y sus

límites las necesidades del público. Su genio puede recorrer á su placer el espacio mas vasto. La concurrencia le anima; el interés personal le dirige, le escita ó le detiene; el deseo de la celebridad puede prestarle fuerzas. Este es el principio de la ley; pero todo principio tiene sus restricciones, y aqui las hay que las necesidades mismas de la industria han hecho necesarias.

Se ha descubierto un producto nuevo; se ha obtenido otro ya conocido, con auxilio de nuevos medios ó por la modificación de los antiguos? La industria ha hecho de este modo una nueva con quista, y se ha enriquecido con una invencion, fruto del genio, ilustrado por la paciencia, sostenido por largas invenciones ó costosos sacrificios. El feliz autor de esta invencion merece una recompensa; negársela, seria paralizar los esfuerzos del artista, desanimar el espíritu de mejora y condenar la industria á la inaccion. La sociedad concede esta recompensa, confiriendo al inventor el derecho esclusivo de explotar su descubrimiento, durante un tiempo determinado. Nada mas justo; y, ¿quién podria quejarse de que el inventor goze de una ventaja que acaso no se hubiera conseguido sin su cooperacion? Vendrá un dia, y su término se acerca á veces con un rigor avaro, en que el dominio público entrará en participacion con él. Por lo demas no debe temerse que el privilegio reservado al inventor, se usurpe por un plagiario ó un charlatan. El título en virtud del cual puede revindicarse el derecho esclusivo, no atestigua legalmente ni el mérito ni la prioridad de la invencion. El que se cree con razones para disputar una ú otra, puede acudir á los tribunales y hacer que se rasgue un título usurpado.

Ciertos productos deben su valor á su forma ó á los dibujos que los adornan; allí brillan el gusto, el talento, la habilidad de un artista ingenioso; el público los busca con ardor, la moda los adopta y el fabricante los paga con mano liberal. Si, la industria no ha hecho una conquista tan precio-

sa hasta que una invencion verdadera ensancha su dominio; razones análogas dan al propietario del modelo ó el dibujo, á aquel que lo ha encomendado y pagado con su dinero títulos á un goce esclusivo, por el tiempo que baste para cubrir sus espensas. La ley no hace mas que pagar una deuda, confiriéndole este privilegio.

Por último, hay ciudades y establecimientos cuyo solo nombre inspira confianza y recomienda los productos que salen de ellas; su origen está comprobado por una marca oficial. Que se permita á todo el mundo, á falta de un derecho esclusivo, fabricar los mismos productos, entregarse á una imitacion servil, buscar la misma perfeccion, nadie tendrá motivo para quejarse de esto, y el consumidor, recojerá el beneficio de esta laboriosa emulacion; mas no se puede consentir á nadie que se apodere de la marca de otro; esto seria una falsificacion, una estafa. Las mas simples nociones de prohibidad están en este punto de acuerdo con la ley. ¿No convendria exigir de todo fabricante que estampase su nombre en sus productos, é hiciese conocer con un signo aparente la materia y la composicion? Esta obligacion se impone respecto á ciertos artículos, y en particular á los de oro y plata, pero no lo está respecto á los demás productos de la industria. Seria útil, sin duda, que el comprador pudiese en todo caso conocer exactamente la naturaleza del objeto que se le entrega; pero ¿cómo encontrar una señal que baste á las mil variedades de la fabricacion, á las mezclas infinitas de los tejidos; á las combinaciones innumerables de las primeras materias? ¿Cómo asegurar su aplicacion y conocer la sinceridad? ¿El consumidor confiado en este signo exterior, no estaria mas expuesto aun al fraude que lo está hoy con la necesidad de asegurarse por sí mismo del valor de lo que compra? Hay no obstante, un comercio que necesita al parecer de una marca obligatoria; tal es el que se hace con el extranjero. Las engañosas de una especulacion desleal, comprometen el honor del pais y el desarrollo de sus relaciones. Tan grave interés, no

ha logrado aun ninguna garantía ; pero reclamaciones numerosas, convidan al gobierno á ocuparse de ellas, y el ejemplo de otras naciones debe animarle. Está ya autorizado para reglamentar, con el fin de asegurar relativamente á los productos esportados fuera de Francia, la buena calidad, las dimensiones, la naturaleza de la fabricacion, y el artículo 443 del código penal, determina los castigos aplicables á los que violaren estos reglamentos.

Concediendo un privilegio esclusivo á los inventores y á los propietarios de modelos y de dibujos, protegiendo las marcas de fábrica, la ley ha sometido los productos del trabajo, á disposiciones de igual naturaleza que las que rigen á los agentes del mismo ; ha colocado la garantía al lado del derecho, y prevenido los excesos al mismo tiempo que consagraba la libertad.

Este régimen necesitaba sancion. Las leyes penales y los tribunales represivos estaban naturalmente llamados á castigar las mas graves infracciones ; pero las leyes penales y los tribunales represivos no prestaban una proteccion adecuada al carácter pacífico de la industria, ni con su auxilio podia la ley mantener la disciplina entre los trabajadores, y sofocar en su origen, y aun prevenir si era posible, las disensiones de todo género que suscitaban constantemente tantos intereses opuestos y en perpétuo conflicto. Para acudir á esta imperiosa necesidad, la industria ha conseguido una jurisdiccion que le es propia y á la cual se ha encomendado introducir en su seno la equidad, la rectitud y la armonía.

Visitando el emperador la ciudad de Lyon en 1806, los fabricantes de sederías y los jefes de taller le pidieron el restablecimiento de una antigua institucion que habia existido en aquella ciudad, y que las leyes de 1791, envolvieron en la proscripcion comun. Esta era un tribunal compuesto de jueces que pertenecian á la industria Lyonesa y estaba encargada de un ministerio de conciliacion. El génio organizador de Napoleon supo apreciar la trascendencia de esta institucion, y la

ley de 18 de marzo de 1810, devolvió los hombres buenos á la ciudad de Lyon y autorizó al mismo tiempo al gobierno para darlos á las demás ciudades que tuviesen tambien necesidad de ellos. La jurisdiccion de los hombres buenos se ha estendido rápidamente; nuevas atribuciones les fueron conferidas y su utilidad se observa hoy en todas las ciudades industriales, empezando por la capital, donde introducidos hace pocos años, han prestado ya señalados servicios de que las estadísticas judiciales dan testimonio. La mayor parte de los litigios se han solventado por los hombres buenos, y muy pocos han pasado á otros tribunales. No pronuncian nunca una sentencia hasta haber agotado todos sus esfuerzos para conciliar las partes; jueces de paz de la industria, tribunal de familia de las clases laboriosas, intervienen en todas las diferencias que se suscitan entre los fabricantes y sus operarios ó aprendices; juzgan las cuestiones relativas á las marcas de fábrica, y aun están encargados de cierta inspeccion.

No era bastante para la industria poseer su jurisdiccion propia; necesitaba ademas tener á su frente representantes ilustrados, encargados de defender sus intereses, y en este concepto de dar á conocer al gobierno «las necesidades y los medios de mejorar las manufacturas, fábricas, artes y oficios, de hacer observaciones sobre los medios de acrecentar la prosperidad de la industria y del comercio; de señalar las causas que paralizan sus progresos, de indicar los recursos de que se puede echar mano.» Esta mision se ha confiado á las cámaras consultivas de artes y manufacturas, y á los consejos generales de manufacturas y de comercio. La eleccion hace que tomen parte en tan importantes asuntos los hombres mas iniciados en los negocios de la industria, los mas competentes para ser sus órganos.

Tal es la constitucion general de la legislacion que arregla la policía de la industria.

Bajo el régimen consagrado por esta legislacion, la industria ha llegado á un grado de desarrollo y de prosperidad que

aun no conocia. De los rangos mas oscuros de los trabajadores, han salido hombres laboriosos para elevarse á los primeros puestos del Estado, para sentarse en las Asambleas políticas, para ocupar las mas altas posiciones del Banco, de la Hacienda y de la industria; tal es nuestro honor y nuestra gloria. La vida no está cerrada para nadie. Las recompensas están siempre prontas para el mérito, la capacidad y la rectitud; y si por lamentables y raras escepciones queda algunas veces desconocido el talento; si un desaliento con frecuencia prematuro se apodera de algunas almas, nuestras leyes no pueden ser responsables de estos amargos estravios. Es cierto que crueles miserias afligen á las clases laboriosas; pero estas miserias, ¿podria la ley conjurarlas? ¿No son la condicion dolorosa pero inevitable de la humanidad, y los demas periodos de la historia industrial, no ofrecen espectáculos aun mas desgarradores? Curar estas llagas de la industria, es menos del dominio de la ley que del de la caridad, y la caridad no ha faltado á su mision: las *creches*, las salas de asilo, los socorros de todo género son testigos de su abnegacion activa é ingeniosa. Por otra parte, el bienestar no es tan extraño como se dice á estas clases cuyos males se describen con una exageracion que no la criticamos al indicarla, porque estos padecimientos no escitarán jamás ni demasiadas simpatías ni escesaiva piedad.

Nadie, si no nos engañamos propone destruir las garantías que la legislacion ha introducido en el dominio de la industria contra los abusos de la libertad.

Lejos de esto, se les acusa de insuficiencia, se querria un régimen mas estrecho, se querria, para emplear los términos consagrados, organizar el trabajo y limitar la concurrencia; cuestion grave, cuya discusion no estaria aquí en su lugar y acerca de la cual no obstante experimentamos la necesidad de presentar algunas rápidas reflexiones.

Nuestra legislacion descansa sobre la idea de que los hombres al recibir la vida, han sido llamados por la Providencia á crearse un puesto en el mundo y á ser hijos de sus obras; no

los considera como seres débiles, degradados, inferiores sobre los cuales debe pesar siempre una humillante tutela; no cree que el estado, haya recibido la mision de sustituir su voluntad á la de ellos, su accion á su accion, sus fuerzas á las suyas. Asegurar á cada uno toda la libertad compatible con el derecho de los demás, garantizar al trabajador el pleno uso de sus facultades, la plena posesion del fruto de su trabajo, rechazar todas las trabas que le impidan emplear como juzgue conveniente sus brazos y su inteligencia, hé aquí el objeto que se propone; añade además ciertos auxilios, por ejemplo abre á la infancia las escuelas donde se dán los conocimientos elementales mas indispensables; cumplidos estos cuidados, entrega á sí mismo al hombre emancipado, y le deja cumplir bajo su responsabilidad y con sus propias fuerzas, la mision que el cielo le ha designado.

Las teorías que bajo formas diversas tienden á lo que se llama organizacion del trabajo, están fundadas en un principio opuesto; colocan á la sociedad en lugar del individuo, que se absorbe en ella, y queda sumido en una eterna infancia; al encargarse de la suerte de todos, dispensan á cada cual de proveer á su propia suerte; procurando satisfacer con antelacion todas las necesidades, destruyen la prevision, esa virtud del hombre en sociedad, destruyen toda independendencia, porque no pueden acrecentar las atribuciones del poder público sin abolir en la misma proporecion los derechos del ciudadano. Digase lo que se quiera, en efecto, y sin hablar de las imposibilidades materiales de proyectos quiméricos, esos talleres públicos que se trata de establecer, ese reglamento legal de los salarios, esa distribucion oficial de *vocaciones* traen consigo y constituyen la subordinacion absoluta del individuo al Estado. No hay mas completa organizacion del trabajo que el régimen de la esclavitud, tal como se halla establecido al otro lado de los mares; ese régimen bajo el cual cada uno tiene asegurada su existencia, que alimenta al niño, al enfermo, al anciano, que dá trabajo al adulto válido; pero que al mis-

mo tiempo vende la seguridad á precio de la servidumbre, destruye toda dignidad humana, y convierte á los hombres á quienes alcanza en viles instrumentos de una fuerza ciega y brutal.

El debate se empeña pues entre la libertad del hombre y su servidumbre; la libertad con la responsabilidad que es su condicion, y la actividad que es su alma, con sus padecimientos y sus pruebas, con frecuencia dolorosas, pero con sus alegrías y sus triunfos; la servidumbre con su reposo, pero tambien con su inmovilidad y su torpeza. La organizacion oficial del trabajo suprime la concurrencia y los males que de ella emanan, es verdad; pero suprime al mismo tiempo el aguijon que escita el movimiento universal, que anima la mano del operario, enciende el genio del artista, permite á la industria crear productos mas perfectos y menos caros, y sostiene la vida en el seno de la sociedad.

Tal es el principio de la libertad atemperado por la regla, contenido por el órden, y consagrado por nuestra legislacion industrial; el siglo último habia proclamado este principio. Turgot fué su apóstol valeroso; la revolucion francesa lo ha inscrito en las leyes, y debe perpetuarse (1).

CAPITULO V.

POLICIA RELATIVA AL COMERCIO.

La libertad garantida á la industria pertenece igualmente al comercio. Todo ciudadano puede dedicarse á operaciones comerciales, abrir almacenes, tiendas, vender y comprar, con la sola condicion de pagar las contribuciones votadas para el servicio del Estado, y con especialidad la patente.

Sin embargo, por estensa que sea esta libertad, se su-

(1) Estas consideraciones generales, asi como la mayor parte de este capítulo, estractadas de una memoria, leida por el autor en la academia de ciencias morales y políticas, se escribieron en 1846.

jeta á algunas escepciones: su numeracion detallada seria mas árida que interesante: nos contentaremos con algunas observaciones generales, propias para dar á conocer los principios de la legislacion acerca de esta materia.

Si cada ciudadano puede individualmente negociar, posee igualmente el derecho de asociarse para ello, y el código de comercio define el carácter y los efectos de las diversas especies de sociedades; pero hay una en que los miembros no están sometidos á ninguna responsabilidad que exceda de los capitales que han comprometido y que no tiene razon social: esta es la sociedad anónima; no puede instalarse sino con autorizacion del gobierno, que examina los estatutos, aprecia las garantias ofrecidas al público, y prescribe, para la realidad de las operaciones, la constitucion de un capital formal y la organizacion particular de la sociedad, todas las disposiciones que en su concepto el interés comun reclama.

Se ha impuesto á las empresas de *tontinas* ó seguros mútuos sobre la vida; la obligacion de una autorizacion prévia, operaciones que no son de suyo comerciales, pero que lo son respecto á los especuladores que las establecen y las dirigen. Se ha creido que el Estado debia intervenirlas, para impedir «que los intereses de los accionistas, se vean comprometidos por la ambicion, la negligencia y la ignorancia de aquellos á quienes hubieran confiado sus fondos, sin ningun medio de inspeccionar y asegurarse de su empleo, y bajo la fé de promesas con frecuencia demasiado falaces,» y tambien que «estas asociaciones salian de la clase comun de transacciones entre ciudadanos, bien se considere la multitud de individuos de todos estados, de todos sexos y de todas edades que se interesan y que pueden interesarse en ellas, bien el modo particular que tienen de formarse estas empresas; modo que no supone entre las partes interesadas ni relaciones, ni esas discusiones tan necesarias para caracterizar un consentimiento ilustrado; sea que se atienda á la naturaleza de estos establecimientos, que no permite á los asociados ningun medio eficaz

y real de vigilancia, ó sea en fin, que se considere su duracion siempre desconocida, y que puede prolongarse durante un siglo.

Otras restricciones se refieren al objeto especial de ciertos comercios. El de granos ó el de los productos de primera necesidad ha sido durante largo tiempo el objeto de las disposiciones mas contrarias á la libertad. Los trabajos de la ciencia, los escritos de los economistas, la esperiencia misma, han concluido por demostrar que la libertad era el mas eficaz medio de asegurar una plena satisfaccion á las necesidades que se temia quedasen á descubierto; y que, en los dias críticos, podrian resultar los mayores peligros del sistema opuesto. Sin embargo, las trabas que paralizaban el comercio de granos no se rompieron sino por las patentes del 2 de noviembre de 1774, que les dieron por primera vez la libertad. La declaracion del 5 de febrero de 1776, reconocia espresamente á los vendedores de granos el derecho de aumentar ó disminuir el precio, conforme al curso del comercio. La Asamblea constituyente sostuvo estas reglas; pero la Asamblea legislativa, no las adoptó. La ley del 16 de setiembre de 1792 dispuso un censo general de granos, obligando á sus poseedores á llevarlos á los mercados. Nuevas restricciones se impusieron á la circulacion en 1793, y 1794; sin embargo la ley del 21 pluvioso, año v. restableció la libertad de comercio; pero el temor de los acaparamientos le hizo sufrir en 1812 algunos ataques. El Emperador estaba poco familiarizado con las doctrinas de la economía política; confundia á los que las profesaban con los ideólogos, esos pensadores peligrosos que perseguia con todo su odio. ¡Esfuerzos impotentes! La libertad no tardó en triunfar de nuevo. A despecho de las preocupaciones y de las violencias de algunas poblaciones ignorantes, el comercio de granos se vé libre. La ley castiga solamente los tratos fraudulentos que se practicasen, «para producir la alza ó la baja de los precios que hubiera determinado la concurrencia natural y li-

bre del comercio.» Lo mismo sucede con todos los demas productos del suelo.

Sin embargo, los carniceros y los panaderos están, bajo cierto aspecto, colocados fuera del derecho comun por un interés de seguridad pública y de salubridad, que se ligan á este doble comercio. La autoridad municipal tiene el derecho de prescribir medidas respecto á estos oficios, que, en ciertos casos, pueden estenderse hasta las disposiciones mas preventivas.

La carne y el pan pueden tasarse. La administracion ha usado rara vez de este derecho respecto de la carne; despues de una esperiencia poco satisfactoria, se ha renunciado en casi todas las localidades; pero el pan se tasa generalmente. Cuando la autoridad toma las precauciones necesarias para que la tasa sea equitativa, los panaderos encuentran la ventaja de evitar las quejas que podrian suscitar precios establecidos libremente por ellos mismos; quejas que, respecto de un alimento cuyo uso es tan universal é indispensable, se han convertido á veces en desórdenes públicos y en atentados contra los vendedores. Sin embargo, de lamentar es que la administracion se inmiscue en estas transacciones privadas.

Otras obligaciones se han impuesto tambien á los panaderos y á los carniceros.

En Paris el número de los panaderos es limitado, y ya nos ocuparemos de este asunto. En algunas ciudades, disposiciones gubernativas han organizado esta profesion; los que la ejercen están obligados á proveerse de un permiso especial del maire, sin que por esto pueda limitarse su número; deben además someterse á conservar constantemente en reserva una provision de harina, cuya cantidad se calcula por la poblacion, y la del pan que cada panadero debe fabricar es determinada: el panadero no puede abandonar su establecimiento sino seis meses despues de haber informado al maire de su resolucion. Al contraventor de lo que prescriben los reglamentos puede prohibírsele temporal ó definitivamente el

ejercicio de su profesion. Las condiciones establecidas respecto á los carniceros, son menos onerosas, y dictadas casi esclusivamente con miras de salubridad.

Respecto del comercio en general y especialmente del comercio al pormenor, las leyes de policia se limitan á asegurar la fidelidad de las ventas y á prevenir el fraude.

Los comerciantes no pueden poseer sino pesos y medidas conformes al sistema decimal. En cada distrito hay un funcionario á lo menos encargado de la verificacion de los pesos y medidas. Esta verificacion recae primeramente sobre los pesos y medidas fabricados de nuevo, y se renueva periódicamente por medio de visitas. La forma de los pesos y medidas, asi como las materias empleadas para su fabricacion, están determinadas por reglamentos de administracion pública. El nombre que se les dá por el sistema métrico, debe marcarse de un modo claro; los prefectos están encargados de formar para cada departamento el cuadro de las profesiones que se sujetarán á esta verificacion, indicando los pesos y medidas que deben usarse para cada clase de comercio.

Por la misma razon, el comercio de platería se sujeta á una legislacion especial. Todos los objetos de orfebrería y de plata labrada fabricados en Francia deben estar *contrastados*, segun lo prescrito en la ley, con arreglo á su naturaleza respectiva. La prueba de haber cumplido con lo mandado está garantida por medio de marcas que la administracion imprime, despues de reconocidos los objetos. Este régimen que en cierto modo recuerda las antiguas ordenanzas relativas al comercio, ha impedido en nuestra patria la fabricacion de esos mil objetos que, bajo innumerables formas, abren en otros paises tan ancho campo á la orfebrería y bisutería permitiéndolas responder á todas las necesidades y amoldarse á todas las formas; pero justo es reconocer al mismo tiempo que, secundado por el genio de nuestros artistas, ha contribuido á asegurar á nuestros productos una inmensa confianza en los mercados estranjeros, de la cual ha sacado grandes ventajas el comercio.

Todas estas disposiciones y las que la autoridad municipal está autorizada para tomar, tienen por complemento las leyes que castigan las ventas de mala fé, con pesos falsos, y los engaños sobre el valor, la naturaleza ó la cantidad de los objetos vendidos, los fraudes y las falsificaciones; leyes insuficientes durante mucho tiempo, pero cuya severidad se aumentó en 1851.

Lo mismo que la industria, el comercio tiene sus atribuciones particulares en la jurisdiccion consular, y órganos de sus intereses en las juntas de comercio, á quienes consulta el gobierno siempre que la necesidad lo exige.

CAPITULO VI.

DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA POLICIA.

Ya hemos indicado en otro lugar (1) el principio que debe presidir á la eleccion de las autoridades encargadas de la policía, consagrado por las leyes.

Segun hemos visto, la policía municipal y rural corresponde á los maires. «Esta funciones, dice Mr. Henrion de Pansay, son de la esencia del poder municipal y se derivan de su naturaleza, lo que nos conduce naturalmente á deducir que la policía inmediata del municipio corresponde á los oficiales municipales, con esclusion absoluta de los demas funcionarios.»

En escala superior á los alcaldes, los prefectos, en virtud de los poderes inherentes á sus funciones, están encargados de la vigilancia, y aun en ciertos casos, pueden tomar disposiciones en materias de policía (2): respecto á esto dependen necesariamente de los ministros.

En varias ocasiones la policía se ha encomendado especialmente á un ministro. La primera creacion de este ministerio se debe al Directorio, que le instituyó por una ley el año iv

(1) V tomo I, pág. 42.

(2) Tomo I, pág. 259.

«para centralizar la accion de la policía y establecer una vigilancia rigurosa que desconcertase á las facciones y burlase los complots liberticidas.» Fué suprimido por el Consulado, decreto de 12 fructidor del año x, y restablecido por un decreto de 24 mesidor del año xii, el mismo dia en que otro decreto dictaba las reglas que debian observarse para la formalidad del juramento que habia de prestarse al nuevo Emperador; la Restauracion le mantuvo bajo el título de direccion general independiente del ministerio, y le suprimió en el momento de la subida del ministro Dessole, el 29 de diciembre de 1818.

Su existencia recuerda tambien los golpes de Estado del Directorio, la dictadura del Imperio y los tristes dias del principio de la Restauracion. A pesar de la agitacion de los tiempos, de las conmociones populares y de los atentados de las facciones, el gobierno de 1850 no le restableció.

Un decreto de 22 de enero de 1852 creó de nuevo el ministerio de policía general. Nos ocuparemos de esta únicamente en sus relaciones con la administracion.

La policía se encuentra enlazada tan íntimamente con todos los ramos del servicio público, que con dificultad se concibe que pueda segregarse de ellos para formar por sí sola un departamento ministerial. El ministro encargado de este servicio no puede tener, y no tiene en efecto otros intermediarios habituales que los prefectos; estos, por consiguiente, se encuentran en muchos casos en relaciones necesarias con dos ministros diferentes, aquel á quien concierne el asunto y el de policía, de donde resultan complicaciones, órdenes frecuentemente contradictorias y sérias dificultades administrativas.

Para representar en las provincias al ministerio de policía, se han creado inspectores especiales, otra fuente de entorpecimientos interiores. Si los prefectos están subordinados á estos inspectores y obligados á ejecutar sus órdenes, ¿á qué queda reducida la administracion central, cuyas instrucciones deben seguir ante todo, y de la que pueden haber reci-

bido otras órdenes? ¿Dónde está entonces su responsabilidad? Por otra parte los inspectores llevan en sí mismos y en su título una causa de debilidad. Cuando la policía es una parte accesoria de las demás funciones administrativas, es el atributo natural de los depositarios del poder, y no despierta recelos; aislada, constituida en oficio único y separado, escita la desconfianza. Todos los que hayan observado con atención lo que sucede diariamente, convendrán en la certeza de esta observación. Es uno de los obstáculos con que lucha muchas veces el prefecto de policía de París; otro tanto puede decirse de los comisarios. Posible es que semejante predisposición de los espíritus sea injusta é infundada; pero ello es que existe, y el legislador debe tener en cuenta hasta las preocupaciones públicas. La creación de los inspectores de policía fué origen de impresiones desagradables que llegaron á preocupar al mismo gobierno. En su consecuencia, una circular de 14 de febrero de 1852 los obliga á « calmar las inquietudes, á disminuir las prevenciones que hubieran podido suscitar. » « Si en otros países, añadía aquel documento, han nacido prevenciones contra la institución de una policía general, era, no puede negarse, porque la policía se había apartado de su objeto, esencialmente moral, y porque desnaturalizándola se la había puesto al servicio de las pasiones políticas y privadas. »

¿Sabrá evitar este escollo la nueva administración de policía? Sobre esto dejaremos hablar á la comisión que ha examinado el presupuesto de 1853. « En sentir de muchos miembros de la comisión, dice el informante, que se han hecho eco de la opinión manifestada en varias oficinas; el exceso de gasto que resulta del establecimiento del ministerio de policía, es su menor inconveniente. Lo que los preocupa son las complicaciones y las desconfianzas que pueden nacer de este establecimiento. Temen que, sin atribuciones bien definidas, sin funciones que dejen huellas, los agentes de esta nueva administración, ocasionen conflictos entre ellos y otros funcionarios que estarán espuestos á perder una parte de su

influjo en las poblaciones. Hacen justicia al pensamiento que ha presidido á esta creacion, y á la forma de que aquel se halla revestido; pero saben que las instituciones tienen tambien su lógica; y así es que si la policía les parece preciosa cuando, mero auxiliar de la administracion y de la autoridad judicial, no tiene sino una accion secundaria, la temen cuando desempeña el papel principal. En este caso, á los temores que les inspira la importancia que se la dá, hay que añadir los recelos no menos vivos que hace concebir la importancia que ella querria atribuirse.»

Se ha intentado elevar esta institucion confiándole una especie de ministerio moral, cometiéndole el cuidado de estudiar las necesidades de los pueblos y las mejoras de todas clases que el interés público reclama; de acoger, para recomendarlas al gobierno, todas las ideas útiles y que muchas veces se pierden por falta de medios de darse á luz; de sondar las ideas del pueblo sobre las innovaciones políticas ó económicas lanzadas al dominio de la discusion ó del estudio; «en fin, en esta última organizacion de la policía se ha visto el medio mas eficaz de hacer llegar incesantemente hasta el jefe del Estado la verdad, cuando para alejarla del poder suelen hacerse tantos esfuerzos.»

Los encargados del servicio son un ministro, tres directores, nueve inspectores generales y doce especiales. Pregúntase si los delegados ya instituidos cerca del poder central no estaban encargados desde hace mucho tiempo de las mismas funciones, si no las han cumplido, y, suponiendo que su celo no haya sido tan grande como fuera de desear, si puede esperarse mas del nuevo personal; y además si tan corto número de funcionarios ofrecerá garantías que parece no han ofrecido el prefecto encargado de cada departamento y el sub-prefecto que lo está de cada distrito. Hay que observar tambien que los inspectores de todas categorías no se entienden sino con el ministro del ramo de que dependen, y que este únicamente se halla en relaciones directas con el jefe del

Estado. A él, pues, le está reservado el privilegio de hacer llegar la verdad hasta el jefe del Estado. ¿Pero no merecen la misma confianza los otros ministros? ¿No tendrán el mismo valor para decir la verdad? ¿Los servicios públicos cuya direccion les corresponde, no les dan medios mas ciertos, mas verdaderos, mas numerosos, de recoger todos los datos necesarios para trasmitirlos al primer magistrado de la República?

II.

EL PREFECTO DE POLICIA.

Observar las tramas de los enemigos del gobierno y descubrir sus tentativas, sin ningun poder estraordinario, bajo el imperio de una ley que prohíbe las prisiones preventivas; asegurar el órden y mantener la seguridad en una capital cuya poblacion, comprendidos sus alrededores, pasa de 1.400,000 almas, donde se reunen mas de 200,000 obreros, donde fermentan las pasiones mas desordenadas, y donde se dan cita los bandidos mas peligrosos; conservar la libertad de la circulacion en mas de 2,000 calles, surcadas por 60,000 carruages; conjurar todos los elementos de corrupcion en un centro industrial que aglomera en algunos kilómetros cuadrados sobre 6,000 establecimientos insalubres ó incómodos, en el seno de un pueblo inmenso encajonado en estrechas habitaciones; facilitar la subsistencias y favorecer la distribucion de los artículos de primera necesidad en un centro de consumo que traga cada año 1.450,000 quintales métricos de harina, 1.400,000 hectólitros de vino, 55,000 de aguardiente, 65.000,000 de kilogramos de carnes de todas clases; donde se emplean mas de seis millones de francos en mariscos, doce en aves y caza, otros doce en manteca de vacas y cinco millones y medio en huevos: tales son en sustancia los importantes y delicados deberes del prefecto de policía.

Dispone de un presupuesto que excede de doce millones; tiene á sus órdenes una guardia de mas 5,000 hombres de infantería y caballería un cuerpo de bomberos compuesto de 820, oficinas en que trabajan dia y noche sobre 500 empleados, un servicio exterior de comisarios, inspectores, celadores y agentes de todas clases, cuyo número asciende á 2,000 personas.

Su territorio, muy poco estenso, no abraza mas que el departamento del Sena y los municipios de Saint-Cloud, Sèvres y Meudon; pero no hay en toda la República un punto que contenga una poblacion tan activa, tan compacta; las atribuciones del prefecto son mas complexas, mas numerosas que las de ningun ministro.

Delegado del poder político, responde de la seguridad del jefe del Estado y de su gobierno; como magistrado desempeña funciones judiciales, comprueba los crímenes, los delitos y las contravenciones, y entrega sus autores á los tribunales; como administrador del departamento, está encargado de las cárceles, de las medidas relativas á los dementes, de la policía de los distritos rurales y de los socorros para remediar la mendicidad; como depositario de la autoridad municipal, ejerce todos los poderes de policía que esta lleva consigo.

Las atribuciones conferidas por nuestras leyes generales á los prefectos de las provincias y á los alcaldes, están en París divididas entre el prefecto del Sena y el de policía. En esta division el primero ha obtenido la parte mas fastuosa: tiene á su cargo el cuidado de proteger las artes; de sostener por medio de trabajos públicos á algunos millares de artesanos; de socorrer á los indigentes; de esparcir la instruccion y de presidir á la organizacion de la guardia nacional. Reside en el palacio de la ciudad, tan suntuoso como magnifico; recibe al jefe del Estado en las fiestas que le dá la poblacion; le dirige la palabra en nombre de la capital, á la cabeza de la municipalidad; es, por último, el maestro de ceremonias de la antigua clase media parisiense, su mayordomo y su archi-

tecto. Une su nombre á los de los nuevos establecimientos, y hace se le bendiga como autor de ciertas obras de utilidad pública, de que muchas veces solo es ejecutor pasivo.

Al prefecto de policía, por el contrario, le están confiadas las atribuciones mas penosas, las medidas de rigor, la administracion de las cárceles, la prision de los reos presuntos, y el trasporte de los condenados. Blanco de las rencorosas prevenciones de una opinion ciega é ignorante, para quien la policía es un enemigo y no un protector, no obtiene nunca mas que éxitos negativos, olvidado si reina la calma, atacado, comprometido si estalla algun desórden. Su triunfo está en la seguridad pública, bien precioso con que la multitud se goza, pero que juzga tanto mas fácil y natural cuanto mas disfruta de él; vive rodeado de presos, de gendarmes y de agentes del órden mas ínfimo; su morada presenta un aspecto triste y sombrío: todo en fin, parece conspirar para darle un lugar secundario en la gerarquía de los poderes municipales y para despojar á su título del brillo y de la grandeza. Sin embargo, si el honor es el precio del peli-gro y se engrandece con él, si la dignidad de una funcion debe medirse por los servicios que está llamada á prestar, el prefecto de policía es el primer magistrado de París. La capital, privada de las ventajas que le procura la administracion del prefecto del Sena, caeria en un doloroso abatimiento, cesaria de estar á la cabeza del mundo civilizado; sin embargo aun sobreviviria á su perdido esplendor; pero París, presa de todos los males, que aleja una policía infatigable y vigilante, pereceria bien pronto entre las convulsiones de la anarquía.

La prefectura de policía fué creada en 1800. Por primera vez obedeció entonces la administracion de París á una direccion sencilla y vigorosa. Dividida en 1789 entre el lugarteniente de policía, el preboste de los comerciantes, los regidores, la cámara de las construcciones, y las oficinas de Hacienda y hasta el Parlamento, carecian de unidad; la confu-

sion reinaba en su seno, y una division obscura, de atribuciones mal definidas engendraba incesantes luchas. Segun ya hemos visto, la Asamblea desarmó al poder en 1790. El 10 de agosto, al preludiar la sangrienta usurpacion de la municipalidad de París, no fundó mas que una dictadura política. El Directorio comunicó al poder elevado sobre las ruinas de la municipalidad la debilidad y la inconsistencia que, minándole á él mismo, debian producir su pronta caida. El primero que reconoció la situacion escepcional de una ciudad donde se deciden constantemente los destinos del Estado, fué el Directorio, quien la colocó bajo la autoridad de dos magistrados nombrados por el poder central, é investidos el uno de la administracion propiamente dicha y el otro de la policía; pero cediendo á temores que las circunstancias y sus desconfianzas políticas esplican, no dejó al voto de los ciudadanos sino una espresion facticia é infiel en un reducido consejo municipal, nombrado como los prefectos y desprovisto de verdadera autoridad. La Restauracion dejó intacta esta organizacion. El gobierno de julio, mas liberal, remitió á la eleccion el derecho de componer el consejo municipal, aumentó el número de sus miembros y dió entrada á los dos prefectos en sus sesiones: bajo la vigilancia de esta representacion eficaz y sincera, desempeñaban sus funciones respectivas. El prefecto de policía, sin perder ninguna de sus atribuciones, en contacto con un poder electivo, se encontró elevado en la opinion por la solidaridad que los unia; porque si los consejos electivos atan y ponen trabas á veces á los funcionarios á quienes inspeccionan, los engrandecen y fortifican mas aun con su adhesion. Un magistrado encargado de la policía, necesita mas que ningun otro de esta sancion popular y le dá en consideracion mucho mas de lo que le quita en poder. Despues de la revolucion de febrero de 1848, no se creyó posible remitir al sufragio universal la eleccion del consejo municipal de París. Los recuerdos de la municipalidad en tiempo del terror, se presentaban á todos los espíritus; de manera que

sustituyó al consejo elegido una comision municipal nombrada por el poder ejecutivo.

Mucho tiempo hace que está prometida una ley que determinará á la vez la manera especial en que deberá hacerse la eleccion en París, los derechos respectivos del consejo municipal y de los dos prefectos, y la division de poderes entre estos dos funcionarios: sobre estos últimos puntos, si no nos equivocamos, habrá que conservar mucho mas que reformar.

El consejo municipal ejerce hoy, en virtud de las leyes, una autoridad contenida dentro de justos límites y á la cual falta únicamente estar definida con claridad. En cuanto á las atribuciones de los dos prefectos, la distribucion de sus poderes no provoca objeciones sino sobre algunos puntos poco esenciales: de esperar es que de la discusion legislativa salga fácilmente una solucion aceptable.

Una sencilla esposicion de la organizacion de la prefectura de policía, de sus medios de accion y de sus atribuciones, puede servir para la ley que tarde ó temprano se adoptará; acaso satisfará la curiosidad de los que gustan enterarse de las instituciones políticas y administrativas bajo las cuales viven; podrá ofrecer un término de comparacion y un objeto de estudio en el extranjero, y finalmente esclarecerá la opinion pública, desvaneciendo injustas preocupaciones.

CAPÍTULO I.

ORGANIZACION GENERAL.

El prefecto de policía, lo mismo que todos los jefes de administracion, debe velar mas bien que obrar, prescribir mas bien que ejecutar, y aunque sus empleados interiores sean muchos y estén abrumados de trabajo, en el exterior y en los servicios activos es donde especialmente debe manifestarse su poder.

Las oficinas conciertan las medidas que deben tomarse; dan el impulso, recogen y comprueban los resultados; prepa-

ran, deliberan, organizan: son el pensamiento y la inteligencia. Los servicios activos vigilan, ejecutan, impiden, previenen, reprimen; en relacion inmediata con los ciudadanos, ocupan todos los puntos de dia y de noche; son los ojos y los brazos de la administracion. Pero en la multitud de deberes que tienen que cumplir, el papel de instrumento pasivo y mudo no bastaria, y su obediencia tiene siempre necesidad de ser ilustrada por la reflexion y guiada por el discernimiento.

El trabajo interior está distribuido segun las diversas atribuciones del prefecto. El *Gabinete particular* entiende solo en las cuestiones políticas. Allí, secretamente y bajo la garantía de una confianza recíproca, se tratan los negocios mas delicados, aquellos que se refieren á la seguridad del Estado, á las tramas de las facciones, á las sociedades secretas y á sus conciliábulos: negocios peligrosos que comprometen la seguridad del jefe, y de los cuales debe reservarse su apreciacion directa y esclusiva. Los asuntos no políticos están distribuidos entre dos secciones, titulada la una de *Seguridad* y la otra *Administrativa*; el *secretario general* dirige los negocios de la administracion propiamente dicha, el personal, el material y cierto número de objetos no clasificados en las secciones. Las oficinas de la prefectura de policía no se diferencian de las de los ministros ó de las grandes administraciones, sino en que exigen de los empleados que las componen una prontitud especial de exámen, de resolucion y de expedicion.

La organizacion de los servicios exteriores es fuerte y poderosa.

Todo el mundo sabe que Paris está dividido en doce distritos: en cada uno se halla establecida una brigada de agentes y sargentos de villa bajo las órdenes de un oficial de paz. Hasta 1850 los comisarios de policía estaban repartidos entre los diversos barrios de que se compone cada distrito; pero hay barrios que contienen cuarenta mil habitantes, mientras otros apenas cuentan tres mil. Se creyó por lo tanto conveniente hacer nuevas divisiones para el servicio de la policía,

en las cuales estuviese la poblacion repartida con mas igualdad. Hay que deplorar sin embargo, que á estas divisiones se les diese el nombre de *secciones*, que recuerda tiempos muy calamitosos, y que admitido esclusivamente por la policía no concuerda con los demás servicios administrativos, lo que produce una gran confusion en las relaciones de los ciudadanos con la administracion. Las secciones son cuarenta y ocho; al frente de cada una se halla un comisario de policía secundado por uno ó dos secretarios, colaboradores sedentarios, y por un inspector de policía, cuando menos, y un *porte-sonnett*, agentes de ejecucion directa y continua, puestos constantemente á disposicion del comisario. Ademas hay un comisario de policía en veinte de las municipalidades mas importantes del territorio.

Los comisarios de policía son independientes de los oficiales de paz y sus superiores en el orden de la gerarquía. Son nombrados por decreto del presidente, y dependen á la vez del prefecto de policía, que los tiene bajo su autoridad, y del procurador del rey, cuyos auxiliares son segun las leyes. Tienen constantemente abierto su despacho y en él desempeñan un ministerio de conciliacion y de orden muy útil y muy apreciado por la poblacion parisiense, que encuentra en ellos árbitros y pacificadores. Están á la disposicion de los ciudadanos que reclaman su auxilio en cualquier caso público ó privado; reciben é interrogan á los detenidos; velan por la ejecucion de las ordenanzas de policía, en todo lo concerniente á la salubridad pública, la limpieza, etc. Durante algun tiempo los comisarios llevaron el título de magistrados de seguridad, que tal vez hubieran debido conservar en París, por que desempeñan una verdadera magistratura y porque la seguridad de los ciudadanos halla en ellos enérgicos defensores. Mantienen relaciones directas y cotidianas con el prefecto, quien los emplea en todos los servicios de la administracion.

Los oficiales de paz que no están á las órdenes de los co-

misarios, y los sargentos de villa, dependen inmediatamente de una oficina central, que dirige un comisario, bajo las inspiraciones del prefecto, conocida con el nombre de *Policia municipal*.

Esta tiene á su cuidado la vigilancia de toda la capital: es quien distribuye en los doce distritos las brigadas correspondientes á cada uno de ellos; la que pone en movimiento, segun las circunstancias y las necesidades de cada dia, las brigadas centrales que tiene á sus órdenes, de las cuales unas no tienen destino especial y están siempre dispuestas á reforzar el punto que lo necesite; otras están encargadas de varias atribuciones, como vigilar á los rateros y á las prostitutas; los carruajes públicos y las casas de huéspedes; pero constituidas todas de un modo que puedan reunirse á la vez y en un instante, en un punto determinado para intervenir en nombre de la ley en todo lo que amenace el reposo de los ciudadanos. De la policía municipal dependen cerca de novecientos agentes; constituye una fuerza permanente y una reserva eventual; su organizacion es tal, que sin un exceso de gente, sin un gasto supérfluo, provee á la vez á Paris en los tiempos normales, de los agentes necesarios para la ejecucion de las leyes, y en los dias de agitacion de una tropa activa, valiente, fácil de poner en movimiento, y siempre pronta apoderarse de los autores ó de los cómplices del desorden.

Ademas de los comisarios de policía de las secciones y de la policía municipal, que abrazan en su accion todas las atribuciones del prefecto, existe otro personal dedicado á muchos servicios especiales dependientes, segun su objeto, de una de las divisiones interiores: la Bolsa tiene su comisario de policía y sus guardias; la alhóndiga, los mercados, los mataderos, la navegacion y los puertos; la medicion pública, la inspeccion de las leñas y carbones y el contraste de los pesos y medidas; tienen sus comisarios, interventores, inspectores, sub-inspectores y ayudantes. Catadores de vinos proceden á la

visita de las bodegas y de los líquidos del comercio al por menor. La limpieza, el riego y el alumbrado, la alineación de casas y los carruages públicos ocupan igualmente á un personal distinto. Dos ingenieros y un inspector están encargados de vigilar los establecimientos peligrosos, incómodos ó insalubres, un médico y tres ayudantes de la *Morgue*, y en fin doce médicos de la consulta pública.

Un médico, director de los socorros públicos, á los ahogados, asfixiados y heridos, cuida de los botes de socorro, distribuidos en muchos puntos de la orilla del Sena, en los sitios y localidades mas populosos y espuestos á estos accidentes. Muchos médicos visitan á los dementes, y dos inspectores cuidan de los hospitales particulares, y de las casas de mendicidad y lactancia. Por último, hay un considerable número de empleados en el servicio departamental de las cárceles.

La guardia municipal, que ha tomado desde 1848 el nombre de Guardia Republicana Parisiense, presta á estos numerosos agentes el apoyo de una fuerza pública que se distingue por su disciplina, su arrojo y su esperiencia; tropa de linea compuesta de los mejores soldados de todo el ejército digna de la confianza del poder y del público, acostumbrada á contemplar, conteniéndole, al pueblo de París que vive con ella y cuya susceptibilidad se irritaria de cualquier acto brutal. El prefecto dispone de la Guardia Municipal, dirige su servicio de dia y de noche, señala sus requisiciones, cuando es necesario, y puede contar con su incontrastable firmeza siempre que los consejos, las amonestaciones y las instancias personales de los agentes civiles no bastan á restablecer la paz alterada y á devolver á las leyes su imperio.

Los zapadores-bomberos, cuyo número es inferior á las necesidades de la poblacion, llevan á todas partes donde estalla un incendio el auxilio de una práctica que no se detiene delante de ningun obstáculo, y de un valor que no retrocede ante ningun peligro.

Tales son los diversos auxiliares de la prefectura de poli-

cía. Esta enumeracion no contiene sin embargo mas que los agentes ostensibles designados en el presupuesto. Ademas de estos, hay otros que ejercen funciones secretas, tanto en los negocios políticos, como en los de seguridad; despues hablaré mas de ellos, cuando nos ocupemos de los servicios que desempeñan.

La sencillez práctica de este conjunto sorprende y satisface. Se comprende perfectamente que debe ayudar al prefecto de una manera eficaz en el desempeño de su vasto encargo. Cerca de su persona, las oficinas; lejos, distribuidos en su territorio, sus agentes de todas clases; les da el impulso y se asegura por las relaciones que le dirigen, de su exactitud y de los resultados que han obtenido: en cada seccion está representado por un funcionario que tiene interés en hacer amar y respetar la administracion, y en cada distrito por un agente de ejecucion que coloca sobre todas las cosas los derechos y los deberes de la policia; dispone por último, de sus brigadas centrales para hacer llegar á todas partes su brazo tutelar. Está sin cesar al corriente de los acontecimientos; conoce los deseos de la poblacion, sus padecimientos y sus goces, y, en una relacion diaria, advierte al gobierno de todo lo que puede ilustrar su marcha. Aplica á los intereses mas especiales un órden determinado de agentes, y apoya si es preciso sus órdenes con la espada de la Guardia Municipal, quien en union con los zapadores-bomberos, vela al mismo tiempo por las necesidades materiales de la ciudad.

Los sargentos de villa fueron uniformados en la época de su creacion, bajo la ilustrada y popular administracion de Mr. Debelleune. Una órden de Mr. G. Delessert, señaló á los comisarios de policia un uniforme oficial, para las ceremonias públicas; en circunstancias normales basta la faja tricolor para indicar su carácter. Los oficiales de paz llevan tambien en las grandes ceremonias uniforme bordado y faja azul; la mayor parte de los inspectores de los servicios especiales, usan tambien uniforme, de modo que casi todos los

empleados exteriores y activos llenan ostensiblemente su ministerio, y la poblacion, lejos de desaprobalo, muestra mayor confianza. Sin embargo, aun entre los agentes ostensibles, muchos no pueden denunciar su presencia por medio de signos exteriores que paralizarian la vigilancia, y harian nula la represion. La administracion aprecia las circunstancias y comunica sus instrucciones. Tiene interés en dar á conocer ella misma sus agentes, siempre que á ello no se oponen obstáculos poderosos: el ejemplo de los sargentos de villa es concluyente. Los antiguos agentes de policia, á los cuales han sustituido, ocupaban el último rango en la opinion del pueblo; los mas groseros epítetos herian su persona; las mas vivas resistencias entorpecian su accion: los sargentos de villa están hoy á cubierto de estas dificultades, y es porque el misterio y la sorpresa ofenden y escitan sospechas. Por el contrario, el pueblo hace justicia al agente celoso que se ofrece á las miradas de todos y acepta atrevidamente la responsabilidad de sus actos.

Todos los agentes de la prefectura dependen exclusivamente del prefecto, quien puede destituir á aquellos cuyo nombramiento le compete y suspenderlos á todos, arreglar sus sueldos y disponer de ellos con entera libertad. Este poder absoluto, atemperado únicamente por nuestras costumbres equitativas y moderadas, da fuerza á la autoridad del jefe sobre sus subordinados.

El exámen que acabamos de hacer de la organizacion de la policia, nos sugiere algunas reflexiones.

Los comisarios de policia no están bajo la esclusiva direccion del prefecto. Auxiliares del procurador de la República, y obligados por consecuencia á obedecer á los jueces de instruccion, que delegan en ellos algunos actos de sus funciones, pueden verse comprometidos en el cumplimiento de estos dobles deberes, y recibir á la vez órdenes cuya ejecucion simultánea sea imposible: hemos visto á la autoridad judicial contrariar las medidas tomadas por el prefecto, y po-

ner obstáculos con sus actos á la misma instruccion comenzada por su órden. Es innegable que las decisiones de los magistrados del órden judicial deben prevalecer siempre; pero sin subordinar la justicia á la policia podria establecerse un concierto pr v o.

Tambien pueden suscitarse algunos conflictos entre los comisarios de polic a y los oficiales de paz, y otros agentes de la polic a municipal. Los primeros, colocados en la seccion en que viven y dispuestos algunas veces á hacer concesiones abusivas para ser en ella bienquistos, sobrellevan paciente-mente la competencia de los oficiales de paz, agentes amovibles menos deseosos de adquirir popularidad y mas resueltos en sus medidas. Superiores á estos agentes en categor a, sufren sin embargo todos los dias su censura indirecta. El comisario, circunscrito á su seccion, mantiene relaciones obligatorias con el oficial de paz dedicado á la vigilancia de todo un distrito; la estension del escritorio sobre que opera, da á este una importancia contradictoria con la inferioridad de su t tulo. La firmeza del jefe de la polic a municipal puede dulcificar estos choques, pero de ningun modo evitarlos por completo. Acaso conviniese someter á todos los agentes exteriores de la prefectura á la inspeccion de funcionarios superiores, especie de sub-prefectos   de comisarios centrales de polic a, cuya autoridad predominante ahogase toda colision   imprimiese al servicio una unidad constante.

Desde 1850, en premio de un celo que podia recompensarse de otra manera, los oficiales de paz han sido ascendidos á las funciones de comisarios de polic a, confundiendo as  dos carreras diversas. El magistrado de polic a y el agente de ejecucion deben marchar paralelamente, pero sin encontrarse nunca en su escala: conviene que los primeros se escojan entre los abogados j venes, los secretarios de los comisarios de polic a y los empleados en las oficinas del ramo, y los segundos entre los agentes activos mas diestros y audaces. Debe asegurarse un porvenir á los oficiales de paz, pero su

introduccion en el cuerpo de comisarios de policia ofrece inconvenientes de muchas clases; puede alterar la buena composicion de este cuerpo y esponer á los comisarios á una vigilancia que el interés de un ascenso puede convertir en parcial.

Hace mucho tiempo que se ha pensado destinar en cada barrio un edificio especial para comisaria de policia, como la alcaldía y el juzgado de paz. Esta creacion seria muy útil. Por lo regular los comisarios ocupan, en calles poco céntricas de su seccion, habitaciones mal distribuidas y mezquinas situadas en pisos altos; si cambian de domicilio, se alteran las costumbres de la poblacion. Semejantes inconvenientes desaparecerian con aquella innovacion. A la habitacion del comisario de policia y de su secretario estarian anejos: 1.º, un cuerpo de guardia; 2.º, un puesto de bomberos; y 5.º, camillas, botiquines y hasta una guardia médica, si se adoptase oficialmente esta benéfica institucion. El gasto de los solares y de las construcciones quedaria casi completamente cubierto con la supresion de los alquileres, abonos é indemnizaciones que estos diversos servicios ocasionan en el dia. No hace mucho que una compañía de especuladores presentó proposiciones con este objeto, y á muy poca costa hubiera podido dotarse á París de aquellos establecimientos. Es probable que una mejora tan deseada no llegue á realizarse hasta que se traizen las nuevas subdivisiones de París, de modo que sean aplicables á todos los ramos de la administracion. Esta es una razon mas para que el gobierno se ocupe inmediatamente de este importante asunto.

A parte de algunas críticas de detalles, y de tal cual mejora posible, la organizacion de la prefectura de policia es buena y deja poco que desear; perfeccionada sucesivamente, es hija de la esperiencia y no de una vana teoría. Así es como se forman las instituciones sólidas y las administraciones regulares.



CAPITULO II.

PODERES DEL PREFECTO.—ORDENANZAS DE POLICIA.—DERECHO DE DETENCION.

Para el cumplimiento de sus funciones, el prefecto de policía está investido de dos derechos importantes que son como la base y el complemento de su autoridad: dicta reglamentos que tienen fuerza de ley, entrega á los tribunales á los que contravienen á ellos, y tiene el derecho de mandar detener á todo presunto criminal ó delincuente.

El poder de formar reglamentos pertenece, segun ya hemos visto, á los maires, y como ejerciendo una parte de sus atribuciones se halla el prefecto de policía investido de aquella facultad; pero los maires están subordinados á los prefectos, y en París el encargado de la policía es á la vez maire y prefecto; en lo relativo á sus atribuciones especiales, solo depende del ministro. Lo estenso de su jurisdiccion, su categoria en el órden administrativo y la grandeza de los intereses sometidos á su autoridad, contribuyen igualmente á dar importancia á las medidas que prescribe. La ley, como para colocarlas por encima de los simples reglamentos de los alcaldes, las califica de ordenanzas, al igual de las disposiciones que emanaban del poder real.

La coleccion de las ordenanzas del prefecto de policía desde 1800, publicada hace pocos años, contiene los documentos mas preciosos. Estas ordenanzas son como el reflejo de los acontecimientos que han ocurrido en el período que abrazan. En el momento de establecerse la prefectura de policía reinaba en todas partes el mayor desórden. Todo el mundo usaba armas; una ordenanza prohíbe su uso sin autorizacion. Muchas mujeres abandonaban el traje propio de su sexo; se les prescribe volverle á tomar, «atendido, dice el preámbulo de la ordenanza en un estilo que se resiente algo de la época en que fué escrito, á que las mujeres disfrazadas están espuestas á una infinidad de disgustos y hasta á los des-

precios de los agentes de policía.» «París se llena de militares y de marineros; se les dá una órden que manda revisar sus licencias. Abundan los forasteros; se obliga á los ciudadanos á declarar en casa de quien habitan, aunque sea á título de parientes ó de amigos; los porteros tienen la misma obligacion, y en caso de desobediencia unos y otros incurren en la pena de tres meses de prision y el doble si reinciden. Hay poca seguridad en los caminos, las diligencias que parten en dias fijos tienen que llevar en la imperial cuatro soldados y un cabo ó sargento, y tomar además de noche la escolta de dos gendarmes; no se permite alquilar ni caballos ni carruajes sino prévia la presentacion de un pasaporte ó de una carta de seguridad, y todos los dias se trasmite á la autoridad una lista de las personas autorizadas de tal modo para emprender un viaje.» «Es preciso, dice una ordenanza, que el gobierno esté al corriente de todos los acontecimientos que interesen á la seguridad pública é individual.» En su consecuencia se manda á los facultativos declarar los heridos á que prestan sus auxilios: inquisicion odiosa que deshonra á un gobierno bastante cruel para recurrir á ella. Despues del Imperio y á pesar de las dificultades de los tiempos, se abandonaron estas medidas violentas; en los momentos de agitacion, la policía se limita á prohibir los grupos, á vigilar á los forasteros y á poner en vigor la legislacion sobre pasaportes. Sin embargo, de incidentes particulares nacen nuevas precauciones. Las violencias que turban el órden en el teatro francés, durante las representaciones del *Germanicus*, ocasionen la prohibicion del uso de armas y bastones en el patio, de los espectáculos. El petardo que revienta cerca de la duquesa de Berry, que se hallaba en cinta, provoca algunas restricciones en la venta de la pólvora. Al saqueo de las tiendas de los armeros despues de 1850, sigue una ordenanza que prohibe á los que venden armas de fuego el tenerlas en disposicion de poder servir inmediatamente. Hay una profesion que desempeña un papel en todos los acon-

tecimientos, la de los que espendeden voceando papeles públicos, y se los somete á la autorizacion prévia; pero al día siguiente de cada triunfo popular, reaparecen vencedores, trompetas aterradorez de la victoria. El órden restablecido los hace bien pronto enmudecer.

En estas ordenanzas se refleja el carácter peculiar de cada administracion. La policia de París lleva siempre el sello del poder reinante: violenta y absoluta bajo los gobiernos que rechazan toda intervencion popular, chismosa é inquisitorial con los que temen y eluden. Con todo, desde 1850 las costumbres se han dulcificado, la autoridad es menos arbitraria, y se respeta el hogar doméstico.

El recuerdo de las grandes solemnidades y de las fiestas públicas de cada época se encuentra en las ordenanzas del prefecto de policia. En 1800 la fiesta de la Concordia y hasta 1804 el aniversario de la fundacion de la República, recuerdo incómodo al depositario infiel de las nuevas formas políticas. La coronacion, la distribucion de las águilas, el *Te Deum* de Austerlitz, la recepcion de las banderas conquistadas, entretienen en 1804 y 1805 la curiosidad popular. En 1806, con motivo del aniversario de Austerlitz, dispone una ordenanza: «que se pronuncia en las iglesias y en los templos y por un ministro del culto, un discurso sobre la gloria de los ejércitos franceses y sobre la estension del derecho impuesto á cada ciudadano de consagrar su vida á su príncipe y á su patria.» El clero se convierte en un instrumento de dominacion. Cada victoria del conquistador coronado se celebra con un nuevo *Te Deum*. La Restauracion sustituye las fiestas militares con ceremonias religiosas. El gobierno de julio convoca al pueblo á las ceremonias que recuerdan su origen, á los funerales de las víctimas del atentado de Fieschi, al entierro del mariscal Lobase, á la traslacion al cuartel de Inválidos de los restos mortales de Napoleon; finalmente, apasionado por todas las glorias, inaugura el monumento de Moliere. Estas fiestas, y con especialidad las consagradas á los aniversarios políticos,

ofrecen siempre al pueblo las mismas diversiones sobre poco mas ó menos. En el casamiento del emperador se sortean lotes de comestibles y corre el vino en las plazas públicas; mas tarde los comestibles mismos son arrojados á la multitud, espectáculo innoble que degrada las costumbres del pueblo, y hace suceder á los placeres tranquilos y honrados las escenas de pugilato. El gobierno de julio abolió estas repugnantes orgías, y en su lugar hace distribuciones á domicilio; mas económico que sus antecesores, se abstiene de prodigar el oro de los contribuyentes en esos placeres de un dia, y no busca una popularidad facticia por medio de fiestas ruinosas.

Es muy curioso observar los principios económicos aceptados sucesivamente por las ordenanzas de policia. En 1800 el primer cuidado de M. Dubois es resucitar los antiguos reglamentos, con sus disposiciones mas restrictivas, casi sin alteracion. La libertad estaba desterrada hasta de la industria. En 1804 se constituyen oficinas esclusivamente confiadas á un agente nombrado por el prefecto, para la colocacion de obreros, criados y aprendices de todas clases. Nadie puede inmiscuarse, bajo grandes penas, en este género de operaciones. Los deberes de cada categoría de obreros están tambien trazados; si quieren dejar al maestro, tienen que avisárselo, unos con cinco dias de anticipacion, otros con ocho; algunos no pueden establecerse sino á distancias determinadas de las tiendas en que haya trabajado antes. Una ordenanza de 26 de setiembre de 1806, fija las horas de duracion del trabajo de los obreros de construcciones, y la hora y el tiempo que han de emplear en sus comidas. Al principio de la Restauracion, Mr. Dandré reglamenta la venta de las bujías y de las velas; determina la capacidad de los moldes empleados en su fabricacion, el peso de los paquetes y el de los papeles y hojas en que van envueltos. En 1828 se insertan disposiciones del mismo género en una ordenanza relativa á la venta del azúcar de pilon; pero queda sin efecto al cabo de algunos dias. Ultimamente, la administracion rehusa mezclarse en es-

tas cuestiones. El 15 de agosto de 1830, cuando las clases obreras reclaman la proteccion del gobierno en sus relaciones con los maestros, el prefecto de policía, Mr. Girod de l' Ain, declara que no será admitida ninguna peticion sobre la intervencion de la autoridad en las cuestiones de jornales ó acerca de las horas de trabajo, como contraria al principio de la libertad de industria.

Sobre todo, bajo el aspecto administrativo es como son dignas de estudio las ordenanzas de la policía de París; ningun código es mas completo, ningun tratado de jurisprudencia tan instructivo como esta legislacion práctica, usual, inspirada por las necesidades de cada dia: puede servir de enseñanza fecunda á los prefectos de los departamentos y á los maires de las grandes poblaciones. Es por demas interesante seguirla en sus diversas fases, en sus descuidos, en sus vacilaciones. Ciertas materias han sido tratadas muchas veces por numerosas ordenanzas que se han modificado, completado ó reemplazado unas á otras; allí se ven los artículos suprimidos, cambiados ó añadidos para obtener el objeto deseado; la comparacion de las primeras disposiciones con las de fecha mas reciente, indica las necesidades peculiares á cada orden de cosas.

Sabido es que las ordenanzas de policía son obligatorias para todos los ciudadanos, mientras que no pasen el límite de las atribuciones del prefecto. Cuando se suscitan dudas, el tribunal de casacion resuelve definitivamente la cuestion. La jurisprudencia de este tribunal manifiesta una sabiduría grande y un alto conocimiento de las necesidades administrativas; concede una gran estension á la autoridad del prefecto, y le ha reconocido derechos muy ámplios: útil ejemplo dado á todos los cuerpos judiciales por el primero de la República, y feliz conciliacion de la justicia y la administracion, esos dos poderes paralelos, que deben prestarse un auxilio mútuo y no gastar nunca sus fuerzas en rivalidades mezquinas.

Los numerosos agentes cuya nomenclatura hemos dado,

están encargados en su mayor parte, cada cual en su esfera, de probar las contravenciones cometidas en desprecio de las ordenanzas del prefecto. Los procesos verbales que entablan se difieren al tribunal de policía municipal, á cuyo frente se halla un juez de paz, al que está agregado un comisario de policía, que llena las funciones del ministerio público, sin mas obligacion por su parte.

Las contravenciones probadas por este medio ascienden á muchos miles cada año; á los contraventores se les imponen multas, y en caso de reincidencia pueden ser condenados de uno á cinco dias de cárcel. La ley no siempre es bastante severa; pero en París por un efecto contrario, la represion es generalmente incompleta ó escensiva; los procedimientos, demasiado largos, cuentan á veces el décuplo de la multa en que se ha incurrido; el tribunal de policía municipal en que turnan los doce jueces de paz de París, ya riguroso, ya indulgente en demasía, no se atiene á ninguna jurisprudencia; en fin, la mayor parte de las condenas no se hacen efectivas á causa de la insolvencia de los delincuentes. Los vicios palpables de este régimen llaman la atencion del legislador y exigen una pronta reforma.

Ademas de las detenciones ejecutadas por subordinados, en virtud del derecho comun, en los casos de fragante delito y de vagancia, detenciones que en 1849 han pasado de 25,000, el prefecto de policía está autorizado por el artículo 10 del eódigo de instruccion criminal para dictar órdenes de detencion y requisitorias, cuando se le denuncia un crimen ó un delito. Esta facultad ejercida á satisfaccion, contribuye á impedir la fuga de los sospechosos y la desaparicion del cuerpo del delito; exige una gran celeridad y el empleo de medios de que la autoridad judicial no dispone: es el complemento de la vigilancia de la policía, cuyos resultados recoge y fecundiza. Los prefectos de los departamentos, investidos del mismo derecho, no usan de él; la diferencia de las situaciones esplica suficientemente como un poder casi indispensable en

París ha caído, por decirlo así, en el olvido en el resto de Francia.

Los individuos detenidos por los agentes subalternos, son llevados á casa del comisario de policía, quien los interroga y puede, segun los casos, ponerlos inmediatamente en libertad. Si encuentra justificada la detencion, los envia con las pruebas á la prefectura de policía, y desde allí, antes de veinte y cuatro horas, pasan á la disposicion de la autoridad judicial.

El prefecto de policía participa, por el derecho que tiene de publicar ordenanzas, del carácter de legislador; por el derecho de denuncia, de las funciones del ministerio público; por el de detencion y de pesquisa, del de los magistrados instructores. Todos estos poderes son absolutamente necesarios; no hay ningun pais en que la policía no los haya recibido mas considerables. Sin embargo, bastan; aun mas, es preciso reconocer que bajo un régimen de libertad y publicidad, con periódicos que abren sus columnas á todas las quejas, con una tribuna y el derecho ilimitado de interpelacion, con la responsabilidad del ministro, de quien depende el prefecto de policía en todos sus actos; estos poderes no son temibles ni pueden inspirar recelo.

Hemos enumerado todos los recursos de que dispone el prefecto; le hemos visto rodeado de numerosos agentes, secundado por sus oficinas, representado en toda la poblacion por una multitud de empleados de todas clases, por una fuerza armada fuerte y animosa, investido del derecho de dictar ordenanzas obligatorias para sus administrados, autorizados para entregar á los tribunales á todos los presuntos reos de infracciones de las leyes penales, y para asegurarse de su persona en caso de crimen ó de delito. Falta hablar de sus atribuciones, que son de tres clases: las que tienen relacion con la política, las relativas á la seguridad pública y las que se refieren á la policía administrativa. Vamos á tratarlas por este órden y con arreglo á esta division.

CAPITULO III.

POLICIA POLITICA.

La policía política es secreta por naturaleza: los facciosos traman sus complots en la sombra, y en la sombra es como el gobierno debe seguirlos, espiar sus pasos y atajar sus proyectos.

Es esencialmente preventiva. Los atentados de sedicion amenazan á la sociedad entera y ponen en peligro sus intereses mas caros: la victoria, suponiéndola cierta, deja tras de sí largos resentimientos y origina muchas veces crueles represalias. Un gobierno se consolida rara vez por medio de acusaciones políticas, lo que gana en dar á conocer los manejos de los que le atacan, en alarmar al pais poniendo de manifiesto sus sangrientas doctrinas, lo pierde en mostrarse espuesto á repetidas conjuraciones. El pueblo no cree en la fuerza del poder combatido incesantemente por las facciones, del poder condenado á descender un dia y otro á la plaza pública para luchar con enemigos oscuros, para levantar cadalsos en que espíen su delito. El espíritu de imitacion, el contagio del ejemplo, tan fuerte en las agitaciones civiles, pervierten los espíritus débiles y originan nuevos atentados. Finalmente, los procesos políticos no ofrecen sino resultados contraproducentes; las absoluciones amenguan la consideracion de los magistrados encargados de la causa; las condenas esponen al jefe del Estado á las acusaciones de crueldad, si hace ejecutarlas, y de debilidad y aun de cobardia si las perdona. Todo, pues, concurre para que la policía política esté especialmente destinada á prevenir las conspiraciones.

Algunos hombres cuyas ilusiones no han cedido á las frias lecciones de la esperiencia, condenan la policía política y la acusan de inmoralidad y de impotencia; pero si la sociedad tiene tantos derechos, y mas sin duda, como el último ciudadano para velar por su defensa, ¿cómo impedirle penetrar en

las tinieblas donde se forjan las armas preparadas contra ella? Si es verdad que la policía no descubre todas las conspiraciones, es poco lógico deducir que no descubre ninguna; á pesar de la discrecion que le está recomendada, muchos hechos han probado la eficacia de sus investigaciones.

La policía política, siempre recomendable por su objeto, puede ser tambien apreciable por los medios que emplea para conseguirlo; si llegase á suceder que la policía introdujese por sí misma en casa de las personas á quienes vigila, las pruebas supuestas de un crimen ó de un delito, cometeria la mas abominable perfidia; pero cuando se encierra escrupulosamente en una observacion pasiva, cuando prohíbe y castiga con severidad toda provocacion, lejos de deshorrar al magistrado que la dirige, le proporciona, por sus útiles y laboriosos servicios títulos incontestables al reconocimiento público.

En todas épocas ha habido una policía política que tuviese al gobierno al corriente de los planes de sus adversarios. Acaso en los tiempos en que predominan las pasiones violentas no encuentre ni agentes ni créditos destinados á este objeto; pero la delacion que se hace por fanatismo no es mas sincera que la que se vende por el interés; muchas veces el delator que se precia de desinteresado, busca por premio un destino, el favor político, la participacion en los negocios públicos. En suma, si es necesaria una policía secreta, la menos mala es la de agentes sometidos á deberes definidos con claridad, y que pueden ser espulsados en caso de infraccion; estos instrumentos mas dóciles, mas flexibles, mas fáciles de contener, son menos peligrosos para la mano que de ellos se sirve.

El prefecto de policía de Paris está encargado de la policía política; el ministro la conserva en sus atribuciones, y de su accion simultánea pueden resultar equivocaciones y conflictos. Importa pues, que el prefecto posea la confianza del ministro y que un concierto legal y sin doblez asegure el

éxito de sus comunes esfuerzos, lo cual es tanto mas necesario, cuanto que no se urde en los departamentos una trama grave ó poco importante, que no tenga su centro ó ramificaciones en París. Ni el ministro ni el prefecto podrian permanecer estraños á la policia política. El primero, llamado á abarcar toda la Francia con su mirada, no puede cerrar los ojos respecto á París; el segundo posee tales medios de informacion y de pesquisa, que, privándose de su concurso, perderia el gobierno sus mas preciosos recursos. Admitida esta necesidad, el ministro debe medir la parte de su subordinado, y este no traspasar nunca sus limites: la policia política no es mas que una atribucion obligada de la prefectura de policia, agregada á ella por delegacion del ministro, quien siempre tiene el derecho de señalar las condiciones y la importancia.

Los auxiliares del prefecto en sus investigaciones políticas, son de dos clases; ostensibles ó secretos. En muchísimos casos, en la mayor parte de las investigaciones, se emplean agentes ostensibles; para penetrar en el seno de los partidos es indispensable la intervencion de agentes secretos.

Dedicados antes á otras ocupaciones, salidos de los empleos ordinarios de la vida, casi todos los agentes secretos de la policia política, se ven reducidos á esta situacion por necesidad, por vanidad, por su aficion á los placeres, ó por el desórden. Algunas mujeres se encuentran en situaciones análogas, entran tambien en la policia para cubrir sus locos gastos, ó para conquistar en el gran mundo una posicion á que no las permitia aspirar su mediana fortuna; despliegan mucha finura, espíritu de intriga, y fino talento de curiosidad; pero dominadas frecuentemente por bajas pasiones, merecen poca confianza. Algunos agentes ceden á necesidades apremiantes: la prefectura de policia recibia en 1851 las mas útiles revelaciones de un jóven estudiante, de clara inteligencia, que con el módico salario que ganaba de este modo, muchas veces esponiendo su vida, mantenía á su madre y á una her-

mana y costeaba sus estudios. Ciertas noticias se comunican bajo la inspiracion de sentimientos honrosos y desinteresados; otras, en mayor número, bajo la impresion del temor. Algunos hombres tímidos entran en un complot, ó en una sociedad secreta por debilidad ó por compromiso, sin pesar las consecuencias; despues, se apodera de ellos el terror y turba su espíritu: romper los vínculos que los unen á los conjurados, sería espuesto; no se atreven á hacerlo y compran al menos la impunidad con sus revelaciones. Otros organizan conspiraciones para denunciarlas. Un prefecto de policía se encontró en una ocasion muy perplejo entre cinco ó seis caballeros de industria que mutuamente se hacian traicion y que conspiraban juntos para procurarse respectivamente los beneficios de una delacion; el prefecto conocia á los diferentes afiliados, mantenía relaciones con ellos y tenia todos los hilos de la trama, de la que hubiera podido creérsele alma y jefe, y se limitó á comunicar á cada uno de los supuestos Catilinas las noticias que le suministraban sus pretendidos cómplices.

Generalmente los servicios de policía se obtienen á poca costa. La concurrencia es muy grande y las conciencias se cotizan á bajo precio. Todos los dias se presentan numerosos candidatos y los ofrecimientos de servicios ocupan una gran parte de la correspondencia.

El prefecto de policía nunca pondrá demasiado cuidado, demasiada circunspeccion en el exámen de los documentos suministrados por sus agentes; unos le engañan á sabiendas; otros, los mas, dan sus avisos con sobrada ligereza; finalmente, otros, y estos son los menos culpables, se limitan á relaciones vagas y sin interés. A todos debe mirárselos con una justa desconfianza; las noticias de uno solo rara vez merecen crédito, por lo cual deben ser confirmadas, revisadas y probadas con otros documentos. Es preciso tener en cuenta las circunstancias, apreciar el carácter del agente, y tomar en consideracion su situacion y sus costumbres. Pocas funciones exigen mas tacto, mas conocimiento del corazon humano,

mas finura y actividad que la direccion de la policia política.

Con el auxilio de los instrumentos que posee y de las noticias que se procura á peso de oro ú gratuitamente, el prefecto conoce los hechos mas graves, y si no se halla enterado de todos los proyectos que se forman contra el órden público, al menos le son revelados la mayor parte. Muchas personas, aun de las mas ilustradas, piensan que sabe todo lo que pasa en Paris, que no hay un disgusto de familia, una aventura escandalosa, casi una querrela doméstica, que no llegue á su noticia. Desearian, segun dicen, ejercer este cargo aunque no fuese mas que por veinte y cuatro horas, á fin de obtener revelaciones tan curiosas, tan picantes, tan dignas de atencion. Segun ellas, estamos aun en los tiempos en que el lugarteniente-general de policia deshonoraba su carácter para distraer la ancianidad de un rey gastado por los escesos. La policia es hoy una cosa bien diferente, y se niega á investigaciones indignas. Para ella se halla tambien vedada la vida privada, porque el espíritu de faccion que persigue pertenece á la vida pública, aun cuando se cubra con un espeso velo. Informes pedidos por las familias mismas hacen entrar algunas veces á la policia en sus secretos interiores; pero estos casos son muy raros y los datos se recogen con estrema reserva y envueltos en un religioso secreto. En cuanto á las investigaciones que se relacionan con la política, se limitan á su objeto. La policia seria culpable violando los misterios de la vida íntima y profanando el santuario doméstico.

Pero debe hallarse presente allí donde se organiza la sedicion, en el taller donde se afilian soldados para la revuelta, en la taberna donde se reunen los conjurados en dias fijos, para concertar el motin ó el atentado, en el seno de las sociedades secretas donde la muerte y el asesinato se colocan bajo la garantía sacrilega de un juramento odioso; debe apoderarse de las publicaciones clandestinas que inflaman las almas crédulas, de las armas y de los depósitos de pólvora, execrables municiones de la guerra civil, y prender á todos los agitadores que

se disponen á turbar el sosiego de nuestras ciudades, y á cubrir de luto á las familias, Tambien debe dirigir mas alto sus miradas, ufana y feliz cuando sabe despójar del incógnito á los jefes de esas tentativas anárquicas; á aquellos que, ocultos en la sombra, esponen al peligro víctimas inocentes cuya ignorancia y buena fé han engañado; ambiciosos detestables que ocultan con la máscara del patriotismo los deseos mas egoistas y las mas torpes pasiones.

El estado actual de nuestras costumbres ha reducido mucho el interés de la policia en el gran mundo y en los salones. Ya no es en ellos donde se conspira. Los progresos de la democracia han hecho descender á las clases menos elevadas las ideas de conspiracion, y la hostilidad contra el gobierno se trasluce en motines y en atentados en las plazas públicas. Bajo un gobierno libre, el campo de la policia secreta es muy estrecho. Cada partido revela todas las mañanas en los periódicos cuáles son sus esperanzas y sus temores: los adversarios del gobierno son conocidos y declarados, y los mas esclarecidos toman á la tribuna pública por confidente, poco discreto en verdad, de sus agravios y de su hostilidad. En medio de la luz de una publicidad como esta, ¿qué podria saber de esencial en los salones una policia secreta?

No sucede lo mismo cuando la prensa tiene una mordaza en la boca y no puede ser el intérprete de la opinion. El gobierno se vé precisado á multiplicar sus medios de averiguacion. Cuanto mas absoluto es el poder, mas necesita tender las redes del espionaje y provocar la delacion.

A la policia política le está vedado servir jamás á intereses puramente ministeriales y privados. Su intervencion no es necesaria, y por consiguiente legítima, sino cuando se aplica á actos peligrosos ó punibles. Habria una especie de prevaricacion en gastar sus recursos en un vil espionaje personal, para observar á simples adversarios políticos y para buscar un pretexto á acusaciones de partido ó á despreciables recriminaciones.

Cuando se han hecho todas las relaciones, cuando están reunidas todas las noticias y coordinados todos los cálculos, empieza el papel del magistrado que dirige la policía. A su buen sentido toca sacar las consecuencias de los hechos revelados y ordenar las medidas que provocan. Si estos hechos constituyen un crimen ó un delito, si pueden obtenerse suficientes pruebas, si el ruido de un proceso no es mas perjudicial que provechoso, debe entregarse á la justicia, y la administracion, despues de haberla transmitido los documentos, la deja cumplir libremente su ministerio. Sin embargo, lo mas frecuente es que no se obtengan elementos para proceder judicialmente; el gobierno adquiere la conviccion moral, pero la justicia no adquiriria la evidencia legal. En este caso la administracion encuentra mil inconvenientes; sobre ella pesa una gran responsabilidad; conoce el complot y no puede castigar á sus autores, por falta de pruebas, ni apoderarse de sus personas, por falta de autoridad. Si toma precauciones, se le acusa de querer alarmar al pais, de crear inquietudes favorables á sus miras políticas, ó de abandonarse cobardemente á temores infundados; si estalla el desórden, se la acrimina por no haberle prevenido, por dejar que se perdiesen hombres extraviados á quienes podia retirar del abismo. ¿Quién sabe? Tal vez se la acusa de haberlos comprometido valiéndose de execrables provocaciones. El espíritu de partido es ingenioso, inventivo y en todo vé ataques. Si estos son inevitables, la prudencia de los magistrados debe despojarlos de todo fundamento. Cuando la persecucion judicial es peligrosa y no ofrece un resultado cierto, la administracion debe recurrir á los medios que le son propios. Puede alarmar á los culpables haciéndoles ver que se les sigue la pista; introducir la division en sus filas, mostrando que en ellas existen traidores, separar á algunos afiliados por medio de la persuasion; el temor ó el interés. Estos medios, puestos en juego hábilmente, han servido mas veces y mejor á la causa plública que el lujo de las persecuciones y el rigor de las condenas. Los violado-

res de las leyes son susceptibles de temores, de sospechas, que irrita y entretiene el menor incidente; es muy fácil desorientarlos, suscitarles obstáculos que, sin cambiar sus disposiciones, les impidan entregarse á ningun acto sério y temible. No obstante, el gobierno está en guardia, la policía vigila sin ruido, pronta siempre, ya que no pueda desbaratar los proyectos culpables, á prevenir el peligro en caso de ejecucion y á esclarecer los pasos de la justicia.

CAPITULO IV.

POLICIA DE SEGURIDAD.

El dominio de la policía de seguridad es ilimitado: todo lo que tiene relacion con la defensa de las personas ó de las propiedades, le pertenece; la policía política tiene detractores, la de seguridad no tiene ninguno; no provoca quejas sino cuando no llena su objeto, y los que piensan que el gobierno no debe tomar ninguna medida contra los actos que amenazan á su seguridad, encuentran muy santas y muy buenas todas las que tienden á defender su dinero y su vida.

La policía de seguridad está presente en todos los puntos en que hay grandes reuniones, en los teatros, en las fiestas, en los paseos donde se apiña la multitud. El tumulto y la sediccion la hacen aparecer al momento; en todas partes tiene á sus agentes por exploradores y á la guardia municipal por fuerza suprema, y en un caso dado todas las tropas de una numerosa guarnicion. Ella es quien asegura la ejecucion de las leyes y de las ordenanzas relativas á la vigilancia de las personas; quien provee de pasaportes á los viajeros, de permisos de instancia y de libretas á aquellos que están sujetos por la ley á esta medida de orden; quien visa los pásaportes de los extranjeros, las cartas de seguridad exigidas en algunas situaciones especiales, los permisos ó licencias concedidas á los militares; en fin, quien inspecciona las fondas y casas de huéspedes, siguiendo su alta y baja. Se muestra tolerante ó rigurosa en su accion, segun las circunstancias; pero siem-

pre procura con un cuidado constante no imponer á los ciudadanos ninguna molestia inútil.

A estas medidas generales añade precauciones especiales en ciertos y determinados casos: se entrega un demente á actos violentos, es encerrado; se encuentra un niño abandonado en medio de la calle, se le lleva al hospicio; desaparece un ciudadano, se hacen pesquisas para encontrarle; alarma al público una muerte repentina é imprevista, los facultativos determinan la causa; el incendio devora una casa, acuden los bomberos á sofocarle: las profesiones peligrosas están reglamentadas; ciertas armas se hallan prohibidas, y los que las venden sometidos á órdenes particulares; las casas de locos y las en que se cria á los espósitos, se visitan frecuentemente y están sujetas á infinitas formalidades; ha organizado socorros y dictado instrucciones para volver á la vida á los ahogados y asfixiados: allí donde la existencia de un hombre se halla en peligro, lleva la policía una luz, una precaucion, un socorro.

Esta proteccion no se limita á las personas. Sí á los establecimientos oficiales que el gobierno de Julio tuvo la gloria de suprimir, se sustituyen loterías y casas de juego clandestinas, agentes diestros las sorprenden y entregan á los tribunales. Si en la via pública los juegos de azar tienden sus lazos al inocente peculio del obrero, la mano del sargento de villa los dispersa y se apodera del ambicioso banquero. Los chalanes y los revendedores, esos corredores del robo, obligados á dar cuenta de todos los actos de su comercio, viven bajo el peso de una complicidad, siempre suspendida sobre su cabeza.

Pero los servicios de la policía de seguridad, brillan especialmente en su lucha infatigable, hábil y valerosa contra las clases perdidas de la sociedad, que parecen estar en guerra declarada con sus instituciones y sus costumbres.

Hay en el fondo de la poblacion de todas las grandes ciudades, una masa de miserables que viven fuera de la ley,

sin mas regla que su apetito, sin mas medios que el crimen, sin mas Dios que sus pasiones. El robo es su recurso, el mas infame desórden sus placeres, la cárcel ó el cadalso su fin inevitable. Todos los dias asombran ante los tribunales al auditorio, no tanto por sus delitos como por la insolencia de su lenguaje y el cinismo de sus modales. Ciertos barrios, ciertas calles, ciertas casas, los reciben habitualmente; horribles madrigueras son el teatro de sus orgias; algunos huéspedes les alquilan sucios tabucos donde pasan la noche mezclados unos con otros; si les falta este recurso, huyen al campo y hallan en las canteras un siniestro asilo, ó vagan por las calles evitando la patrulla que los persigue, espiondo al vecino que se retira tarde para robarle el bolsillo. Se han formado una lengua aparte, ya vieja, que hablaba Cartouche y que se enseña en los presidios, trasmitiéndose de generacion en generacion. Asi es como viven la mayor parte de los forzados que consiguen evadirse, y todos aquellos hombres cuya vida es una perpetúa violacion de las leyes; se conocen unos á otros, se apoyan, se conciertan y preparan juntos los ataques nocturnos, los escalamientos y los latrocinios de que viven. Esta industria detestable se distribuye segun las capacidades: el crimen tiene sus especialidades y sigue la regla económica de la division del trabajo. Todas las variedades del robo, la estafa, el hurto y el atentado con violencia, entregan su contingente. Unos estan encargados de descubrir las ocasiones del hurto, y otros de ejecutarle; la inteligencia y la fuerza se dividen los papeles. Ciertos robos se preparan durante mucho tiempo, se estudian y se combinan con un minucioso cuidado y con precauciones que asustan. Encubridores á creditados tienen siempre hornos encendidos para deshacer y convertir en barra los objetos de plata y oro no acuñadas; en sus filas hay cerrajeros para construir las llaves y las ganzuas, cocheros de plaza para verificar los trasportes, falsificadores para contrahacer las escrituras; envian á sus afiliados á reconocer la disposicion de las habitaciones, á sacar

moldes de las cerraduras, á contar los individuos de la familia y á estudiar sus costumbres; procuran que se formen reuniones de gentes en las calles públicas, ya promoviendo una disputa, ya estableciendo en ellas un cantor, una compañía de saltimbanquis, en cuyos casos la curiosidad pública les paga su tributo. El crédulo extranjero cae en sus redes; el cajero sin esperiencia vé desaparecer el saco de dinero con el ladrón que se lo arrebató; el carro cargado de mercancías queda en un instante vacío, si su conductor le abandona un minuto siquiera. Las muestras exteriores del comercio son para ellos una presa que les está convidando. En el salón de descanso de los teatros, en los sermones de los predicadores á la moda, en los paseos públicos, en todos los sitios donde se reúne el mundo elegante, se encuentra siempre algún ladrón, vestido con lujo, afectando maneras distinguidas, mezclándose fácilmente con la multitud, y bien pronto caen en sus manos los relojes, los anteojos y toda clase de alhajas; en las tiendas entran jóvenes ricamente vestidas, se hacen enseñar objetos preciosos, y esconden los mas ricos bajo su elegante manteleta. Es imposible pintar la fecundidad de sus recursos, la audacia de sus proyectos, la energía de sus medios de ejecución: forman una vasta conspiración organizada en todas partes contra el que posee alguna cosa, y á la que no desconcierta ninguna dificultad, ni contiene ningún freno, ni asusta ningún peligro.

La policía de seguridad está consagrada á combatirla, á reducirla á la impotencia, y para ello despliega un celo, una habilidad y un valor dignos de los mayores elogios. Comprende también agentes públicos y secretos; los primeros vigilan á los ladrones sin reunirse con ellos; los segundos se les aproximan mas, y sin tomar nunca parte, ni de lejos ni de cerca en sus operaciones, se mezclan con ellos, los conocen personalmente y pueden revelar con exactitud el carácter y los ardidés de estos miserables, salvajes estraviados en medio de la civilización, y que podrían reírse de nuestras leyes si la so-

ciudad no tuviese á su servicio ojos para ver, oídos para escuchar y bocas para contar los secretos de su perversidad. Los agentes de policía saben sus señas, y los siguen obstinadamente así que se presentan en campaña; á su vez se confunden con el público para protegerle, se apoderan de la mano que tiene aun entre sus dedos el objeto robado y lo devuelven al ciudadano sorprendido y encantado de una vigilancia pública que guarda su bolsillo mejor que él mismo; los siguen al palacio donde les aguarda una buena presa, á la oscura escalera que conduce á la habitacion abandonada de un obrero que se halla en el trabajo, ó bien los esperan en la calle y se apoderan de un golpe del ladron, de sus instrumentos y del fruto de sus rapiñas. Cuando conocen á un encubridor, toman posesion de su casa, y sin descubrirse abren la puerta á sus desvergonzados clientes, quienes de este modo, en vez del cómplice, pronto á darles el precio del botin, encuentran al agente de la fuerza pública que los coge del cuello. Por la relacion de las circunstancias de un robo, podrán decir quién es el autor. Habiendo sido sustraídas hace algunos años las medallas de la Biblioteca Nacional, los agentes, en vista de los procedimientos empleados, designaron el hombre que despues se confesó culpable de aquel delito. A falta de señas especiales, los guia un instinto maravilloso: el menor indicio los ilumina en sus investigaciones: el papel que ha servido de taco al arma de fuego, un instrumento olvidado, la huella de los pasos, los recuerdos de los vecinos, los productos del crimen encontrados, los gastos escesivos sin recursos justificados, una palabra escapada en la cólera ó en la embriaguez, nada se desprecia: se interroga á todas las memorias, se comprueban las circunstancias y se recogen las informaciones. En ciertas épocas las brigadas de la policía de seguridad registran de improviso las casas públicas mal reputadas y los inmundos cafetuchos del populacho; numerosas patrullas cercan las canteras del contorno, cierran las salidas y exploran las profundidades. Estas expediciones hacen caer

en manos de la policía multitud de reincidentes forzados y de gentes sin recursos, sin documentos y sin medios de existencia. Los escapados de presidio ó de las cárceles son conducidos á los pontones y á las casas centrales, los que han cumplido sus condenas perseguidos judicialmente por falta de cumplimiento á la parte de ellas que les imponía el destierro, y las gentes sin asilo por vagancia; París puede descansar mas tranquilo, libre, al menos por algun tiempo, de la presencia de estos huéspedes famélicos y desesperados. De noche los agentes de seguridad se esparcen por las calles en pequeños grupos, bien armados y resueltos, recorren los parajes menos frecuentados y por consiguiente mas á propósito para tentar la audacia de los malhechores; se deslizan en la sombra sin ruido, se ocultan en las puertas de las casas, detienen al individuo que lleva bultos sospechosos ó que se turba en su presencia, y segun las contestaciones que da juzgan si deben dejarle continuar su marcha, conducirle al domicilio que ha señalado como suyo, ó ponerle en lugar seguro. La Guardia Municipal lós auxilia en estas escursiones nocturnas, por medio de patrullas silenciosas y en cuyo uniforme no brilla nada, y se apoderan tambien de los individuos dispuestos á cometer un delito y de los que trasportan en las tinieblas los productos delatores de un crimen ya cometido. Los defensores del orden y del reposo público rivalizan de este modo en actividad, en perseverancia y en destreza con los familiares del crimen; el reconocimiento de las gentes honradas recompensa sus esfuerzos; la fuerza social los sostiene; el derecho los ensalza, los anima y asegura su éxito.

El primer cuidado de todo malhechor detenido es ocultar su nombre é impedir que se identifique su persona: la policía de seguridad tiene agentes cuya memoria inclemente reconoce las facciones de todos los que han visto una vez, y que aplica con una exactitud nunca desmentida todas las señas publicadas por la autoridad administrativa. Los archivos de la prefectura de policía contienen ademas, bajo el título de *índices judi-*

ciales el estado, siempre al corriente, de los individuos condenados por las jurisdicciones criminales ó correccionales de los departamentos. Mas de 800,000 nombres están inscrito en él, y á cada uno sigue la lista de los juicios y sentencias en que figura. Este estado que llenaba cuatrocientos registros, cuyas hojas supletorias ocupaban cuarenta cajones de madera, está hoy distribuido en boletines individuales, que contienen cada uno todo lo que concierne al mismo individuo, y colocados en estantes por orden alfabético, de modo que su manejo sea fácil y cómodo. Los índices judiciales son de inmensa utilidad, porque permiten responder continuamente á las hipócritas protestas de antiguos penados, que llevados de nuevo ante los tribunales, cuentan con el olvido de sus primeras faltas: en algunos minutos se descubren y describen sus antecedentes. La facilidad y prontitud de estas investigaciones escitan muchas veces la admiracion de los estranjeros y confunden á los acusados. Gracias á los índices judiciales, los magistrados del ministerio público de París, informados de todas las condenas sufridas por un reo presunto, pueden ilustrar á los jueces sobre sus antecedentes, y reclamar, en caso necesario, los recargos de pena aplicables á los reincidentes. Las jurisdicciones de los departamentos podrian recurrir con la misma utilidad á estos documentos oficiales, que abrazan toda la Francia; pero la mayor parte parecen ignorar su existencia.

Hace ya mucho tiempo que la prefectura de policía dejó de emplear en las brigadas de seguridad á los individuos apercibidos por la justicia; los que las componen tienen un título reconocido, son pagados del presupuesto de la ciudad de París y figuran nominalmente en los estados del personal. No se diferencian de los demas agentes sino en que no llevan uniforme, porque no podria señalárseles uno sin que padeciese el servicio. Con todo, ademas de estos agentes, la policía recoge los informes que le suministran individuos á quienes no confiere ni título ni sueldo fijo, y que no pertenecen á la administracion. Esta parte de la policía puede ser considerada

como secreta, y sus agentes—preciso es reconocerlo—se mezclan algunas veces en los desórdenes y en las fechorías de aquellos á quienes denuncian. Asi es que la persigue una reprobacion general, de que no debemos admirarnos; en efecto, es natural que la delacion repugne á las almas rectas; pero, ¿ha de preferirse la tranquilidad de los pícaros cuya industria interrumpen aquellas revelaciones, á la tranquilidad de las gentes honradas, cuyo porvenir aseguran? ¿En qué consisten, por otra parte, las revelaciones que recibe la policia? Son puramente oficiosas y solo le sirven de luz en las tinieblas en que el deber la manda penetrar. Si constituyesen la base de las condenas, habia motivo para rechazar su uso, pero no rompen jamás este misterio en que están envueltas. Su necesidad es tan evidente en ciertos casos, que es difícil creer que ninguna policia se pase enteramente sin ellas: por la policia secreta sabe la administracion un complot contra la vida de un ciudadano á quien tratan de robar, cuyo plan desbarata avisando á la víctima designada y colocando centinelas en su casa. Sabedora de un proyecto de evasion, toma las precauciones necesarias para impedir que se realice. Si un presidiario licenciado quebranta su destierro y se presenta en París; le hace salir antes que se entregue á nuevos crímenes. ¿Seria mejor que se cometiese el asesinato, que se consumase la evasion, y que la seguridad general estuviese amenazada con la presencia de un bandido sublevado contra las leyes? Puede suceder que las revelaciones de este género sean á veces un acto odioso de parte de los que las efectúan, y que los magistrados á quienes se hacen no las reciban sin repugnancia; pero en vez de acriminar á estos últimos, es necesario perdonarles el que antepongan los deberes del hombre público á los escrúpulos del hombre privado. Solo por una equivocacion, al acusar á la policia francesa de incitar á la delacion, se la ha puesto bajo este aspecto por bajo de la policia inglesa. Las leyes provocan y recompensan en Inglaterra la delacion. ¿Se dirá que al menos afronta la luz del dia? Sí; es indudable que

aparece hasta en el santuario de la justicia, donde recibe el precio de las sentencias que dicta. Si la policía francesa la admite, no la pide sino noticias que comprueba en seguida y nunca comunica á la autoridad judicial. En Inglaterra la delacion sigue al crimen y recibe una recompensa pública; en Francia denuncia ó impide el crimen, y no recibe su salario en nombre de la ley. ¿Cuál de los dos sistemas garantiza mejor la seguridad de los ciudadanos y satisface mas la moral pública?

A la vigilancia de los malhechores se encuentra estrechamente unida la guarda y policía de las cárceles, igualmente confiadas al prefecto de policía. París contiene ocho casas de detencion, el depósito de la prefectura de policía, donde son conducidos todos los individuos detenidos, la casa de arresto de *Mazas*, solo para los acusados del sexo fuerte; las *Madclonetas* y *Santa Pelagia*, para los penados correccionalmente; la *Conserjería* para los acusados cuyas causas penden de apelacion; la cárcel de *San Lázaro*, para las mujeres acusadas ó condenadas correccionalmente; el depósito de la calle de la Roquette, para los penados que deban ser conducidos á los presidios ó á las casas centrales, y por último la casa de correccion de los jóvenes detenidos. Los detenidos por deudas tienen una cárcel especial, y á mas hay en *San Dionisio* una casa de correccion y un depósito de seguridad. La poblacion media de estas diferentes cárceles está evaluada en 5000 individuos.

De veinte años á esta parte se han planteado grandes reformas en el régimen de las cárceles y en sus disposiciones materiales. La cárcel de Mazas ha reemplazado á la antigua cárcel de la Fuerza, cuyo lugar cubre hoy un barrio entero; en ella se ha introducido el sistema celular. Pero las cárceles mas antiguas no son en el dia dignas ni de nuestras costumbres ni de una ciudad como Paris. A pesar de las divisiones interiores, los presos se hallan espuestos á una contaminacion deplorable; en los sitios destinados á los mas peligrosos, se cometen todos los dias escesos que avergüenzan; el crimen tiene

abierta allí su escuela, allí se meditan los delitos, allí se forman los pactos mas execrables. Es de desear que, á ejemplo de *Mazas*, se dispongan todas las cárceles por el sistema celular; la humanidad y la moral pública estan de acuerdo para apresurar el planteamiento de esta reforma.

El depósito de la prefectura y la Conserjería son estrechos y poco salubres, y sin embargo, estas cárceles están aplicadas á detenidos todavía cubiertos por la presuncion legal de inocencia. En las inmensas obras que van á dar á Paris un palacio de justicia en armonía con las necesidades de sus justiciables, no serán olvidados estos detenidos; el consejo municipal ha votado los fondos necesarios para este gasto.

La casa de arresto por deudas y el depósito de penados, nuevamente construido, parecen corresponder suficientemente al objeto á que están destinados, y la naturaleza de la poblacion que los ocupa no exige, por opuestas causas, sino medidas de orden y seguridad.

A mas de las mujeres acusadas y de las condenadas, recibe San Lázaro á las prostitutas detenidas gubernativamente. Un cuartel especial está destinado á las jóvenes de menos de diez y seis años, detenidas en tutela administrativa. Allí reina el orden mas perfecto, estando los hombres alejados de todo el servicio interior y los talleres sometidos á una severa disciplina; pero la prision celular por la noche no se halla establecida sino en el cuartel de las jóvenes.

En la cárcel de los jóvenes detenidos es sobre todo donde se han hecho experimentos del mas alto interés. El sistema celular ha sido aplicado lo mismo de dia que de noche, pudiendo conciliarse con la instruccion, los ejercicios religiosos y las exigencias de los trabajos manuales; no ha ejercido ninguna influencia perniciosa ni en la salud ni en la moral de los detenidos. Muchas relaciones publicadas en estos últimos años atestiguan las ventajas obtenidas por este régimen especial, y el gobierno ha erigido esta cárcel en casa central, bajo el titulo de *Casa central de educacion correccional*. El Es-

tado atiende á sus gastos, pero ha quedado como antes dependiente de la administracion de la prefectura de policía. El prefecto ha animado y dispensado un apoyo constante á la sociedad benéfica creada voluntariamente para proporcionar patronos y maestros á los jóvenes detenidos que son puestos en libertad, y que ha concurrido juntamente con los cuidados de la administracion á disminuir en una proporcion notable el número de los reincidentes.

El prefecto de policía administra tambien el depósito de mendicidad del departamento del Sena, fundado en Villers-Cotterets, y que sirve de asilo á 700 ú 800 ancianos de ambos sexos. Este establecimiento se sostiene con tanto orden como economía; los detenidos son en él alimentados, vestidos ó cuidados en sus enfermedades por la módica suma de cincuenta á cincuenta y cinco céntimos diarios, y el régimen es excelente; allí gozan hasta de la libertad personal, porque tienen permiso para salir por turno del establecimiento con el objeto de trabajar ó simplemente á paseo.

La autoridad conferida al prefecto de policía sobre las cárceles le permite contribuir eficazmente al estudio de los problemas propuestos por la ciencia, y á preparar sus mas oportunas y verdaderas soluciones. Investido de una autoridad que se estiende sobre una poblacion, por término medio, de 5000 detenidos, puede ejercer una marcada influencia en las costumbres públicas, y en la seguridad de la capital, y desplegar en beneficio comun, no esa filantropía bastarda é ininteligente que halaga á los presos, haciéndoles la cárcel preferible á su propia casa, sino esa disciplina humana, aunque rigurosa, dulce, aunque inflexible, que hace aparecer á los ojos del condenado la justicia social como la austera é imparcial guarda de la moral y del orden.

La policía de seguridad ejerce todavia otra atribucion mas sobre la cual es preciso decir algunas palabras, á pesar de lo difícil del asunto: la policía de la prostitucion.

Un sábio y excelente escritor, el bueno de Parent-Duchá-

telet, ha consagrado á esta materia una estensa obra que ocupó diez años de su laboriosa existencia. En ella consignó todos los datos estadísticos que la administracion posee ó que él habia recogido personalmente, de modo que los que necesiten noticias precisas y oficiales, pueden consultarla y satisfacer su curiosidad. Nosotros solo nos proponemos poner en relieve y determinar el carácter de la intervencion administrativa en un órden de hechos que á primera vista parece resistirse á una organizacion pública.

En Lóndres la prostitucion está entregada á sí misma; sin freno, sin reglamentos, sin vigilancia especial. Infesta los teatros y los lugares públicos; escandaliza con sus miradas y con el espectáculo de sus desórdenes, y durante la noche amenaza la seguridad de las personas; pero por varias razones, nadie consiente en imponerla un yugo. Los radicales la creen protegida por el principio de la libertad individual; los hombres religiosos, que son los mas, se indignan cuando se piensa en tomar medidas que implicarian una aprobacion indirecta de un escándalo que deploran y de que bajo ningun concepto quieren reconocerse solidarios. Estos opuestos escrúpulos conducen al mismo resultado: la policia se abstiene, las costumbres se ultrajan, y un horrible contagio esparea en las familias la ignominia y los principios de muerte.

La administracion francesa, mas práctica y mas sensata, ejerce una accion directa, continúa, severa, sobre la prostitucion; y en París, en la imposibilidad de suprimirla, la ha sometido á reglamentos, y colocádola bajo su propia autoridad, imponiéndole un freno. Las casas públicas están autorizadas por la policia; las desgraciadas que en ellas habitan, las que aisladamente hallan en el oprobio medios de subsistencia, están obligadas á hacer inscribir sus nombres en registros abiertos á este efecto, y aunque no lo pidan, son inscriptas de oficio en ciertos y determinados casos. Pero si la policia interviene en ambas operaciones, no lo hace sino con reserva y precaucion. Las inscripciones en el libro infamante de la

prostitucion , solo se ordenan de oficio despues de désórdenes que prueben una desmoralizacion completa, y á peticion especial, solo despues que los consejos, las advertencias y las amonestaciones no han hecho ningun efecto. Si se trata de menores, se busca á las familias, se escribe al padre ó la madre, se hace un llamamiento á su autoridad, se los invita con instancia á quitar al vicio la presa que se dispone á devorar; nobles instancias que dan á la autoridad pública un papel de tutela moral, que por desgracia no toma con demasiada frecuencia; pero—doloroso es decirlo—el éxito corona rara vez estas piadosas tentativas. El vicio se halla ya tan profundamente arraigado cuando se presenta el último y deplorable recurso de la inscripcion oficial, que el corazon está cerrado á todo remordimiento, á todo sentimiento moral. Las familias están desanimadas, indiferentes ó llenas de indignacion. La inscripcion pues, se efectúa, y las que de ellas han sido objeto, quedan sujetas á todas las medidas que la policia prescribe respeto á su traje, á las horas en que pueden salir de casa, á las en que deben volver, los lugares que les está prohibido frecuentar etc.: estas medidas tienden en conjunto, á evitar el escándalo, á proteger contra atentados bastante frecuentes á aquellos á quienes el desórden atrae y que encuentran el robo en él y á veces la muerte, y á librar á los transeuntes de audaces y repugnantes provocaciones. Ademas se han tomado otras disposiciones, cuya enumeracion seria imposible, por un interés sanitario, para contener ó aminorar los progresos de una infeccion que parece como un freno puesto á los que no detienen mas dignos obstáculos en la pendiente de la inmoralidad.

Estas infinitas órdenes, consignadas en los reglamentos é inscriptas en las cartillas que se entregan al tiempo de la inscripcion, señalan la pena impuesta á las que las infringen, pena de prision que á veces pasa de un año. Todos los días pronuncia el prefecto muchas sentencias de este género, por las relaciones que le pasan las oficinas, en vista de los pro-

cesos verbales dirigidos por los inspectores de policía, y de los interrogatorios que sufren las culpadas. Esta justicia sumaria, á puerta cerrada, escepcional, única en nuestro régimen legal, se funda en antiguos reglamentos y en una larga costumbre, recibe una ejecucion no disputada y—¡tan poderosa es la voz de la moral y de la opinion!—en un tiempo en que todas nuestras instituciones, incluidas las mejor establecidas, se han puesto en tela de juicio, ni una queja se ha oido contra el ejercicio de un poder que no descansa en ningun testó legal.

Muchas veces se ha intentado agravar el rigor de los reglamentos establecidos contra la prostitucion. Mr. Maugin hizo algunos ensayos de este género; los obstáculos que opuso á la prostitucion autorizada estendieron al círculo de la prostitucion clandestina; cuando la inscripcion oficial no produce mas que trabas, cuando somete á la tortura y á la cárcel sin compensacion alguna, entonces es temida, evitada y se la combate como una odiosa tiranía. La prostitucion clandestina engendra á su vez los males mas graves; vierte un veneno mortal en las venas del cuerpo social, y camina en la oscuridad seguida del robo y el asesinato. El sistema de Mr. Maugin podia satisfacer á la moral oficial apartando de nuestra vista horribles espectáculos, pero atentaba profundamente á la seguridad pública. La policía de la prostitucion está siempre colocada entre dos escollos; fácil é indulgente, hiere á las costumbres; dura é implacable, amenaza al reposo de las familias. A combinar este doble y contradictorio interés es á lo que debe aplicarse la vigilancia del prefecto de policía, y el público parece aceptar las medidas actualmente en vigor como la solucion mas satisfactoria de un problema que no admite ninguna irreprochable.

CAPITULO V.

FOLICIA ADMINISTRATIVA.

La policía política ha conjurado las sediciones; la policía de seguridad prevenido ó sorprendido los atentados de los malhechores; ambas de mancomun han hecho sentir en la ciudad su benéfica proteccion. París obtiene de la policía administrativa los goces de la vida, el bienestar en su mas lata acepcion. La policía administrativa provee á su subsistencia, facilita en todos los puntos la libre, fácil y segura circulacion, y hace desaparecer todo lo que podria perjudicar á la salud pública. Las subsistencias, la circulacion, la salubridad, tales son en su significacion mas ámplia, los objetos de su vigilancia.

Los abundantes pastos del Norte, del Oeste y del centro mantienen numerosos rebaños. La administracion de París los llama á la capital, no por medios forzosos, siempre importantes, que suscitan inquietudes y que rechazan al productor en vez de atraerle, sino por facilidades especiales que le prometen una venta segura, y un reembolso inmediato y cierto; en estas materias la libertad es un principio de buena administracion tanto como un derecho político. Los géneros van, por decirlo así, solos á un mercado de un millon de consumidores; casi bastaria á la autoridad pública el no rechazarlos.

La de París se muestra fácil, complaciente; celosa de los intereses de los productores, vastos mercados les están abiertos para las provisiones; en Secaux y en Poissy, hay inmensos cobertizos, abrigos seguros, establecimientos que ofrecen la mayor comodidad, para las vacas, los becerros y los carneros: los carniceros que van á comprarlos pagan al contado por medio de adelantos que les hace la caja de Poissy, caja ya antigua y cuya larga y útil duracion es el argumento mas poderoso en favor de la utilidad de estas instituciones de cré-

dito. El espendedor, libre de todo cuidado, reintegrado del valor que representan sus productos vendidos, puede volver inmediatamente á su domicilio. La provision de ganados se hace tambien en la Chapelle; en París, en los Bernardinos, y en la Halle-aux-Veaux, mercados menos importantes que se abren en diferentes dias. A Saint-Germain, la Chapelle y á la Maison-Blanche se llevan los cerdos, y la volatería al mercado de la Vallée.

Por la noche, en tanto que París reposa, muchos y pesados carros atraviesan sus largas calles en direccion al mercado de los Inocentes, donde los vendedores se abastecen de frutas y legumbres; todos los cultivadores de las cercanías ván á verter allí la cosecha de sus campos, fertilizados por inteligentes trabajos. Algunas horas bastan para la compra de estos innumerables productos, de modo que cuando apenas despunta el dia, ya están aseguradas las provisiones para toda la poblacion.

La manteca de vacas y los huevos, comercio inmenso, tienen un mercado especial; las harinas y el trigo se depositan en el mercado de granos; el pescado fresco y las ostras, que antes se traian por la posta y ahora por los caminos de hierro, de los puertos de la Mancha y del Océano, el pescado de agua dulce y el queso, se distribuyen en locales distintos donde cada uno de estos géneros es depositado, clasificado y repartido con tanto orden como prontitud.

La administracion no pierde nunca de vista á los vendedores, á quienes ofrece en sus ingeniosas y protectoras combinaciones tan completas ventajas, que prefieren siempre el uso de los medios que ella proporciona, á pesar de las cargas que lleva consigo, á una libertad ociosa y estéril. En casi todos los mercados hay establecidos agentes destinados á servir de intermediarios entre el vendedor y el comprador, ahorrando á los primeros gastos de viaje y de arrendamiento de local, ofreciendo á los otros la facultad de elegir, y á todas las mas completas seguridades de legalidad; sirven de corredores ofi-

ciales de comisionados administrativos, y se encargan de todas las ventas mediante un ligero descuento. El precio se deposita al contado en una caja que paga en seguida al vendedor; una constante vigilancia y una contabilidad severa, previenen los abusos. Ciertos géneros cuya venta no puede retardarse, como los mariscos, el pescado de agua dulce y la manteca, se venden al mejor postor por los factores. Los proveedores en vez de vender directamente sus productos á los compradores, se apresuran á porfía á valerse del factor, legalmente responsable para con ellos, y se felicitan de la sencillez de operaciones y la seguridad en los tratos que les reporta su concurso.

Dispuesta y realizada de este modo la provision, la distribucion de los productos entre los diferentes barrios se hace por sí misma y sin la intervencion de la autoridad. Los vendedores de los mercados al pormenor se proveen de las cantidades que necesitan respectivamente, y á su vez las ofrecen al consumo. La policía administrativa llena entonces otros deberes; debe mantener el orden en estas numerosas reuniones de hombres y mujeres, donde reinan tantos intereses, tantas competencias tantas causas de disputa, y garantizar al público contra los fraudes, ya sea en el peso, ya en la calidad de los objetos que se le ofrecen.

Los mercados de París contienen de 8 á 9000 vendedores; solo el del Temple no tiene menos de 4000. La policía interviene en ellos por los medios ordinarios y valiéndose de agentes de todos géneros, y especialmente de los inspectores de alhondigas y mercados que desempeñan el papel de conciliadores y guardianes de la tranquilidad pública. Además los comisarios de policía reconocen los pesos y medidas, y los vendedores y péritos aprecian la calidad de los géneros y retiran de la venta los podridos ó malsanos, que luego se inutilizan.

Toda la organizacion de este servicio está basada en el principio de la libertad de industria y de comercio. En nada la altera el establecimiento de factores privilegiados, que

tiende á crear facilidades para el abastecimiento y no á entorpecerle. Los trabajos interiores están igualmente en algunos mercados á cargo de agentes privilegiados con el título de *forts*, pero la disposicion de los lugares y la necesidad de garantías especiales hacen este privilegio indispensable.

Sin embargo existen reglas especiales para el comercio de la carne y del pan; el número de las personas que á él se dedican está limitado, y nadie puede hacerlo sin obtener una autorizacion del prefecto de policía.

Los carniceros están obligados á conducir las reses que compran á uno de los cinco grandes mataderos que posee la ciudad de París. Allí se hace la matanza, el reconocimiento muchas veces repetido de las carnes, y su preparacion para ponerlas á la venta.

Despues de estas operaciones el carnicero es enteramente dueño de su comercio, y especialmente de fijar el precio para la venta.

Los tahoneros tienen obligacion de conservar, tanto en sus casas como en el gran pósito, una cantidad de harina que representa entre todos el abastecimiento de París durante cerca de treinta dias; cada quince dias tasa el precio del pan el prefecto de policía, á propuesta de una comision *ad hoc*, con arreglo á los estados de las ventas de harinas hechas en la quincena anterior.

No obstante el privilegio concedido á estas dos industrias, es tal el respeto de la administracion por la libertad de comercio, que permite á los vendedores forasteros traer á París carnes y pan, que se venden al pormenor á los compradores. En 1849 se abrió un mercado especial para la venta de carnes, el cual se desarrolló rápidamente. En 1850 se vendieron 1.650,000 kilogramos de carne, y en 1851 3.200,000, lo cual prueba la utilidad de esta creacion. Tambien se permite á los cultivadores de las cercanías ir varias veces por semana á los mercados, y vender sus frutos y legumbres al lado y en competencia con los vendedores sedentarios.

De este modo atiende la policía administrativa á la subsistencia de París; su intervencion es tanto mas eficaz, cuanto menos notable se hace, limitándose á dejar al interés privado toda su estension, y deteniéndole únicamente cuando se extravía. El conjunto de estas medidas produce los mas halagüeños resultados; con todo hay que señalar muchas imperfecciones.

Segun la legislacion municipal, las tasas percibidas en los mercados forman parte de los ingresos de los ayuntamientos. De esta disposicion resulta el derecho de oponerse á toda percepcion de este género en beneficio de los particulares. La ley que debe arreglar la administracion de París, decidirá sin duda, cuando se publique, esta cuestion, de modo que permita á la ciudad quedar en posesion de todos los impuestos que ahora se cobran en los mercados particulares, en virtud de tolerancia ó concesiones sin valor. El legislador no podria rehusar á la capital lo mismo que ha concedido á todas las municipalidades del reino. Hasta la decision legal de esta cuestion, la administracion hubiera podido invocar la ley general del año VII, pero acaso una prudencia laudable ha dictado la reserva que se ha impuesto.

El prefecto del Sena reivindica para su administracion el cuidado de hacer la cobranza de los derechos establecidos en los mercados; esta reclamacion descansa mas bien en una vana simetria de atribuciones que en el interés público. La prefectura del Sena tendria necesidad de constituir un personal completo para efectuar aquella percepcion, y la prefectura de policía al dejar este encargo, no podria suprimir un solo empleado, entregados todos á una vigilancia activa que continuaria reclamando su presencia; la verdadera intervencion que ejercen hoy los delegados del prefecto del Sena, garantiza completamente los asuntos financieros de la ciudad. Así, pues, ninguna razon plausible, ninguna compensacion justificarian ni atenuarian el esceso de gasto que debia resultar de la mudanza de este servicio de unas manos á otras.

Seguramente hay motivo para dirigir severas críticas al sistema escepcional que rige respecto á los tahoneros y á los carniceros; esta cuestion es demasiado vasta para no tratarla aparte. El honorable Mr. Lanjuinais, cuando ocupaba el departamento de agricultura y comercio, resolvió suprimir el monopolio de los tahoneros; pero su salida del ministerio impidió que se realizase esta mejora. Una comision de la última Asamblea legislativa habia abierto una informacion sobre la organizacion del comercio de panadería, y, conforme con Mr. Lanjuinais, proponia declarar libre este comercio. Esta proposicion iba á ser discutida cuando sobrevinieron los acontecimientos de diciembre de 1851, y de este modo quedó aplazada. Importa mucho que reciba una pronta solucion.

Otros cuidados solicitan tambien la intervencion de la policía administrativa: es preciso que, con su concurso, estén las calles espeditas, limpias, alumbradas por las noche, y regadas durante el verano; que el transeunte está protegido de los carruajes, que el individuo que se hace llevar de un barrio á otro en fiacre, en cabriolet ó en ómnibus no experimenten ninguna dificultad; que el rio que atraviesa á Paris sirva para usos útiles sin interrumpir la navegacion. La policía emplea diversos procedimientos para atender á estas varias necesidades.

Para que las calles estén libres y seguras, prohíbe toda reunion de gentes, toda usurpacion de su territorio; dispone la demolicion de los edificios que amenazan ruina; no permite ninguna construccion que pudiese estrechar el espacio ó interceptar la luz, vigila á los aparejadores é impone rigurosas condiciones á los comerciantes ambulantes que consiente, autorizacion siempre escepcional, destinada á procurar la subsistencia á familias pobres, y dispuesta de modo que nunca pueda esponer á los comerciantes con casa abierta á una injusta concurrencia.

Para que las calles estén limpias, obliga á todos los habitantes á barrer la parte situada delante de sus casas, y to-

das las mañanas hace barrer por centenares de trabajadores reglamentados los muelles, los puentes, las plazas y los arroyos; cuya superficie está calculada en 750,000 metros; da mas de 500,000 francos anuales á un contratista encargado de recoger el barro; hace desaparecer los hielos en invierno, y mantiene en un estado constante de limpieza y libre circulacion los 120,000 metros (treinta leguas) de alcantarilla, abiertos debajo de las calles de Paris.

Para que estas estén iluminadas hace encender todas las noches muchos miles de reverberos, y en estos momentos sustituye en todas partes el gas al aceite, que se estiende sin cesar de un barrio ó otro, de una calle á su vecina, y que en lugar de 60 mecheros en una línea de 2,000 metros, que estaban señalados en 1851, alimentaban en 1842 cerca de 5,000 en una estension de 168,000 metros, y próximamente abarcará toda la ciudad.

Para regar las calles en el estío, impone á los habitantes la obligacion de regar dos veces al dia, durante el calor, la acera delante de sus casas, y paga al empresario que, con ayuda de un material inmenso, derrama en todos los puntos esenciales mas espuestos á los ardores del sol, una lluvia artificial, que hace mas seguro el paso de los caballos y destruye un polvo malsano.

Para que los peones estén protegidos contra los carruajes, impone reglas á estos, los numera, los obliga á ir iluminados de noche, y les prescribe marchar al paso en ciertos sitios.

Para que los carruajes no espongan á ningun peligro, á ninguna colision al que de ellos se sirve, los precisa á ir provistos de su autorizacion; los visita desde luego antes de que se ofrezcan al público; reconoce su estado anualmente y hace reglamentos para los ómnibus, medio de trasporte tan generalmente adoptado, que se evalúa en 60,000 el número de personas que diariamente los emplean; somete á los cocheros á una disciplina rigurosa y los suspende de su servicio en caso de infraccion; establece paradas de inspec-

tores en cada plaza; marca por tarifa el precio de transporte, y por medio de varias disposiciones consigue asegurar la devolución de todos los valores olvidados en los carruajes públicos, restitucion que en 1844 escedió de 18,000 francos en metálico y billetes, y que va en aumento cada año.

Para conciliar la navegacion con las ventajas que el Sena puede procurar, prohíbe toda obra para cuya ejecucion no se halle autorizado el propietario, y somete los establecimientos de baños calientes, las escuelas de natacion y los barcos de lavado, á determinadas condiciones de construccion y de sitio donde estacionarse.

La salubridad pública es á su vez objeto de las vigilantes preocupaciones de la policía administrativa. Los conductos subterráneos que estienden bajo nuestros pies sus inmensas galerías, perfectamente cuidadas, se abren para la salida de todas las aguas sucias; cada año se limpian mas de 6,000 pozos inmundos; varios y numerosos agentes vigilan los establecimientos señalados, buscan y hacen matar los animales atacados de enfermedades contagiosas, acaban con los perros vagabundos, ciegan los pozos infectos, visitan los vasos y utensilios de cobre en los lugares públicos, hacen ventilar en invierno y cerrar en verano los anfiteatros y salas de diseccion, sorprenden y denuncian los remedios secretos, las boticas abiertas sin autorizacion, recogen los medicamentos en mal estado ó irregularmente preparados, inspeccionan las fábricas y depósitos de aguas minerales facticias, derraman los vinos adulterados, retiran de la venta los comestibles corrompidos, y toman una multitud de precauciones del mismo género, dirigidas todas al mismo fin.

En esta parte de sus atribuciones, el prefecto de policía es secundado por el consejo de sanidad, admirable institucion cuyos beneficios se han hecho en estos últimos años estensivos á todos los departamentos. Este consejo, compuesto de hombres eminentes, médicos, químicos, estadistas, ingenieros y arquitectos, da su dictámen sobre todas las cuestiones enla-

zadas en algun modo con la salubridad pública; se ocupa de las profesiones cuyo ejercicio puede poner en peligro la vida de los trabajadores, y se esfuerza por introducir en las artes los procedimientos mas á propósito para prevenir los efectos nocivos. Ningun establecimiento insalubre puede abrirse antes de ser visitado por uno ó mas miembros del consejo; las invenciones nuevas que entran en sus atribuciones, le están sometidas, y las ordenanzas de policía que interesan á la salubridad pública son muchas veces discutidas por él y siempre van apoyadas con su dictámen. La coleccion de estos trabajos durante diez años, publicada en el de 1840, es el estudio mas interesante para los administradores municipales y su mas irrecusable apología.

CAPITULO VI.

ATRIBUCIONES DIVERSAS.

Todavía dependen de la prefectura de policía algunas atribuciones mas, estrañas á las divisiones que hemos sucesivamente recorrido. Tiene á su cargo distribuir á los emigrados políticos residentes en Paris los socorros que les concede la hospitalidad francesa; revisa y aprueba los estatutos de un gran número de sociedades de socorros mútuos, formadas en su mayor parte de las clases obreras, y que contribuyen á un tiempo á moralizarlas y á socorrerlas en los dias de enfermedad ó de falta de trabajo; vela por la ejecucion de la ley sobre el trabajo de los niños en las manufacturas; encargada, por último, de un gran número de cosas de menor importancia, es un centro general de informaciones y de accion, al cual, tanto el gobierno como las administraciones locales y las particulares, han recurrido en muchas circunstancias.

Tal es en conjunto esta vasta administracion, poco conocida y sobre todo mal juzgada. Para apreciar los servicios

que ha prestado, desde su institucion, es preciso comparar el París de principios de este siglo con su estado actual. En 1800, no solo en las estremidades sino en el centro de la ciudad, habia precision de servirse de barquillas para atravesar el Sena. Debajo de muchos puentes interrumpian la navegacion los molinos esplotados por la industria particular. En toda la longitud de los boulevards, los transeuntes se veian detenidos á cada paso por anchos fosos llenos de lodo, que solo se cegaban en las grandes festividades. La rotulacion de las calles habia desaparecido. En el Palacio Real, único paseo de noche en aquella época, se habian ensanchado las tiendas á costa del espacio destinado al público. En casi todos los barrios, los mercados estaban al aire libre en las calles, con la confusion inseparable de este acampamento efimero. Ofendian la vista y el olfato las carnicerias donde se mataban, descuartizaban y esponian las reses. Apenas ocupaban algunas plazas un reducido número de carruajes. Por la noche, se encendian muy pocos faroles que prestaban á los ciudadanos una luz moribunda. Para ir á respirar el aire del campo, el parisiense debia confiarse al duro *coucou* que le robaba y le molia, ó á faetones mecánicos arrastrados al paso por dos caballos. En 1852 París habia cambiado completamente de faz; los recursos de una ciudad mas opulenta que muchos reinos, las artes, la industria, los descubrimientos mas estraordinarios, todo ha sido puesto á contribucion. Los puentes se han multiplicado y hecho desaparecer las barcas. Un largo circuito de muelles ha convertido las dos orillas del Sena en magníficos paseos. La navegacion no está embarazada por ningun establecimiento permanente; se han empedrado, nivelado y cubierto de arrecifes y de alamedas todos los boulevards. Una lápida de brillante porcelana indica el nombre de las calles, y las tiendas del Palacio Real están encerradas en sus límites desde 1828, gracias á Mr. Debeulleume. Se han suprimido todas las partes salientes que usurpaban el estrecho ámbito de la calle. Vastos mercados, suce-

sivamente abiertos, proporcionan un cómodo abrigo á los géneros y á los que los venden. Desde 1818, los mataderos ocultan en su recinto monumental las sangrientas operaciones despues de las cuales preparadas y labadas las carnes, son conducidas á casa de los cortadores en carros cuidadosamente cerrados. Los fiacres han visto establecerse despues que ellos los cabriolés, los carros para las mudanzas y los ómnibus. La policía de estos varios medios de trasporte se fué mejorando sin descanso, y en 1841 se organizó en todas las plazas una vigilancia permanente y en puesto fijo. El gas ilumina casi todas las calles, causando la desesperacion de los malhechores. Continuamente franquean todas las barreras carruajes cómodos y baratos, que hacen el servicio entre la capital y los pueblos mas pequeños. Los buques de vapor han reemplazado á los facones, y los caminos de hierro sirven á los habitantes para dejar sus calles sin aire y sus habitaciones sin espacio, y esparcirse por los campos vecinos. No hablamos de las aceras, esas protectoras de los que andan á pié, de los pilones fontaneros, esos conservadores de la salubridad, ni de los 120 kilómetros de alcantarilla que se prolongan bajo nuestras calles. Estas creaciones útiles, estas mejoras bienhechoras, no son sin duda obra esclusiva del prefecto; pero su administracion ha provocado, fomentado ó secundado todos los progresos, y hay muchos cuyo honor les pertenece por entero. Para no hablar sino de lo que le pertenece directamente, no se hallaria un interés de seguridad pública, de salubridad ó de bien estar colectivo que no haya servido con celo y persistencia.

Convenimos en que es sensible que la intervencion de la autoridad sea con demasiada frecuencia puramente material y puede incurrir en la nota de mostrarse indiferente á la mejora moral del pueblo. Nosotros querriamos que se pensase mas en ella, por medio de publicaciones útiles y prácticas, fáciles de esparcir, y en inculcar á las clases inferiores los principios de órden y de adhesion á la causa pública que los

sustraerian á las funestas sugestiones de los partidos anárquicos ; nosotros pedimos con todas nuestras fuerzas las instituciones públicas ó privadas que arrancarían tantos desgraciados, cuyo corazon es todavía puro, á las provocaciones de la necesidad y tantas pobres jóvenes á las infames sugestiones del vicio y del desórden. Las dificultades son grandes, es verdad, los medios muy disputados, y los resultados inciertos ; pero el reconocimiento público y la gloria no pertenece sino á los grandes esfuerzos, á los sacrificios que nunca se desalientan, y la administracion no será completamente tutelar y providencial hasta el dia que entre en esta noble via.



TÍTULO TERCERO.

LOS CULTOS.

CAPÍTULO I.

DE LA LIBERTAD DE CULTOS.

La libertad de conciencia es uno de los derechos mas inviolables de la humanidad. Ningun poder terrestre halla acceso en su santuario, y la ley que intentase forzarle se estrellaria ante una invencible resistencia. Libre en su creencia, el hombre es libre tambien para manifestarla de palabra y por escrito, con tal que, en la espresion pública de su fé no ofenda ni á las leyes del Estado, ni á la moral, ley comun de las sociedades civilizadas. Esta libertad está hoy admitida en casi toda Europa; de sesenta años á esta parte todas las constituciones la han proclamado en Francia. Sin embargo, el sentimiento religioso no se limita á manifestaciones solitarias. Los hombres se reunen para orar juntos. Una misma fé los une, y los templos los reciben en tropel; ministros públicos hacen oir allí su voz; contribuciones que suministra el Estado ó que pesan sobre los fieles, proveen á los gastos de

los ministros y de las ceremonias; así se funda el culto. Debe ser libre también, porque, ¿cómo separar las creencias de las prácticas que ellas prescriben, y rehusar á las unas las franquicias concedidas á las otras?

La libertad de culto no está rechazada, al menos abiertamente, en nombre de ningún principio religioso. Hoy día no hay en Francia ninguna religion que pretenda proscribir las otras y reinar por la cuchilla; pero para combatirla se invocan los principios del orden, de la tranquilidad pública y los derechos de la sociedad. Témesese, que si fuese permitido á todos los ciudadanos levantar altares, celebrar ceremonias, y erigir púlpitos, pudiese «resucitar el paganismo y las infamias de su mitología, celebrarse los misterios de la Buena-Diosa, formarse sociedades semejantes á las de las bacanales, que tanto conmovieron al Senado romano» y que «la política, sus cálculos y sus complots se encubriesen con el manto de religion» (1).

En 1789 se presentaron ya estos argumentos en la Asamblea constituyente. Mirabeau respondia:—«Pero decís que, á pretexto de religion, se predicarán dogmas nocivos, destructores de la sociedad, contrarios á la sana moral. Nunca: allí donde existen y se vigilan mutuamente muchas religiones, todas se depuran. Son rivales que nada se perdonan. No puede temerse la corrupcion sino de una religion dominante que no tiene nada que temer; las doctrinas peligrosas solo pueden predicarse en secreto: nunca osarán afrontar la censura del público. Para convertir en inocentes los misterios de la Buena Diosa, hubiera bastado destruir el misterio y desgarrar el velo que los ocultaba á la inspeccion severa de la sociedad.»

Por mas verdaderas y profundas que sean estas palabras, la libertad puede apoyarse todavía en otras consideraciones. Notemos desde luego que en el culto propiamente dicho no están comprendidos ni los escritos, ni las creencias, ni las doctrinas

(1) Mr. Dupin, procurador general, conclusiones del 12 de abril de 1838 en el asunto de los protestantes de Montargis.

ó los dogmas, ni los vínculos de comunidad puramente espiritual que pueden reunir á muchos hombres en una misma fé. Lo que constituye esclusivamente el culto, considerado distintamente, se encierra en un círculo limitado y no abraza sino los actos exteriores, la oracion en comun, la predicacion, las ceremonias religiosas. Ademas declarar estos actos libres no es de modo alguno prometerles la impunidad, si el orden general y las leyes se encuentran atacados por ellos. Las ofensas á las buenas costumbres, los ataques contra el gobierno, en una palabra, todos los crímenes y delitos del derecho comun, serán castigados con arreglo al código penal y á la legislacion que concierne á los diversos medios de publicacion. El hecho ó el pretesto de religion, en vez de escusarlos, los espondrá á una represion mas rigurosa.

Sin embargo, convenimos en que un régimen estrecho y severo, que asimilase el culto á las reuniones ordinarias, no corresponderia bastantemente á las nobles necesidades que reunen á los hombres para tributar á Dios sus homenajes y dirigirle sus súplicas. Si la libertad de cultos estuviese reconocida y puesta en práctica, deberia tener por consecuencia algunas inmunidades necesarias. Con este objeto la ley de 28 de julio de 1848 sobre los clubs, excluyó de sus prescripciones toda reunion consagrada al culto. Estas reuniones deberian no solo ser permitidas, sino gozar de la proteccion de la autoridad contra el tumulto y el ultraje. Ventajas particulares son estas que provocan las mas vivas objeciones. ¿Bastará pues, dicen, alegar que se practica un culto para eludir las leyes sobre asociaciones, para poner al ministerio público en el caso de castigar los agravios inferidos á los ministros de este pretendido culto? No: es indudable que no bastará semejante alegacion. La libertad que se reclama es para el culto verdadero, sincero, y no para la turbulencia, la sedicion ó la licencia que tomasen su enseña, y la sociedad no quedaria impotente contra los fautores de tales desórdenes.

Por otra parte, los favores escepcionales concedidos á los

cultos exigirían las correspondientes precauciones especiales. A este fin, la ley del 7 vendimiario, año iv, exigía ya que los lugares consagrados á ceremonias religiosas fuesen reconocidos de las autoridades locales por medio de una declaracion prévia. Tocaría á la ley organizar un sistema mas completo y poner condiciones al ejercicio del culto. Podría, por ejemplo, exigir que este fuese público, y prohibir las ceremonias nocturnas; los mismos sectarios de los cultos no reconocidos, lejos de oponer obstáculos á estas medidas, ó mostrarse recelosos deberían aplaudirlas.

En segundo lugar, los fraudes que se suponen no podrían escapar á la vindicta de las leyes y al ojo vigilante de los tribunales que serían sus jueces naturales. Que unos ciudadanos se digan fuera de la ley sobre las reuniones, porque practican un culto; que los mismos reclamen la proteccion concedida á estos; los tribunales decidirán si, en efecto, hay lugar á admitir la escepcion propuesta y á dar la proteccion solicitada. No juzgan una cuestion moral, dogmática, un sistema ni sus tendencias; aprecian un hecho, lo cual es su oficio. ¿Se trata efectivamente de una religion? ¿Eran las ceremonias actos de su culto? Hé aquí lo que los tribunales comprueban y juzgan.

Así, pues, en todo lo que es de derecho comun, los cultos deben estar sometidos á la ley general y regidos como los demás actos de la vida pública de los ciudadanos; en lo que les es propio, deben establecerse leyes especiales, por cuyo cumplimiento velará la justicia: parécenos que con estas condiciones la libertad no ofrece ningun peligro. Pero aun así suscita inquietudes y para disiparlas se pide que la libertad no pueda ejercerse sin la autorizacion prévia del gobierno. Tal es el punto sobre que están divididos sus defensores y sus adversarios. Los primeros reivindican un derecho propio é independiente, los segundos subordinan el derecho á la benevolencia del poder; es la lucha sostenida acerca de tantos puntos entre el régimen preventivo y el régimen represivo. (1)

(1) Véase en el tomo I, el cap. de la *Centralizacion* págs. 44 y siguientes.

El sistema de la autorizacion prévia, dá lugar á esta primera objeccion: mata la libertad. ¿Puedo decir que tengo un derecho, mientras no me sea permitido usar de él sin el asentimiento benévolo de la autoridad pública? Esta proposicion es tan evidente que no necesita demostrarse. Al principio la mayor parte de los derechos políticos se han sometido al régimen de la autorizacion prévia; con el tiempo y el progreso de las instituciones, este régimen debe hacer lugar al puramente represivo. Esta sustitucion no siempre se consigue sin resistencia, y está continuamente oscilante. Así que una libertad rompe sus ligaduras y se sustrae á la tutela de los gobiernos; estos se inquietan, porque se creen los únicos capaces de proteger á la sociedad, y toda alteracion de sus poderes discrecionales les parece una conquista de la anarquía; pero la esperiencia ha demostrado muchas veces lo que vale y lo que dura la seguridad que proporciona el poder absoluto. Los esfuerzos de los hombres que han consagrado á la libertad un amor sincero, y que no se desaniman ni por algunas locuras pasajeras, ni por la decadencia del espíritu público, deben dirigirse á hacer prevalecer, tanto como sea posible, en todos los ramos de nuestro derecho público, el régimen represivo. Es el medio mas seguro de despertar el sentimiento de la responsabilidad personal, el medio seguro de aliviar al gobierno de esa multitud de atribuciones que le abruma, y que habitan á los ciudadanos á volverse hácia él, cruzándose de brazos, en todas las ocasiones difíciles, acusándole de lo que no puede impedir, y pidiéndole lo que no puede hacer.

Si hay un orden de intereses en que importe mucho librarle de toda solidaridad, es seguramente el de los intereses relijiosos, porque no existe otro que provoque mas resistencias, mas quejas y mas animosidades. Con el sistema de las autorizaciones, el gobierno se erige en juez de la moral, de la tendencia, de la gerarquía y de los estatutos de los nuevos cultos. Es verdad que se concede—al menos asi se dice—que no debe inmiscuarse en el exámen del dogma; pero, sobre

todo en una religion nueva, el dogma está íntimamente ligado con la moral. ¿Cómo fijar el punto en que comienza y el en que concluye? El dogma mismo será examinado, discutido y censurado, ¡Hasta dónde se estenderán las atribuciones del gobierno! ¡qué responsabilidad no pesará sobre él! ¡á cuántos ataques no se verá espuesto! ¿Quién no vé que estas cuestiones no son de su incumbencia, que no posee ni medios de informacion para estudiarlas, ni consejo para discutir las, ni autoridad para juzgarlas, y por lo tanto que su incompetencia es radical?

Convenimos en que la consecuencia del régimen puramente represivo es dejar subsistir al culto por sí mismo en todo lo que no sea contrario á las leyes, y por consiguiente permitir que se erijan nuevos altares enfrente de los antiguos, que se formen sectas y que estallen cismas; pero estas iglesias estas sectas, estos cismas no son el fruto natural y legítimo de la libertad? ¿No se proclama la libertad precisamente para abrirles camino? ¿Debe levantarse el brazo secular para anonadarlos? ¿Cuál es la religion que tiene necesidad de semejante apoyo, y que para vencer á sus rivales desespera de la persuasion y apela á la fuerza? ¡Falso é imprudente cálculo! Las religiones tienen mas que temer el letargo que sigue de ordinario á una posesion pacífica y jamás contrariada, que á las temeridades de los novadores. Preguntemos á los países en que la libertad de cultos ha echado profundas raíces: el sentimiento religioso es en ellos mas ardiente, mas general, mas constantemente escitado; una incesante emulacion sostiene allí el fervor y el celo (1). Aflije el considerar á dónde

(1) Se ha notado que allí donde existen diversas religiones igualmente autorizadas, cada cual guarda mejor su culto y teme cometer acciones que deshonrarian su iglesia y la espondrian á las censuras y al desprecio público. Además se ha observado que los que profesan religiones rivales ó toleradas, son por lo regular mas celosos de ser útiles á la patria, que los que viven en la calma y los honores de una religion dominante... Mírese lo que pasa en un país en que hay ya su religion dominante, cuando se establece otra á su lado, casi siempre el establecimiento de la nueva religion es el medio mas seguro de corregir los abusos de la antigua. (Portalís, *Discursos sobre la organizacion de los cultos*.)

llega la indiferencia religiosa en Francia. A creer á algunos estadistas, entre los ciudadanos considerados como católicos, porque no profesan ni los cultos protestantes, ni el israelita, pueden contarse por millones los que en realidad no pertenecen á ningun culto. ¡Cuántos habrá en este número cuyo celo escitaría la libertad! ¿La verdad, la fé, no tendrían mas influjo sobre las almas animadas por una creencia, siquiera fuese estraviada, que sobre aquellas aletargadas y que se estinguen en una fria indiferencia?

No hay que exagerar la importancia de los cultos que podrían crearse á la sombra de la libertad. Al oír á los que la combaten, se diría que una multitud de religiones nuevas no esperan mas que la señal para desplegar su estandarte: nada de eso. No se crean tan fácilmente nuevas religiones; es preciso apóstoles para predicarlas, creyentes para servir las, y los apóstoles y los creyentes son raros en nuestros dias. Así se ha podido observar en los cortos intervalos en que las leyes han levantado todas las barreras. La indiferencia y la piedad han hecho justicia ó sueños absurdos é insensatos. Se habla de las religiones de la antigüedad y de su resurreccion: ¿quién piensa en los misterios de Isis y en las Bacanales? ¿Quién se prepara á hacer salir de sus tumbas á las divinidades del paganismo? El cristianismo las ha enterrado para siempre. Lo que puede preverse es la division del rebaño en las iglesias establecidas, sobre todo en el protestantismo, que la autoriza con su doctrina. Bajo la monarquía de 1830 la libertad de cultos fué invocada casi esclusivamente por las fracciones disidentes del protestantismo. Puede que la unidad religiosa y la pureza de los dogmas se pongan en tela de juicio, pero el Estado no es mas que su guardian, y no tiene nada que ver en estas discusiones. Los intereses que le pertenecen están á cubierto: esto es todo lo que le importa. En vano se pretende que las religiones nuevas opondrían su organizacion, su poder colectivo, sus fuerzas concentradas, á la organizacion, al poder y á las fuerzas del gobierno; esto es suponer á los

actos del culto una influencia y un carácter que no podrían tener. Cuando cada uno es libre en sus opiniones religiosas, libre de propagarlas por medio de la palabra, de la pluma y de la prensa, el culto solo añade á estos medios de proselitismo los lugares de reunion y ceremonias. No es en estos actos donde existen peligros para el poder público. Algunos templos abiertos á la oracion, algunos sacerdotes cantando himnos en ellas y llevando la palabra; ¿hay aquí nada que amenaza al Estado?

La libertad de cultos regida por leyes protectoras y represivas, es el régimen á la vez mas á propósito para satisfacer el voto de las conciencias y el mas favorable á los intereses públicos. ¿Existe este régimen en Francia? Para contestar á esta pregunta, es preciso echar una rápida ojeada sobre lo pasado.

En los paises que están mas por completo en posesion de la libertad de cultos, en Holanda, en Inglaterra y sobre todo en los Estados-Unidos, la libertad se ha establecido bajo el imperio irresistible de los hechos; la reunion de creencias diversas en un mismo territorio la preparaba inevitablemente. La libertad no ha triunfado sin resistencia; largas y sangrientas luchas han precedido frecuentemente á este acontecimiento; pero ha triunfado, ha sido proclamada como un hecho, y una vez conquistada, se ha establecido definitivamente. En Francia no ha sucedido lo mismo. El predominio absoluto de la Iglesia católica habia ahogado las numerosas sectas en que se dividian otros paises: solo los protestantes y los israelitas estaban interesados en la libertad de cultos, y las leyes que la consagraron para todos, sin restringirla á ninguno en particular, respondian mas al pensamiento de los escritores del siglo XVIII que á una necesidad verdadera y actual. Por otra parte se reconocian derechos que no habian esperado á este reconocimiento para ejercerse: en Francia, en su forma abstracta, la libertad de cultos era mas especulativa que práctica, y se introducía en las leyes como un principio filosófico.

Esto es lo que ha hecho que desde 1789 haya seguido en sus diversas fases á la política, á los sistemas de gobierno y á las preocupaciones religiosas de los muchos poderes que se han sucedido.

Nadie ignora que en el momento de estallar la revolucion, á pesar de los escritos filosóficos, á pesar de la opinion pública, atraida á sus doctrinas, no existia en manera alguna la libertad de cultos. Hacia ya un siglo que estaba revocado el edicto de Nantes, último refugio contra la tiranía. Un culto esclusivo, frecuentemente armado de la persecucion, reinaba como amo absoluto.

Este fué uno de los primeros asuntos que ocuparon á la Asamblea constituyente, con motivo de la declaracion de los derechos que habia acordado proclamar á la faz del mundo, como las fundamentos de la nueva sociedad. En lo relativo á la libertad religiosa, la declaracion de los derechos se encerró en los términos de una fórmula general. El artículo 10 estaba concebido en esta forma: «Nadie puede ser molestado por sus opiniones, ni aun por las religiosas, mientras su manifestacion no altere el orden público establecido por la ley.» Esta fórmula parecia reconocer mas bien la libertad de conciencia que la libertad de cultos; pero la discusion que precedió á la adopcion, y señaladamente los discursos de Mirabeau, prueban que la Asamblea habia tenido presentes las dos. La Constitucion de 1791 fué mas explicita. Garantiza «á todo ciudadano la libertad de ejercer el culto religioso que profese.» Al mismo tiempo, al pasar los registros del estado civil de las manos del clero á las de los magistrados del municipio, la sociedad secular quedaba constituida en una esfera independiente de la Iglesia.

Sin embargo, la Constitucion civil del clero habia atizado el fuego de las pasiones religiosas. Puede sostenerse con los hombres ilustres que la redactaron é hicieron aprobar, que no traspasaba el límite de los derechos del poder político; pero en el momento en que las mas profundas innovaciones alar

maban á una religion, hasta entonces omnipotente, y en que el Estado la desposeia de sus inmensas propiedades, cesaba de ver en sus ministros un órden distinto de ciudadanos, y la privaba de sus antiguos privilegios, la prudencia impedia adoptar una reforma que escitase inquietudes, tan vivas ya, y que alimentase resistencias prontas á estallar. Las luchas que engendr  esta medida impol tica, lanzaron   la Asamblea y al gobierno en un camino en que la libertad religiosa debia recibir hondas heridas. El poder temporal se vi  condenado   invadir el poder espiritual. Desde su origen, la Iglesia y el Estado,   quienes la nueva ley tendia   separar, se hallaron comprometidos en un conflicto que los ponia en pugna. Tal fu  la causa de las medidas   que la Asamblea nacional di  el impulso, y que siguieron todas las que le sucedieron. Una vez en aquella pendiente fatal, ya no pudieron detenerse. La resistencia despert  los odios. Una legislacion draconiana organiz  la violencia, decret  la proscripcion y levant  cadalsos. Preciso es echar un velo sobre escesos y cr menes que las pasiones pol ticas, lo dificultoso de los tiempos y la necesidad de asegurar el triunfo de la revolucion, esplican sin justificarlos. Seria calumniar   la libertad el seguir sus pasos   trav s de aquellas sangrientas convulsiones y lamentables escesos.

Cuando volvieron tiempos menos agitados, la convencion misma pens  que el medio de poner t rmino   las colisiones que habian comprometido al Estado, echado por el suelo los altares y consternado   los hombres de bien, era pronunciar la separacion absoluta de la Iglesia y del Estado. La Constitucion del a o III, en su art. 554, decret  lo siguiente: «A nadie puede impedirse ejercer, conforme   las leyes, el culto que haya elegido. Nadie puede ser obligado   contribuir   los gastos del culto. La Rep blica no subvenciona ninguno.» Una ley publicada despues (el 7 vendimiario a o IV) somet    la vigilancia de las autoridades constituidas «las reuniones formadas para el ejercicio de un culto»

y exigió la declaracion en las administraciones municipales, «del sitio escogido para ello.»

De este modo se proclamaban la ruptura de todo vínculo entre la Iglesia y el Estado y la absoluta libertad de cultos; pero las circunstancias se oponian á que estos principios obtuviesen una aplicacion inmediata. Los cultos adoptados por los creencias y las costumbres nacionales no podian reponerse todavía de los golpes que acababan de recibir. Se les rehusaba todo auxilio por parte del Estado, les faltaba todo apoyo material; sobre la cabeza de sus ministros estaban suspendidas las leyes de la emigracion y los recuerdos mas siniestros. Un clero pobre y desunido no podia suscitar al Estado las mismas dificultades que iglesias que ningun deber tenian respecto á él, ni usar para recuperar su imperio de una libertad estéril é indigente. La nueva ley no servia sino para dar origen á ensayos de culto ridiculos é impotentes. El desórden reinaba aun en los espíritus, el terror en los ánimos y la indecision en los consejos del gobierno. Mal podian hallarse un modelo ó una autoridad en leyes que, por los tiempos mismos en que fueron promulgadas, carecian de vida y de poder.

Al establecerse el Consulado, la libertad contaba ya con pocos partidarios; la habian vuelto la espalda todos los que no tenian bastante energía en su alma y suficiente ardor de convicciones para permanecer fieles á principios deshonrados por tantos escesos. ¡Triste y ordinaria consecuencia de los triunfos de la demagogia! En lo tocante á los cultos, el nuevo régimen proclamó la libertad. Los cónsules declararon que «esta libertad estaba garantida por la Constitución: que ningun magistrado podia restringirla: que ningun hombre podia decir á otro: *Profesarás tal culto y en tal dia.*» Los cultos á que se apegaba la fé del pueblo, fueron igualados por una ley á los otros y sometidos á trabas que no siempre respetaron sus franquicias legítimas, siendo administrados por el Estado. El régimen preventivo, que vino á ser el derecho comun del Imperio, se hizo estensivo á las conciencias. El

Concordato celebrado con el Santo Padre tuvo por complemento los artículos orgánicos, obra del poder político. Los cultos protestantes quedaron constituidos por la ley, y algunos años mas tarde, lo fué tambien el culto israelita por decretos imperiales. Sin embargo, no cesaba de proclamarse el principio de la libertad de cultos. El emperador se obligó, bajo juramento, á hacerla respetar, y cuando con motivo de su consagracion, se presentó á él una diputacion protestante, la dirigió estas solemnes palabras:— « Quiero que se sepa bien que mi intencion y mi firme voluntad son de mantener la libertad de cultos. El imperio de la ley acaba donde empieza el imperio indefinido de la conciencia; ni la ley ni los principes pueden nada contra esta libertad; tales son mis principios y los de la nacion. Y si algun individuo de mi dinastia, que deba sucederme, olvida el juramento que he prestado, y es-traviado por las inspiraciones de una falsa conciencia, llegase á violarle, yo le entrego á la animadversion pública, y os autorizo á darle el nombre de Neron » A pesar de este anatema, los artículos 291, 292 y 294 del Código penal promulgado en 1810, sometieron á la autorizacion del gobierno las asociaciones y reuniones, incluidas las consagradas al culto; pero, en las doctrinas que prevalecian entonces, esto no era destruir la libertad sino subordinar su uso al capricho de la autoridad pública.

Con la Restauracion se modificó este régimen en el sentido de un retroceso á la preponderancia de la Iglesia católica. La carta la erigió en religion del Estado, y leyes especiales hicieron entrar el poder político en el círculo de las creencias religiosas. Solo se concedió la libertad á los cultos reconocidos por la ley; solo ellos, como igualmente sus ministros, obtuvieron una proteccion contra el ultraje y la burla en la del 25 de marzo de 1822. Las subvenciones ó sueldos pagados por el tesoro público, se negaron constitucionalmente á todo otro culto que los cristianos. Así se destruia la libertad.

La carta de 1830 la restableció, quitando á la religion

católica el título de religion del Estado y haciendo desaparecer la disposicion que reservaba esclusivamente á los ministros de los cultos cristianos una asignacion sobre los fondos del Estado. Una ley mandó retribuir el culto israelita; la del sacrilegio fué abolida; ya no hubo religion dominante. Los cultos asalariados obtuvieron un eficaz apoyo y aun alcanzaron de la confianza del Estado, secundada por los progresos de la razon pública, mas independencia de la que los concedian las leyes vigentes. Los cultos reconocidos disfrutaban de una amplia libertad, pero en el hecho de ser exclusivos puede decirse que la verdadera libertad de cultos no existia. En efecto, subsistia el régimen preventivo, y la jurisprudencia del tribunal de casacion—lo decimos con sentimiento—tenía á estrechar mas y mas los lazos que detenian á la libertad en su carrera. El tribunal de casacion declaró los artículos 291 y 292 del Código penal aplicables á las simples ceremonias religiosas, incluso las reuniones formadas á escitacion de un ministro regular perteneciente á un culto reconocido por el Estado. Cuando la discusion de la ley de 10 de abril de 1834, el ministro de justicia dijo:—« Si se trata de reuniones para rendir culto á la Divinidad, la ley no es aplicable; lo declaramos de la manera mas terminante. » El informante de la cámara de los Pares no fué menos explícito:—« Si esta declaracion (la del guarda-sellos), dijo, no está en la ley misma, forma su comentario oficial é inseparable. » Bajo la fé de su palabra se ha votado este artículo en la otra cámara, y puede serlo por vosotros, porque no hay que temer que ningun tribunal de Francia le entienda de otro modo. » A pesar de estas esplicaciones, se aplicó á los cultos la ley de 1834.

Con la Constitucion de 1848 desaparecieron toda clase del dudas, pues reconoció la libertad de cultos en los términos mas formales, y borró las palabras que en las cartas de 1814 y de 1834 habian dado origen á diversas interpretaciones. Una carta oficial del ministro de Cultos, Mr. Falloux, fecha

27 de febrero de 1849, declaró espresamente «que al asegurar á todos los cultos una proteccion igual, la nueva Constitucion no habia hecho, entre los que estaban reconocidos por la ley y los que no lo estaban, mas distincion que la relativa á los honorarios de los ministros...; que el derecho de los mismos independiente del personal reconocido y subvencionado, era incontestable y que nada se oponia á que profesasen libremente su culto, salvo la vigilancia que la autoridad legal encargada de la policía municipal, debe ejercer en el limite de sus atribuciones, sobre los sitios en que tuvieren lugar las ceremonias.»

¿Ha introducido la Constitucion de 14 de enero de 1852 un nuevo derecho acerca de los cultos? El artículo 1.º «reconoce, confirma y garantiza los grandes principios proclamados en 1789.» Entre estos principios ocupa el primer lugar la libertad de cultos. Esta libertad se halla ademas reconocida nominalmente en el artículo 26, que encarga al senado oponerse á la promulgacion de las leyes «que sean contrarias ó que atenten á la religion y á la libertad de cultos.» No obstante, un decreto de 26 de marzo de 1852 ha vuelto á poner en vigor los artículos 291, 292 y 294 del código penal, como tambien los artículos 1, 2 y 5 de la ley de 10 de abril de 1854, abolidos en 1848, y los declara aplicables á las reuniones públicas, «sean de la clase que quieran.» ¿Se ha querido con esto, contra los términos de la Constitucion, aplicar estas disposiciones á las reuniones religiosas y resucitar la jurisprudencia del tribunal de casacion? Los actos del gobierno y los acuerdos de los tribunales resolverán esta cuestion, que es tanto mas importante cuanto que una de las principales garantías ofrecidas por los sistemas anteriores ha desaparecido de nuestras instituciones. En efecto, á los que temian que se abusase de los artículos del código penal y de la ley de 1854, se les respondia que la tribuna estaba abierta á todas las quejas y los ministros siempre responsables de la mala aplicacion de las leyes: pero en este momento la responsabili-

dad política de los ministros no existe ya; el único de los grandes cuerpos del Estado que tiene su origen en la eleccion, y cuyas discusiones obtienen alguna popularidad, no puede recibir ninguna peticion, carece del derecho de iniciativa y no ejerce ninguna autoridad, directa ni indirecta, sobre los ministros.

CAPITULO II.

LOS CULTOS RECONOCIDOS.

Entre los cultos que existen, en virtud de un derecho propio bajo el régimen de la libertad, ó en virtud de una autorizacion bajo el régimen preventivo, hay algunos que, en razon á su antigüedad, á la santidad de sus doctrinas y al número de los fieles que las practican, obtienen del Estado ciertas ventajas especiales y gozan de favores particulares. Estos cultos se designan ordinariamente con el nombre de cultos retribuidos por el Estado ó reconocidos por la ley, y la condicion escepcional que disfrutan tiene por objeto asegurar su existencia, su duracion y su preponderancia. Nuestra legislacion ofrece muchos ejemplos de estos privilegios introducidos en el seno de la libertad. Al mismo tiempo que se hacia libre la enseñanza, se mantenian los establecimientos fundados, sostenidos ó subvencionados por el Estado ó por los municipios. La ley sobre las sociedades de socorros mútuos, declarándolas libres, autorizaba tambien al gobierno para conceder su patronato y sus auxilios pecuniarios á aquellas que le pareciesen dignas de tal proteccion. Por este medio el poder político ejerce una influencia legítima y que nada cuesta á la libertad, y la sociedad defiende sus derechos sin herir al ciudadano en los suyos.

El reconocimiento legal de cultos particulares ofrece algunas de las ventajas de la autorizacion previa y no tiene sus inconvenientes: emanando de la ley, deja intacta la libertad. Como tiene por consecuencia privilegios especiales, autoriza

al Estado para estipular en cambio ciertas condiciones que redunden en interés propio y en el de la religion.

Uno de estos privilegios estaba consagrado por la Constitucion de 1848 y no ha dejado de existir. Los ministros de los cultos reconocidos perciben un sueldo del Estado. El abono de este sueldo ha sido vivamente combatido por hombres eminentes, y todavía lo es por los partidarios de la separacion absoluta de la Iglesia y del Estado. Se propone sustituir el sueldo público con contribuciones voluntarias pagadas por los fieles; se invocan la dignidad de la Iglesia y el respeto de las creencias; y se alega en favor de esta opinion el alivio que experimentarían los gastos públicos. En cuanto á la Iglesia, en el hecho de admitir una asignacion para sus ministros contrae, dicen, obligaciones que menoscaban su independencia. El Estado se cree autorizado para dictarla órdenes, y en cierto modo, para tenerla supeditada. Considera á los ministros del culto público como á funcionarios de que puede disponer. Arrancada de su elevada esfera, la religion no es ya mas que un servicio público, administrado como las aduanas y los derechos de puertas. Si se resiste á los apremios corruptores del poder, es víctima de su desagrado, de sus censuras, y á veces de sus violencias. Si le presta su apoyo, se convierte en un instrumento de mando. Una solidaridad comprometedora la entrega á los mismos ataques, á los mismos odios, á las mismas vicisitudes; su autoridad queda quebrantada, su voz sin eco. La sospecha altera la fé. Entonces no es ya Dios el que habla por boca de sus ministros, sino el poder temporal de que estos se han hecho complacientes servidores. Por otra parte, el sueldo abre la puerta á los abusos. ¿A qué reglas se ajustará el gobierno para la distribucion? El reconocimiento de los diferentes cultos, la distribucion de sueldos entre cada uno de ellos, y despues entre sus ministros, todo queda al arbitrio del poder. La dotacion de las iglesias no depende en este caso de la liberalidad de los fieles, sino que se mide por la mano avara del fisco, por el capri-

cho de un gobierno parcial, si profesa un culto cualquiera, indiferente si no profesa ninguno.

Las creencias, se añade, no quedan así mejor paradas ni menos ofendidas que la dignidad de la Iglesia. Bajo el imperio de una ley que permite á cada cual seguir su culto, que de nadie exige una profesion de fé religiosa, ¿qué derecho hay para forzar á los ciudadanos á contribuir á los gastos del sacerdocio? ¿Con qué derecho puede destinarse al culto profesado únicamente por una parte de los contribuyentes, por muy numerosa que ella sea, el producto de los impuestos que pesan sobre todos? ¡Qué iniquidad contra los sectarios de cultos no reconocidos! obligados á sostener directamente sus ministros, lo serán tambien á retribuir á los de los demas cultos que reprueban y que anatematizan.

Por último la dotacion del clero impone al Estado una carga muy pesada. Para hacerla frente, figuran en el presupuesto cerca de cuarenta millones, que desaparecerian de él si un impuesto atentario á las conciencias fuese reemplazado por contribuciones voluntarias que, lejos de ser onerosas, se pagan siempre con gusto á la religion á que uno pertenece, de la cual se esperan consuelos en esta vida y eterna felicidad en la otra.

Estas objeciones son graves, no negaremos su fuerza; pero no nos parecen fundadas.

Cierto es que la dotacion crea entre el Estado y los cultos que la perciben aquellas relaciones particulares que forman una confianza mutúa y la consecucion de un fin comun. Especialmente si el Estado tiene en cuenta los intereses terrestres y la Iglesia un dichoso porvenir, ambos se proponen un mismo objeto: el bienestar de la humanidad, el imperio de la justicia, el progreso de las ideas morales, que son el atributo y el honor de nuestra raza. Al asegurar al pueblo los auxilios espirituales por medio de la asignacion, el poder público se crea un auxiliar y de ninguna manera un esclavo atento siempre á sus órdenes. Viene á formarse un libre con-

trato en el que todos los derechos son respetados. Ninguno abdica su independencia. El sacerdote contrae deberes mas estrechos, pero estos deberes son definidos, y los mismos que se ha obligado á llenar al consagrarse al sagrado ministerio; ninguno hay que hiera su conciencia: el sacerdote contraeria las mismas obligaciones, sin ser menores las que los fieles se impondrian para atender á su subsistencia. Este convenio privado, inevitable á falta de una asignacion por el Estado no rebajaría menos la dignidad del sacerdote. En efecto, el sueldo señalado por el Estado, en nombre de la sociedad entera, honra al ministro de la religion y añade á su carácter sacerdotal el sello de una especie de magistratura civil. Por el contrario, pagado por los fieles, no es mas que un presente individual, dado como por favor y ofrecido únicamente á la mano que se abre para mendigarle. El Estado hace una distribucion sometida á reglas generales ó intervenida por los poderes públicos, para la cual tiene en cuenta la importancia de las funciones, los servicios prestados y las necesidades del pais. Los fieles obrando aisladamente, sin unidad, señalan al ministro una remuneracion ó insuficiente ó escesiva. Con la contribucion voluntaria, la posicion del sacerdote es precaria, incierta, dependiente; con la asignacion pública, es segura, regida equitativamente y considerada. Sostenido esclusivamente por contribuciones voluntarias, el culto palidece y vejeta en todos los puntos donde la indigencia de los fieles les impide asegurar la existencia de sus ministros, y los consuelos de la religion pueden llegar á faltar á aquellos que mas los necesitan. Pagado por el Estado, el culto recibe en todas partes la misma asistencia; sus beneficios se reparten por igual entre el pobre y el rico. Vemos, pues, que á la contribucion voluntaria va unido el privilegio y al sueldo por el Estado la igualdad. Estas razones son las que han aconsejado muchas veces la supresion de los réditos eventuales que percibe la Iglesia católica además de la asignacion pública, y las mismas que, cuando la negociacion del concordato, hicieron que el Papa

insistiese con particular empeño en recabar del Estado una asignacion para el clero católico.

Remunerado por el Estado, el culto viene á colocarse entre los servicios públicos. ¿Queda por esto degradado? Los servicios públicos comprenden todas las necesidades sociales, lo mismo las mas nobles que las mas oscuras; la justicia, la instruccion pública, las ciencias, las letras, las artes, todo lo que tiene relacion con la vida moral y material de la nacion. Los cultos pueden ocupar, sin deshonorarse, un lugar entre estos servicios. ¿Qué necesidad social es mas digna de la proteccion del Estado y del auxilio de las contribuciones públicas? Ninguna creencia, por mas timorata que sea, puede alarmarse de ello. El contribuyente toma parte en los gastos del Estado como miembro del cuerpo social y no en consideracion á su interés personal en tal ó cual gasto, ó con arreglo á las simpatías que le inspira. El habitante de las montañas contribuye al engrandecimiento de los puertos, el marino á la construccion de los caminos de hierro, el labrador al entretenimiento de las academias científicas, de los museos y de las bibliotecas, y el sabio á la instruccion del pueblo; el sacerdote, por su parte, contribuye á las subvenciones concedidas á los teatros. Pagar su contingente del impuesto no es un acto de adhesion á los mil empleos á que se destina. El presupuesto es una vasta suscripcion nacional en que, ante las satisfacciones y las necesidades generales, se borran las preferencias, los gustos y las predilecciones personales.

Es verdad que si los gastos del culto se dejasen al cargo personal de los que consintiesen en soportar esta carga, se disminuiria el presupuesto en la suma afecta al culto; pero ¿cuál seria la consecuencia de esta reduccion? O el gasto dejaría en realidad de hacerse, y en este caso los ministros del culto privados de medios de subsistencia, quedarían abandonados á la miseria y los altares espuestos al abandono; ó seguiría haciéndose el gasto, en cuyo caso los contribuyentes no habrían ganado otra cosa que el que la distribucion fuese

menos igual y mas arbitraria. La economía no se habria obtenido, ó bien se operaría á costa de los gastos de los ministros del culto.

Invócase el ejemplo de los Estados-Unidos de América. Allí, se dice, cada ciudadano contribuye como quiere á los gastos de su culto y al entretenimiento de los ministros que lo sirven. Una fecunda y dichosa emulacion escita así el celo del sacerdote. Este es respetado, el culto vive con vida propia, y no profana la religion el contacto del poder temporal. A este cuadro podríamos presentar relaciones dignas de fé que pinta con colores menos halagüenos la condicion de los cultos en la América del Norte; incesantes querellas religiosas, una concurrencia inquieta é interesada entre las sectas rivales, los sacerdotes sin porvenir alguno, implorando con el rubor en la frente el pan cuotodiano; pero hay consideraciones de un órden mas elevado que permiten recusar la autoridad de aquel ejemplo. Efectivamente, no se podria aplicar á la Francia la legislacion de un pais en que las ideas religiosas han conservado su ascendiente, en que una larga tradicion ha aclimatado la libertad de conciencia; en fin, en que los ciudadanos acostumbrados á contar con sus propias fuerzas para todo, no recurren al gobierno ni para los gastos del culto ni para otros muchos servicios de que las leyes encargan al nuestro. No queremos insistir mas en este paralelo.

Con razon, pues, la ley asegura en Francia un sueldo á los ministros de los cultos reconocidos, no siendo él la única ventaja de que disfrutan. Además se facilita una habitacion decente á los que ocupan las diversas categorias eclesiásticas, y cuando los recursos del culto no bastan á llenar esta obligacion, el gasto de habitacion es de cuenta del municipio.

La generosidad pública no se limita á la persona del ministro del culto; este mismo obtiene de ella los edificios en que se celebra. Estos edificios le están afectos de una manera permanente, no á titulo de propiedad sino de usufructo. Dispone libremente de ellos para sus necesidades. El Estado ó

el municipio los construye, los conserva y los repara, por medio de subsidios anuales ó de subvenciones accidentales. Como los cultos reconocidos tienen una constitucion estable y deben perpetuarse, los establecimientos que les están consagrados gozan tambien de una existencia propia. La liberalidad privada puede ejercerse en beneficio suyo, por disposiciones *inter vivos* y testamentarias; sin embargo, la ley no reconoce propiedad perteneciente á la Iglesia ó al clero, considerada como cuerpo colectivo; no formando ya el clero un órden en el Estado, semejante propiedad no podia ser admitida; pero cada uno de los establecimientos que tienen por objeto el culto puede adquirir, poseer, enajenar y disfrutar de todas las facultades anejas á las posesiones de los derechos civiles.

Estas ventajas, puramente materiales, tienen por complemento prerogativas que se refieren á los actos mismos de la religion. Sus ceremonias públicas, sus sermones, la celebracion de los santos misterios, todo está defendido por la espada del poder político. Para librar al culto de toda traba, para que el respeto no cese de ir unido á sus ministros, les están concedidos varios privilegios; están dispensados del servicio de la guardia nacional como encargados de otro servicio público. Se imponen rigorosas penas al escritor que los ultraja ó se mofa de ellos; al perturbador que desconoce en el sacerdote la santidad del sacerdocio, y en las ceremonias el respeto debido á los homenajes que se rinden á Dios. Una feliz prevision asegura la perpetuidad del sacerdocio. Los jóvenes levitas están exentos del servicio militar. Hay seminarios, facultades y escuelas donde poder prepararse para las augustas funciones del ministerio eclesiástico. Nada se ha escaseado para favorecer á los cultos reconocidos. La mano liberal del Estado subviene á todas sus necesidades. Su mirada paternal abraza su presente y su porvenir; leyes que rigen para el resto de los ciudadanos, quedan sin accion respecto á ellos. La fuerza pública se despliega en su defensa. En cambio de estas ventajas, les han sido impuestas condiciones, las cuales todas tienen

por objeto el interés público y sirven á los cultos mismos, porque son la consecuencia necesaria de los privilegios á que corresponden.

Al aceptar el sueldo, el sacerdote se convierte en un oficial público. El sueldo no es una pura munificencia del Estado; las rentas públicas no pueden aplicarse sino á empleos útiles. El Estado da el salario, el sacerdote su ministerio. Lo que los fieles le proporcionarian individualmente por medio de una retribucion voluntaria, lo que obtienen para ciertos servicios privados con ayuda del pié de altar en el culto católico, lo proporciona el gobierno á todos de una manera general con orden y regularidad, por medio de una asignacion permanente. El sacerdote por consiguiente, segun la regla uniforme de todas las funciones públicas, debe ser francés; además está obligado á cumplir exactamente su ministerio, y en su consecuencia á residir en el mismo sitio de sus funciones. No tiene que dar cuenta al poder civil del dogma que profesa, ni de la interpretacion que da á los libros santos; respecto á esto, no depende mas que de su creencia y del poder espiritual. Su deber es únicamente llenar su encargo, en cuanto se lo permita su fé, semejante al magistrado á quien nadie puede dictar sus fallos, pero que debe los auxilios de la justicia á cualquiera que fundadamente los demande.

En nombre de las necesidades públicas, para cuyas atenciones le paga un sueldo, el Estado vela para que ninguna parte del territorio esté privada del alimento espiritual y para que los lugares consagrados al culto no se multipliquen de manera que ocasionen gastos inútiles. A este efecto toma parte en la organizacion administrativa de los cultos, bajo las formas y con las restricciones que permite su respectiva constitucion. Contribuye á determinar las circunscripciones en que se halla dividido el territorio, el número de las iglesias, de los templos, las capillas, y demás lugares consagrados á la celebracion del oficio religioso.

Segun nuestro derecho público, los establecimientos eri-

gidos en personas civiles, no pueden recibir liberalidades sino es con la aprobacion del gobierno. Esta regla es necesariamente aplicable á los establecimientos del culto. Antes de conceder una autorizacion, el gobierno averigua si la voluntad del bienhechor ha sido violentada por influencias ilegítimas; si los establecimientos favorecidos tienen necesidad de nuevos recursos; si las familias no han sido despojadas por un espíritu de ciega venganza ó de una devocion escesiva; y por último, si hay parientes pobres que hayan sido privados de los recursos que los vínculos de la sangre les permitian legítimamente esperar.

A la posesion de bienes que se retiran de la circulacion por una amortizacion sin término, va unida la necesidad de una vijilancia especial. La autoridad civil interviene para legitimar las compras y las enagenaciones, para prescribir ó permitir el empleo de los capitales en rentas sobre el Estado, en reparaciones ó construcciones de inmuebles y en la compra de ornamentos. Llena las funciones de tutela que la ley le confiere respecto á toda corporacion colocada en el mismo caso que los menores.

Tambien pertenece al Estado otro poder, de naturaleza mas delicada por que toca los límites de lo espiritual. La ley que reconoce un culto, lo adopta con su constitucion, sus dogmas y sus máximas. El reconocimiento es un acto premeditado, cuyo objeto es definido; descansa sobre bases que el legislador ha tenido que reconocer, antes de concederle. Estas bases no pueden ser alteradas sin el voto del poder político, porque esto equivaldria á cambiar las condiciones del contrato, y una sola de las partes contratantes no puede hacerlo. El Estado no tiene derecho alguno para poner la mano en estas bases; pero debe ser informado de los cambios que se propongan, los cuales puede rechazar, si el órden social lo reclama. El gobierno no ejerce en este punto un poder activo y una autoridad de mando; solo está armado de una especie de *veto*. Procede como depositario de los intereses públicos.

no como pontífice, pero sí como magistrado. La ley debia consagrar este derecho del Estado; con todo no puede negarse que es mas bien nominal que verdadero. Es difícil suponer que los cultos reconocidos cambien su doctrina, y el Estado experimentaria algun embarazo en tomar partido en tales cuestiones. Aun en los gobiernos en que el soberano es jefe de la religion, escusa siempre intervenir en los asuntos que se refieren al dogma; esto es lo que últimamente ha sucedido en Inglaterra. Las garantías establecidas respecto á esto por nuestras leyes, no son mas, por lo tanto, que una precaucion tomada para casos estremos, y á la cual es probable que el gobierno no tenga nunca que recurrir.

Finalmente, el reconocimiento confiere á los miembros del sacerdocio un carácter oficial, porque, en cierto modo, vienen á ser delegados del poder público. Este toma parte, directa ó indirectamente en el nombramiento de los principales eclesiásticos, de los que deben ejercer una autoridad sobre los otros y en la eleccion de los profesores encargados de esparcir la instruccion en los seminarios y en las escuelas.

Tales son, en sus términos mas generales, las condiciones que van unidas al reconocimiento. Velar para que las necesidades religiosas de los pueblos sean satisfechas; ejercer la tutela sobre los intereses materiales de los establecimientos del culto; impedir las desviaciones que podrian alterar la doctrina ó comprometer el sacerdocio, tal es el pensamiento que ha dictado estas condiciones. Sigamos este sistema en su aplicacion á los diversos cultos actualmente reconocidos, los cuales son tres: el culto católico, el de los protestantes y el de los israelitas. Los colocaremos en el orden del número de los fieles.

CAPÍTULO III.

EL CULTO CATÓLICO.

Profesado por la gran mayoría de los franceses, el culto católico abraza toda la República en sus circunscripciones. El

territorio de la Francia está dividido en sillas metropolitanas, estas en diócesis y las diócesis en curatos y ayudas de parroquia. A estos títulos eclesiásticos son anejos los arzobispos, los obispos, los curas y los ecónomos. La Iglesia católica tiene además entre sus ministros los vicarios, los capellanes y los limosneros, como tambien, en el órden de la enseñanza, los directores y los profesores de los seminarios; en el órden de la predicacion, sacerdotes diocesanos y estradiocesanos, y en el órden de la administracion vicarios generales. Entre los numerosos elementos de que se compone su organizacion hay dos que, por decirlo así, forman el cuadro en cuyo centro están colocados los demás; estos son la diócesis y la parroquia. Bajo el punto de vista de la disciplina ó de la gerarquia, las diócesis son metrópolis ú obispados, y parroquias, curatos ó ayudas de parroquia; pero en cuanto al servicio divino y á la administracion, las diócesis y las parroquias son semejantes entre sí. El metropolitano es el obispo de su diócesis, el ecónomo es el cura de su ayuda de parroquia.

La diócesis es el dominio eclesiástico del obispo, que ejerce su gobierno espiritual y es en ella el conservador de la fé y de la disciplina. Propaga la doctrina por medio de la enseñanza y puede vengarla valiéndose de las censuras. La impresion de los libros de iglesia, rezos y súplicas, necesita su permiso. Es un derecho de alta vijilancia que tiende á preservar los libros santos de toda alteracion y á es-cudar á los fieles contra las publicaciones heterodoxas y hasta contra las incorrectas é irregulares: esta no es una propiedad que pueda venderse como la obra de un escritor. El obispo fija la disciplina por sus rituales, mandamientos y ordenanzas sinodales, y la mantiene con su jurisdiccion correccional. Está obligado á residir en la diócesis y á visitar personalmente una parte todos los años, y la totalidad en el espacio de cinco. Nombra y revoca todos los ecónomos, teniendo el mismo derecho sobre los curas, pero salva la aprobacion del gobierno. Es inamovible, y el Estado le facilita habitacion. La

publicacion de sus mandatos y ordenanzas está asimilada á la de los actos de la autoridad pública.

Cerca del obispo y para asistirle en sus funciones están los vicarios generales y un capítulo. Los primeros son sus auxiliares, sus colaboradores y sus representantes. Su poder se fija por la delegacion que reciben y que se limita á ciertos objetos. La voluntad del obispo decide. Sin embargo, hay funciones que van unidas al episcopado y que el obispo no podria delegar sino en otro obispo. El nombramiento de los vicarios generales está sometido al beneplácito del gobierno.

El capítulo es el consejo del obispo. A título de tal, sus funciones consisten únicamente en deliberar y en dar su parecer sobre las cuestiones que se le someten. No es independiente del obispo, quien no está obligado á consultarle ni á seguir sus consejos. Hace algunos años un respetable prelado confirió al capítulo de su diócesis atribuciones mas amplias, y fundó instituciones diocesanas: este ensayo merece estudiarse. El efecto de su adopcion seria aplicar á la administracion eclesiástica una de las formas seguidas por nuestra administracion civil, y la utilidad que aquí presenta permite creer que la Iglesia ganaria mucho generalizándola.

Independientemente de su participacion en los actos episcopales, el capítulo celebra el oficio canonical y los demás que requieren su asistencia. Cuando está vacante la silla, elige, salva la aprobacion del gobierno, vicarios generales capitulares para gobernar la diócesis. Sus miembros tienen el título de canónigos.

Pertenece al obispo la direccion de los establecimientos fundados para asegurar la perpetuidad del sacerdocio, como tambien el conferir las órdenes sagradas á los individuos de su diócesis. Sin su permiso no puede ningun sacerdote abandonarla para ir á servir en otra.

Tales son, segun las leyes y los reglamentos, las atribuciones del episcopado. Los que de ellas están revestidos ejercen los mas estensos poderes; una autoridad absoluta para todo

lo espiritual, la dirección suprema de la diócesis, el gobierno general de los establecimientos de instrucción eclesiástica, la renovación del clero, la jurisdicción disciplinaria, la censura de los libros del culto, nada falta al prelado de lo que puede contribuir á la propagación de la fé, á la prosperidad de la Iglesia, al libre ejercicio de las funciones religiosas; el obispo gobierna como monarca absoluto y casi sin censura.

Aunque colocada la diócesis y puesta bajo la mano siempre todo-poderosa del obispo, la parroquia tiene su existencia diversa, sus establecimientos y sus ministros. Un administrador espiritual se halla en ella encargado de las funciones eclesiásticas, con el nombre de párroco ó de ecónomo, á quien pertenecen las funciones que por su naturaleza son parroquiales, como el derecho de administrar los sacramentos á todas las personas domiciliadas en el territorio de la parroquia, y de darles, en caso de muerte, sepultura eclesiástica. En el ejercicio de sus funciones espirituales el párroco ó el ecónomo son completamente independientes del poder civil; no reconocen mas ley que su conciencia y su fé, ni mas jueces que sus superiores eclesiásticos; pero en el gobierno de los intereses temporales de la parroquia, están sometidos á reglas y condiciones consignadas en las leyes y en los reglamentos administrativos.

La parroquia posee bienes y rentas que administra por sí. Bajo este aspecto toma el título de fábrica, y está regida por un consejo. El consejo de fábrica, es nombrado en parte por el obispo y en parte por el prefecto, lo mismo cuando se instala ó en su totalidad, que cuando solo se trata de renovarle parcialmente, lo cual se hace por fracciones y por medio de elecciones hechas en su propio seno. Maneja los bienes, forma los presupuestos y las cuentas y delibera sobre los negocios de la fábrica; ordena ó aconseja según las circunstancias. Los actos de simple gestión están confiados á una mayordomía de fábrica, que hace las veces de poder ejecutivo. El alcalde y el párroco son miembros del consejo de fábrica ó

igualmente excluidos de la presidencia, para que ninguno de ellos predomine. El párroco desempeña siempre y exclusivamente la mayordomía de fábrica. Las deliberaciones del consejo deben, según los casos, ser aprobadas por el obispo, por el prefecto ó por el gobierno.

Además de los bienes que le están afectos por el Estado, de los que compra, y de los que la donan los particulares, la fábrica está autorizada para hacer colectas y para percibir ciertos derechos, en particular por el alquiler de sillas y bancos y por las inhumaciones. En el caso en que estos ingresos no basten á cubrir los gastos, el comun está obligado á sufrir el déficit, después de haberle sido comunicado el presupuesto, á fin de discutir sus artículos. Por su parte el párroco ó el ecónomo poseen rentas que les son propias. Además del sueldo que disfrutan por el Estado, pueden recibir, con la aprobación del gobierno, y bajo su título oficial, liberalidades con obligación de servicios religiosos y sin ella, destinadas á su subsistencia y á la de sus sucesores; é igualmente se hallan autorizados para percibir en ciertos casos, oblações que están marcadas en cada diócesis por un reglamento que el obispo redacta y somete á la aprobación del gobierno.

El culto se celebra en la iglesia parroquial y en las capillas y anejos cuya apertura está autorizada en su territorio, y está servido por los eclesiásticos de los diferentes órdenes, provistos de títulos oficiales ó simplemente agregados por el obispo ó por el párroco, los cuales dicen en ellas misa, administran los sacramentos y predicán. Eclesiásticos particulares, sin empleo fijo, ó estraños á las parroquias, son llamados en ciertas épocas para las predicaciones estraordinarias. Su nombramiento se hace por los mayordomos de fábrica, á presentación del párroco, entre los sacerdotes autorizados especialmente por el obispo. La fábrica paga sus honorarios. La ley prohíbe las misiones en el interior, dejando á los pastores ordinarios el cuidado de alimentar el rebaño de Dios, por temor á que los misioneros, guiados por un exceso de ce-

lo ó por un espíritu turbulento, turben la paz de las conciencias.

De esta manera se atiende á las necesidades del culto católico en toda la estension de la República. El servicio de los altares está confiado mas especialmente á los párrocos y á los sacerdotes que les sirven de auxiliares. Ellos son los que llevan el peso del dia, los que celebran los santos misterios, los que dirigen á los fieles la palabra divina, los que consuelan á los afligidos, tranquilizan las conciencias alarmadas y llenan todas las funciones del ministerio eclesiástico. La direccion espiritual está encomendada principalmente á los obispos. Toda esta milicia sagrada obedece la ley de la gerarquía que es la consecuencia de la unidad y de la autoridad, fundamentos y principios de la religion católica. La Iglesia toda está sometida al soberano pontífice que se sienta en la Silla de San Pedro, por una cadena no interrumpida de subordinacion. Cualquiera decision de Roma, en materia espiritual, tiene fuerza de ley. Trasmitida al obispo por el Vaticano, á los sacerdotes inferiores por el obispo, y comunicada por aquellos al pueblo de los fieles, obliga al mas elevado lo mismo que al mas humilde, y en todas partes debe encontrar obediencia y sumision.

En vista de estos detalles puede formarse una idea de la organizacion actual y del régimen general de la Iglesia católica en Francia, organizacion poderosa bajo la cual goza el clero de prerogativas tan numerosas como importantes. Al consagrar estas prerogativas, el Estado no podria quedar desarmado ante un poder que se estendia sobre todas las municipalidades de la República, que levantaba púlpitos hasta en el último pueblecillo, y que, por su fuerza centralizada, podia amenazar al mismo gobierno. El ejemplo de lo pasado servia de enseñanza para el porvenir; si se habian operado grandes cambios en la opinion, en las costumbres, en las instituciones públicas, en el espíritu mismo del clero, no estaban conjurados todos los peligros, y los monumentos antiguos ofre-

cian modelos que la prudencia mandaba aplicar al tiempo presente. En esta atencion, el gobierno consular publicó al mismo tiempo que el concordato celebrado con el Santo Padre, los artículos orgánicos que habian de combinar su ejecucion con los derechos del poder político.

Los artículos orgánicos han sido objeto de los mas vivos y apasionados ataques; se ha negado su valor legal en su mismo origen, y se ha dicho que estaban anulados por las Constituciones posteriores; pero no es difícil contestar á estas objeciones.

Sin inquirir si, como se supone, ha protestado el Santo Padre contra los artículos orgánicos; sin consultar sobre esto la historia, donde se encuentran los documentos mas contradictorios, nos limitaremos á una observacion que hace inútiles semejantes investigaciones. Los artículos orgánicos son una ley del Estado, votada, sancionada, promulgada por los poderes públicos. Entre las leyes del Estado á nadie le es permitido establecer diferencias para obedecer las unas y hollar las otras; todas tienen derecho al mismo respeto. Una religion que prescribe la obediencia á los poderes establecidos, debe ser la primera en dar ejemplo de esta sumision. La doctrina contraria es atentatoria al orden social. Es indudable que lo espiritual y lo temporal deben hallarse separados; nadie lo niega hoy día: es el principio del derecho moderno, la prenda de la libertad de la Iglesia y de la independencia del Estado; el término de las luchas entre el sacerdocio y el imperio; pero hay una multitud de objetos mistos en que ambos poderes están mezclados, y corresponde al poder político juzgar qué clase de cuestiones son las que pertenecen á su dominio, y resolverlas. Reconocemos, sin embargo, que llamar al Estado y la Iglesia á deliberar sobre esto en comun, á concertarse, á entenderse, es el medio mas seguro para mantener la buena armonia; es el que debe buscar desde luego un gobierno prudente; es la via que en 1848 propuso seguir el comité de Cultos de la Asamblea constituyente, cuan-

do fué de parecer de que se entablasen negociaciones con el Santo Padre sobre cuestiones que, en rigor de derecho, podia decidir el poder político: consejo prudente y que merece ser tomado en consideracion. Ningun poder sabio usa de su derecho hasta el extremo. La Iglesia, lo mismo que el Estado, haria un mal uso del suyo, ejerciéndole sino en el último caso. Semejante reserva está en el espíritu de nuestras instituciones modernas, que consagran derechos muchas veces contradictorios en su aplicacion absoluta, y de este modo hacen necesaria la moderacion é inevitables las transacciones. Lo que es verdadero para las relaciones de los poderes políticos entre sí, no lo es menor para las relaciones del poder civil con el poder religioso. Los concordatos son el instrumento de esta conciliacion. Que el gobierno pues, negocie con Roma, si no hace ninguna concesion peligrosa, nadie se lamentará de ello, y los amigos de la religion lo aplaudirán; pero, entretanto, nadie tiene derecho para revelarse contra leyes que están en vigor desde cincuenta años hace y revestidas de todas las formas que las hacen obligatorias.

Por otra parte, los que las atacan incurren en una singular inconsecuencia; se guardan muy bien de poner en duda la autoridad de las disposiciones favorables á la Iglesia católica. Asi es que los cánones de la Iglesia han recibido la fuerza legal, y la jurisprudencia de los tribunales se ha prevalido de esto para prohibir el casamiento de los sacerdotes; así es que los ecónomos de las ayudas de parroquia, que están encargados de la cura de almas, como que llenan todas las funciones parroquiales, han sido declarados revocables por los obispos, por derogacion de la doctrina inmemorial de la Iglesia: — se aprueban estas disposiciones, y á los que en defensa de los ecónomos oponen las tradiciones á los artículos orgánicos, se les responde que estos articulos tienen fuerza de ley, que se aplican hace cincuenta años, y que no pueden ser modificados sin el consentimiento del Papa. Despues de hacer una distincion entre las leyes del Estado para invalidar los artí-

culos orgánicos, hacen otra entre estos mismos artículos para conservar algunos y rechazar otros.

En cuanto á las constituciones que han seguido á los artículos orgánicos, todas, al admitir cultos cuyos ministros tienen derecho á un sueldo público, han conservado al mismo tiempo las condiciones particulares con que se concedia el reconocimiento, y las garantías debidas al Estado. Importa notar desde luego las profundas modificaciones que han sufrido los artículos orgánicos, bien por los actos del gobierno, bien por otros á que ha prestado su asentimiento tácito. El decreto de 28 de febrero de 1810, que tiene fuerza de ley, borró los artículos que habian producido mayores quejas. Otros han caido en desuso por falta de ejecucion. Así es que el artículo 39 no admitia mas que una liturgia y un catecismo para todas las iglesias de Francia: cada diócesis tiene su liturgia y su catecismo; diversidad sensible, pero que el poder político no ha creído poder impedir. Antes estaba prescrito el traje de los eclesiásticos; hoy se deja á los obispos el cuidado de arreglarlo. Las calificaciones que los obispos podian recibir estaban señaladas; ahora se dejan á la conveniencia de cada uno. Podríamos multiplicar estos ejemplos hasta lo infinito. Para apreciar los artículos orgánicos es preciso, pues, consultar menos su tenor que el espíritu con que se aplican. No obstante, lo que queda es considerable, y nosotros no queremos atacar su importancia ni debilitar su autoridad; pero, ¿resulta de esto, como pretenden algunos espíritus ardientes, la esclavitud de la Iglesia católica? ¿Las garantías que han quedado en pié no son, por el contrario, indispensables á la sociedad civil é inherentes á la misma constitucion de la Iglesia católica? Esto es lo que debe examinarse.

Tres cosas llaman la atencion en el régimen de esta Iglesia: la primera es su subordinacion á un príncipe extranjero; la segunda su organizacion gerárquica estensiva á todas las partes del territorio; y la tercera la autoridad conferida al superior eclesiástico y las franquicias del ministerio religioso.

Las tres esponian al Estado á una sujeccion incompatibles con sus derechos inalterables y á turbulencias interiores; al clero inferior á la opresion, y á los ciudadanos á procedimientos arbitrarios. En todas ellas se han introducido precauciones especiales.

Para impedir los atentados de la dominacion extranjera, se ha puesto en vigor las garantias consagradas por un uso inmemorial bajo el nombre de *libertades de la Iglesia galiana*.

Para prevenir los conciertos que podrian formarse entre los ministros del culto católico, en mengua del gobierno y contra sus intereses, las Asambleas de estos ministros se han sometido á la *autorizacion previa*.

En fin, para proteger á los inferiores contra los abusos del poder y á los ciudadanos contra la arbitrariedad, se han restablecido los *recursos de fuerza*.

A estos tres órdenes de garantías se refieren las disposiciones aun en vigor de los artículos orgánicos. Cada una de estas medidas debe ser objeto de observaciones particulares. Hablemos desde luego de las que constituyen las libertades de la Iglesia galiana.

La subordinacion de la Iglesia católica á un jefe que reside en el extranjero, ofrece ventajas incontestables. Cuando el jefe de la religion habita el territorio nacional, su poder amenaza á la libertad sí, como sucede en otros paises, confundido en las mismas manos que el poder civil, concentra en ellas todas las fuerzas que pueden sojuzgar á los pueblos; si es independiente y distinto, amenaza la tranquilidad pública y la seguridad del poder político, en el hecho de poder lanzar contra este los anatemas de la religion. La libertad, la tranquilidad pública y la seguridad del gobierno están menos espuestos en los paises en que el poder religioso pertenece á un jefe extranjero, entregado á los cuidados de una administracion temporal, adquiriendo en ella la esperiencia de las necesidades de la politica y de los diferentes medios que exige, di-

vidiendo la soberanía espiritual entre los diversos Estados que componen la familia religiosa de que es padre, y sometido de este modo á la dichosa necesidad de seguir las reglas de sabiduría que inspiran confianza y deberes de caridad que cautivan la afeccion. Sin embargo, el peligro está conjurado en parte, pero no desaparece por completo. Todo poder se inclina á la invasion. El religioso, tan empapado como se halla en el espíritu de paz, indulgencia y moderacion, no está libre, conteniendo órganos humanos, de esta ley de la humanidad. Y está tanto mas expuesto á ceder á ella, cuanto mas sincero, y mas ardiente es su convencimiento. Por otra parte, el Estado queda desarmado en presencia de un jefe religioso residente en otro territorio é investido el mismo de la soberanía. No puede despojarle de su autoridad, deponerle ni romper sus armas espirituales. ¿Qué le queda? El derecho de defender su territorio contra todo lo que pudiera atentar á su propia soberanía.

Con este objeto, el gobierno se atribuye en primer lugar el derecho de investigar los actos de la corte de Roma, antes de que se pongan en ejecucion. Derecho consagrado por una costumbre general, y por un uso inmemorial.

«No se podria, escribe Portalis, rehusar este derecho á un gobierno sin disputarle el de conservacion y defensa. El sistema que asegurase la ejecucion inmediata de los actos de la corte de Roma, sin la revision prévia, favoreceria la introduccion en los Estados católicos de una multitud de reglamentos, muchas veces inconciliables, bien con la disciplina religiosa, bien con el orden de estos Estados. Destruiria la independencia de los gobiernos y someteria su autoridad á una legislacion extranjera, indefinida y superior. La misma regla es aplicable, por iguales razones, á los decretos de los sinodos extranjeros y aun á los de los concilios generales.

En segundo lugar, las precauciones tomadas contra la corte de Roma son extensivas á sus delegados. Ningun individuo titulado nuncio, legado, vicario ó comisario apostólico,

prevaleándose de cualquiera otro título, puede ejercer en el suelo francés ni fuera de él ninguna función relativa á los negocios de la Iglesia galicana, sin autorizacion del gobierno. Si los agentes del Santo Padre tuviesen el derecho de llenar oficialmente funciones eclesiásticas ó políticas en Francia, los derechos del clero nacional y los del gobierno peligrarian igualmente.

Por último, el Estado adopta oficialmente los principios consignados en la declaracion del clero de 1682, principios que en todas épocas han sido la regla de la Iglesia de Francia.

Estas tres disposiciones principales, la aprobacion de los actos de la corte de Roma, la esclusion de todos sus delegados no autorizados por el gobierno, y la adopcion legal de la declaracion de 1682, son lo que los artículos orgánicos han tomado á las libertades de la Iglesia galicana, ó por mejor decir, á las libertades de todas las iglesias católicas establecidas fuera de Roma; porque es un error considerar estas disposiciones como exclusivamente aplicables á la Francia: son comunes á todos los Estados católicos.

Ciertos espíritus, mas ardientes que rectos, claman vivamente contra estas libertades, sin escusar sarcasmos ni injurias. Se las señala á las preocupaciones parlamentarias, como contrarias y hostiles á la Iglesia; se dice que existen sin motivo, que volver á ellas es un anacronismo. Todo ha cambiado en el mundo, se ha consumado la separacion absoluta de lo temporal y de lo espiritual, ó mas bien, en tanto que Roma ha renunciado á mezclarse en los asuntos del Estado, este es el que siempre pretende dominar á la Iglesia, y forjarle cadenas además bajo el engañoso título de libertades de la Iglesia galicana.

Es cierto que se han verificado grandes cambios: pero acaso, ¿no se han tenido en cuenta? Basta comparar los artículos orgánicos con las libertades de la Iglesia galicana, tales como las redactó Pedro Pithou, para conocer que se ha dado cabida en las instituciones nuevas al espíritu de la revolucion

de 1789, y á los acontecimientos que la siguieron. Por otra parte, ¿resulta de estos cambios que el Estado no haya tenido que tomar algunas seguridades y que pueda, sin peligro, dejar el campo libre á la Iglesia? ¿Roma se muestra en todas partes fiel á una misma doctrina? ¿No la vemos estipular en España el reinado absoluto del catolicismo, defender en el Piamonte las jurisdicciones eclesiásticas y en Inglaterra dividir el territorio entre sus diócesis? ¿Hay alguien que ose afirmar que sabrá resistir siempre al espíritu de invasion que mas de una vez le ha hecho apartarse de la buena senda? ¿Hay alguien que ose afirmar que ninguno de estos decretos será nunca contrario al derecho público de la Francia, que ninguno de los delegados del Papa cometerá jamás una usurpacion, que en ellos no encontrarán eco las doctrinas ultramontanas? La Francia está mas interesada que los demás Estados en defenderse contra estas invasiones; ha conquistado laboriosamente, á costa de muchas revoluciones y de la sangre mas generosa de sus venas, los grandes principios en que descansan la dignidad del hombre y la libertad de las creencias; no puede por lo tanto dejarlos espuestos á los atentados de sus antagonistas. Cuenta en sus anales recuerdos que justamente la enorgullecen y que provocan amargas quejas: ¿dejará que se marchiten por medio de actos que se cubrieran con la autoridad de la Iglesia? En sus leyes ha inscrito doctrinas que forman su religion civil; ¿permitirá que sean combatidas desde la silla pontifical? Libertad completa para las opiniones individuales que la verdad se esclarezca por la discusion; pero resistencia á los pensamientos hostiles á nuestro nuevo régimen, que se coloquen bajo el patronato de la tiara.

Los artículos orgánicos que han puesto el sello legal á las antiguas libertades de la Iglesia galicana, son un arma que el Estado podria emplear en caso necesario para su defensa, pero que deja en la vaina en tanto que no se le obliga á sacarla. Nada hay en esta legislacion que recuerde las antiguas y memorables luchas de la Iglesia y de los Parlamentos, y si

hay alguien que cometa anacronismos son los que rehusan ver en ella la reserva y la moderacion que caracterizan la conducta actual del poder civil respecto al poder espiritual.

No con menos sinrazon se atacan las disposiciones que someten al permiso espreso del gobierno los concilios nacionales ó metropolitano y las demás Asambleas deliberantes del clero. La necesidad de este permiso ha sido reconocida en todos tiempos. Antiguamente era un principio de derecho politico el que no pudiera celebrarse ninguna Asamblea sin la autorizacion del gobierno. Aun bajo el régimen de libertad, que permite á los ciudadanos reunirse para deliberar sobre sus intereses privados, para emitir sus votos ó entregarse á manifestaciones politicas, subsiste el principio de autorizacion respecto á toda reunion compuesta de personas investidas de de un carácter público; provistas de una capacidad oficial y que en calidad de tales se propongan acordar resoluciones. Los magistrados, los militares, los empleados en la administracion, en ningun caso podrian formar Asambleas sin el permiso del gobierno. La misma prohibicion está impuesta, por simples comunicaciones, á los consejos generales de los departamentos aun estando formados por eleccion, y con este motivo, colocados en cierta independencia del poder. Si pudiesen celebrarse libremente semejantes Asambleas, el poder público estaria de continuo minado por las revoluciones que en ellas se tramasen y por las coaliciones que en su seno se formarían. Lo mismo debe suceder respecto al clero, por mas que su mision puramente espiritual no se relacione en nada con la accion misma del gobierno. Es necesario que este pueda asegurarse de que las deliberaciones no saldrán de esta misma esfera; y ¿cómo podria hacerlo si las Asambleas se forman sin su consentimiento? Además, aun en el círculo de las cuestiones espirituales, el magistrado politico es el juez supremo de la oportunidad, de la conveniencia de las deliberaciones proyectadas. Procediendo de otro modo, ¿en dónde habria garantías contra las deliberaciones que turbasen las

conciencias, alterasen la pureza del dogma é hiriesen á la misma religion? A pesar de estas poderosas consideraciones, los obispos de varias subdivisiones metropolitanas han anunciado en estos últimos años la intencion de reunirse en sínodo, sin el competente permiso. El gobierno se apresuró á darles de oficio un permiso sin el cual parecian dispuestos á pasarse. Seguramente no se les hubiera negado, caso de ser pedido; pero se quiso usar de una independencia que no estaba reconocida, ni aun en la Constitucion en que pretendian apoyarla. Estos conflictos son muy de lamentar. ¿Cree el clero que es superior á las leyes y que le conviene enseñar al pueblo, con su ejemplo á despreciarlas?

En otro tiempo eran frecuentes las Asambleas del clero; ordinariamente se autorizaban cada cinco años: el de las diócesis se reunia á su vez en sinodos; pero estas reuniones tenían por objeto intereses temporales y económicos que han dejado de existir. Propietario de bienes considerables, dispensado del impuesto que reemplazaba á su gusto con donaciones voluntarias, constituido en orden del Estado, el clero sentia la necesidad de arreglar sus asuntos. Hoy es muy diferente, y sin embargo todavia pueden ofrecer considerables ventajas las Asambleas electorales. Si no nos equivocamos, serian eminentemente provechosas para hacer revivir las antiguas tradiciones y las máximas de la Iglesia galicana. Se deplora la influencia y el progreso de las doctrinas ultramontanas; pero, ¿dónde puede hallar el clero católico una direccion, consejos y luces, sino es en Roma? No se nos ocultan las dificultades que acaso nacerian de este retroceso, á antiguas costumbres caidas en desuso, y los embarazos que podrian suscitar al gobierno Asambleas que tal vez cediesen al ejemplo de nuestros cuerpos políticos: mas; abrigamos la confianza de que se inspirarian sobre todo en el espíritu del Evangelio, y que, sin menoscabo de los derechos del poder político, la Iglesia galicana hallaria en ellas el punto de apoyo que le falta.

Para terminar la esposicion de las garantías inscritas en

los artículos orgánicos, nos falta hablar de los recursos de fuerza.

El origen de los recursos de fuerza se remonta en gran parte á circunstancias que ya no existen. Su principal objeto ha sido reprimir las invasiones de las jurisdicciones eclesiásticas; servian hasta para proteger á la iglesia galicana contra las pretensiones de la corte de Roma; así es que la Asamblea de Bourges en 1458, despues de haber redactado la Praemática, la colocó bajo la proteccion del rey para ponerla al abrigo del poder pontifical. Ya no pueden descansar sobre estas bases los recursos de fuerza; pero hay otras razones que las hacen necesarias, y que tienen su origen en los derechos y prerogativas conferidas á la Iglesia católica y á sus ministros por el concordato mismo y por los artículos orgánicos. Para probarlo basta presentar el cuadro de estos derechos y prerogativas; el clero puede considerarse en sus relaciones con el Estado; en las de los superiores con los inferiores, y por último en las que mantiene con los ciudadanos individualmente.

En sus relaciones con el Estado, el clero católico está investido de un privilegio considerable, que ningun otro cuerpo posee, el de dirigirse directamente al público en la persona de los fieles, con un carácter oficial y reconocido por el poder político. Todos los sacerdotes tienen el derecho de la predicacion y no pueden ser depojados de él sino por la autoridad del obispo. Estos están autorizados para espedir mandamientos, cartas pastorales é instrucciones, que se publican y fijan lo mismo que los actos de la autoridad pública. Es verdad que deben mantenerse dentro del circulo de las funciones espirituales, pero pueden escederse. Por otra parte, hay asuntos que, si bien unidos estrechamente á los casos de religion, llevan consigo intrusiones en el dominio de la temporalidad. Cierto es que las leyes castigan las infracciones que podrian cometerse á la sombra, ya sea de publicaciones, ya de la cátedra del Espíritu-Santo: mas las leyes no han previsto todos los casos, y llevan ademas el sello de un rigor que mu-

chas veces las hace inaplicables: obligan únicamente á desplegar el aparato judicial. El gobierno podria suspender tambien la asignacion del eclesiástico, derecho que es incontestable; pero esta pena es mezquina, desigual en sus efectos, y las mas veces impotente y mas propia para irritar los ánimos que para calmarlos. El carácter sacerdotal escapa por lo demas á todo castigo. Los obispos y los curas son inamovibles; los demas sacerdotes solo dependen de los obispos. ¿Se obligará al gobierno á guardar silencio ó á intentar persecuciones criminales? Si calla, la sociedad no queda vengada, y lo es demasiado, si recurre al uso de las leyes penales.

En las relaciones de los superiores con los inferiores, existe la misma necesidad de garantías particulares. Los inferiores han perdido todas las que poseian en el antiguo derecho. Como las jurisdicciones eclesiásticas habian cedido al espíritu de invasion habitual á todas las jurisdicciones, se las ha suprimido. La curia eclesiástica que ejercia los poderes disciplinarios, con sus fórmulas, sus reglas y su jurisprudencia, fué reemplazada por los obispos solos, cuyo poder es discrecional. Si los principios elementales de toda justicia han sido violados; si el castigo no ha sido oido, ni permitiéndosele invocar testigos que debian hacer culpable su inocencia, el poder civil le debe la asistencia que no se rehusa al último de los ciudadanos.

Finalmente, el sacerdote puede otorgar ó rehusar su ministerio; pero si usa de procedimientos que comprometen el honor de los ciudadanos, que alteran las conciencias, ó degeneran en opresion, en injuria y en escándalo, ¿á qué recurso se acudirá? ¿A los tribunales? ¿Entonces cuántos procesos humillantes y crueles se entablarian, de esos que no constituyen un delito y que toman su gravedad del hábito sagrado que vistió su autor!

Es necesario prestar auxilio al Estado contra la palabra ó la pluma oficial que ataca ó desconoce sus derechos; al inferior contra el superior que le aplica una justicia sin regla, sin freno; al ciudadano contra el ministro del altar que le ul-

traja. Este auxilio se encuentra en los recursos de fuerza, y de aqui la utilidad que conservan en el dia. Se han modificado profundamente, y puede decirse que de los antiguos recursos no existe mas que el principio de aprobacion reservado al poder civil, porque todo lo demás ha cambiado, el juez, el procedimiento y la forma de la sentencia.

El clero era justiciable por los parlamentos, es decir, por los cuerpos judiciales dominados por el espíritu de la toga, y algunas veces por el espíritu de secta, doble preocupacion que frecuentemente esponian á la justicia á dejarse estraviar. No quiera Dios que pongamos en duda los servicios prestados por estos grandes cuerpos de la magistratura; pero sin dejar de rendir homenaje á su independencia, á su valor y á su enérgica perseverancia, es permitido decir que hasta estas mismas cualidades le imprimian una rigidez, una inflexibilidad que podia inspirar recelos al clero, y que, con aquel sistema, la Iglesia y el Estado se hallaban enfrente uno de otro mas bien como dos adversarios en lucha, que como dos fuerzas que, sin anularse, pueden combinarse. A los parlamentos sucedió, para las apelaciones contra abusos, el Consejo de Estado, cuerpo á la vez político y administrativo, que se identifica con el gobierno, que comprende las necesidades de los negocios públicos, y que jamás puede dejarse llevar ni de celos que nunca podrian afectarle, ni de una necesidad de invasion contra la cual le defiende su constitucion.

Los recursos de fuerza se instruian ante los parlamentos como verdaderos procesos. La solemnidad de las fórmulas hacia las diligencias ardientes, vivas y apasionadas. Ante el Consejo de Estado, la instruccion se hace administrativamente, siendo entablada por el ministro, á quien las partes pueden dirigirse desde luego, siempre que se trata de intereses privados, y que puede interponerse oficiosamente antes de que empiece el debate. Las cuestiones se examinan con calma, lejos del ruido de la publicidad, con la sola preocupacion de la justicia y los intereses públicos. La naturaleza de las deci-

siones es asimismo diferente. Si los hechos que han dado lugar á una queja no son justificados, son inocentes ó carecen de gravedad, el Consejo de Estado desestima la queja sin ruido y sin escándalo; si parecen bastante graves para merecer una represion penal, el Consejo de Estado envia el juicio á los tribunales; sino exigen esta severidad, interviene, con su dictámen por medio de una declaracion de abuso, es decir, una censura del eclesiástico culpado. Es cierto que esta pena es puramente moral; pero á pesar de protestas mas orgullescas que sinceras, la esperiencia prueba que no está desprovista de eficacia, ni es indiferente á la Iglesia. No queremos mas prueba que las reclamaciones que se han elevado. La naturaleza puramente moral de la pena corresponde á la de los hechos á que se aplica y es una garantía dada al clero contra las injusticias del poder civil. La declaracion de abuso, dirigiéndose especialmente á la opinion, no tiene fuerza sino cuando esta la ratifica, y el gobierno no se espondria á pronunciar una sentencia que la opinion pudiera hacer pedazos.

Las apelaciones contra abusos no son únicamente un medio de disciplina, sino tambien una proteccion eficaz que cubre al clero contra las enemistades privadas. Ningun sacerdote puede ser perseguido en juicio, á peticion de una parte privada, mientras el Consejo de Estado no le envíe ante los tribunales. El sacerdote goza asi de la inmunidad concedida á los funcionarios públicos, feliz asimilacion que previene el escándalo, y que impide entregar á la publicidad de las audiencias, la malicia de los comentarios y á los filos de la abogacia, una multitud de diferencias secundarias, inseparables de las funciones múltiples, complexas y delicadas del ministerio eclesiástico; sábia precaucion, sin la cual quedaria coartada la libertad de las predicaciones, se veria puesta á discusion la administracion de los auxilios espirituales, y el púlpito, el confesionario y la sacristia llevados á la barra judicial.

Todavia no son estos los únicos recursos que prestan al clero las apelaciones contra abusos. Segun los términos de los

artículos orgánicos, el clero puede recurrir á ellas en la parte que á él se refiere, y diferir al Consejo de Estado los actos de la autoridad que hubiesen menoscabado el ejercicio público del culto y la libertad que las leyes y los reglamentos garantizan á sus ministros.

Así pues, las apelaciones contra abusos, tales como la ley orgánica las ha instituido, corresponden á las necesidades y las conveniencias del nuevo régimen, no estando menos justificadas por razones políticas que por el texto de la ley, y formando una parte esencial de la Constitucion dada á la Iglesia católica en 1801. Comprendemos mejor á los que las acusan de impotentes que á los que claman contra su despotismo; pero por mas fundado que pueda ser el primero de estos reproches, creemos que el gobierno tiene las suficientes garantías. Confiamos en la sabiduría del clero, deseamos sinceramente que goce, en toda la estension compatible con el órden público y el interés social, de la libertad consagrada en la Constitucion, y cuando se trata de los derechos de la conciencia, nos afecta menos el reproche de abrirlas un campo muy vasto, que el de encerrarlas en límites demasiado estrechos.

Independientemente de las críticas que acabamos de discutir, el sistema de los artículos orgánicos y el mismo concordato de 1801 han sido objeto de varias proposiciones; con especialidad en el comité de cultos de la última Asamblea constituyente, se pidieron reformas que fueron tomadas en consideracion, admitidas ó desaprobadas. El interés que escitaron estas proposiciones en muchos hombres notables, incluso algunos del clero, las dá una importancia que nos impide pasarlas en silencio.

Lo primero que se pidió fué que el sistema actualmente seguido para el nombramiento de obispos, curas y ecónomos, se sustituyese con un sistema electivo, y que los consejos de fábrica se compusiesen igualmente por eleccion. En el derecho primitivo de la Iglesia, el rebaño elegia por sí mismo su

pastor: el episcopado era electivo. Sabido es que fué el concordato de Francisco I el que reemplazó con el nombramiento real la eleccion. La Constitucion civil del clero proclamó ya en 1791 la vuelta al derecho antiguo. De nuevo se ha propuesto restablecerle, diciendo que es restituir á la Iglesia una prerogativa que es de su esencia, que es aplicarle el régimen consagrado por la Constitucion. Despues de haberse inclinado por esta proposicion el comité de cultos, sin rechazarla explicitamente no la adoptó, deteniéndose ante consideraciones que son de mucha importancia.

En primer lugar, no es inútil investigar si un cambio de esta especie lo reclama el interés de la Iglesia, ó, en otros términos, si la Iglesia ha tenido motivo para quejarse del modo con que actualmente se efectúa el nombramiento de los obispos. Sobre esto no se ha hecho ninguna reclamacion. La composicion del cuerpo episcopal prueba la sabiduría, la prudencia, la religiosa escrupulosidad del gobierno. El episcopado francés brilla por la virtud, la moderacion, la pureza, la ortodoxia. Apenas se podrian señalar en él algunos caracteres inquietos, algunos hombres cuyo celo no está siempre contenido por la prudencia. Fácilmente podrian designarse un buen número de prelados eminentes por su talento y por su ciencia. Gracias á la modesta reserva del clero, y á la ausencia de esas solicitudes vergonzosas que en otras partes no se detienen ante ningun escrúpulo, el nombramiento de los obispos no ha sido coartado ni viciado por el favor y los escándalos, demasiado frecuentes en los demas servicios públicos. Libre en su accion, colocado bajo el peso de una inmensa responsabilidad ante el siglo y ante la Iglesia, el gobierno ha hecho elecciones que, casi sin escepcion, han merecido la aprobacion general y en particular la del mismo clero. ¿Conviene modificar un régimen cuyos felices resultados son ciertos, y hacer pruebas que pueden engañar á sus mismos partidarios?

Esta consideracion de prudencia política no es la única

que puede invocarse. El derecho de nombramiento concedido al gobierno, establece entre él y la Iglesia relaciones útiles, es el vínculo que los une. Al hacer el nombramiento, el Estado pone á la cabeza de las diócesis los sacerdotes mas dignos de su confianza, y no tiene que temer elecciones hostiles ó irreflexivas. La Iglesia, puede asegurarse por medio de la institucion, de si los intereses de la fé no han sido sacrificados á los políticos. El obispo participa al mismo tiempo del poder civil y del poder religioso. Este doble origen le recuerda los dobles deberes que contrae. Salido de la eleccion, se veria espuesto á tener en cuenta esclusivamente su carácter religioso y á tratar al Estado como á un extraño, si no como á un enemigo. Nombrado por el gobierno, encuentra á pesar de su inamovilidad, en el recuerdo de la confianza con que ha sido honrado, un sentimiento de simpatía y de benevolencia que le anima é inspira en el ejercicio de su prelacia.

Cualquiera otro sistema crea dificultades casi invencibles. ¿A quién se conferiría la eleccion? ¿A los demás obispos? Eso seria conferirles un poder que traspasa los límites de su autoridad, y colocar en sus manos toda la Iglesia de Francia. Por otra parte, conocidos son los abusos á que da lugar el derecho concedido á un cuerpo para renovarse á sí mismo; una envidia esclusivista domina en él tarde ó temprano, las superioridades inspiran celos y son sistemáticamente escluidas por las medianías envidiosas.—¿Se formará en cada diócesis un colegio electoral elegido entre ciertas categorías? El espíritu local prevalecerá con sus miserias y sus estrechas predilecciones. Los hombres eminentes no podrán abrirse camino. El sistema electivo se altera en su curso por la limitacion del número.—Se admitirá á votar á todo el clero de la diócesis. ¿Dónde están las garantías de luces, de discernimiento, de imparcialidad? Una agitacion inevitable, pasiones políticas tal vez, turbarian el asilo de la piedad, de la caridad y de la renuncia de los rumores mundanos. Además, admitido el sistema electivo, ¿por qué convidar con él únicamente á

los sacerdotes? ¿Se hará un llamamiento á los fieles de la diócesis? Solo los católicos pueden votar; ¿pero cómo reconocerlos? La eleccion sencilla, fácil, exenta de peligros, cuando reina una sola religion, cuando la fé es profunda, universal, sincera, desinteresada, llega á hacerse imposible en una sociedad en que diversas creencias se dividen las almas, en que la fé es incierta y la indiferencia comun.

Para debilitar la fuerza de estas obligaciones, se proponia no remitir á la eleccion sino el derecho de escoger los candidatos, entre los cuales nombraria el gobierno; pero esta combinacion era facticia é ilusoria. Quien presenta, nombra; esto es lo que la esperiencia ha demostrado siempre. El gobierno quedaba bajo el peso de una responsabilidad llena de embarazos y peligros, y la formacion de una lista de presentacion originaba las mismas dificultades consiguientes á una eleccion directa.

Cuanto de mejor buena fé se ha estudiado el régimen que podria sustituir al nombramiento directo, mas obstáculos se han encontrado. Esto es lo que ha experimentado el comité de cultos—podemos decirlo—en el exámen de esta cuestion, por lo cual, favorable al principio á la reforma propuesta, no pudo ponerse de acuerdo sobre ninguno de los medios de organizarlo, y concluyó por votar el aplazamiento.

Contra la eleccion de los curas se oponen objeciones del propio género; las mismas dificultades para la eleccion y formacion de un cuerpo electoral. Además si es conveniente que el jefe de la diócesis se una al Estado por el vínculo del nombramiento, no lo es menos que el párroco se una por el mismo vínculo al jefe de la diócesis.

Por consiguiente no opinamos que debe recurrirse á la eleccion para componer el cuerpo episcopal ni el clero parroquial. El concurso del poder civil y del poder religioso, asociándose para el nombramiento de los obispos y de los párrocos, parece ser el medio mas seguro de conciliar los diversos intereses que deben estar representados y servidos. Así es

como deben ser nombrados los eclesiásticos que en el ejército, en las cárceles y en los hospitales; están encargados de las funciones de capellanes; remitir su nombramiento solo al obispo, seria privar al gobierno de una influencia y de una autoridad de que nunca puede consentir en despojarse.

Sin embargo, debería aplicarse la eleccion á la composicion de los consejos de fábrica. El sistema actual de nombramiento no corresponde á las funciones que desempeñan, por que forman verdaderamente un consejo administrativo. Los poderes de que los consejos municipales están investidos respecto á los pueblos, los ejercen los consejos de fábrica respecto á la parroquia, que tiene tambien rentas, gastos, presupuesto y propiedades, y forma como una municipalidad religiosa, en medio de la municipalidad seglar. Por otra parte, hay relaciones íntimas y necesarias entre la fábrica y la corporacion municipal; esta viene en auxilio de la otra en muchísimas ocasiones. De consiguiente debe dárseles una organizacion semejante. Con todo, aun aquí existe la necesidad de no conferir el derecho electoral sino á los católicos, y la dificultad de definir legalmente los elementos constitutivos de esta cualidad, dando márgen á embarazos que en ningun modo podemos desconocer; pero el decreto de 1809, que organizó los consejos de fábrica, no admite ya en ellos mas que á los católicos, y para la formacion de un consejo administrativo no pueden temerse los mismos inconvenientes que para el nombramiento vitalicio de un título eclesiástico. De todos modos, este cambio debería estar subordinado á la introduccion de nuevas reglas en el gobierno de las parroquias, á fin de preservar á la administracion del culto de los obstáculos que podrian suscitarla los consejos independientes. El comité de cultos se detuvo ante esta necesidad perjudicial, y pronunció el aplazamiento de las proposiciones que se le hicieron con este objeto.

Otra cuestion le inspiró además un constante interés, y ciertamente lo merecia en todos conceptos: la condicion ac-

tual del clero de segundo orden, segun el concordato y los artículos orgánicos.

Bajo un régimen en que las leyes combaten en todas partes la arbitrariedad, en que la proteccion de reglas tutelares defiende á los funcionarios contra el capricho y la violencia, en que las profesiones privadas gozan de una independencia que no tiene por límites sino las leyes de orden público, hay una clase de ciudadanos colocados fuera de toda garantia, cuyo honor, consideracion y su misma existencia material, dependen de una autoridad discrecional, arbitraria: los miembros del clero secundario. Penas disciplinarias y aun correccionales, suspension, prohibicion, revocacion, negativa del *exeat* todo puede ser pronunciado por el obispo, sin recurso, sin registro, sin formas obligatorias de exámen y de instruccion. Los párrocos, declarados inamovibles, no pueden ser privados de su título sin el concurso del poder civil; pero por lo demás están completamente á merced de los obispos; respecto á los ecónomos la dependencia es sin restriccion alguna. Esta situacion anormal en que se hallan colocados mas de treinta mil franceses, escita desde hace mucho tiempo vivas y frecuentes reclamaciones. Y no es porque los obispos hayan hecho un mal uso de esta dependencia; los sentimientos de fraternidad, de indulgencia y de caridad, han corregido los vicios de lo arbitrario, tanto como lo permitia la flaqueza humana; pero la arbitrariedad existe y forma una escepcion contra la cual protesta el sistema general de nuestro derecho público.

Remontándose á las circunstancias en que los artículos orgánicos llegaron á ser ley del Estado, se explica fácilmente el pensamiento que los dictó. Bonaparte amaba la regla, pero no amaba la libertad. Le halagaba la esperanza de tener el episcopado todo bajo su enérgica mano, y entregándole sin condiciones el clero de segundo orden, creia tener su gobierno sin responsabilidad ni cuidados. A mas era difícil renunciar en aquella época á tener al clero en una estrecha dependencia. Una Iglesia que los acontecimientos habian dividido; sa-

cerdotes entre los cuales unos se habian adherido á las leyes revolucionarias, que los otros persiguieron con sus anatemas; los ministros de la religion dispersados y durante mucho tiempo sustraídos á toda especie de vigilancia; el mismo concordato celebrado en ocasion en que habian surgido muchas discusiones que el tiempo debia borrar, pero cuya viveza era estremada en su origen; el haber de proveer á un tiempo todas las parroquias de la República:—tales son las razones que hubo para no admitir la inamovilidad ó garantías análogas.

Los tiempos no son ya los mismos. La libertad se ha asociado al orden. El poder político no está investido de derecho ni ejerce ninguna influencia que le den los medios de proteger al clero de segundo orden. Educado, instruido y compuesto bajo la vigilante mirada de virtuosos prelados, escitado por la esperiencia á mantenerse fuera de los irritantes debates de la política, el clero secundario no podrá turbar el orden religioso ni la paz pública. Lo que en la época en que se celebró el concordato, podia convertirse en un elemento de desorden, no seria hoy otra cosa que un homenaje nada peligroso al principio mismo de nuestras instituciones, una satisfaccion legítima concedida á una clase de ciudadanos, tan numerosa como digna de interés.

En esta atencion puede aumentarse el número de párrocos por la atribucion de este título á las ayudas de parroquia. En el dia existen cerca de 2,300 párrocos y 27,500 ecónomos. Hasta 1789 el número de los primeros fué 27,000; el de los ancjos, cuyos ecónomos eran revocables, no pasaba de 2,500. Tantos curatos creados, serian otros tantos titulares provistos de la inamovilidad y protegidos por la participacion del poder civil en su nombramiento y por consecuencia en su revocacion. Sin pronunciarnos sin embargo, contra esta medida, no hallamos en ella mas que un paliativo sin verdadera eficacia; siempre quedaria un número considerable de ayudas de parroquia, y el remedio, caso de aprobarse, no seria aplicado sino muy parcialmente. Aun cuando pudiese dar-

se la inamovilidad civil á todos los ecónomos, halláramos en ello mas inconvenientes que ventajas. La inamovilidad tiene por consecuencia fijar al que de ella goza á su residencia tanto como á su título. Pero muchas veces es necesario trasladar á un ecónomo por un interés de administracion ó de buena armonía; para esto no es necesario otra cosa que dificultades locales, una discusion con los magistrados civiles, un accidente que haya amenguado la consideracion del sacerdote, rumores aunque sean infundados, que afecten á su reputacion. Esta dependencia puede lastimar conveniencias privadas; pero la reclaman las necesidades públicas, y si hierre al sacerdote que la sufre, sirve al clero que se sustrae á las enemistades. Hay además otra razon mas general y elevada, en apoyo de esta opinion. No creemos de ninguna manera, en efecto, que del poder politico es de donde deba salir la proteccion debida al clero secundario. Mezclar la administracion civil y el episcopado en actos de una naturaleza delicada, es esponerse á subordinar la una al otro ó á dividirlos y ponerlos en pugna. De estas dos hipótesis la primera es la que se realiza con mas frecuencia: la administracion civil, á quien faltan los elementos de informacion y que con fundado motivo evita suscitar conflictos sobre cuestiones secundarias, se inclina habitualmente á la autoridad religiosa, y se presta á medidas, que dueña de obrar, no siempre tomaría. Toda autoridad dividida es débil y sin vigor. Por último, el gobierno es poco á propósito para entender en cuestiones que deben resolverse con la ayuda de reglas especiales, de costumbres y de tradiciones á que es extraño. No es en él sino en las instituciones religiosas donde el clero secundario debe hallar proteccion, y esta se la ofrece el restablecimiento del provisorato.

No se trata de restablecer la antigua curia eclesiástica, que constituia verdaderos tribunales, que, llamados á determinar sobre los beneficios y los feudos eclesiásticos y sobre las causas de los clérigos, eran mas temporales que es-

pirituales. Se propone únicamente constituir un poder disciplinario, puramente eclesiástico, encargado solo de juzgar las causas espirituales, y al cual podrian recurrir, en determinados casos, bien el obispo, bien el sacerdote acusados. Lejos de debilitar la autoridad del primero, este tribunal, por decirlo así, doméstico, la fortaleceria, ofreciendo al segundo la garantía siempre preciosa de un exámen imparcial, confiado á un árbitro neutral é ilustrado. Muchos prelados han creado ya juzgados eclesiásticos en sus diócesis; pero estos establecimientos carecen de base legal, descansan esclusivamente en la voluntad de sus fundadores, y su número es todavía muy reducido. Seria preciso que se hiciesen estensivos á todas las diócesis, que estuviesen sometidos todos á las mismas reglas y constituidos de una manera fija. Como su carácter y su objeto son sobre todo espirituales, la Iglesia deberia concurrir con el gobierno para fundarlos y organizarlos. En 1849 el comité de cultos pidió que á este efecto se abriesen negociaciones con la corte de Roma. El gobierno prestó su adhesion, y si ha dado cuenta á la Santa Sede, puede esperarse una conclusion favorable. Entre las reformas que reclama el régimen de la Iglesia católica en Francia, pocas hay que merezcan en tan alto grado la atencion y el apoyo de los poderes públicos.

Sin embargo, no son menos dignas de interés las proposiciones hechas relativamente á las facultades de teología. Hemos rendido un homenaje justo y sincero á las virtudes y al carácter evangélico del clero católico francés; séanos permitido aventurar algunas críticas con la misma sinceridad. La enseñanza que se da en los establecimientos eclesiásticos no es, á lo que podemos juzgar, ni bastante elevada ni bastante mundana. Los seminarios son los únicos canales por cuyo conducto se trasmite; los estudios son en ellos poco profundos, poco generales; no se estienden mas allá de los límites de la instruccion secundaria. Por otra parte, los discípulos permanecen estraños á toda especie de relaciones y de contacto con la juventud que no se destina á la Iglesia, y de este modo con-

traen ideas y nociones esclusivamente clericales. Sin duda es conveniente que la preparacion para los augustos y severos deberes del sacerdocio se practiquen en el recogimiento y lejos de los compromisos y de las seducciones del siglo; pero la barrera, en cierto modo imposible de franquear, que se coloca entre el mundo y la Iglesia, los condena á desconocerse mutuamente, á alimentarse de prevenciones y desconfianzas reciprocas, lo cual es mas propio para producir su divorcio que para poner el sello á su alianza. El actual sistema de educacion de los jóvenes sacerdotes es una de las causas mas poderosas de las prevenciones que reinan en la Iglesia contra el mundo y en el mundo contra la Iglesia. Si se los hiciese menos estraños el uno al otro, se los haria al mismo tiempo mas justos y mas confiados entre sí.

Las facultades de teologia se crearon con el doble pensamiento de elevar el nivel de la enseñanza eclesiástica y de entreabrir las puertas del mundo á los jóvenes sacerdotes, antes de su admision en el ministerio; pero el emperador, que creó estas facultades, creyó podia dispensarse de ponerse de acuerdo con la Santa Sede; hizo de ellas lo que de todos los lugares destinados á la instruccion; establecimientos universitarios; solo concedió al clero una parte limitada é indirecta en su direccion. El clero concibió algunos temores, y no envió á las facultades los discípulos de los seminarios. Muy pocos candidatos se presentaron á recibir los grados que aquellas dispensaban; á pesar de los decretos y de las ordenanzas que subordinaban á la colacion de estos grados ciertas funciones eclesiásticas, el gobierno no pudo proporcionar auditorio á sus profesores, y el éxito fracasó. No nos proponemos examinar si en efecto pertenecia ó no al poder político la fundacion y organizacion de las facultades de teologia. La utilidad que ofrecen nos interesa mas que la prerogativa de la autoridad civil en esta materia, y sentiriamos el triunfo de esta prerogativa, si su consecuencia habia de ser privar al clero de las ventajas que puede hallar en las facultades de teolo-

gia. Si la Iglesia pretendiese organizar por sí sola estas facultades, retrocederíamos ante esta pretension; pero como únicamente pide ponerse de acuerdo con el Estado y como en todos casos siempre dependerá de este imponer sus condiciones, ningún derecho esencial hallamos en peligro.

Por medio de las facultades organizadas por el gobierno, de acuerdo con la Santa Sede, los empleos eclesiásticos en la Iglesia católica no se conferirían, como en los demás cultos pagados por el Estado, sino á los candidatos provistos de los diplomas exigidos, según la importancia de las funciones. Las elecciones del gobierno y de los obispos serían más acertadas. Un celo nuevo para la ciencia, un espíritu menos exclusivamente clerical animarían á la santa milicia, y el clero todo se elevaría á mayor grado de instrucción y tolerancia.

Otra cuestión relacionada con intereses de un orden diverso fué la última que preocupó al comité de cultos. Se estudió el medio de asegurar pensiones al clero; se discutieron y aplazaron las bases de un sistema de cajas de retiro, que consistirían en una asignación por parte del Estado á título de socorro, y en un descuento que se haría sobre los sueldos pagados por el tesoro público ó impuesto sobre los que provienen de otro origen. Sería preciso separarnos de nuestro plan para entrar en los detalles de este proyecto. Bástenos, en el momento en que se elabora un proyecto de ley sobre pensiones, recomendar las del clero á la solicitud del poder legislativo.

La constitución de una jurisdicción protectora del clero secundario, la organización de las Facultades de teología, la fundación de un sistema de retiros, hé aquí otros tantos objetos de un interés inmediato, verdadero, práctico; hacer reinar la regla donde se ejerce una arbitrariedad sin límites, asegurar la existencia de aquellos á quienes la edad ó las enfermedades no permiten soportar más tiempo el trabajo cotidiano, es servir á la justicia, y á la humanidad, es contribuir al buen orden, al engrandecimiento y al bienestar de la Iglesia. Estos

intereses, bien superiores, á vanas querellas de preeminencia, merecen ocupar mas á los poderes públicos que la revision del concordato y de los artículos orgánicos, y que la pretension de una independencia que suscitaria justas alarmas y de una dominacion cuyo triunfo efimero podria traer reacciones tan funestas á la Iglesia como á sus ministros.

A la legislacion de la Iglesia católica va estrechamente unida la que concierne á las comunidades religiosas, establecimientos que se ligan á esta Iglesia, por mas que puedan estar separados.

Las comunidades religiosas se han transformado sucesivamente con las costumbres, con la opinion, y con las instituciones políticas. En los tiempos primitivos, depositarias casi esclusivas de la tradicion, de la doctrina y de la ciencia; degeneradas en seguida conforme el clero secular adquiria mas luces, instruccion y autoridad moral, las congregaciones religiosas no eran en su mayor parte, al estallar la revolucion de 89, mas que asilos de la molicie, de la ociosidad y de las malas costumbres. La ley de 19 de febrero de 1790 abrió las puertas de los cláustros; todas las comunidades y cofradías fueron suprimidas por la ley de 18 de agosto de 1792, y el concordato tampoco las reconoció. Un decreto de 5 de mesidor año xii ordenó la disolucion de todas las comunidades y cofradías que no estuviesen autorizadas por el gobierno. Sin embargo, en la mente de este no estaba la supresion absoluta; podíase, en buen derecho, no permitir el restablecimiento de las comunidades entregadas á la contemplacion y á la holganza; pero habia algunas que se consagraban á la asistencia de los enfermos, á la enseñanza y á otros cuidados tan útiles como meritorios, y mantener la prohibicion respecto á ellas hubiera sido una medida no menos impolítica que cruel. Asi fué que los decretos de 18 de febrero de 1809 y 26 de diciembre de 1810 «marcaron las condiciones con que serian autorizadas las comunidades hospitalarias y las casas de refugio, destinados á hacer volver á las buenas costum-

bres á las jóvenes de mala conducta. » El decreto de 1808 autorizó á los hermanos de las escuelas cristianas, y otros decretos á las comunidades destinadas á las misiones extranjeras. La autorizacion de las comunidades que se consagraban á trabajos útiles, la prohibicion de las demas, y el derecho concedido al gobierno para disolverlas, tal era la legislacion del Imperio.

Esta legislacion no fué modificada esencialmente durante la Restauracion. Las comunidades autorizadas obtuvieron el derecho de adquirir bienes inmuebles, pero se impusieron límites á las liberalidades que podian hacérselas, y la autorizacion quedó sometida á reglas restrictivas; no podia concederse en lo sucesivo á las comunidades de hombres ó mujeres sino por la ley. El gobierno continuó armado del derecho de disolver las comunidades no autorizadas, pero nunca usó de él. La ordenanza de 16 de junio de 1828, separó de la direccion y de la enseñanza á los miembros de estas comunidades que desempeñaban dichos cargos en las casas dependientes de la Universidad y en las escuelas eclesiásticas secundarias. Preciso es reconocer que, en realidad, la Restauracion, cuyas simpatías eran favorables á las comunidades religiosas, suscribió á medidas que impedian su desarrollo, contenida por las desconfianzas de la opinion pública y por la vigilancia de las Cámaras, y admitiendo tambien en cierto modo las tradiciones del antiguo derecho público.

El gobierno de julio no tuvo que luchar con los mismos obstáculos; mantuvo el derecho de disolucion escrito en el decreto del año xii, usó de él respecto á algunas comunidades no autorizadas, y le reivindicó en una discusion solemne, manifestando su deseo de concertarse, con la corte de Roma, antes de recurrir á él; pero al mismo tiempo no halló dificultad en reconocer casi oficialmente congregaciones no autorizadas, haciendo á los trapenses una concesion de tierras en la Argelia, y tratando con algunas comunidades caritativas para el servicio de los dementes y la policia interior de las cárceles.

Después del establecimiento de la República, á la vez que el gobierno provisional sostenia el doble principio de la libertad religiosa y del derecho de asociacion, conservaba respecto á las comunidades religiosas «las reglas que en todos tiempos han formado la base del derecho público francés y que la República debia y queria sostener con firmeza.» En su consecuencia aprobaba la disolucion que se habia pronunciado en Lyon contra las asociaciones religiosas no autorizadas. Después se introdujo en la legislacion una reforma bastante grave. La ley de 15 de marzo de 1850, ley orgánica de la enseñanza, admitió que las comunidades religiosas no autorizadas pudiesen ser reconocidas por el gobierno como establecimientos de utilidad pública, y bajo este título, proveer de profesores á las escuelas comunales.

Tal es el estado actual de la legislacion. Como se vé, resulta que las comunidades religiosas pueden dividirse en tres categorías diferentes; las que están legalmente autorizadas, las que se hallan reconocidas como establecimientos de utilidad pública, y las que existen de hecho sin autorizacion ni reconocimiento. ¿Cuál es la condicion legal de cada una de ellas?

Las comunidades religiosas legalmente autorizadas se componen de personas civiles; pueden adquirir, vender y poseer, con la autorizacion del gobierno, como tambien, salvo las restricciones puestas por la ley y los reglamentos, y, con la misma aprobacion, admitir liberalidades. Su existencia está garantida. La autorizacion no puede retirarse sino por una ley; solo los establecimientos que de ella dependen y que están autorizados por simples decretos pueden ser suprimidos en la misma forma. Algunos caracteres esenciales las distinguen de las que las leyes de la revolucion destruyeron. Los votos perpétuos no están autorizados; sus miembros no se comprometen sino temporalmente, y aun así su libertad personal no puede jamás restringirse, porque salvo las acciones que resultan de los compromisos contraidos, las puertas de los mo-

nasterios deben abrirse siempre que ellos lo pidan; continúan gozando de los derechos civiles y de familia y de la plena disposicion de sus bienes, salvo las escepciones relativas á las liberalidades que hiciesen á su comunidad. Habiendo abolido el concordato toda exencion, las comunidades están sometidas al Ordinario y puestas bajo la autoridad espiritual de los obispos. Ante las autoridades civiles y judiciales, se les aplica el derecho comun; ninguna escepcion hay establecida en su favor.

Las comunidades reconocidas como establecimientos de utilidad pública gozan de derechos menos estensos. El reconocimiento se hace en vista, menos, de las comunidades en sí mismas, que del interés público que lo aconseja: no proporciona otras ventajas que las que se derivan de la ley sobre la enseñanza, y puede retirarse siempre en la forma en que fué concedido. Es dudoso, puesto que la ley nada habla de ello, que el reconocimiento habilite á las comunidades para poseer bienes y recibir dones; pero admitiendo que esta facultad resulte de las reglas generales concernientes á los establecimientos de utilidad pública, lo cierto es que no podria ejercerse para otro objeto que para el que fué reconocida la comunidad.

En cuanto á las comunidades que no están ni autorizadas ni reconocidas, continúan bajo el imperio de las leyes de 1790 y 1792 y del decreto del año xii. El gobierno puede pronunciar siempre la disolucion y tomar las medidas necesarias para efectuarla. Estas restricciones no son contrarias al principio de la libertad de cultos, que no implica el derecho de formar congregaciones religiosas; puede existir plenamente sin que este derecho sea comun. Las comunidades tienen un objeto religioso, pero no forman parte del culto en sí mismo, é invocarle para autorizar todos los establecimientos que el celo ó la pasion religiosa imaginasen crear, seria dar al principio una estension excesiva y peligrosa, fuera de la vigilancia y de la inspeccion del poder público.

Sin embargo, creemos que no puede pronunciarse ninguna pena contra los miembros de las congregaciones que se forman sin autorizacion. Las antiguas leyes, los edictos, y los decretos del Parlamento están abolidos; las leyes de 90 y 92 y el decreto del año xii no contienen disposicion penal alguna. Las leyes relativas á las asociaciones no son aplicables, porque, en efecto, las sociedades y las congregaciones son dos cosas muy distintas. Las congregaciones constituyen cuerpos organizados, perpétuos; sus caractéres distintivos son la emision de votos, la admision de novicios, la sumision á los estatutos religiosos. Asi es que siempre han estado sometidas á una legislacion particular, distinta de la que regia para las demás asociaciones. En 1848 se cuidó de no dejarlas gozar de la libertad concedida á las asociaciones; en este momento, las mismas diferencias deben sustraerlas á la aplicacion de las penales que recientemente han sido puestas en vigor contra las asociaciones.

El gobierno no está, pues, investido contra las congregaciones religiosas mas que del derecho de disolucion; es un derecho que posee en nombre del interés público; pero al cual solo debe recurrir cuando este interés lo reclama. Hay dos escesos que deben evitarse con el mismo cuidado: el uno seria disolver toda congregacion no autorizada, cualesquiera que fuesen el objeto, la manera de existir y la organizacion; el otro dejar subsistir congregaciones que amenazasen nuestras instituciones políticas, que alterasen la paz de las conciencias ó introdujesen la desunion en las familias.

CAPITULO IV.

LOS CULTOS PROTESTANTES.

Los cultos protestantes reconocidos por la ley se dividen, como es sabido, es dos comuniones principales; las iglesias reformadas ó calvinistas, y la confesion de Augsburgo ó los luteranos.

Los calvinistas, antiguamente tan numerosos, cuando figuraban á su cabeza la casa de Borbon, los Condé, los Bonillon, y otras muchas familias ilustres de la nobleza francesa, están hoy reducidos á una débil minoría. Sin embargo, Nimes, Montauban, Cartres, Burdeos y Paris, contienen un gran número de ellos. Están esparcidos en todos los departamentos del Mediodia y otros muchos del Oeste y del Norte. El número de sus ministros es el de 511, distribuidos en 62 departamentos. Solo el de Gard cuenta 92 pastores, el de la Drôme 41, el del Ardèche 57, el del Bajo-Rhin 25, el del Herault y el del Tarn, cada uno 22, el de las Dos Sévres y el del Tarnog-Garonna 20 cada uno, el de la Charente Inferior 19, el de la Leyre 18, el de Lot-y-Harona 17, el de la Gironda 11, el del Alto-Rhin, el del Ariège y el del Sena 9 cada uno, y otros departamentos de 8 á 4. El número de templos es de cerca de 600, de los cuales 120 están en el Gard.

La Iglesia evangélica de la confesion de Augsburgo solo es conocida en Francia desde que la Alsacia entró á formar parte de su territorio. El tratado de paz de Westfalia estipuló en su favor el *uti possidetis*, señaladamente en Strasburgo, donde bajo el régimen republicano de esta ciudad libre é imperial, el luteranismo era la religion dominante. Strasburgo sigue siendo el asiento principal de esta iglesia; allí están reunidos cerca de 50,000 luteranos; en Paris no hay mas que sobre 15,000. Mas de una cuarta parte de la poblacion del Bajo-Rhin se compone de luteranos. Algunos están diseminados en el resto de la Alsacia; los demás, solo están establecidos en nueve departamentos. El número de sus pastores es de 249, de los cuales 159 están en el Bajo-Rhin, 52 en el Doubs, 28 en el Alto-Rhin, 10 en el Alto-Saona, 8 en la Meurthe, 5 en el Sena y 5 en los Vosges.

Hay dos facultades de teología abiertas para los protestantes; la una en Montauban, destinada especialmente, lo mismo que el seminario anejo á ella, á los estudiantes del culto reformado; el Estado la paga 28 medias becas de á 200

francos; la otra se halla establecida en Strasburgo, donde se reunen los estudiantes de ambos cultos, pero principalmente los de la confesion de Augsburgo. Cuatro becas y ocho medias paga allí el Estado para el culto reformado; 12 becas y 24 medias para la confesion de Ausgburgo. Strasburgo, verdadera metrópoli de los luteranos franceses, encierra además el seminario y el pequeño seminario destinados á esta comunión. Herencia de la floreciente clase media de otro tiempo, estos dos establecimientos le son muy queridos. El pequeño seminario es el gimnasio, institucion que puede llamarse hermana mayor de la reforma en Strasburgo; el seminario propiamente dicho, establecimiento análogo á los seminarios diocesanos, y cuyos discípulos, y esto es lo que los distingue de los otros, se han sometido siempre á pruebas universitarias, es un resto de la antigua universidad, á la cual debia en otro tiempo Strasburgo un rango eminente entre los principales focos de la ciencia. Goza de una renta propia que pasa de 80,000 francos, suma que emplea en sus atenciones y que está gravada además con cargas de todas clases en favor de las iglesias protestantes de Strasburgo y de varios establecimientos esenciales al culto de la confesion de Ausgburgo (1).

Se hace subir á cerca de 1.500,000 el número de los protestantes franceses, de los cuales mas de las tres cuartas partes pertenecen al culto reformado; pero este cálculo no es oficial. No se ha hecho el empadronamiento de la poblacion segun los cultos, que presentaria dificultades casi invencibles. Los dos cultos protestantes figuran en el presupuesto de 1853 por la suma de 1.507,550 francos.

Entre las numerosas sociedades que la escuela evangélica

(1) Estos diferentes datos estadísticos son en parte tomados de la estadística general de Francia, por Mr. Schintzler, obra tan preciosa por la riqueza de los documentos que contiene como por su exactitud, y de una *nota de estadística administrativa sobre los cultos no católicos*, inserta en el *Diario de los economistas*, nota llena de interés y cuya fidelidad esta garantida por el nombre del autor Mr. Carlos Read, jefe del servicio de los cultos no católicos en el ministerio de Instrucción pública y Cultos.



ha visto formarse en sus filas para objetos religiosos ó caritativos, hay 6 consagradas á la propagacion de la Biblia, 2 en París y las otras 4 en Nimes, Strasburgo, Castres y Burdeos. La renta anual de las dos sociedades de París escede de 120,000 francos. Otras se dedican á las misiones evangélicas, á la impresion de los libros religiosos, á la instruccion primaria y á la beneficencia, disponiendo de sumas bastante considerables. En Saverdun, Castres, Neuhoft, Marsella y Achicourt se han abierto casas para las huérfanas, y en Nimes, Montauban, Orleans, Livion y Nerac para los huérfanos. En Lila y en París se han fundado escuelas, y en Sainte-Foy una colonia (1).

En el número de estas creaciones de la caridad religiosa, debemos hacer mencion particular, en razon á su carácter especial, de las dos instituciones de diaconisas establecidas en París y Strasburgo. El objeto que se propusieron sus fundadores fué procurar á los protestantes, sin votos de pobreza, de obediencia ni de castidad, sin siquiera compromisos temporales ni clausura, los servicios que prestan á los católicos las admirables hermanas dedicadas á la asistencia de los enfermos y á la instruccion de los niños. Los protestantes debian estar tanto mas dispuestos á apropiarse esta benéfica institucion, cuanto que reclaman para las señoras de la Rochela y las hermanas de Sedan, el honor de haberlas fundado antes que San Francisco de Paul.

La institucion de las diaconisas de París está situada en la calle de Renilly, arrabal de San Antonio. Su fundacion se remonta á 1844 y es debida al cura Vermeil, uno de los ministros mas respetables de la Iglesia reformada, secundado por el pastor Valette, digno ministro de la Iglesia luterana. Tres grandes divisiones se reparten esta institucion: 1.^a la obra de los niños, que comprende *Creche*, una sala de

(1) Véase el *Almanach protestante* para 1851. Además de los establecimientos que esta obra menciona, hay otros que indudablemente se deben á los protestantes.

asilo, una escuela primaria, otra de aprendizaje y una enfermería para los niños escrofulosos; 2.^a *la obra de los enfermos*, que contiene un hospital; 3.^a *la obra del refugio ó penitenciaría*, destinada á las mujeres arrepentidas. Las hermanas diaconisas son admitidas desde la edad de veinte y uno á treinta y cinco años; son admitidas primero en calidad de hermanas aspirantes, y adquieren, á los seis meses, el título de hermanas adjuntas, que conservan por espacio de un año al menos. Concluido este noviciado, pueden pasar al empleo de diaconisas, por deliberacion del consejo. Solo diez y ocho hermanas, seis de las cuales son aspirantas, bastan para los numerosos cuidados de la institucion, que ha prestado ya grandes servicios.

Strasburgo ha visto tambien construirse dentro de sus muros un establecimiento de diaconisas, presidido desde octubre de 1842, por el pastor Eærter, y que contiene igualmente escuelas y un hospital. Veinte y cuatro hermanas viven en él, segun los principios seguidos en la casa de París.

El ejemplo de estos dos establecimientos ha hecho nacer en Inglaterra el pensamiento de fundaciones semejantes. El arzobispo de York y muchos obispos han protegido un establecimiento que se propone tambien crear entre los anglicanos hermanas consagradas á la asistencia de los pobres y de los enfermos, y de las sustituciones para los niños.

Los detalles en que acabamos de entrar sobre los cultos protestantes no son aplicables sino á las iglesias, reconocidas y prgadas por el Estado. Fuera de estas iglesias se hallan en el seno del protestantismo francés, cierto número de iglesias independientes, de los cuales unas están servidas por pastores que no se separan de la comunión general de los reformados ó de los luteranos, pero que únicamente no reciben sueldo del Estado, y otras están en abierta disidencia.

Las circunsericiones aplicadas á los consistorios, no abrazaban en su origen todo el territorio, diferenciándole en esto del culto israelita, ó aunque los judios fuesen mucho menos

en número que los protestantes, el decreto de organizacion repartió todo el Imperio entre los consistorios que creaba. Aun hoy, hay veinte y cinco departamentos que no se ligan al culto oficial por ningun templo autorizado, por ningun consistorio; pero en muchos, cierto número de individuos pertenece á la reforma, y algunos, bajo la influencia de las sociedades protestantes, han venido á ser centros religiosos que no carecen de importancia. De este modo la sociedad evangélica de Ginebra ha fundado una iglesia; el departamento del Saóna-y-Loira ha visto formarse siete con cuatro pastores. La sociedad evangélica de París mantiene cinco pastores en la Alta-Vienna, cinco pastores y dos evangelistas en el Yonne y un pastor y dos evangelistas en la Sarthe. Dos pastores evangelistas del pais de Galles trabajan por la propagacion de su fé en el Finisterre. El Ille-y-Vilaine, el Alto-Marne, el Mosa, los Bajos-Alpes y los Bajos-Pirineos han recibido igualmente predicaciones evangélicas. Aquellas de estas iglesias que se apróximán á los cultos reconocidos, pronto dejarán de carecer de relaciones oficiales con ellos. En efecto, un decreto de 20 de marzo de 1852 dispone (art. iv) que los protestantes de las localidades en que el gobierno no ha instituido todavía pastores, dependerán en lo administrativo del consistorio mas próximo.

Diez y seis departamentos poseen iglesias independientes, presbiterianas ó congregacionistas. Burdeos, París, Lyon y Sainte-Foi, son sus principales centros. La sociedad central de predicacion del evangelio ha fundado cierto número de estaciones en varios departamentos (1). Algunos *darbistas*, secta que predica la abolicion del sagrado ministerio y el sacerdocio universal, están esparcidos en el Gard y en el departamento del Herault. Tambien se encuentran en el Gard (2)

(1) Estos datos estadísticos son en parte tomados de una nota inserta en *La Esperanza*, diario protestante de 4 de diciembre de 1851, por M. F. A. Bost.

(2) Un pueblecillo del departamento del Gard, cuya poblacion apenas llega á 1000 almas, Congénies, antiguamente *Congerics*, nombre latino que

cierto número de cuáqueros, por los cuales muestran un interés particular sus hermanos de Inglaterra, que frecuentemente van á visitarlos. Sin afectar la regidez de principios y de modales de los cuáqueros de la Gran Bretaña y de la América del Norte, los de Francia se distinguen por sus costumbres dulces, humildes y modestas y por sus hábitos laboriosos, económicos y pacíficos.

En Francia se encuentran mas de 5,000 anabaptistas, diseminados en los departamentos del Aisne (150), del Doubs (350), del Mosella (353), del Bajo-Rhin (1,898), del Alto-Saona (43), del Somme (100), y de los Voges (400). Sabido es que el origen de esta secta se remonta al siglo xvi, y fué causa de turbulencias en Westphalia y en Holanda; pero los anabaptistas tan turbulentos, tan facciosos en la época de la reforma, se han vuelto muy pacíficos á la voz de su nuevo jefe Memno, hombre elocuente, de un carácter dulce, y de un genio benéfico, y del cual tomaron hasta el nombre. Muchos restos de los memnonistas han pasado á Suiza, y la mayor parte de los que hoy residen en Francia descienden de los refugiados que abandonaron el canton de Berna á principios del siglo xviii. Se distinguen, segun dice, por su amor al trabajo, al orden y á la paz. Son muy pocos los que ejercen una profesion. La agricultura y la ganadería son el principal objeto de sus ocupaciones. De costumbres fáciles y benévolas, hospitalarias y caritativas, fieles á sus compromisos, los anabaptistas parecen muy raras veces ante los tribunales. Su sobriedad es ejemplar y proverbial su probidad. Habitan con preferencia los lugares, las granjas ó las casas aisladas

corresponde todavía á su estado actual, ofrece una curiosa reunion de los diferentes cultos en que se dividen estas comarcas. Allí se ven juntos 733 protestantes reformados, 182 católicos romanos, 12 metodistas y 41 cuáqueros. El templo de los protestantes fué construido en 1818, bastando sesenta dias para levantar un edificio que puede contener 2000 personas. Los cuáqueros, no queriendo quedar atrás, escotaron á su vez y tienen tambien su templo. La iglesia católica habia sido edificada despues de la revocacion del edicto de Nantes, segun se dice, con las piedras del templo reformista que fué demolido. El orden y la concordia parecen reinar en estas poblaciones separadas por las creencias, y unidas por las costumbres, los intereses y la necesidad de una tolerancia mutúa.

en medio del campo. Viven y se unen entre sí. En esta secta se ven muy pocos matrimonios mistos. Los anabaptistas gustan de no cambiar la forma de su traje que dicen ser el de los apóstoles. Se dejan crecer la barba y llevan un sombrero bajo de copa, un frac redondo, ancho y sin botones, y zapatos atados con correas. A las mujeres les está prohibido el uso de sortijas y collares, en una palabra, toda clase de joyas, y deben usar en su traje la misma sencillez que los hombres. Las prácticas religiosas de los anabaptistas son muy sencillas, y las observan con la mas escrupulosa regularidad. Todos los domingos se reúnen para oír la lectura de la Biblia, hecha por un pastor de su eleccion, que no es otro que el mas anciano ó el de mas experiencia de todos; se esplican el espíritu y el sentido del Evangelio, y los fieles entonan algunos cantos: hé aquí de lo que se compone la ceremonia. Los anabaptistas reciben el bautismo y comulgan á los catorce ó quince años con el pan y el vino, cambian el anillo nupcial, bendito por el sacerdote, y antes de morir piden la bendicion de Dios. Consagran dos dias del año á la purificacion del cuerpo y á la humildad. Esta antigua ceremonia, conservada con mucha veneracion, consiste en lavarse mutuamente los piés, sin distincion de clase ni fortuna. La espulsion del templo se pronuncia contra todo anabaptista que se entrega á la embriaguez, baila, juega algun interés, muda de un sitio á otro una cosa que no es de su propiedad, ó engaña á una jóven. Esta exclusion es una pena muy grave y rara vez incurren en ella; puede, sin embargo, alzarse por separacion ó pago de una multa. En el momento de ser bautizados, los anabaptistas juran no tomar nunca las armas. A causa de sus incesantes reclamaciones decidió un decreto del comité de salud pública, de fecha 18 de agosto de 1795, conservado despues en vigor por el directorio ejecutivo, que no serian llamados al servicio militar sino para guiar carros ó para los batallones de gastadores. En 1812, los quintos de este culto fueron incorporados á los batallones de los trenes de artillería y de in

genieros. Ignoramos si despues se ha conservado este privilegio. Entre los anabaptistas son muy frecuentes las emigraciones á los Estados-Unidos, y emprenden largos viajes á traves de los mares con la mayor facilidad. Esto es lo que explica cómo no se ha aumentado sensiblemente su número, que ascendia á 4000 en un censo formado en 1804 y que se completó en 1809. En 1854 pidieron que el gobierno atendiese á los gastos de su culto; pero no se creyó posible acceder á esta demanda en razon á su corto número y á sus principios que parecian prestarse muy poco á una organizacion. En 1849 se abrió en París y en su calle de Enghien, una iglesia particular para los anabaptistas (1).

La Iglesia anglicana, á la cual pertenecen un gran número de ingleses que residen en Francia, posee tambien un templo en París, pero se comprende que esta Iglesia, en que la política está ligada tan estrechamente á la religion, no pueda hacer prosélitos en el seno de las poblaciones estrañas á la Inglaterra.

Todavía hay otra especie de protestantes que se distinguen mas bien por el celo y la severidad de las reglas, que por la diversidad de las creencias religiosas; la mayor parte forman una variedad y algunos una verdadera secta del culto evangélico: hablamos de los metodistas. Un hombre grave y que ha dejado un nombre venerado en la Iglesia protestante, cuenta de qué modo llegaron á Francia. Dejémosle hablar (2):— «Durante el período que siguió á la ley del 18 germinal del año x, viéronse aparecer de repente algunos hombres que habian adquirido creencias y sobre todo emociones religiosas mas profundas en la sociedad de los hermanos morabos esparcidos por Alemania. Eran en general gentes pacífi-

(1) Debemos tambien estas noticias tan numerosas como poco conocidas á la benevolencia de Mr. Carlos Read, que ha tenido la amabilidad de comunicarnos igualmente una parte de los documentos comprendidos en nuestro trabajo.

(2) *Cuadros sobre el Protestantismo en Francia*, por J. L. S. Vincent, uno de los pastores de la Iglesia reformada de Nimes. 1829.

cas é inofensivas que dogmatizaban poco, que se reunian en corto número, sin ruido, sin pretensiones, con un proselitismo muy dulce y moderado, y que nunca dejaron de unirse al culto de nuestra Iglesia... La secta estaba poseida del espíritu contemplativo y dulce del pais que la habia visto nacer; pero en otro pais, donde la contemplacion ha cedido hace mucho tiempo el puesto á la accion, donde todo se traduce prontamente á hecho y á accion, se habian creado al lado de la escuela dominante sectas llenas del espíritu del pais, calcadas sobre los dógmas mas misteriosos del cristianismo, y concebidas igualmente en el sentido mas misterioso y mas sagrado... Sus ideas sobre la Biblia estaban impregnadas de un dogmatismo cómodo en la aplicacion, pero fácil de conducir á la esclusion y á la intolerancia, al menos en materias religiosas... Una larga lucha con la Inglaterra nos habia ocultado el movimiento de los espíritus, y nos figurábamos este pais como en los tiempos de Hume y de Gibbon, cuando vueltas á abrir las comunicaciones, á causa de la paz, nos le mostraron animado por un movimiento religioso muy profundo y activo... Vimos aparecer en varios puntos de Francia enviados de muchas sociedades inglesas que se presentaron al principio como simples viajeros, pero que bien pronto prolongaron su estancia en los sitios en que encontraban mas fácil acceso; volvieron á ellos algunas veces y acabaron por fijarse allí, ya auxiliando, ya compitiendo con el pastor del lugar, ya presentándose como simples misioneros libres, ó sacando partido de algunas circunstancias favorables para introducirse en las funciones eclesiásticas de la Iglesia reformada, sin romper sus vínculos con la sociedad que los enviaba. En todas partes forman asociaciones, reuniones piadosas, en las cuales inculcan, no solo las ideas, sino la disciplina y las formas de su secta... Si se me pregunta cuál es el objeto inmediato que se proponen los predicadores del metodismo, diré que es preciso distinguir. No creo que sea posible dudar que, sobre todo entre los extranjeros, no hayan tenido muchos el

designio de establecer en Francia iglesias metodistas formadas de los despojos de la Iglesia reformada. Esto es lo que hacen en Ginebra, lo que han intentado en Suiza; y si en Francia se manifiesta menos esta tendencia, es porque han hallado menos apoyo y mas obstáculos. La mayor parte quieren seguir siendo miembros de la Iglesia reformada, mantener, en reuniones privadas, el manantial de edificacion que esta Iglesia no les ofrece á su gusto, pero no romper con ella, vivir en ella, y sobre todo, trabajar en ella. Para los unos es un asunto de costumbre y de razon, no queriendo formar una secta y creyendo bastarse á sí mismos sin llegar á tal extremo; para los otros es un negocio político y de cálculo. Todo les desagrada en la Iglesia reformada. El culto es para ellos sin vida, las predicaciones inútiles cuando no blasfematorias, la disciplina relajada y pervertida, los consistorios débiles, mundanos y tal vez impíos; pero se halla establecida, tiene sus reuniones regulares, son miembros y acaso pastores de ella; les ofrece ocasion de ser recibidos sin desconfianza, de hablar libremente y con autoridad; evita el peligro de presentarse con una doctrina y una religion nuevas, y los pone á cubierto de las leyes investigadoras de la autoridad civil. Se permanece en ella esperando renovarla.»

Desde la época en que aparecieron estas líneas, que hemos tomado á una pluma mas autorizada que la nuestra, no se ha resfriado el celo de los metodistas, pues no han cesado de desplegar la actividad que propaga las doctrinas, los esfuerzos reunidos que la sostienen y la severidad de formas que hiere la imaginacion. La mayor parte continúan unidos á las iglesias reconocidas; algunos se han constituido en iglesias independientes, que no están retribuidas por el Estado, y consagradas al culto Wesleyeno, del nombre de su fundador John-Wesley. Se hace subir su número á cerca de 3,000 comulgantes y 10,000 oyentes, y han abierto muchas capillas, una de ellas en París.

Tal es, segun los documentos que hemos reunido con

trabajo, algunos de los cuales no tienen un carácter oficial, el estado actual del protestantismo en Francia. Fáltanos dar á conocer la ley que rige aquellas de estas iglesias que están reconocidas por el Estado. Esta ley se publicó el mismo dia que los artículos orgánicos del concordato. El primer cónsul queria reorganizar á la vez el culto católico y los cultos protestantes; se lo aconsejaban, no solo la política, sino tambien los ataques, todavía mas vivos, dirigidos especialmente contra la Iglesia católica, y que debia apaciguar esta reconciliacion. Como estaba impaciente por recoger la gloria de la reconciliacion de la Francia con la Santa Sede y de hacer al pais partícipe de ella, una vez firmado el concordato, se apresuró á concluir la ley relativa á los cultos protestantes. Una estremada diligencia precipitó su redaccion; no se dió el tiempo necesario para consultar á los interesados ni para reunir los documentos que eran precisos. Presentada la ley el 18 germinal al tribunado, fué adoptada el 18 por el cuerpo legislativo, y por lo tanto no pudo quedar exenta de las imperfecciones que deslucen siempre las leyes que no sazona un largo estudio y que dilucida una discusion seria y profunda. Sin embargo, no por eso fué saludada con menos reconocimiento por los protestantes, homenaje que le era debido, porque, cualesquiera que fuesen sus defectos, tenia el mérito incomparable de consagrar el advenimiento del culto de la minoría al derecho comun, y el triunfo definitivo y regular de los principios de la revolucion.

Hay dos rasgos generales que pertenecen al culto protestante y que le distinguen del católico. En primer lugar los seglares y los eclesiásticos concurren en comun, no solo á la administracion de las cosas temporales, como en la parroquia católica, sino tambien al gobierno espiritual de la Iglesia; solo la administracion de los sacramentos y la bendicion de los matrimonios están confiadas esclusivamente á los pastores. En segundo lugar, la Iglesia particular, la comunidad de los fieles, lo que nosotros llamamos parroquia, es la base y el

elemento primordial de toda la organizacion; de la Iglesia particular es de quien dimanar todos los poderes que sirven para regir el conjunto de los fieles.

El primero de estos caracteres no estaba desconocido en la ley. Los consistorios que creaba estaban á la vez compuestos de pastores y de ancianos ó legos, y sus atribuciones comprendian, no solo la administracion de los bienes de la Iglesia y la de los ingresos procedentes de limosnas, sino el mantenimiento de la disciplina, el nombramiento y la revocacion de los pastores, salvo la confirmacion del gobierno. Sin embargo, estos consistorios no correspondian al otro principio, segun el cual cada reunion, cada comunidad de fieles, cada Iglesia particular, en una palabra, debe poseer un consejo propio, encargado de sus intereses temporales y espirituales. En efecto, la ley orgánica no se ocupaba de este grado fundamental de la organizacion de las iglesias protestantes. Faltaba el primer eslabon de la cadena. Las nuevas iglesias consistoriales debian contener la aglomeracion de 6,000 almas de la misma comunión; no podian estenderse de un departamento á otro, y representaban por sí solas legalmente los intereses locales de los protestantes; podian compararse con bastante exactitud á la reunion de iglesias particulares, que, en la antigua disciplina de las iglesias reformadas se llamaba una *conferencia*. Las iglesias particulares eran de este modo absorbidas, y su individualidad propia se fundia en esta unidad colectiva. No tardaron en resultar de esto cuestiones, conflictos, una lucha oculta por la independencia, una tendencia al congregacionalismo y con el tiempo la fuerza de las cosas, como sucede de ordinario, le introdujo en el texto de la ley; las iglesias particulares se fundaron por sí mismas bajo el nombre de consistorio seccional ó consejo de Iglesia en el culto reformado, y de consejo presbiterial en la confesion de Augsbourg. En muchas ocasiones, sin autorizar oficialmente este fraccionamiento, el gobierno lo consintió; pero estos establecimientos, nacidos espontánea-

mente de la necesidad, estaban fuera de la ley, y las iglesias particulares soportaron con impaciencia la especie de sujecion en que quedaban colocadas.

No es este el único punto de la ley del año x que, en su ejecucion, recibió profundas modificaciones. Además de los consistorios, superiores en categoría, esta ley creó Asambleas cuyos títulos y atribuciones difieren en las dos comuniones. Concede á la Iglesia reformada sínodos cuya circunscripción abraza cinco iglesias consistoriales y que están compuestos del pastor ó de uno de los pastores, y de un anciano ó notable de cada iglesia. El objeto de su institucion es principalmente religioso: á los sínodos está diferido todo lo que concierne á la celebracion del culto, á la enseñanza de la doctrina y á la direccion de los asuntos eclesiásticos. Las precauciones para que sus Asambleas no susciten ningun embarazo al gobierno, están multiplicadas hasta el exceso. Necesidad de una autorizacion para las reuniones y de una aprobacion para sus acuerdos; asistencia obligatoria del prefecto ó del sub-prefecto á las sesiones; remision del proceso-verbal al ministro, nada se ha olvidado. Sin embargo, los sínodos no se reunieron. En muchos pasajes se oponian á la reunion obstáculos naturales; pero no es esto lo que detenia al gobierno. Creia que podia disponer mejor del culto protestante estando las iglesias desunidas y aisladas; temia que los sínodos las diesen la fuerza que resulta siempre de la asociacion. Poco despues de la ley del año x, un prefecto del Mediodia que autorizó la reunion del sinodo de su departamento, fué crudamente reprendido, y se apresuró á revocar el decreto de convocatoria.

En la confesion de Augsbourgo estableció la ley inspecciones cuya jurisdiccion es de la misma estension que la de los sínodos de los reformados y cuya composicion y Asambleas están igualmente arregladas; pero lo que no se encuentra entre los poderes de los sínodos, la inspeccion elegia en su seno un eclesiástico que tomaba el título de inspector, y que estaba encargado de vigilar á los ministros y de mantener el orden

en las iglesias particulares. Dos seglares, nombrados en la misma forma, le ayudaban en caso necesario para la visita de las iglesias.

La confesion de Augsbourgo posee otro establecimiento que no tiene semejante en las iglesias reformadas; el consistorio general. Segun la ley orgánica, debian dividirse la alta direccion, tres consistorios generales; pero dos de ellos pertenecian á departamentos que han dejado de pertenecer á la Francia. El tercero, fundado para los departamentos del Alto y del Bajo-Rhin, y al cual se han unido las iglesias de la confesion de Augsbourgo instituidas en los otros departamentos, ha quedado en pié. De este modo han producido los acontecimientos la unidad de que se habia apartado la ley. El consistorio general está compuesto de un presidente seglar, protestante, dos eclesiásticos inspectores y un diputado de cada inspeccion. En el intervalo de una Asamblea á otra, el consistorio es reemplazado por un directorio, compuesto del presidente, del mas anciano de los dos eclesiásticos inspectores y de tres seglares, nombrados uno por el jefe del Estado y los dos restantes por el consistorio general. La ley no ha definido las funciones del consistorio general ni las del directorio; se ha referido á los reglamentos y costumbres de la confesion de Augsbourgo.

En virtud de las funciones activas y habituales concedidas, tanto á los inspectores como al directorio, no podia dispensarse la reunion de las inspecciones y del consistorio de que emanan; pero las convocatorias se efectuaron solo para proceder á las elecciones necesarias y á largos intervalos; ni sus sesiones se convocaron periódica y regularmente. La ley no contenia respecto á este punto ninguna prescripcion, ni tampoco relativamente á los sínodos de las iglesias reformadas.

De este modo la ley orgánica de los cultos protestantes suprimió la base del elemento fundamental de la parroquia ó municipio eclesiástico y los derechos de la comunidad de los fieles. En la cumbre constituyó poderes que en la Iglesia reformada estaban desprovistos de cohesion y de autoridad;

en la Iglesia luterana originaban complicaciones que los intereses y las formalidades habian de agravar, y que en fin, en las dos comuniones dependian enteramente del gobierno. Asi, los protestantes, aunque espresando su gratitud, reclamaron no obstante contra las disposiciones de esta ley. Poco tiempo despues de promulgada, sugetos de consideracion, miembros del Senado, del cuerpo legislativo y del tribunado, decanos de consistorios y pastores, dirigieron una memoria al gobierno en la cual se quejaban de las lagunas de la ley, de las dificultades que suscitaba, y pedian la creacion de una comision central que arreglase una multitud de cuestiones de disciplina interior que no podian decidirse de otro modo.

En 1812 Mr. Bigot de Preameneu, ministro de los Cultos, se ocupó de arreglar muchos puntos relativos al culto luterano, y en un informe preparado al efecto declaraba que muchos artículos de la ley «se habian redactado sin tener á la vista informes ni documentos convenientes.» — «que estaban en contradiccion con los hechos y con los guarismos», porque «cuando se redactó la ley se carecia de los datos absolutamente necesarios para acomodarla á su objeto.»

Despues de la caida del Imperio los protestantes elevaron nuevas reclamaciones. Se lee en una peticion de los notables de las dos comuniones: «hace mucho tiempo que las iglesias protestantes de Francia sufren muchos males por la falta de ejecucion de muchas disposiciones de la ley de germinal del año x. Los cristianos de la confesion de Augsbourgo, ni los del culto reformado no pudieron nunca consumir su organizacion. Los primeros no han tenido organizado mas que uno de sus consistorios generales; el de Strasbourgo... los fondos necesarios no se realizaron jamás. Asi los negocios, aun los del consistorio general de Strasbourgo no han hecho otra cosa que languidecer. Los cristianos reformados por su parte no han tenido ni sínodos ni conferencias, que son un precedente necesario, y que exige su disciplina, defendida por la ley. Sus consistorios, privados de relaciones orgánicas, se han visto en un

estado funesto de aislamiento.» Las circunstancias dieron á los protestantes un protector que no carecia entonces de crédito. El rey de Prusia intervino en su favor cerca del gobierno real por su ministro Mr. Humbolt. No obstante, esta gestion no produjo resultados; solamente el ministro de los Cultos en una respuesta á su colega de Negocios Estrangeros, del 30 de abril de 1814, reconocia que «al hacer los artículos orgánicos del culto protestante, los autores del proyecto de ley carecian de los elementos necesarios para su completa confeccion», y que «la ley incompleta en muchos puntos necesitaba revisarse.»

Se prestaba poca atencion entonces y menos interés aun á los cultos protestantes. La direccion de sus asuntos se habia relegado entre las atribuciones del director de bellas artes con los teatros y los museos. En 1819 Mr. Decaze instituyó una comision central protestante para que informase sobre los asuntos pendientes, debiendo reunirse una vez cada mes; pero nombrada por el gobierno, desprovista de todo carácter representativo, no tenia autoridad alguna y funcionó poco tiempo.

Hasta el ministerio de Mr. Martignac no se volvieron á tratar tan graves intereses. El servicio de los cultos no católicos se encomendó entonces á las personas mas dignas de inspirar confianza. El ilustre Cuvier fué el encargado de ello y llevó á semejante comision aquella firmeza de carácter y aquella rectitud de miras que le daban en la administracion un lugar tan eminente como en la ciencia. Resolvió las dificultades que no nacia de la ley orgánica, y preparó la revision de la misma ley; pero esta obra delicada exigia tanta prudencia como atencion: suspendida por la revolucion de julio, la prematura muerte de Cuvier en 1852 vino á retardar aun una reorganizacion tanto tiempo esperada y tan vivamente deseada.

A últimos de 1859, el gobierno pensó en corregir la ley orgánica, al menos en lo respectivo á las iglesias particulares, y preparó con este objeto un reglamento de administracion pública. Se redactó un primer proyecto relativo á las iglesias

reformadas y se sometió al Consejo de Estado. En él se consagraba la existencia de los consejos de presbíteros, encargados, bajo la autoridad de los consistorios, del gobierno de las iglesias particulares. Confería, además, á estos consejos y á los consistorios, respecto de la administracion temporal, poderes análogos á los que las leyes recientes habian otorgado á los concejos municipales y departamentales. En el seno del Consejo de Estado este proyecto dió lugar á vivas objeciones. El comité de legislacion espresó en su dictámen que los consejos de los obispos con atribuciones propias no podian constituirse sino por una ley. Entorpecido con estas dificultades se abandonó el proyecto.

Entretanto la ley orgánica continuaba produciendo sus resultados. Las iglesias reformadas esparcidas, fraccionadas, sin autoridad, se hallaban entregadas á sí mismas. No era únicamente la libertad que se halla en el espíritu y los principios de esta comunión, era ya una independencia casi absoluta, cuyos efectos podian estenderse hasta las bases mismas del culto. En la confesion de Augsburgo, un directorio compuesto de individuos á quienes la edad, ó las enfermedades reducian á no poder llenar sus funciones se habian perpetuado con menosprecio de todas las reclamaciones, y retenia el poder con mano débil é insegura.

En tal estado se hallaban las cosas cuando la revolucion de febrero. Las iglesias protestantes tomaron parte en el movimiento general que se habia apoderado de todas las cabezas de Europa. En el Palatinado, en Sajonia y en otros puntos de Alemania, los luteranos se reunieron para deliberar acerca de sus intereses. En Strasburgo, el directorio se retiró ante una imponente manifestacion de sus correligionarios. Una comision en la que se hallaban hombres animados de los mejores sentimientos le reemplazó, y con el consentimiento del gobierno convocó una Asamblea general, que se reunió en el mes de setiembre de 1848 en Strasburgo, compuesta de 96 miem-

broz elegidos por mas de 50,000 ciudadanos de la confesion de Augsbourgo.

Las mismas necesidades produjeron los mismos resultados en las iglesias reformadas. En el mes de mayo de 1848 se tuvo una primera Asamblea, que estableció las bases de una reunion mas regular. Esta abrió sus sesiones en París en el mismo mes de setiembre. De 91 consistorios invitados para enviar delegados, 3 únicamente faltaron á la llamada, y solo uno contestó rechazando la invitacion. Los sentimientos mas moderados y mas conformes con el espíritu religioso dirigieron la eleccion y animaron á la Asamblea que ella produjo.

Despues de largos debates donde el órden no se turbó ni un solo instante, las dos Asambleas adoptaron cada una un proyecto de ley destinado á modificar la del año x. El gobierno, que no se habia opuesto á las reuniones, que habia hasta aprobado las de la confesion de Augsbourgo, recibió ciertamente comunicacion oficial de estos proyectos. A pesar de esto no les dió curso alguno, y se concibe perfectamente: atenciones mas graves pesaban sobre él, y quizás el momento era poco favorable á una discusion sobre materias tan delicadas y que herian tantas susceptibilidades. Cuando las bases mismas del gobierno se disputaban, hubiera sido una imprudencia atraer el debate sobre los principios de nuestro derecho público en lo concerniente á los cultos. De cualquier modo las dos Asambleas han hecho imprimir los proyectos que han adoptado, con una esposicion de las razones que á ello les han impulsado. La de la confesion de Augsbourgo ha publicado hasta el diario de sus sesiones. Con la ayuda de estos documentos podemos ensayar el hacer un análisis para apreciar la naturaleza, la importancia y la oportunidad de las reformas propuestas.

En una y otra Asamblea se convino en cortar toda discusion sobre el dogma. Se habia propuesto á la Asamblea de las iglesias reformadas redactar préviamente una profesion de fé.

Este era el deber de una Asamblea reunida en interés de la religion. Antes de constituir la Iglesia y de hacer sus reglamentos era preciso proclamar sus doctrinas, su fé, su dogma y ligar todas las conciencias con un símbolo comun. Quanto mas la Iglesia se identificase con este símbolo, tanto mas agrandaria su poder y su autoridad. Cumplido este deber podria emprender con mayor éxito la obra de su constitucion interior. Esta proposicion revelaba mas celo religioso que sabiduría práctica. En contradiccion con los poderes de los delegados por los consistorios, que no comprendian ninguna atribucion respecto del dogma, limitándose únicamente á el exámen de las modificaciones que debian proponerse en la ley orgánica, hubiera producido el efecto de convertir en una especie de Concilio una Asamblea cuya mision era puramente administrativa y reglamentaria; hubiera dado lugar á irritantes discusiones y quizás llevado á funestas disensiones. Era inspirada por opiniones esclusivas que no admitian ni temperamento ni transaccion, que perseguian con ardor la idea de la separacion de la Iglesia y del Estado, y sin tener en cuenta los tiempos ni las circunstancias, proponian el ejemplo á los protestantes franceses de la Iglesia de Escocia y de la del Canton de Vaud. Semejante propuesta no se adoptó en manera alguna; los dos disidentes que la hicieron se retiraron con escándalo, publicaron sus protestas é hicieron un llamamiento á sus correligionarios, pero no impidieron á la mayoría continuar tranquilamente sus trabajos. Ningun debate se suscitó sobre este punto en la reunion de la confesion de Augsbourgo. Nadie solicitó sacar la discusion del círculo que les habian trazado sus comitentes al elegirlos. Era necesario por lo mismo en un proyecto de ley relativo á los protestantes, definir los signos por los cuales se reconoceria á los que estuviesen sometidos á sus disposiciones. La Asamblea de la confesion de Augsbourgo consideró como miembros de la Iglesia á «los fieles inscritos en el registro de la parroquia,» y la Asamblea reformada á los que «justificasen su

primera comunión y reconociesen la Biblia por la palabra de Dios y la única regla de su fé.

Se había convenido en no tratar mas que de la forma exterior y los intereses administrativos. En este límite, entre las cuestiones que había que resolver, muchas se presentaban bajo el mismo aspecto en las dos Iglesias. De esta clase eran la constitución de la parroquia, la de los consistorios colocados sobre ellas y la elección de los pastores. Otras por el contrario no ofrecían al examen de las Asambleas sino relaciones de analogía mas ó menos lejanas: á esta categoría pertenecen la organización superior á los consistorios. Omitimos las numerosas cuestiones de un interés puramente secundario.

Se admitió por unanimidad en las dos Asambleas que la parroquia, absorbida por la ley del año x en la Iglesia consistorial, recibiría una organización particular. La Asamblea del culto reformado coloca después de la parroquia un consistorio particular; la de la confesión de Augsburgo un consejo de presbíteros; solo diferían en el nombre; la composición era la misma:—el pastor ó los pastores y un cierto número de legos siempre en mayoría; funciones exactamente parecidas: comprendían la administración de la Iglesia y su disciplina. No estuvieron menos acordes en el modo de elegir. En París y en Strasburgo se convino unánimemente en reemplazar por el sufragio universal el que la ley orgánica había limitado á un número muy pequeño de electores, á los que pagaban mayor cuota de contribución directa. Sin duda la revolución que acababa de efectuarse y las circunstancias en medio de las que se deliberaba tuvieron una gran influencia en la adopción de este nuevo sistema, tanto mas cuanto que se aliaba perfectamente con los hábitos y los principios del culto protestante. Esto es lo que la exposición de motivos que precede al proyecto de la Iglesia protestante explica claramente: «La noción de la Iglesia entre los protestantes está perfectamente en relación con las

nuevas instituciones políticas y sociales que acaban de darse á la Francia. La Iglesia para nosotros no es mas que el cuerpo privilegiado entre los discípulos de Jesucristo, esto es, el pueblo cristiano, y no hacemos sino volver hoy, favorecidos por el progreso de nuestra época, al principio liberal que en todos tiempos fué el espíritu del protestantismo. »

De la creacion de una administracion parroquial no resulta en manera alguna la suspension de los antiguos consistorios, solo cambia su título. Descargados de la gestion directa de los negocios de las diversas parroquias, no debian conservar mas que el registro y la vigilancia, y con este título les corresponde intervenir por via de autorizacion, en los actos mas importantes; su composicion permanecia casi como la ley del año x la habia establecido. Se admitió no sin razon que no convenia estender el sufragio universal mas allá de los consejos de parroquia; en su consecuencia se formó con estos últimos los electores para el segundo grado de los consistorios.

Para el nombramiento de los pastores las dos Asambleas no adoptaron siempre las mismas reglas. Sobre las condiciones de elegibilidad, estuvieron de acuerdo en confirmar las disposiciones de la ley del año x y de los reglamentos. En el modo de elegir discordaron. La iglesia reformada hizo nombrar los pastores por el consistorio particular, salvo la aprobacion del general; la Iglesia de Augsbourgo los hizo nombrar por el consistorio, al cual agregaba para esta eleccion un número de consejeros presbíteros igual á la mitad de los miembros legos del consistorio. Los candidatos estaban obligados á hacerse inscribir de antemano, y el directorio autorizado en primer lugar para hacer en las listas de los inscritos las exclusiones convenientes en virtud de causas determinadas; en segundo lugar á transmitir al gobierno el acta de eleccion á la cual podia unir sus observaciones. De este modo los derechos del consejo parroquial, segun el espíritu de la confesion de Augsbourgo, eran mucho menores que los de la comunión reformada. Fuera de estas diferencias las dos iglesias adoptaron un régimen casi

idéntico respecto de los poderes inferiores que instituian. De otro modo sucedia en la organizacion de las demas ruedas de su organizacion.

La iglesia reformada conservaba los sínodos particulares compuestos de pastores y de legos, nombrados por los consistorios generales electores de tercer grado; pero en lugar de Asambleas desprovistas de atribuciones, condenadas á no reunirse nunca, daba á los sínodos una existencia activa, les hacia tener una sesion anual al menos y les llamaba á determinar en último término sobre todas las controversias ocurridas en su jurisdiccion, á pronunciar la suspension de los pastores, á velar sobre todo lo que interesaba á la conservacion del culto, el mantenimiento de la disciplina y la conducta de los negocios elesiásticos; á presentar, en fin, al gobierno la lista de los candidatos para las cátedras que vacasen en las facultades de teologia. Para completar esta organizacion, la iglesia reformada, además de los sínodos particulares, creó un sínodo general, compuesto, como sus demás Asambleas, de pastores y de legos, elegidos ya por los consistorios generales en union de cierto número de legos, ya por las facultades de teologia. El sínodo general debia celebrar una sesion cada tres años; estaba encargado de pronunciar la revocacion de los pastores y de aprobar ó reprobear los reglamentos generales relativos al culto, á la disciplina, á la organizacion y á la administracion de la Iglesia: estaba autorizado, al fin de cada sesion para nombrar una comision que ejecutase sus acuerdos; pero cumplido este mandato la comision debia disolverse inmediatamente. El sínodo general estaba de este modo investido de una especie de poder legislativo: salvo la revocacion de los pastores, en lo demás no ejercia el poder ejecutivo. La administracion propiamente dicha pertenecia enteramente á los consistorios particulares, á los generales, y, para casos determinados, á los sínodos particulares. Se volvia así á la organizacion sinodal que ha regido durante tanto tiempo las Iglesias reformadas, y que es la ley de su institucion.

Al contrario, la Iglesia de la confesion de Augsburgo se coloca bajo una autoridad central única. Afirmando y fortificando la organizacion del año x, la Asamblea de Strasbourg confia al directorio la autoridad administrativa superior. El directorio debe componerse de un presidente lego, nombrado vitaliciamente por el gobierno, de dos individuos del clero y cuatro legos nombrados por ocho años por el consistorio general y renovados por mitad de cuatro en cuatro. El poder ejecutivo le pertenece, su presidente se asimila en las discusiones que se han publicado, en parte á un obispo, en parte á un prefecto.

Entre el directorio y los consistorios particulares se encuentran colocadas las Asambleas de inspeccion y el consistorio general.

En el proyecto, las Asambleas de inspeccion no están, como en la ley del año x, compuestas de los delegados de las Iglesias, sino que se forman de la reunion de los mismos consistorios; son puramente cuerpos consultivos, y con este carácter pueden dar informes y pareceres acerca de los intereses generales de la Iglesia y las necesidades de las parroquias de su jurisdiccion. El objeto principal de su institucion es el nombramiento y la inspeccion de los miembros del consistorio general, mandato de importancia, porque la autoridad activa se encuentra en la inspeccion, y la autoridad legislativa en el consistorio general.

Vigilar á los pastores y todos los ministros del culto, velar por el mantenimiento del orden en las iglesias, visitarlas con este objeto, señalar los desórdenes al directorio y promover su pronto remedio, recoger los dictámenes, los votos y las decisiones de los consistorios y trasmitirlas al directorio, tales son las funciones de los inspectores, que son en número de tres para cada distrito de inspeccion, un eclesiástico y dos legos. Sus funciones duran ocho años.

Las del consistorio general tienen igual duracion y se renuevan por mitad cada cuatro años. Cada Asamblea de

inspeccion delega á él dos eclesiásticos y cuatro legos. El consistorio se reúne todos los años: el mantenimiento de la Constitucion, la disciplina de la iglesia, así como la instruccion religiosa, están colocadas bajo su autoridad. Aprueba los libros y formularios de la liturgia destinados al culto y la enseñanza eclesiástica, resuelve en última instancia las dificultades concernientes al régimen interior de la Iglesia, decide acerca de las proposiciones de los consistorios y de las Asambleas de inspeccion, registra las cuentas de los administradores, nombra los profesores de los seminarios, y presenta para las cátedras vacantes en la facultad de teología.

Tal es la organizacion propuesta por la comunión de Augsbourgo. Calcada en la ley del año x, da á esta iglesia como ha dicho en el preámbulo del proyecto de ley, un jefe temporal bajo el nombre de presidente; los adjuntos, miembros del directorio ejecutivo; un senado con el nombre de consistorio general; jueces eclesiásticos encargados de velar sobre la disciplina, con el nombre de inspectores; en fin, para el mejor orden en el primer grado de la escala gerarquica, reuniones con el nombre de consistorios, y consejos de presbíteros para la administracion de los bienes de la Iglesia.

En cuanto á las relaciones de las iglesias con el Estado, las Asambleas de París y de Strasbourgo han admitido el derecho del gobierno para aprobar el nombramiento y la revocacion de los pastores y nombrar en virtud de una lista de presentacion los profesores de la facultad de teología. La confesion de Augsbourgo, como hemos visto, le encarga el nombramiento de presidente del directorio; pero tanto una como otra iglesia se han reservado, como un principio que resultaba de las nuevas instituciones, el derecho de reunir sus Asambleas sin autorizacion de ningun género: opinion errónea segun nuestro modo de ver, respecto de las Asambleas de los cultos reconocidos por el Estado, asalariados y privilegiados, sometidos por consecuencia á condiciones particulares. Por lo demas es justo reconocer que en las deliberaciones de París y

Strasbourg ha reinado un vivo amor al orden, un gran respeto por los derechos del Estado. Se ha aplaudido en ellas el espíritu de la ley orgánica, y ni una sola voz ha proferido quejas amargas y violentas contra una ley que las ha escitado con frecuencia.

La necesidad de concordia y union que experimentaban los representantes de las dos comuniones sugirió un proyecto que, si hubiese sido susceptible de realizarse, hubiera podido tener las mas felices consecuencias. Se proponia la fusion de las dos iglesias en una sola. Sabido es que tal fué el pensamiento de Leibnitz, y que Federico Guillermo III quiso realizar en sus Estados esta fusion, no encerrándose siempre en el terreno de la persuasion para conseguirlo. Existen en Francia demasiadas afinidades entre los dos cultos; han formado en comun un gran número de asociaciones, tales como la sociedad bíblica protestante de París que les ha servido de centro por mucho tiempo; los artículos orgánicos, como hemos visto, contienen muchas disposiciones comunes. El voto de reunion se emitió, sin embargo unánimemente por la Asamblea de las iglesias reformadas. En la confesion de Augsbourg las disposiciones mas favorables hicieron nombrar una comision « para entrar en relaciones con la comision reformada de París y acreditar bajo este aspecto el estado de los negocios » Parece que no se fué mas allá en este asunto. Al considerar la organizacion diferente de las dos iglesias, la una inscribiendo en su bandera la independendencia, la otra la autoridad, la una admitiendo derechos propios á las parroquias, la otra sometiénolas al poder central investido de estensas atribuciones, es difícil comprender que puedan unirse con condiciones de una existencia comun. ¿Cuál de los dos principios se humillará ante el otro? En los negocios temporales, las concesiones pueden obtenerse y alguna vez llegar hasta imponerse; en los que atañen á las conciencias la persuasion es difícil y la coaccion imposible. ¿Son estas cuestiones de tal naturaleza que puedan resolverse por mayoría de votos?

Y si la unanimidad es indispensable, ¿qué esperanza queda de obtenerla? ¿No es de temer, como se ha dicho en Strasbourg, que en vez de hacer una Iglesia de las dos, se provoque la formacion de una tercera?

Las deliberaciones cuyo análisis acabamos de presentar, han escitado la atencion del gobierno y no han quedado sin resultados. En 1850 las circulares del ministerio de los cultos han llamado á los consistorios de las iglesias protestantes á dar su dictámen acerca de los proyectos de ley preparados en 1848. Un sínodo, el de la Drome, ha obtenido autorizacion para reunirse. El consistorio general de la confesion de Augsbourg ha celebrado sesion en 1850 y 1851, y ha deliberado sobre el mismo objeto, así como sobre los reglamentos accesorios. En fin, el 26 de marzo de 1852, un decreto ha modificado la ley orgánica del año x. Segun el preámbulo que acompaña al decreto, el objeto que se propone es llenar las lagunas señaladas desde hace mucho tiempo, tanto en interés de las iglesias como en el del Estado.

El decreto da á cada parroquia, ó seccion de iglesia consistorial, un consejo presbiterial, compuesto de cuatro miembros legos por lo menos, entre siete ó mas, presidido por el pastor ó por uno de los pastores y encargado de administrar las parroquias bajo la autoridad de los consistorios. Los miembros del consejo presbiterial se elijen por el sufragio parroquial y se renuevan por mitad cada tres años. Todos los miembros de la Iglesia empadronados son electores. El nombramiento de los pastores de las iglesias reformadas se confiere á los consistorios, pero el consejo presbiterial puede presentar una lista de tres candidatos clasificados por orden alfabético. En la confesion de Augsbourg los pastores se nombran por el directorio, innovacion profunda que despoja á los consistorios de una prerogativa de que gozaban hacia cincuenta años, innovacion capaz de provocar las reclamaciones mas vivas.

Ninguna disposicion contiene relativa á los sínodos de las

iglesias reformadas : ni se les nombra en el preámbulo ni en el decreto y continúan rigiéndose con arreglo á la ley orgánica. La proposicion que se hizo en 1848 para crear un sínodo general no se ha adoptado. El decreto de 1852, crea únicamente en París un *consejo central de las iglesias reformadas de Francia*, llamado á ocuparse de las cuestiones generales que se le encomienden por la administracion ó por las iglesias, y principalmente á concurrir para la ejecucion de las medidas prescritas por el decreto mismo. El consejo se compuso, por la primera vez, de notables protestantes nombrados por el gobierno y de los dos pastores mas ancianos de París. Ningun artículo marca la forma en que se renovará ulteriormente. Es puramente una rueda administrativa, y con este título puede prestar servicios facilitando las relaciones de los consistorios con el Estado, pero fuera de esta ventaja, no parece que corresponde á los deseos manifestados por las iglesias.

En cuanto á la confesion de Augsbourg, el decreto mantiene el consistorio superior y el directorio. Dispone que el primero se reunirá al menos una vez cada año, previa la convocatoria del gobierno, y da mayor estension á los poderes del segundo. Tiene muchos puntos de contacto con las proposiciones hechas por la Asamblea en 1848, y sobre todo con las del consistorio en su sesion de 1850. Por lo demás, guarda el mismo silencio respecto á las inspecciones de la confesion de Augsbourg que sobre los sínodos de las iglesias reformadas; pero conserva las disposiciones de la ley del año x, de las cuales no deroga nada, y por consecuencia, al no hablar de las inspecciones ni de los sínodos, las confirma espresamente. Deber del consejo central de los reformados y del consistorio de la confesion de Augsbourg será insistir para que los órganos esenciales de sus comuniones respectivas recobren la actividad y la vida, por tanto tiempo paralizadas.

Algunas instrucciones del ministro de Cultos y reglamentos aprobados por él, deben determinar las medidas y los detalles de ejecucion del decreto de 26 de marzo. En estos actos

es donde especialmente podrá apreciarse su carácter y medirse su capacidad.

CAPITULO V.

EL CULTO ISRAELITA.

La poblacion israelita en Francia está calculada en 87,000 almas proximamente, habiéndose aumentado con cuatrocientas ó quinientas almas desde 1846; pero estos números no son mas que aproximativos. Ya hemos hecho notar los obstáculos que se oponen al empadronamiento de los fieles de los diferentes cultos.

Los israelitas tienen un consistorio central, en cuyas manos se concentran sus intereses religiosos, 8 sinagogas consistoriales y 95 sinagogas comunales, que tienen un ministro pagado por el Estado, y un número indeterminado de oratorios particulares autorizados, pero no retribuidos por el gobierno. Los ministros del culto se forman en una escuela rabínica establecida en Metz, sostenida á espensas del Estado y puesta bajo la vigilancia del consistorio central.

A este culto están unidos numerosos establecimientos de beneficencia. Cerca del asiento de cada consistorio hay establecida *una escuela de trabajo ó de fomento de las artes y oficios*, donde los niños pobres son mantenidos, alojados, vestidos é instruidos durante su aprendizaje en casa de varios maestros. Estos establecimientos se sostienen por medio de suscripciones particulares. Los mas importantes son los de Strasbourg y Mulhouse. Junto á las sinagogas consistoriales ó comunales se forman igualmente sociedades benéficas que tienen por objeto llevar socorros á domicilio, consolar á los enfermos, educar á los huérfanos, poner en aprendizaje á los jóvenes de ambos sexos, y hasta casar á las jóvenes pobres que se recomiendan por su buena conducta.

Solo en París, cuya poblacion israelita es de 8 á 10,000 almas, hay reunidos: 1.º Un *comité consistorial de beneficencia*.

cia, que comprende en sus atribuciones todo género de limosnas y socorros á los desgraciados: 2.º *Una sociedad de señoras de París*, que, bajo la presidencia de Mad. Rothschild, tiene por objeto poner en aprendizaje y dotar á las jóvenes: 3.º *Una Sociedad de jóvenes de París*, que pone en aprendizaje á los jóvenes al salir de la escuela: 4.º Cerca de veinte sociedades particulares de beneficencia y socorros mútuos, que bajo diversas denominaciones bíblicas, proveen á los enfermos de médico, medicinas, enfermeros, y dos francos diarios: 5.º Un hospital israelita, recientemente fundado por M. de Rothschild en la calle de Piepus, y que puede contener 50 enfermos y 50 ancianos: 6.º Una fundacion para vestir á los niños pobres de las escuelas: 7.º Otra para pagar la habitacion de los trabajadores pobres. Metz posee tambien un hospital israelita que puede recibir 25 enfermos.

Se cuentan 120 escuelas comunales israelitas, y cierto número de asilos para la infancia, una escuela libre de estudios teológicos que lleva el nombre de *Sociedad de los Talmudistas*, que tiene por presidente al Gran Rabino del consistorio central, y en las principales ciudades como París, Metz y Strasburgo, colegios de niñas y de niños.

Todos estos establecimientos se han fundado, y la poblacion francesa ha visto crecer su prosperidad y bienestar, bajo la influencia de la legislacion cuya historia vamos á trazar, exponiendo sus bases. Solo despues de largas vacilaciones se resolvió la Asamblea constituyente á reconocer á los judíos el título y los derechos de ciudadanos franceses; contra ellos se levantaron prevenciones en cierto modo nacionales, la animosidad de las clases, devoradas por la usura, el odio que mantenía en Alsacia persecuciones dirigidas por 15 millones de crédito, quintuplicado por exacciones (1). Así, pues, mientras

(1) Recordamos estas exacciones, demasiado comunes entre los judíos, sin atribuirles de ningun modo á su religion. Puede achacarse con mas fundamento á un órden político en que los judíos estaban privados del derecho de poseer tierras y escluidos de toda profesion industrial y comercial. Las contribuciones arbitrarias, á veces las rapiñas á que estaban sujetos, les obli-

en 1789, desde los primeros dias de la revolucion, los protestantes habian sido llamados á la igualdad de derechos, dos años despues los israelitas permanecian aun fuera del nuevo régimen; pero el principio de la Constitución acabó por triunfar de estas repugnancias, y el decreto de 27 de setiembre de 1791 hizo entrar á los judíos en la gran familia francesa.

El mismo retraso suspendió su organizacion religiosa. Portalis se espresaba en estos términos al hablar de los judíos, cuando presentó al cuerpo legislativo las leyes orgánicas de los cultos:—«Al ocuparse en la organizacion de los diferentes cultos, el gobierno no ha perdido de vista á la religion judía. Debe participar como las demás de la libertad decretada por nuestras leyes; pero los judíos forman mas bien un pueblo que una religion, existen en todas las naciones sin confundirse con ninguna. El gobierno ha creído deber respetar la eternidad de este pueblo, que ha llegado hasta nosotros á través de las revoluciones y de las ruinas de los siglos, y que, para todo lo concerniente á su sacerdocio y á su culto, mira como uno de sus mayores privilegios no tener otros reglamentos que aquellos bajo los cuales ha vivido siempre, porque mira como uno de sus mayores privilegios no tener mas que al mismo Dios por legislador.»

Esta esplicacion, cuya justicia y espíritu político podrian probarse, parecia encaminada mas bien á hacer aceptar el aplazamiento de la organizacion del culto israelita que á demostrar su imposibilidad. Este vacío en la legislacion religiosa no estaba exento de graves inconvenientes. En las anti-

gaban además á crearse recursos que no podian hallar en otra parte que en la usura. En los paises en que los judíos se han visto libres de estas exclusiones y de estas violencias, no han incurrido nunca en los reproches que han deshonrado á los que las leyes colocaban fuera del derecho común. Puede citarse como ejemplo los Karais, secta judía que ocupa algunas provincias del imperio otomano, de la Rusia y del Austria. Poblacion esencialmente agrícola, admitida al derecho de propiedad, gozan de una gran consideracion y su palabra obtiene la misma fé que la de los cuáqueros. En Francia, desde que las leyes manumitieron á los israelitas, y sobre todo desde 1820 en que fueron completamente asimilados á los demás ciudadanos, se les ha visto dirigir sus esfuerzos y su inteligencia hácia las profesiones liberales, las artes, las ciencias y las funciones públicas.

guas provincias de la Francia y en las que la conquista añadió á su territorio, se hallaba una poblacion israelita influyente por su riqueza, y por su actividad mas aun que por su número, y que un poder hábil debia procurar atraerse. Herirla con una especie de ostracismo en el interior era tan injusto como imprudente. Se presentó una ocasion de poner término á este régimen escepcional, y el Emperador se apoderó al instante de ella. Los israelitas de la antigua Lorena y de la antigua Alsacia habian producido quejas, que amenazando á la tranquilidad pública, exigian un remedio inmediato y enérgico. Al mismo tiempo que, por una medida cuya necesidad únicamente podia disuipar su ilegalidad, Napoleon suspendia en siete departamentos la ejecucion de los títulos de crédito de los judíos, convocaba en París á todos los hombres importantes de esta religion, para deliberar sobre sus intereses.

Ciento trece notables judíos, elegidos entre los rabinos, los propietarios, los negociantes y los banqueros, respondieron á la invitacion, reuniéndose en efecto en París el 26 de julio de 1806. En presencia de MM. Molé, Pasquier y Portalis hijo, magistrados que debian dar cuenta á Napoleon de las peticiones de las partes, y comisarios del gobierno, deliberaron sobre las proposiciones que les habian sido propuestas en nombre del Emperador y sentaron las bases de la organización del culto israelita.

Las respuestas de esta Asamblea respiraban el amor á la patria, una viva y sincera adhesion á las ideas nuevas y demostraban que no era justo, como lo hizo Portalis padre en 1802, considerar á los israelitas como nacion aparte en el seno de la nacion francesa. Sin embargo, la mayor parte de estas respuestas se referian á la doctrina misma y emanaban de una Asamblea en que los rabinos, intérpretes de la ley divina, estaban en minoría; el Emperador tuvo el pensamiento de darles la consagracion religiosa y, remontándose á los recuerdos mas antiguos de Israel, reunir en París el gran sanedrín, que se compondria casi esclusivamente de rabinos.

Todas las sinagogas del Imperio que se estendian entonces tan lejos, fueron invitadas á enviar sus delegados á esta gran Asamblea. *Este cuerpo*, decia el informe dado al Emperador, *este cuerpo, caido con el templo, va á reaparecer para ilustrar en todo el mundo al pueblo que gobierna*. El gran sanedrin se reunió en efecto y determinó sobre los objetos diferidos á su exámen. No podria decirse que los discutió, porque segun las costumbres del Imperio, le estaba prohibida toda discusion, y los documentos que se han conservado sobre la reunion del sanedrin muestran con qué cuidado celoso é inquieto se esforzó para prevenir la mas pequeña deliberacion, pero no es dudoso que sus decisiones eran la espresion fiel de sus opiniones.

Lo que se pedia tanto en la Asamblea de los notables como en el gran sanedrin, se referia al estado político y civil de los israelitas en Francia, segun su ley religiosa. ¿Consideraban á la Francia como patria suya y á sus leyes como sus leyes? ¿Erales lícito casarse con varias mujeres, divorciarse sin el concurso de los tribunales y por causas no admitidas por el código civil? ¿Estaban prohibidos los matrimonios mistos? ¿Les estaba prohibida la usura respecto á sus hermanos? ¿No era permitida respecto á los estranjeros?

Los notables dieron las soluciones que eran de esperar de hombres ilustrados y muy penetrados de los beneficios de nuestras leyes para no adherirse profundamente á ellas. Sobre las proposiciones relativas á su nacionalidad, el proceso verbal de la Asamblea de los notables prueba «que la Asamblea manifestó por un movimiento unánime, cuán sensible era á las dudas que estas proposiciones parecian suponer... que sobre todo la Asamblea no habia podido contener el movimiento que escitó en ella la sesta proposicion, en la cual se preguntaba á los judíos, nacidos en Francia y tratados por la ley como ciudadanos franceses si miraban á la Francia como á su patria, y si tenian obligacion de servirla. La Asamblea esclamó unánimemente: *Hasta la muerte.*»

El gran sanedrin declaró desde luego, en el preámbulo de sus resoluciones, «que la ley divina contenia disposiciones políticas y disposiciones religiosas; que estas últimas eran por su naturaleza absolutas é independientes de las circunstancias y de los tiempos; que no sucedia lo mismo con las disposiciones políticas, es decir, con aquellas que constituyen el gobierno y que estaban destinadas á regir el pueblo de Israel, cuando tenia sus reyes, sus pontífices y sus magistrados.» Interpretando en seguida, con arreglo á esta distincion, la ley de Moisés, estableció que todo israelita nacido y educado en Francia y tratado por las leyes como ciudadano, está obligado religiosamente á mirar á la Francia como su patria, á servirla, á defenderla, á obedecer sus leyes y á conformarse en todas sus transacciones con lo dispuesto en el código civil; que estaba prohibido á los israelitas de todos los Estados, donde la poligamia está prohibida por las leyes civiles, casarse segunda vez viviendo la primera mujer; que el repudio permitido por la ley de Moisés no era válido sino mientras operaba la disolucion absoluta de todos los vínculos entre los cónyuges, aun bajo el aspecto civil; que los matrimonios entre israelitas y cristianos, contraidos de conformidad con las leyes del código civil, eran obligatorios y válidos civilmente, y aun cuando no fuesen susceptibles de revestirse con formas religiosas, no implicaban ningun anatema. Declaró en fin que toda usura estaba prohibida indistintamente, no solo de hebreo á hebreo, y de hebreo á conciudadano de otra religion, sino tambien respecto á los extranjeros de todas las naciones «considerando esta práctica como una iniquidad abominable á los ojos del Señor.» En el desarrollo que dió á estas respuestas asi como en las que hizo respecto de otras diversas cuestiones accesorias, el gran-sanhedrin, no menos que la Asamblea de notables en sus deliberaciones, probó que la religion israelita no admitia ningun principio contrario á nuestras leyes ni que justificase las repulsas á las cuales estaba demasiado espuesta.

Despues de haber llamado de este modo á los órganos mas acreditados del culto irraelita en el órden civil y en el órden religioso, el Emperador pensó que habia llegado el momento de organizarlo. El 17 de marzo de 1808 se espidieron dos decretos, el primero ordenando la ejecucion del reglamento votado por la Asamblea de notables, y el segundo conteniendo algunos artículos orgánicos de este reglamento.

El reglamento tiene por objeto el ejercicio y la policia interior del culto israelita. Su fin es al par político y religioso. Entre otras atribuciones, los consistorios están encargados «de estimular por todos los medios posibles á los israelitas de la circunscricion al ejercicio de las profesiones útiles y dar noticia á la autoridad de los que no tienen medios de subsistencia conocidos; darle tambien conocimiento en cada año del número de conscriptos israelitas de la circunscricion.» En el número de funciones de los rabinos se encuentra la de «recordar en todas circunstancias la obediencia á las leyes, y en particular á las que se refieren á la defensa de la patria;— hacer considerar á los israelitas el servicio militar como un deber sagrado.» Los que se han dedicado á la usura están escluidos de los consistorios. Estos y los rabinos están obligados á conformarse con las decisiones doctrinales del gran sanedrin. Los ministros del culto tienen asignado un sueldo fijo, pero el tesoro público no lo satisface en manera alguna; las cantidades necesarias para este objeto, asi como para los gastos del culto, se imponen á los israelitas por medio de una contribucion especial repartida entre ellos con determinadas condiciones. El decreto publicado al mismo tiempo que el reglamento, encarga al gobierno el nombramiento de los notables que deben elegir el consistorio y la aprobacion de las elecciones.

Un tercer decreto publicado con la misma fecha, pero estraño al culto, alzaba el sobreseimiento pronunciado en 1806 para el pago de los créditos de los judíos; pero les sometia escepto á los de los departamentos de la Gironda y de Landas,

á un régimen escepcional, que debia prolongarse durante diez años, «esperando, decia el decreto, que al concluir este plazo, y por efecto de las medidas tomadas respecto de los judíos, no existiria ninguna diferencia entre ellos y los ciudadanos franceses.»

El culto israelita continuó hasta 1830 sometido á este régimen, salvo algunas disposiciones que tenian por resultado dar mas latitud á la eleccion de los notables y de los consistorios, regularizar la percepcion y el empleo de la contribucion impuesta á los israelitas, y exigir de ellas cuentas oficiales.

Suprimiendo esta contribucion y poniendo á cargo del tesoro público los sueldos de los ministros del culto israelita, la ley de 8 de febrero de 1831 lo igualó con los demás cultos reconocidos por la ley. Este cambio considerable y los que se han verificado en la Constitucion del pais y en la condicion misma de los israelitas, hicieron sentir la necesidad de revisar los reglamentos relativos á su culto para coordinarlos, completarlos y ponerlos en armonía con esta situacion nueva, y suprimir las disposiciones que llevaban el sello de prevenciones desacreditadas ya. Como ninguna ley habia intervenido para dictarlas, como los israelitas mismos solicitaban esta reforma, el gobierno creyó que estaba autorizado para decidir sobre ella sin acudir al poder legislativo. Recogió las observaciones del consistorio central y de los consistorios departamentales sobre un proyecto que habia hecho preparar por una comision compuesta de los hombres mas competentes, y despues de una detenida deliberacion del Consejo de Estado, dió la ordenanza de 25 de mayo de 1844, cuyas principales disposiciones vamos á esponer.

Lo mismo que en los cultos protestantes, en el culto israelita la administracion espiritual y temporal está confiada á los consistorios; pero el elemento laico es mas considerable, y se puede decir que los consistorios son de todo punto laicos; porque los rabinos que forman parte de ellos, aunque ministros del culto, no son mas que simples doctores de la ley, y no

tienen que justificar para su eleccion mas que su ciencia y su aptitud moral por medio de certificados y diplomas , sin que estén revestidos de ningun modo del carácter sacerdotal propiamente dicho.

Un consistorto central reside en Paris; ocho consistorios departamentales abrazan todo el territorio de la República con sus circunscripciones.

El consistorio central se compone de un gran Rabino y de miembros laicos en número igual al de los consistorios departamentales ; estos miembros se eligen por ocho años y se renuevan por mitad cada cuatro años , por los notables de las circunscripciones consistoriales. Se eligen entre los notables residentes en Paris. Así el consistorio central es la representacion de toda la poblacion israelita y sus atribuciones muy estensas. Es el intermedio entre el gobierno y los consistorios departamentales. La alta vigilancia de los intereses del culto israelita les está confiada, y los reglamentos relativos á su ejercicio sujetos á su aprobacion; ninguna obra de instruccion religiosa puede emplearse para la enseñanza sino está aprobada por él, oído el dictámen del gran Rabino; tiene el derecho de censura respecto de los miembros laicos de los consistorios departamentales y de todos los ministros del culto; puede provocar la suspension ó revocacion de los rabinos consistoriales, y pronuncia la de los comunales y de los chantres ó ministros oficiantes.

En sus circunscripciones respectivas se han acordado á los consistorios departamentales poderes análogos; tienen la administracion y la policia de los templos y de los establecimientos y asociaciones piadosas que les están afectas. Ejercen todos los derechos de las sinagogas de sus jurisdicciones, mas no absorven en manera alguna estos establecimientos como en la organizacion de los cultos protestantes con arreglo á la ley del año x. Cada templo posee en efecto, por delegacion del consistorio, bien un comisario administrador, bien una comision administrativa que da cuentas al delegante de su ges-

tion. Los consistorios departamentales se componen del gran Rabino de la circunscricion y de cuatro miembros laicos elegidos por cuatro años y renovados por mitad cada dos por una Asamblea de notables. Esta, con arreglo á la ordenanza de 1844, comprende todos los israelitas de la circunscricion pertenecientes á determinadas categorías, las que abrazan á todos los que por las funciones que les ha conferido el gobierno, por el sufragio de sus conciudadanos ó por su inseription en la lista de los electores, del jurado ó de notables ofrecen las deseadas garantías de moralidad, independencian y capacidad. Habiendo sustituido en 1848 el sufragio universal á los censatarios, se ha aplicado á la eleccion de los consistorios, si bien no son admitidos mas que los electores mayores de 25 años de edad con arreglo á la ordenanza de 1844. De aquí el que las categorías de notables que esta ordenanza habia formado con tanto cuidado han quedado hasta cierto punto sin objeto; pero los que las componian continúan tomando parte en las elecciones; pueden ejercer en ellas una influencia útil, y el sufragio universal no está menos en armonía con los principios del culto hebreo que con los de los cultos protestantes.

Para la celebracion del culto y la interpretacion de la ley, el culto israelita tiene grandes rabinos, rabinos de consistorio, rabinos de municipio y ministros oficiantes, entre los que se establece una jerarquía igual á la de los consistorios.

El gran Rabino del consistorio central es un cargo vitalicio elegido por este consistorio, al que se agregan para la eleccion dos delegados elegidos por cada una de las circunscripciones departamentales. Es el primer ministro del culto y el primer doctor de la ley; tiene el derecho de vigilancia y amonestacion respecto de los demás rabinos, y puede officiar y predicar en todas las sinagogas de Francia: el consistorio central no puede adoptar ninguna resolucion concerniente al culto ó á los objetos religiosos sin su aprobacion. Los grandes rabinos de los consistorios departamentales gozan los mismos

derechos en los templos de su circunscricion, y les corresponden la vigilancia de los rabinos ordinarios y de los ministros oficiantes. Su eleccion se hace en igual forma que la de los miembros laicos de los consistorios. Los rabinos ordinarios y los ministros oficiantes son elegidos por una Asamblea de notables que designa el consistorio departamental. El nombramiento de los rabinos de todos grados se somete á la aprobacion del gobierno. Por lo demás, el culto israelita está sujeto á las mismas condiciones y goza de iguales prerogativas que los demás cultos reconocidos.

CAPITULO VI.

LEGISLACIONES ESTRANJERAS.

La legislacion de otros pueblos en materia de religion ofrece puntos interesantes de comparacion con la nuestra, pero no modelos que copiar.

Roma vive bajo el régimen de la teocracia. España, Portugal, Nápoles, Florencia y las repúblicas de la América del Sur reconocen como dominante y esclusiva á la religion católica. Sin embargo, la tolerancia hace progresos; los derechos de la conciencia empiezan á reconocerse; el fuego de las pasiones religiosas se calma sino se ha extinguido del todo. Es fácil prever que estos mismos pueblos proclamarán á su turno la libertad religiosa; pero sus leyes la rechazan, y no puede ser cuestion de interés para la Francia si le convendría adoptar la teocracia ó una iglesia dominante. La Francia no pudo consentir una religion oficial cuando la Carta de 1814 ensayó imponérsela. Nuestras ideas, nuestra civilizacion, la marcha constante de los espíritus, resisten á todo régimen de privilegio y de supremacia y, los mismos que en el fondo de su corazon desean su establecimiento se guardarian muy bien de proponerlo.

Muchas naciones han proclamado el principio de la liber-

tad de cultos, pero le han hecho sufrir las mas vivas persecuciones.

La ley de Rusia la consagra, pero su política le es contraria. Una multitud de sectas están admitidas; religiones tan diversas como las poblaciones de este inmenso imperio levantan allí sus altares. No obstante, se ha visto, hace algunos años, á cinco millones de griegos, católicos y romanos bajo el rito oriental, obligados á abrazar el símbolo de la Iglesia griega. Los que se separan de esta iglesia son perseguidos en su persona y bienes. Aun se recuerdan las persecuciones que han sufrido en Polonia los pobres religiosos. En 1850 la condicion de los judíos ha mejorado en virtud de un ukase que les releva de la obligacion de vestir un traje particular; pero siguen aun bajo el peso de humillantes restricciones. La libertad se concilia difícilmente con una iglesia nacional de la que el Czar es el jefe, y que está dirigida por un santo-sínodo, cuyos miembros nombra el Emperador.

Aunque la Prusia sea el pais de la libertad, de las opiniones filosóficas y religiosas, los cultos allí no escapan en manera alguna á la accion del poder político. La iglesia evangélica se fundó por un edicto de Federico Guillermo III. A pesar de las leyes que reconocen la incompetencia del gobierno respecto del dogma y no le autorizan mas que á velar por el mantenimiento «de los sentimientos de respeto hácia la divinidad, de obediencia hácia la ley, de fidelidad al Estado, de benevolencia y justicia hácia los ciudadanos», el rey toma parte en las discusiones dogmáticas y presta su apoyo de un modo ostensible al culto que sirve mejor su creencia y sus doctrinas políticas. El Estado civil está aun entre las manos del clero. Mucho tiempo la administracion eclesiástica ha estado confundida con las de las localidades en manos de las rejas. Solo desde 1845 se ha entregado á los consistorios compuestos de miembros que nombra el gobierno. La iglesia católica, en las provincias donde cuenta numerosos partidarios no está, sin embargo, al abrigo de las persecuciones: al

lado de opiniones que se proclaman sin restricciones, no obstante su audacia, el culto apenas disfruta de alguna libertad; hace pocos años que los discípulos de Hegel tenían un campo mas vasto que los disidentes católicos ó protestantes, y se podía decir que allí era mas fácil negar á Dios que servirlo á su manera.

Hasta estos últimos tiempos el Austria se ha regido por las leyes promulgadas por José II, y que sometían la iglesia católica á condiciones mas estrechas que las que resultan en Francia del concordato de 1801. Recientemente el gobierno ha renunciado al derecho de intervenir en el nombramiento de los obispos. M. de Schwarzenberg, sobrino de M. el arzobispo de Olmütz ha autorizado la correspondencia directa de los obispos con la Santa Sede. Si estas concesiones no dan lugar á abusos, la iglesia católica podrá mas tarde apoyarse en el ejemplo del Austria para pedir en Francia las mismas inmunidades.

La libertad civil y religiosa es el lema de la bandera inglesa, y, sin embargo, no puede decirse que domina sin restriccion en los tres reinos. Por falta de concierto con la Santa Sede, profundas agitaciones han seguido últimamente á los actos por los cuales Roma ha dividido la Inglaterra en circunscripciones religiosas; agitaciones que han demostrado las ventajas que presentan los concordatos que arreglan los derechos respectivos de la iglesia y del Estado. En Escocia la iglesia presbiteriana sufre los abusos del patronato. Una grave escision se manifiesta en su seno y los nuevos disidentes para gozar de una libertad absoluta se han separado, renunciado á sus empleos y fundado una iglesia enteramente independiente en presencia de la iglesia oficial. La nueva iglesia ha creado una universidad, varios colegios y numerosas escuelas. La Irlanda ofrece el espectáculo aflictivo de un clero dominando entre poblaciones que rechazan sus creencias, y contribuciones impuestas sobre todos, para pagar exclusivamente á los prelados de la minoría.

No hablaremos de la Baviera donde nuevamente se ha impuesto á los protestantes, por una ordenanza, la obligacion de arrodillarse ante el Santísimo Sacramento; ni de la Suiza, donde la religion ha encendido el fuego de la guerra civil; ni de los muchos Estados en donde los judíos, aunque libres de las persecuciones que condena la razon pública, no gozan sin embargo de la igualdad de los derechos políticos y civiles; mas á nuestras mismas puertas, dos Estados secundarios son muy notables por su legislacion sobre los cultos: queremos hablar de la Holanda y de la Bélgica. La Holanda ha consagrado la libertad religiosa; las diversas comuniones gozan allí la proteccion del gobierno y obtienen una retribucion para sus ministros. Sin embargo, hace apenas veinte y cinco años que habiéndose declarado un cisma en el seno de la Iglesia oficial mas particularmente reconocida por el Estado, se empleó el brazo secular para sofocarlo. Los *separatistas*, que se titulaban los verdaderos depositarios de la fé tal como el sínodo de Dordrecht la habia establecido al principio del siglo xvii, se vieron citados ante la policia correccional y castigados en virtud del art. 291 de nuestro código penal; pero estas prevenciones han cesado despues de algun tiempo, y los separatistas, lo mismo que las otras sectas disidentes gozan actualmente entera libertad. En Bélgica, una revolucion efectuada con el concurso del clero, ha dado por resultado consagrar la libertad sobre las mas anchas bases. Sin embargo, la Bélgica ha renunciado por su Constitucion á las garantías que nos dan nuestras leyes, y su historia desde hace 20 años ofrece el espectáculo de la lucha entre la influencia clerical y el nuevo sistema. La prudencia de un príncipe hábil y esclarecido, la reaccion de la opinion, el gobierno entregado en estos últimos años á hombres tan firmes como circunspectos, han reducido las pretensiones escesivas, por mas que ejemplos muy recientes demuestren que estas pretensiones no han perdido cosa alguna de su vivacidad.

La legislacion francesa ha producido quejas, es verdad;

¿pero qué régimen no las ha producido en este punto? La Santa Sede se gloria de sus relaciones con el gobierno francés, y no se asocia en manera alguna á reclamaciones erizadas de riesgos para el catolicismo mismo. Los católicos, mas imbuidos de doctrinas ultramontanas, que en otras épocas habian reclamado la separacion de la Iglesia y del Estado, han cesado de defender una opinion cuyo triunfo hubiera podido acarrear las consecuencias mas funestas (1). En las comuniones protestantes la mayoría admite sin doblez un régimen bajo el cual no se considera menos libre que protegida. Algunas sectas disidentes como los anglicanos, wesleyanos etc., tienen abiertos sus templos al lado de las iglesias reconocidas. Los que no han obtenido aun esta facultad, cesarán de quejarse luego que el principio de libertad, aplicado francamente, les permita, bajo las garantías debidas al orden público, celebrar su culto particular, y cuando encuentren en el poder político un simple vigilante, imparcial y confiado. En cuanto á los israelitas, no pueden menos de aplaudir una legislacion que ha cesado de considerarlos como un pueblo distinto, que los llama, con desprecio de las antiguas prevenciones, á participar con igualdad de todas las ventajas sociales, y les abre á pesar de esclusiones sostenidas aun por los gobiernos mas libres, el acceso hasta las dignidades mas altas del Estado (2).

Es lógico y natural que las iglesias reconocidas, y en particular aquella á que pertenece la mayoría de los franceses, procure sin cesar obtener mayor independencia. El Estado por su parte, en vez de ceder al sentimiento de mezquinos celos, debe acordarles sucesivamente mayores franquicias: su

(1) Véase Lamartine, tomo 10, edic. Pagnerre, pag. 34. Pref. escrito en 1835.

(2) Al pueblo judío pertenecen en las profesiones libres un gran número de médicos y de abogados, de notarios y procuradores etc.; en los empleos públicos, un ministro, un procurador, muchos magistrados del tribunal de apelacion y de primera instancia, 12 profesores, 200 oficiales, con especialidad de artillería é ingenieros, un coronel de estado mayor, 12 profesores en las universidades y liceos, y 6 cirujanos de ejército; en 1847 ingresaron en la escuela politécnica 10 israelitas. Dos miembros del instituto son de esta religion.

responsabilidad será menor, y su autoridad moral nada perderá en ello; pero debe siempre tener en cuenta los intereses del orden, de la paz pública, de la seguridad de las conciencias, intereses preciosos cuya custodia le está encomendada. La completa emancipacion de los cultos reconocidos ha de ser la obra del tiempo, de la estincion del fuego de las pasiones y de las preocupaciones. La Iglesia y el Estado deben trabajar mancomunadamente para conseguir esta emancipacion.

Para llegar á este objeto, para preparar no el divorcio sino la separacion de la Iglesia y del Estado, para que cada uno de estos poderes permanezca en el terreno que le es propio, importa ante todo evitar confundirlos. ¿Es esta la preocupacion de los que difunden con mas entusiasmo los derechos de la religion? Por una contradiccion chocante, mientras que desean escluir al Estado de los asuntos religiosos, procuran con perseverante afan que la religion intervenga en todos los asuntos de aquel. Llaman á los ministros del culto á tomar una parte oficial en los negocios públicos; procuran introducir las creencias en la legislacion civil y económica: alianza peligrosa sobre todo para la religion que se entrega á las pasiones políticas y se encuentra mezclada en nuestras tristes discordias.

El recuerdo de lo pasado suministra ejemplos respecto de este punto que deben servirnos de leccion para el porvenir. En la revolucion, la Iglesia católica ha pagado con odiosas y crueles persecuciones su largo reinado político. En 1850 se la ultrajó, segun la espresion de Mr. de Laménais, «por su alianza con el poder» Los ataques de que fué objeto tuvieron el carácter de represalias. «Por esta razon, el palacio arzobispal de París fué saqueado, porque se creyó ver en los últimos mandamientos del arzobispo alusiones al golpe de Estado. La Iglesia de San German de Augerrois fué devastada porque despues de un oficio por el alma del duque de Berry, un jóven imprudente colgó en el catafalco el retrato del duque de Burdeos. Por la misma razon las cruces de las misiones

:

colocadas en los últimos años se derribaron, porque llevaban en sus puntas flores de lis, y porque los misioneros mezclaron en sus sermones con bastante frecuencia objetos puramente políticos, mientras que la cruz antigua, la cruz sin emblemas extraños no fué objeto de ningun insulto. Por donde quiera que se encontró únicamente la religion, la religion fué respetada» (1). Lo que ha sucedido despues de la revolucion de febrero acaba de demostrar cuánto gana la religion con permanecer extraña á la política. Durante el reinado que ha concluido, todas han obtenido los respetos, las consideraciones, los favores que les son debidos, porque no han salido del santuario. No solo se vieron exentas de todo ultraje, sino que sus ministros recogieron tambien los homenajes del pueblo. ¡Que no se olviden estos recuerdos! ¡Que no se pierdan estas lecciones!

(1) Laménais, tomo VIII, pág. 52.



TÍTULO CUARTO.

LOS TEATROS.

Entre los objetos sobre los que la administracion está llamada á estender su viligilancia, y, en ciertos casos, su autoridad, pocos hay que sean tan dignos de fijar la atencion como los teatros; ellos enseñan como la escuela y hablan como la tribuna; se dirigen á la vez á la inteligencia, al alma y á los sentidos; reunen una numerosa concurrencia, á la cual embriagan con los placeres del espíritu, la mágia de la música y las ilusiones de la pintura; interesan al arte literario por las producciones que inspiran, y vivifican la industria por las empresas que alimentan, y la política por los sentimientos que hacen nacer ó que desarrollan. Mientras la multitud corre á buscar en ellos la distraccion, los teatros ofrecen un objeto de graves meditaciones al legislador, al administrador y al hombre de Estado.

Los teatros deben estar vigilados por la policía, pero confundirlos con los muchos objetos que son del dominio de esta hubiera sido desconocer su carácter especial y sus circuns-

tancias; hemos creído deber concederles un lugar distinto, aunque á continuacion de los cultos, á pesar del contraste, teniendo en cuenta la influencia que, bajo una administracion ilustrada, aunque en una esfera del todo opuesta y esclusivamente mundana, deben ejercer tambien en las costumbres públicas.

CAPITULO I.

LOS TEATROS DE INGLATERRA.

Hace veinte años se llamó la atencion de la Cámara de los Comunes sobre la condicion legal de los teatros; en su consecuencia se formó espediente para recoger datos, señalar las necesidades é indicar las reformas necesarias. En doce sesiones, treinta y nueve informantes, representando los diversos intereses puestos en juego, tuvieron que responder á mas de cuatro mil preguntas. Los empresarios de teatros estaban representados por siete propietarios, seis directores de Lóndres, y dos especuladores de provincias, el uno director de seis teatros y el otro arrendatario de tres. Los actores estaban defendidos por seis de entre ellos, elegidos en todas las categorías, desde Kean y Macready hasta los infelices cómicos de los teatros de segundo órden y de las compañías de la legua. Ocho autores y un compositor de música sostenian los derechos de la propiedad literaria. Los intérpretes de las necesidades de gobierno y de policia eran dos magistrados, un fiscal en el departamento del chambelan y dos censores. Se presentaron muchos documentos oficiales; y por último, de tan profunda pesquisa salieron dos bills, hijos de una probada esperiencia. El análisis de esta informacion y de los actos que han venido á confirmar sus resultados, ofrecerá algunos detalles curiosos acerca de las costumbres de un gobierno á que con demasiada frecuencia se toma por modelo del nuestro, pero que siempre es digno de estudio.

La Inglaterra es un pais libre; la prensa goza alli de

franquicias casi ilimitadas; la autoridad pública, las mas veces pasiva, no ejerce sino atribuciones muy restringidas. De aquí podria deducirse que los teatros no tenian trabas; sin embargo, es lo cierto que en todos tiempos ha pesado sobre ellos la legislacion mas restrictiva; las empresas están sometidas á la autorizacion prévia y las representaciones á la censura. El régimen de privilegios se hallaba establecido desde tiempo inmemorial; lejos de atacarle en principio, la informacion parece no haber tenido otro objeto que el de hacerle mas eficaz.

Habituados á nuestra legislacion por lo regular tan clara, tan rigurosamente observada por una magistratura que interroga el espíritu tanto como el testo de la ley, nos cuesta trabajo el creer el estado de desuso en que la ley de teatros habia caido en Inglaterra, por efecto de las dificultades que experimentaba su aplicacion. El teatro de Strand estaba abierto hacia ya veinte años, y otro hacia catorce, sin ninguna autorizacion. El chambelan encargado del gobierno de los teatros veia paralizado su poder por una sutileza singular. «Su autoridad, decian, es permisiva y no prohibitiva.» En vano los teatros privilegiados amenazaban con una denuncia: la preocupacion pública paralizaba al mayor número. Los mismos magistrados parecian ponerse frecuentemente de parte de los demandados; en vez de decirles simplemente:—«Probad que estais autorizados, presentad vuestras licencias,»—decian á los acusadores:—«Probad que los acusados no tienen permiso.» Y procediendo así, creian obedecer el sentido y la letra de los estatutos, y la ley, que segun ellos, no admitia el que los acusados presentasen pruebas contra sí.

Para eludir la ley se empleaban mil ardidés, que venia á autorizar el espíritu formalista de la justicia inglesa. Se cuenta que en Wolverhampton, donde sin la autorizacion competente daban representaciones los cuatro hermanos Kemble, habian ideado enviar invitaciones gratuitas. Por este medio eludian la prohibicion, que solo era aplicable á los teatros en

que se entraba pagando; y al pie del anuncio ponian lo siguiente:— «*Nota bene.* El billete es gratis, pero Mr. N... (el director de escena) posee unos escelentes polvos dentríficos á dos chelines un dinero la caja (*box*, que significa á la vez localidad y caja). Entrad y comprad.» Los que tal hacian no fueron perseguidos.

Así es que bajo una ley impotente, se explotaban, solo en Lóndres, doce teatros sin autorizacion. En las provincias se advertian los mismos desórdenes. Enterada de estos abusos la comision investigadora, propuso las medidas que le parecian á propósito para corregirlos. Solo once años despues y al cabo de muchas proposiciones que quedaron sin resultado, un bill del 12 de agosto de 1843, al adoptar en parte solamente las conclusiones de la comision, admitió un sistema mas sencillo que el suyo. Ningun teatro puede abrirse en toda la estension de la Gran Bretaña, sin letras patentes de la reina ó una licencia otorgada, segun los lugares, por el lord-chambelan ó por los jueces de paz reunidos en sesion especial, al menos en número de cuatro; en caso de contravencion, la multa en que se incurre puede elevarse hasta veinte libras esterlinas por cada representacion no autorizada. La autorizacion se paga como todo en Inglaterra, donde, en general, el público que se dirige á un empleado del Estado está en la obligacion de retribuirle. A este efecto hay establecida una tarifa; el máximum de la retribucion se eleva á 10 chelines para el chambelan y 5 para los jueces de paz, por cada mes que está abierto el teatro. La autorizacion se concede á un director responsable; su nombre debe estar impreso en todos los carteles; deposita una fianza de 500 libras esterlinas ó mas, y presenta á la aprobacion de la autoridad dos fiadores, cada uno por una suma de 100 libras esterlinas al máximum. Estas sumas están destinadas á garantir la observancia de las reglas impuestas á la empresa y el pago de las multas en que pudiera incurrir. El chambelan tiene el derecho de mandar la clausura, durante el tiempo

que cree conveniente, de todo teatro donde estalla algun des-órden ó sedicion; puede tambien prohibir las representaciones en ciertos dias marcados. Los jueces de paz, determinan en sus sesiones, los reglamentos que deben observarse para asegurar el órden y la decencia en los teatros de su jurisdiccion, y para fijar las épocas en que deben abrirse y cerrarse. En la circunscricion de las universidades de Oxford y de Cambridge, y á la distancia de catorce millas, los teatros deben además hallarse autorizados por el canciller ó el vice-canciller de la universidad, el cual puede tambien, en caso de des-órden, retirar el permiso. Un actor que representa en un teatro no autorizado incurre en una multa cuyo máximum es de 10 libras esterlinas por representacion; la ley es aplicable á toda representacion en que se sujete á los espectadores á pagar una cantidad en dinero, ó cualquiera otra retribucion directa ó indirecta, ó aun á comprar un objeto cualquiera; alcanza tambien á las tabernas, á los cafés etc., etc., donde se ejecutasen comedias; está formalmente prevenido que en caso de persecucion, el teatro acusado deberá probar que tiene autorizacion, y será considerado como sin ella si no puede exhibir la licencia. Están esceptuadas de las prescripciones de la ley las representaciones dadas en virtud de permiso de las autoridades locales con motivo de las ferias, fiestas y reuniones establecidas por el uso. Tales son las disposiciones adoptadas. El proyecto proponia reservar á los teatros que tenian ya privilegio esclusivo, el derecho de representar las obras de Sakespeare, y vedaba al lord-chambelan la facultad de hacer estensivo este derecho á otras empresas, disposicion que no se conservó.

Hasta el bill de 1845, los privilegios concedidos á las empresas, las sujetaban á un género determinado de obras. Los grandes teatros estaban únicamente autorizados para representar la tragedia, la comedia y toda clase de piezas comprendidas en la categoria de *drama legitimo*, denominacion mas literaria que legal. Los teatros secundarios (*mimor theatres*)

estaban consagrados á la ópera cómica ó al vaudeville (*burlettas*) y á los bailes; pero estos diversos géneros, sea por la insuficiencia de los reglamentos, sea por la imposibilidad de una designacion precisa, se confundian y eran mal distinguidos. La informacion de 1852 procuró obtener definiciones exactas, y no recogió sino esplicaciones vagas y contradictorias. La confusion de los géneros se habia aumentado por las costumbres del público inglés. Los primeros teatros representan siempre, despues de la tragedia ó la comedia, pantomimas ó farsas que hacen un contraste grosero con las grandes obras de su repertorio, y sin embargo, se ha llevado el abuso de las palabras hasta el punto de calificar las piezas de este género, representadas en los teatros de primer orden, de *farsas legítimas*. El nuevo bill no contiene ninguna disposicion relativa á la designacion de géneros, pero confiere al lord-chambelan poderes tan estensos que las nuevas autorizaciones pueden todavía establecer prescripciones especiales sobre este punto.

Las representaciones están sometidas á un régimen no menos restrictivo que la misma industria dramática; aunque la libertad de la prensa está reconocida y consagrada como uno de los primeros derechos del pueblo, todas las obras dramáticas están sometidas á la censura. Esta, únicamente condenada por algunos espíritus absolutos, no ha sido causa de ninguna reclamacion importante en la informacion de 1852. Teatigos graves reconocieron su necesidad. — «Las alusiones políticas, dijo uno de ellos, M. Tomás Morton, cuyas obras han tenido el feliz privilegio de atraer á la multitud, son acogidas con avidez por los espectadores. La escena se convierte en un foco de provocaciones, los aplausos inflaman allí los espíritus, las muestras de descontento pueden traducirse por revueltas. Nada mas terrible que un público furioso (*curaged*). Yo sé, añadió, por el célebre Talma, que la revolucion francesa no hizo mas que progresos insignificantes, mientras los teatros no sirvieron de arena á las pasiones populares: pero

en el momento en que la escena llegó á ser una tribuna, el movimiento fué irresistible.»

La censura parece haber sido conciliadora y fácil, y ha provocado pocas quejas. Algunos le acusan de capricho ó de parcialidad, la mayor parte hacen justicia á su claro talento. El examinador lee la obra, borra los pasages ó las palabras que le parece reprensibles, y si el todo le disgusta, pronuncia una prohibicion completa. Procura suprimir todo lo indecente, profano ó irreligioso, todo lo que justifica ó fomenta el vicio ó el crimen, lo que alude á los acontecimientos públicos contemporáneos y especialmente las palabras que pueden alterar el orden. Una tragedia de *Cárlos I* fué prohibida porque no faltaba a la pintura del regicidio sino ver caer sobre el tablado la cabeza del infeliz monarca. En otra obra se hacía decir á un personaje hablando del rey Guillermo:—«Toca el violin como un ángel.» Esta frase fué suprimida. La censura cerceña severamente todas las espresiones groseras ó impías. Así es que no sufre estas palabras:—«*sobre mi sangre y mi alma.*» rechaza todo empleo inútil del nombre del Creador, todo pasaje contrario á las opiniones religiosas, todo juramento: *Dios me condene* etc. En la opinion de los censores, la tragedia puede soportar el uso del nombre del Ser Supremo, pero la comedia no. Segun dice Cárlos Keimble, la censura hace á veces supresiones algo frívolas y que denotan mas gazmoñería é hipocresía que luces y elevacion de espiritu. Uno de los censores Dedos consiente que un amante diga á su querida: *Angel mio*; pero otro, Jorge Colman, se opone absolutamente, como á una iniquidad en el terreno sagrado; proscribe la palabra *muslo* por indecente, y las de *Diablillo condenado* por blasfematoria. El testigo que señaló estos rigores fué el fecundo Moncriff, autor de 200 obras dramáticas, todas ellas censuradas. Por lo demás, el mismo Jorge Colman, á quien asustaba la espresion *ángel mio*, ha escrito para el teatro y no siempre se ha mostrado tan delicado. El presidente de la comision, tuvo la maligna idea de recordárselo y le puso, so

pretesto de informacion, en un potro, en el siguiente diálogo: — «El comité ha sabido que habeis quitado de una pieza el epíteto de *ángel* aplicado á una mujer. — En efecto, porque un ángel es una mujer, si así lo queréis, pero una mujer celestial. Es una alusion á los ángeles de la Escritura, que son cuerpos celestes. Todas las personas que han leído la Biblia, lo saben y, si acaso lo ignoran, les remito á Milton. — Cómo conciliais vuestras opiniones de hoy con el uso que vos mismo habeis hecho, en algunas de vuestras composiciones mas aplaudidas, de palabras que hallais impías y de juramentos que hieren vuestros oídos? — Si yo las hubiera examinado, las habria tachado, y ahora lo haré. Entonces era otra mi posicion. Yo era un escritor licenciado y atrevido; hoy soy el censor dramático. Entonces desempeñaba mi oficio de autor; en este momento hago el papel de censor. — ¿Creeis que hayan corrompido las costumbres esas obras que obtuvieron tan buen éxito y que ya no podeis corregir? — Ciertamente que no las habrán purificado, y siento haber introducido en ellas esas profanaciones. En calidad de ente moral, se hace uno mas virtuoso con los años, y yo seré feliz alejando de mi espíritu ese recuerdo. — ¿Es decir que sentis ser el autor de John Bull? — No, de ninguna manera; es otra cosa. Puedo haber hecho un buen pudding; pero si contiene algunas pasas dañadas me complacería en quitárselas »

La comision investigadora no hizo ninguna proposicion relativamente á la censura, limitándose á criticar el modo de percibir las cuotas impuestas por los oficiales del lord-chambelan. El bill de 1849 sancionó y regularizó el régimen observado hasta entonces. Segun las disposiciones de este bill, debe presentarse al lord-chambelan, lo menos siete dias antes de la primera representacion, una copia de toda obra dramática nueva, de todo acto, escena ó fragmento añadido á las antiguas, con espresion del teatro que se propone representarla, pudiendo prohibirse la representacion antes ó despues de este período de siete dias. Por el exámen se paga un de-

recho, que no puede pasar de dos guineas y debe satisfacerse en el momento mismo de la revision de la copia. El chambelan puede pronunciar la prohibicion cuantas veces crea que lo exige el interés de las buenas costumbres, el *decorum* ó la tranquilidad pública (*for the preservation of good manners, decorum or of the public peace*); esta es absoluta ó temporal y comprende todos los teatros de la Gran Bretaña ó solamente algunos. El que ejecute una obra prohibida, ó nada mas que sin la autorizacion del chambelan, incurre en una multa la cual puede elevarse á 50 libras esterlinas, retirándose al teatro la autorizacion.

No pueden estudiarse los intereses de los teatros sin preocuparse de los de los autores dramáticos. Hasta 1833 la legislacion inglesa habia manifestado el mas estraño desden hácia los derechos de la propiedad literaria. No era necesario obtener el permiso del autor antes de representar la obra, ni pagarle un derecho cualquiera, como en Francia, por cada representacion. El autor no obtenia una retribucion sino del teatro donde entregaba el manuscrito y con el cual trataba. Los teatros de provincias se creian libres y lo eran de hecho, para representar toda obra ejecutada en Lóndres, y los de la capital toda obra ya publicada, porque entonces se consideraba como del dominio público. A fin de retardar el ejercicio de este derecho, si puede darse este nombre á un verdadero robo, el teatro, al tratar con el autor, convenia con este en que no publicaria su obra hasta pasados tres meses; pero algunos jueces, como O'Keefe, habian decidido que la representacion constituia una publicacion. Iban taquígrafos al teatro para apoderarse de la obra durante la representacion; una oficina central la vendia, y se representaba en todas partes sin obstáculo; lo que entonces procuraban los directores era no tratar con el autor. Las copias se vendian á dos ó tres libras, y esta industria de pirata enriquecia á los taquígrafos y á los teatros y arruinaba á los pobres autores. Así es que los escritores dramáticos hicieron oír las quejas mas vivas y pidieron

unánimemente que se adoptadase la ley francesa. En apoyo de esta opinion se citaban los hechos mas tiránicos.

Estos hechos llamaron extraordinariamente la atencion de la comision, la cual declaró que los autores sufrían una opresion inicua é intolerable, y demostró que este régimen de espoliacion causaba graves perjuicios á la literatura dramática. A sus ojos, la sola comparacion de los padecimientos impuestos á los autores dramáticos con la proteccion de que gozaban los demás escritores, debia apartar á todo autor eminente y popular de la carrera del teatro. Quisieron poner inmediatamente remedio á estos desórdenes inescusables, y en la sesion siguiente M. L. Bulwer, propuso un bill que fué definitivamente aprobado el 10 de junio de 1855, el cual estableció que, lo mismo que los demás escritores, los autores dramáticos gozarian esclusivamente durante su vida, y cuando menos por el espacio de veinte y ocho años, á contar desde la primera representacion, del derecho de representar, ó hacer representar las obras de su composición en los teatros de la Gran-Bretaña y sus dependencias. Los contraventores quedaron sujetos á una indemnizacion proporcionada al perjuicio sufrido por el autor, indemnizacion que en ningun caso podria bajar de 40 chelines. Este bill no fijaba ningun medio de asegurar el cobro de las retribuciones que autorizaba. Para conseguirlo, la mayor parte de los autores dramáticos se reunieron en sociedad y nombraron agentes en todas las ciudades del reino. Esta asociacion autoriza á los empresarios de teatros para representar las obras de sus miembros, mediante una tarifa cuyo minimum es de 7 chelines.

El informe de 1852 suministró ademas noticias muy curiosas sobre los cómicos. La Inglaterra no posee ninguna escuela dramática, ningun establecimiento análogo á nuestro conservatorio y á sus clases de música y declamacion. Asi es que allí no se forman actores para representar el repertorio clásico de Sakespeare, Otway etc. Los teatros de provincia son los que sirven de plantel á los de la metrópoli. York,

Bath, Dublin y Liverpool pasan por formar los mejores actores. Kean se educó en los teatros de provincia.

La condicion de los actores es generalmente precaria, triste y poco digna de envidia; lejos de mejorarse, se ha hecho mas crítica bajo la influencia de ciertas preocupaciones que cada dia se arraigan mas y mas. El desaliento mata sus disposiciones. «El que pueda hacer otra cosa, dice Macready, que no se lance á la ingrata carrera del teatro.» Mientras que los grandes actores hacen la ley, los medianos la sufren. Se paga con demasia á los primeros, y á los otros con una mezquindad estremada, doble efecto de una escesiva competencia. «Los teatros que se abren en todas partes, dijo un actor en el informe, degradan la profesion; se procuran un actor de mérito á quien llaman su *estrella* (star), y el resto de la compañía es miserable.»

Bajo el régimen que acabamos de trazar, los teatros padecen y hacen vanos esfuerzos para escapar á su ruina. Los de Lóndres se hallan en el estado mas deplorable. Por una singularidad digna de notarse, el público acude con preferencia á la ópera italiana y al teatro francés, y en los teatros secundarios la mayor parte de las obras son traducidas de nuestro idioma. De los dos teatros nacionales el uno se ha cerrado en muchas ocasiones: el de Covent-Garden. El otro, el de Drury-Lane no ha prosperado ni aun bajo la direccion de Macready.

La necesidad de obtener grandes ingresos condena á los grandes teatros á recurrir á todos los expedientes propios para escitar la curiosidad pública. Si se limitasen á la tragedia ó á la comedia, no podrian subsistir; dan pantomimas, bailes, obras de espectáculo, y farsas; las pantomimas principalmente tienen el privilegio de atraer al público, sobre todo durante las festividades de Navidad. Los teatros se han convertido en casas de fieras; con gran escándalo de los amantes del teatro nacional, se han visto tigres y leones en Covent-Garden y Drury-Lane, obteniendo un éxito innoble.

Después de las farsas, las obras mas populares son aquellas en que se pinta al crimen en toda su horrible desnudez. Las escenas de asesinato atraen y cautivan al público; el patio, generalmente bullicioso, queda mudo en el momento que brilla á su vista la hoja de un puñal. Parece que á medida que los grandes teatros prostituian su escena para restablecer sus intereses, las representaciones de las empresas secundarias tomaban un carácter mas elevado. Hace treinta ó cuarenta años, se ejecutaban piezas apenas soportables en los tablados de la feria. Después los autores se mostraron mas escrupulosos, los directores mas severos, y ciertas obras han obtenido un éxito bastante lisonjero para escitar la envidia de los grandes teatros, que se apoderaron de ellas, representándolas á competencia.

A pesar de todos los esfuerzos, el público parece alejarse de los teatros. En otro tiempo el rey y su familia les concedian una decidida proteccion, asistiendo al menos una noche por semana; la corte los imitaba. En el dia no existe ya esta costumbre. El cambio de las horas de comer, retiene en sus palacios á la aristocracia y á las clases ricas. En la alta sociedad es moda no asistir al teatro. Van á los conciertos matinales, ó escuchan en sus casas la lectura de las obras en voga; pero no desean verlas representar. La curiosidad pública en general, se ha enfriado, segun dicen. El espíritu de secta ó de rigorismo crea otras trabas; los teatros están con frecuencia cerrados por motivos religiosos. Durante muchos años, ningun teatro de Cambrige pudo obtener permiso para abrirse, ni aun en las vacaciones de la universidad y para la diversion esclusiva de los habitantes de la ciudad. El gusto público tiene su parte en la decadencia del teatro. A creer á Kean, los ingleses no son una nacion dramática, y el arte está en una decadencia mas espantosa que nunca. Los autores abandonan los asuntos nobles ó elevados para abrazar los géneros secundarios, y renuncian al teatro por los trabajos periodísticos, ó por la novela.

Tal es en conjunto el estado del teatro en Inglaterra; ninguna escena abierta al público sin autorizacion, ninguna representacion sin estar la obra censurada; los autores, mucho tiempo entregados á las mas injustas exacciones, protegidos en fin por una ley; los actores abandonados á sí mismos y en su mayor parte pobres y desgraciados. Bajo este régimen padecen las empresas dramáticas, no se fomenta el arte, y el público se aleja de los teatros.

La organizacion francesa ofrece numerosas analogías y desemejanzas notables. La mayor se refiere á la diferencia general del sistema de administracion adoptado en ambos paises. Por el cuadro que vamos á presentar podrá juzgarse del contraste.

CAPITULO II.

LEGISLACION FRANCESA.

§. 1.^o *La industria dramática.*

En Francia, lo mismo que en Inglaterra, no puede abrirse ningun teatro sin una autorizacion especial, cuyas cláusulas dicta el gobierno, en vista de la utilidad pública. Bajo la antigua monarquía, era bastante un acto de la voluntad personal del soberano para abrir ó cerrar los teatros. Luis XIV, que los tenia en tanta estima que los colocaba al lado de las ciencias, «entre los adornos mas considerables de sus Estados (1),» no toleró mas que un pequeño número durante los muchos años de su reinado. En 1680 estaban abiertos cinco teatros en París; una real orden los redujo á tres. Este régimen subsistió sin interrupcion hasta 1789; ningun teatro podia abrirse, tanto en París como en las provincias, sin un privilegio del rey, concedido por decreto del consejo.

Los principios de libertad proclamados por la Asamblea

(1) Privilegio para el establecimiento de la Academia Real de música, marzo de 1672.

constituyente abrieron una nueva era para el teatro. La ley de 19 de enero de 1791 declaró que «todo ciudadano podia levantar un teatro público y hacer representar en él toda clase de obras,» prévia una sencilla relacion hecha á la municipalidad del distrito. Así quedó proclamada la libertad, pero ninguna condicion iba unida á ella. «Cada uno sabia entonces, segun la espresion de Mirabeau (1), lo que era preciso derribar, nadie sabia lo que se necesitaba establecer.» Los inconvenientes de este nuevo régimen no tardaron en manifestarse. Las empresas teatrales se multiplicaron; solo en París no se contaban menos de cuarenta durante los años mas terribles de la revolucion. La competencia entre los especuladores abrió abismos donde se perdieron muchas fortunas. El mal pareció mayor aun bajo el punto de vista de la policia y la moral pública. «Se vé, decia el ministro de lo Interior en un informe de 5 de marzo de 1806, se vé todo los dias una multitud de teatritos disputarse en la capital un débil ingreso y el triste éxito de atraer á la última clase del pueblo por medio de espectáculos groseros, ó de pervertir á la infancia con pretendidas escuelas que roban á la sociedad individuos útiles, sin formar jamás discípulos aventajados. Se vé á hombres desconocidos abrir teatros en los departamentos, recibir abonos, hacer empréstitos, cerrar pronto aquellos por una quiebra que queda impune, y enriquecerse á espensas del público y de los prestamistas.» Este desarrollo exagerado de la industria dramática se esplica fácilmente. Las libertades que aun no habian sido entregadas á sus propias fuerzas, de que los ciudadanos han carecido mucho tiempo, y cuyos medios no han tenido ocasion de estudiar los gobiernos, sorprenden la inespriencia de unos y de otros y caen casi siempre al principio en estos estravios. Un gobierno liberal y moderado no debe por eso concebir temores. Con el tiempo los ciudadanos se vuelven mas cautos, la administracion mas

(2) Nota al consejo de 7 de setiembre de 1790.—Correspondencia con el conde de Lamarek. tom. II, p. 463.

avisada, la legislacion se acomoda á las necesidades que se advierten, y el orden se restablece; pero esta sábia paciencia no era el carácter del gobierno imperial.

Dolido de estos desórdenes, el Emperador quiso ponerles término. Se propuso nada menos que suprimir empresas formadas en virtud de la ley y bajo su proteccion. Desde luego se procuró regularizar el caos sin sacudimiento ni violencia. El decreto de 8 de junio de 1806, estableció dos principios: la necesidad de la autorizacion del jefe del Estado para abrir un teatro en París, y el derecho del gobierno para determinar el género de espectáculo de cada empresa. El mismo decreto prescribia reducir el número de los teatros explotados en los departamentos, y colocó bajo la vigilancia del ministro de lo Interior los que debian conservarse. Habiendo producido muy buenos efectos este pequeño golpe de Estado, se apresuró el gobierno á restringir, hasta en el mismo París, una competencia escesiva. Una resolucion violenta costaba poco al Emperador; cuando la creia necesaria, no se detenia ni aun delante de los derechos de la propiedad, y estendia sin medida el poder del Estado, tan comprimido por la Asamblea constituyente. El 29 de julio de 1807 decretó la reduccion del número de teatros á ocho, á saber: cuatro grandes teatros y cuatro de segundo orden. Los demás debian cerrarse antes del 15 de agosto. Poco despues fueron restablecidas dos de las empresas suprimidas, de modo que París no poseyó mas que diez teatros.

La autorizacion prévia del gobierno, la division de géneros, la limitacion del número de empresas, tales son las tres reglas que resaltan en los decretos imperiales. El Emperador quiso mas todavía. Consideraba á la ópera y al teatro francés como instituciones nacionales, cuyo esplendor dispendioso debia sostenerse aunque fuese á espensas de la especulacion privada. De consiguiente se creyó autorizado para sujetar todos los teatros secundarios á contribuir con una cantidad para la ópera, y si no hizo estensivo el beneficio de

esta medida á la comedia francesa, fué sin duda porque entonces estaba en una gran prosperidad. Pero ya que no otra cosa, atribuyó al teatro francés, como tambien á la ópera cómica la propiedad de las obras de su repertorio, que eran del dominio público, y quiso que ningun otro teatro pudiese tomar obras de estos repertorios «sin la autorizacion de los propietarios y sin pagarles una retribucion que se arreglaría segun la importancia de los teatros.» El derecho esclusivo de dar bailes de máscaras en París fué conferido á la ópera, y en los departamentos á los teatros aprobados. Mas tarde se autorizó á la comedia francesa para llamar á su compañía á todo actor que recibiese del gobierno una orden de *debut*.

Todo se combina y encadena en esta organizacion. La ópera, sostenida por el Estado, subvencionada por los teatros de segundo orden está á la cabeza de los teatros líricos; despues están la ópera cómica enriquecida con su repertorio especial, y la ópera buffa, su aneja. La tragedia y la alta comedia, en gran voga entonces, son por decirlo así patrimonio del teatro francés, del cual es un anejo el Odeon, solo para la comedia. Un repertorio compuesto de todas las obras maestras de nuestra literatura, y el derecho de absorcion consagrado por las órdenes de debut, aseguran la supremacía de la primera escena francesa. En grado mas inferior se abren para los talentos menos cultivados, la Gaité, el Ambigú cómico, dedicados al Mélodrama, las Variedades y el Vaudeville, consagrados al género que ha dado su nombre á este último teatro; despues se toleró el de la Puerta de San Martin para el drama y los bailes, y el Circo-Olímpico para los ejercicios de equitacion y las pantomimas ecuestres. Los teatros secundarios están abandonados á sí mismos; la industria privada que los sostiene con á espensas es tributaria de la opera á quien paga la vigésima parte de sus ingresos. Solo á los grandes teatros se los juzga dignos de una proteccion especial, y están colocados bajo la tutela de un superintendente de espectáculos, encargados de velar por la

prosperidad del arte dramático y por el bienestar de los que contribuyen á los placeres del público.

Esta organizacion cuyo poder no puede ponerse en duda, atentaba demasiado profundamente á los derechos privados y á la libertad industrial para sobrevivir al poder absoluto que la habia fundado. Despues del establecimiento del gobierno constitucional, todas las bases sobre las cuales reposaba fueron alteradas ó destruidas. El régimen de las autorizaciones previas subsistió, pero la administracion cesó en su tarea de establecer el equilibrio entre las necesidades de la poblacion y el número de los teatros; este número, tan pronto reducido por las quiebras, como aumentado por la concesion de nuevos privilegios, no llegó á fijarse. Los teatros pequeños obtuvieron de los tribunales la exencion de esa especie de tributo feudal que los convertia en vasallos de la ópera. Las órdenes de debut que debian surtir de actores al teatro francés; fueron reconocidas contrarias al principio de la libertad individual. La misma division de géneros, aunque conservada por los reglamentos, no pudo regir las composiciones modernas, en que los géneros se encuentran mezclados y confundidos, unas veces por una alianza feliz y otras por un maridage chocante. Hoy dia no quedan de la legislacion imperial mas que el apoyo concedido á los grandes teatros, por medio de subvenciones públicas, la propiedad de un rico repertorio, y la obligacion para todos los teatros de un permiso previo del gobierno.

El régimen establecido por el Imperio está todavia en vigor en los departamentos, salvo algunas modificaciones que el tiempo debia introducir en ella y que los reglamentos administrativos han adoptado. Cuarenta y cinco compañías sedentarias esplotan, con residencia fija, las principales ciudades de la República; diez y ocho compañías de distrito recorren las poblaciones mas importantes de un número igual de demarcaciones señaladas á este efecto; diez y nueve compañías ambulantes, repartidas en estos mismos distritos, re-

corren los pueblos mas pequeños; diez y ocho departamentos están fuera de las demarcaciones. La mayor parte de las ciudades importantes se imponen sacrificios para sus teatros; las indemnizaciones aprobadas con este objeto ascienden en algunos puntos á la suma de 120,000 francos. Los teatros de los departamentos tienen tambien derecho al privilegio de los bailes de máscaras y á la quinta parte de los ingresos de los espectáculos y esposiciones, de cualquier género que sean, abiertos en la esfera de su explotacion.

Tal es, en lo tocante á la industria dramática, el estado actual de la legislacion. En virtud del derecho de autorizacion, los teatros colocados enteramente bajo la mano de la autoridad pública, están además, sometidos á ciertas reglas secundarias que se han juzgado útiles, y reclamadas por el interés público. Así es que la administracion exige de los directores una fianza para garantir los derechos del Estado en los teatros en que posee una parte del material, y asegurar en todas partes á los artistas y empleados el pago de sus asignaciones. Esta fianza es para la Opera de 250,000 francos; para la Opera-Cómica de 80,000; para los Italianos 60,000; para los teatros de segundo orden de 50,000, y solo de 40,000 para los de la última clase. El teatro Francés y el de Variedades, que gozan de un privilegio perpétuo, están libres de esta carga. En provincias, las empresas de las poblaciones de primero y segundo orden ponen tambien una fianza. Por mucho tiempo ha ido unida á la trasmision de los privilegios vacantes por quiebra, la condicion de pagar á los acreedores de la empresa anterior, ya integralmente, ya arreglándose con ellos; pero ha parecido que esta obligacion comprometia á la nueva explotacion, gravándola con un pasivo considerable, aun antes de que estuviese en actividad: hoy se conceden los privilegios, sin ninguna solidaridad de las deudas contraídas por los directores que han hecho quiebra. Estas diferentes medidas nos parecen sábias y útiles. No diremos otro tanto de ciertas reglas establecidas por la administracion, tales como

la que no concede privilegios sino limitados á una duracion generalmente muy corta; la que dispone que en caso de fallecimiento del director, no se reconozca ningun derecho á sus herederos ó representantes; esto imposibilita toda clase de asociaciones. Semejantes restricciones, desconocidas en Inglaterra, aun bajo el régimen de las autorizaciones, parecen combinadas, mas bien para perjudicar á las empresas, que para llamar á ellas los capitales; demuestran mas espíritu de enredo que elevacion de miras.

Por mas que, bajo este régimen, la administracion esté investida de una autoridad mucho mas estensa que en Inglaterra, el estado del teatro en Francia no es mas próspero que en el Reino-Unido: no considerando mas que los resultados materiales, basta decir que solo en Paris y en el espacio de veinte años, de 1829 á 1849, las quiebras se han sucedido sin interrupcion en las empresas dramáticas; que la mayor parte de los teatros las han sufrido, y que particularmente el del Vaudeville se ha cerrado seis veces, y el de la Puerta de San Martin, cinco. El número de las quiebras declaradas durante aquel período es de cincuenta. Los mismos desastres se han notado en los departamentos; la explotacion de los teatros provincianos ha llegado á hacerse tan peligrosa, que no se encuentra fácilmente quien reemplace á los directores que sucumben, á pesar de los sacrificios que se imponen casi todas las ciudades para conservar un espectáculo.

Las causas que han producido tantos embarazos y desastres en el mundo dramático son muy diversas. El mal proviene en parte de causas morales independientes de los hombres, pero puede atribuirse tambien á faltas administrativas. La que ha tenido consecuencias mas perjudiciales, es el desmesurado aumento del número de teatros. Parece que al conferir al gobierno el derecho de conceder privilegios, la ley se propuso especialmente arreglar por las necesidades públicas el número de las empresas dramáticas. Este objeto se ha perdido completamente de vista. Se ha ido mucho mas allá en

las nuevas concesiones, de los progresos de la poblacion y de los ingresos obtenidos por los teatros. No se han contentado con autorizar nuevas empresas dramáticas; en todas partes se dan conciertos y bailes, en virtud de permiso del gobierno. En los salones en que el precio de entrada es inferior al del billete mas barato de los teatros privilegiados, se ha introducido el canto; en estos últimos tiempos los cafés de los Campos Eliseos han sido autorizados para dar conciertos al aire libre. La administracion agota todos sus esfuerzos para divertir al pueblo de París. No puede censurársela por ello; pero, ¿quién desconoce los perjuicios que sufren los teatros privilegiados? Se les niegan las facilidades que, sin dañar al público, atenuarian sus pérdidas; durante el estío, por ejemplo, cuando el campo y otros placeres atraen á la poblacion, podria permitírseles suspender las representaciones que se dan sin auditorio; pero en virtud de las cláusulas del privilegio no puede suspender un solo dia el curso de sus gastos.

¿Qué ha resultado de esta competencia creada por la misma administracion? Los teatros agotan los sacrificios y los esfuerzos de todas clases para evitar su ruina. Sufren las exigencias de los autores y de los actores; los escritores de nota exigen primas exorbitantes; los actores queridos del público reclaman asignaciones desconocidas hasta aquí; hemos visto pagada una pena de 100,000 francos por trasladar á un actor de un teatro secundario á una escena rival. El lujo de las decoraciones y el servicio de escena, suple á la medianía de las obras. El sastre, el pintor, el maquinista y los figurantes, cobran enormes cantidades en los teatros. No se escasea nada para alucinar al público. Anuncios engañosos le prometen obras maestras y ensalzan á los artistas mas vulgares. Aplaudidores de oficio asalariados, remedan el entusiasmo; se llenan las localidades de un público que asiste grátis, para preservar al corto número de espectadores de la frialdad y el aislamiento. Las primeras representaciones no son mas que una sorpresa y los jueces imparciales ceden en ellas el puesto á

los empresarios; cuyo celo venal proporciona un éxito falso.

Indudablemente sería injusto acusar solo á la administracion de estos desórdenes; sin embargo, al verla armada de la especie de omnipotencia que ejerce sobre los teatros, es permitido inquirir qué uso ha hecho de ella y preguntarse qué provecho han sacado el público en general y la industria en particular del poder ilimitado que tiene en su mano; tambien es permitido suponer que la industria hubiera acaso evitado estos desastres hallándose entregada á sí misma, y aun cuando los hubiese sufrido, la administracion tenia el derecho al menos de declinar en ella su responsabilidad.

¿Conviene conservar una legislacion que ha producido tales frutos, y no ha lugar á introducir un principio nuevo? Esto es lo que nos proponemos examinar. En esta tarea nos ayudará un documento que ha arrojado mucha luz sobre todas las cuestiones relativas á los teatros. En 1849, el Consejo de Estado á quien Mr. Dufaure, ministro de lo Interior habia cometido el exámen de un proyecto de ley que consagraba la libertad industrial de los teatros, juzgó necesario proceder á una informacion. Hizo un llamamiento á la experiencia de las personas mas competentes por sus trabajos, su profesion y sus intereses; escritores que han adquirido una justa celebridad en la crítica literaria y en el arte dramático, autores y directores de diferentes teatros, agentes honrados con la confianza de los autores y de los artistas, antiguos censores, fueron á esponer sus opiniones, fundadas en un conocimiento práctico de los hechos. El Consejo de Estado, despues de una profunda discusion, adoptó un proyecto de ley que en nuestro concepto contiene la mejor solucion de las cuestiones que promueven los teatros.

Los diversos sistemas que se han sucedido pueden considerarse como representando tres principios: libertad ilimitada, bajo las Asambleas republicanas;—limitacion absoluta del número de teatros, bajo el Imperio;—autorizacion minis-

terial ó sistema de los privilegios, bajo la Restauracion y el gobierno de Julio.

Estos tres sistemas fueron abandonados por el Consejo de Estado. Un notable informe de Mr. Charton indica en los siguientes términos las razones en que se apoyaba esta resolucion:

«La libertad sin limites, decia, está condenada por la experiencia no menos que por la razon. Establecimientos que muchas veces se han comparado con las escuelas y los tribunales, no podrian ser completamente asimilados á las operaciones ordinarias de fabricacion y de negocio. La industria teatral es evidentemente del número de aquellas á quienes su carácter particular obliga á someterse á ciertas condiciones de precaucion y de orden. Ninguna disposicion legislativa podria prevenir y moderar las agitaciones de una competencia, que destruiria el arte mismo, turbando y dispersando en una fluctuacion perpétua los elementos consecutivos y complexos que por sí solos dan á las representaciones dramáticas un valor real, y permiten llegar á obtener, hasta cierto punto, la perfeccion.»

»La limitacion absoluta de los teatros no parece compatible con el espíritu de nuestras instituciones; sus efectos serian establecer, una especie de monopolio legal, crear, por decirlo así, pequeños feudos teatrales. La voluntad y el poder del Emperador no bastaron á sostener este régimen. Antes que él cayese del trono, el limite que fijó se habia traspasado. El movimiento de la poblacion, las modificaciones del gusto, las vicisitudes de la fortuna pública, dificilmente permitirian, por otra parte, asegurar á esta limitacion una base racional é inmutable. Segun todas las probabilidades, si nos lanzáramos de nuevo en este régimen, volveríamos á hallarnos bien pronto en presencia del sistema misto de los privilegios, que la práctica administrativa se ha visto precisada á sustituir al de los decretos, y que fué confirmado por la ley de 1835.

«Este último sistema, que arregla todavía las relaciones de la administracion con los teatros, no ha encontrado defensores ni en la comision permanente del ministerio de lo Interior, ni en el curso de la informacion abierta en el Consejo de Estado. Hé aquí de qué modo ha sido apreciado en la relacion unida al proyecto del gobierno: «Entre la fijacion rigurosa del número de teatros y la libertad, no existe sino un régimen misto que reúne todos los inconvenientes de los otros dos, sin tener ninguna de sus ventajas. Este régimen ha producido lo que vemos... los gobiernos que se han sucedido de treinta y tantos años á esta parte, se han dejado arrancar los privilegios, no los han concedido de buen grado. Además, una de las necesidades fatales inherentes á las concesiones de este género, es la de ser solicitadas y otorgadas sin consideracion á la capacidad, al mérito, ni siquiera á los recursos materiales. A pesar de las precauciones de que siempre se rodea, la administracion corre el riesgo de ceder á las influencias que saben poner en juego los pretendientes de nuevos privilegios; se vé obligada á escoger entre ellos sin verdadera libertad, y no por eso es menos grave la responsabilidad que contrae. Cuando se trata de la trasmision de un privilegio ya existente, á consecuencia de la retirada voluntaria ó forzosa del titular, el peligro es todavía mas serio. En este caso, el privilegio, inalienable por naturaleza, en vez de volver al Estado, se vende casi siempre, ya por el mismo titular, ya por sus acreedores ó litigantes, y el precio se confunde con el del material que sirve para la explotacion de la empresa. Al trasformarse en un valor venal y transmisible, el privilegio se convierte al mismo tiempo en una prima ofrecida á la especulacion. Le solicitan, no por amor á el arte, sino por un interés puramente comercial. Muchos teatros no se hubieran establecido sin el incentivo del beneficio que se puede sacar en la plaza, y así es como el privilegio ha desnaturalizado su objeto, multiplicando lo que debia restringir y limitar.»

El Consejo de Estado se pronuncia, pues, en favor de un nuevo sistema. La informacion demostraba que la libertad misma fundaria menos teatros que el régimen bastardo de los privilegios, y que la industria particular, entregada á su propio discernimiento, apreciaria mejor las necesidades del público que la administracion, que le habia sustituido. En su consecuencia, el Consejo de Estado admitió la libertad, pero rodeándola de todas las precauciones cuya necesidad habia probado la esperiencia y que adoptaban los mismos que reclamaban con mas ardor la emancipacion de la industria dramática. Segun el proyecto adoptado, todo francés, mayor de edad, y gozando de sus derechos civiles, tenia el derecho de abrir un teatro, con la obligacion de hacer una declaracion prévia á la autoridad municipal, de designar el sitio donde debian ejecutarse las representaciones, y de depositar una fianza de igual valor al producto íntegro de diez entradas completas. La fianza se exigia « como garantía del pago de las multas impuestas con motivo de infracciones, y como una especie de garantía para los numerosos intereses que se ligan á las empresas teatrales. »

No era permitida ninguna representacion sino en una sala que pudiese contener á lo menos mil espectadores en París, ochocientos en las ciudades de cincuenta mil almas ó mas, y seiscientos en las otras. « El motivo de esta disposicion, decia el informe, es sobre todo de orden moral. Uno de los abusos mas funestos al arte y al orden, que se han censurado en el sistema de la ley de 1791, es, segun la unanimidad de los testimonios, la facilidad con que podian darse en salas pequeñas, en reducidos tabladós, pretendidas representaciones dramáticas, que ofrecian la apariencia de la publicidad. Por lo demás, una publicidad verdadera, es una garantía. Lo que puede llamarse el juicio del sentido público, ó del sentido comun, debe ser la espresion de una reunion numerosa. No se hiere la razon, la justicia, ó el pudor de una gran Asamblea, sin esponerse á la esplosion del disgusto y de la indignacion:

la experiencia ha probado que un pequeño número de espectadores habituales se acostumbran mas fácilmente, en ciertas salas, á no sonrojarse de placeres falsos y corrompidos.» Sin embargo, el ministro de lo Interior estaba autorizado para permitir, representaciones, sin estas condiciones en los pueblos en que no se hubiere formado ninguna empresa, por imposibilidad de observarlas.

Las obligaciones de los directores, en lo concerniente al anuncio y las modificaciones de la tarifa del precio de las localidades, la distribucion de los billetes, la disposicion de los asientos y la ejecucion de los compromisos contraidos con el público, debian determinarse por medio de reglamentos de administracion pública. Por último, quedaban prohibidos los teatros de niños, y ninguno de estos podia tomar parte en una representacion dramática, sin un permiso especial, hasta la edad de quince años. «Es un deber público, decia el informante, prevenir la explotacion y la perversion de la infancia. La profesion de actor es una de aquellas en que lo mas prudente es no comprometerse sin haber llegado á la edad del discernimiento.»

Las obras dramáticas de todas clases podrian representarse en todos los teatros abiertos en virtud de la ley. Sin embargo, se reservó esclusivamente al teatro francés su actual repertorio. Temiáse que entregándole á los demas teatros, se dispersasen al mismo tiempo todos los elementos reunidos con gran trabajo para conservar á las tragedias y á las comedias de los siglos xvii y xviii una interpretacion digna del reconocimiento y del respeto que la Francia debe á sus autores, y que, por consecuencia, debilitado el teatro francés, sucumbiese, sin ser nunca reemplazado por ninguna competencia en su unidad, en su constante duracion á través de las vicisitudes porque ha pasado, en el culto literario que la sabiduria de los gobiernos ha tenido la voluntad y el poder de mantener en él, sin interrupcion, hace ya dos siglos.

Tal era la parte concedida á la libertad: por onerosas que

podieran parecer las condiciones á que se subordinaba su ejercicio, estaba verdadera y sinceramente reconocida; y estas condiciones, preservándola de los abusos que ya la habian hecho sucumbir, debian contribuir á hacerla estable y á ponerla al abrigo de nuevos golpes.

Pero en el momento en que se rompía el vínculo que sujetaba todos los teatros á la accion administrativa, pareció mas importante que nunca asegurar, bajo la proteccion inmediata del Estado, un corto número de establecimientos que, dirigidos segun la idea mas elevada que puede formarse del arte dramático, no tuviesen por objeto principal el lucro, se mantuviesen fuera de las luchas de la competencia, en un nivel superior, y pudiesen servir de medios de comparacion y de emulacion respecto á las empresas particulares. «Así es, proseguia el informante, como el Estado ofrece modelos, tipos á las otras artes, por medio de sus academias, sus escuelas y sus muscos; á la industria en sus grandes manufacturas, sus esposiciones públicas y su enseñanza gratuita; á las ciencias, las letras y la instruccion, en el instituto, el museo, las facultades, los colegios y las escuelas.» En su vista, el proyecto disponia que en París costeara ó subvencionase el Estado, como instituciones nacionales, dos teatros consagrados á la representacion de las obras maestras antiguas y modernas de la tragedia y la comedia, y otros dos teatros dedicados al arte lírico. De este modo, mantenía en cierta manera, lo que hoy existe; pero hacia entrar un quinto teatro en participacion de las subvenciones y de la solicitud del gobierno. Este teatro, segun el proyecto, estaba «consagrado á representaciones populares.» De ningun modo puede justificarse y justificarse mejor esta proposicion que reproduciendo las palabras del informante.

De propósito, decia, no designa el proyecto el carácter de este nuevo teatro y su destino especial sino en términos generales. A la administracion y á los reglamentos particulares tocará dar caracteres mas precisos á una idea que se encontraba

ya escrita en los documentos reunidos cuando la preparacion del decreto de 1806. Mr. de Segur, relator del Consejo de Estado, decia entonces del teatro de la Puerta de San Martin: «Es la ópera del pueblo... Es necesario é indispensable favorecer una diversion para el pueblo, que no puede pagar lo que exigen la Opera y el teatro Francés.» En efecto, ¿es justo que las subvenciones votadas cada año, y estraídas del impuesto que pesa sobre los ciudadanos, se destinen únicamente á los teatros accesibles á la parte de la poblacion que se halla mas desahogada para pagar sus placeres? Bajo otro aspecto que concierne al objeto mas íntimo de la ley, ¿no debe reconocerse que existe una literatura dramática distinta de las demas, en estos caracteres, que pinta costumbres mas familiares al mayor número de sus espectadores habituales, y que procura apoderarse de las imaginaciones valiéndose de recursos mas rudos y enérgicos? Además, no es muy importante que, sobre todo en esta direccion, tenga tambien el Estado su modelo, y que use de los medios diversos que están en su mano, para demostrar que los géneros secundarios del arte dramático, bien y sábiamente dirigidos, pueden producir con éxito algo mas que trivialidades escandalosas, ó emociones sanguinarias, y provocar en la multitud sentimientos puros y generosos, la emulacion hácia el bien, el respeto de sí mismo y el amor al pais? En este teatro no se limitará la administracion á fomentar el perfeccionamiento, y la moralizacion de los géneros secundarios, sino que deberá hacer oir en él muchas veces las mejores obras de los demás teatros subvencionados, y representadas por sus mejores artistas. Sabido es hasta la saiedad que aun los espectadores menos ilustrados distan mucho de ser insensibles á los nobles pensamientos, al sublime lenguaje de nuestros grandes poetas trágicos y cómicos; pero para que puedan penetrarse cómoda y dignamente de las influencias bienhechoras del génio, no basta que se les admita, en raras épocas, ó parcialmente y como por una especie de favor. en algunas localidades inferiores de los teatros á que

habitualmente son estraños; es preciso que al oir á Corneille, á Racine ó á Molière, se encuentren, por decirlo así en su casa, libres y jueces del mérito de la obra de los poetas, y de la ejecucion de los actores.

A los ejemplos que debian dar los teatros sostenidos ó subvencionados por el gobierno, el Consejo de Estado añadía un estimulante mas activo. Proponía otorgar cada año algunos premios: 1.º á los distritos que sostuviesen teatros municipales; 2.º á los autores, actores y directores de París ó de los departamentos que hubieren contribuido mas al progreso del arte dramático. De este modo quería favorecer á las empresas que, ofreciendo mayores garantias de duracion y en cierto concepto de moralidad que las empresas particulares, mereciesen, en este concepto, la benevolencia de la administracion; quería que el Estado prestase su apoyo á los autores, á los actores y á los directores que no hubiesen sido indemnizados por el público de sus esfuerzos para sostener y elevar el progreso del arte.

Sin embargo, la aplicacion de este sistema no podia abandonarse sin intervencion al gobierno. Especialmente en los negocios teatrales debe evitarse la omnipotencia de las oficinas. Para alucinar á la administracion se reunen seducciones de todas clases, tanto mas temibles, cuanto que ceder á ellas no siempre parece faltar al honor. La administracion tiene necesidad de que se la vigile y se la contenga en su deber. El Consejo de Estado creyó necesario formar cerca del ministro de lo Interior, una comision destinada á ilustrar su accion, á secundarla, á fortificarla, y á ejercer una alta autoridad en el mismo principio de su institucion fundada por la ley, en la naturaleza de sus atribuciones, en los elementos de su composicion. La comision se habria compuesto de quince miembros, de los cuales cinco deberian ser nombrados por el presidente de la República, para que el poder ejecutivo estuviese representado en ella por individuos investidos de su confianza, sirviendo, en caso necesario, de órganos de su pensamiento.

sin que su número consiguiese hacer preponderar su opinion en las deliberaciones (1). Entre los diez miembros restantes, ocho deberian ser elegidos por los cuerpos de que formaban parte; y representar todos el mismo pensamiento bajo los diferentes puntos de vista de sus funciones especiales. Dos consejeros de Estado debian llevar mas particularmente al seno de la comision la influencia de las altas tradiciones administrativas: los dos jueces del tribunal de Apelacion de París, ese sentimiento de lo justo y de lo verdadero en moral que siempre ha animado á la magistratura francesa; tres miembros del Instituto, el amor al arte, el gusto literario, la ciencia misma en sus relaciones con el teatro; en fin, tres miembros del consejo municipal de París una solicitud especial por los intereses de la ciudad donde brilla, hace dos siglos, el génio dramático, sobre toda la Francia, y puede añadirse, sobre toda Europa.

De esta manera, despues de haber recogido en un informe los testimonios mas graves, despues de una deliberacion en la que, en virtud de su reglamento, oyó á muchos miembros eminentes del instituto, el Consejo de Estado propuso organizar la industria dramática; se apartaba á la vez del régimen despótico del Imperio que, destruyendo la libertad solo habia creado una prosperidad ficticia, y de la libertad ilícita de los primeros años de la revolucion, manantial de tantos desórdenes, y del sistema en fin de las autorizaciones ministeriales, causa de tantos abusos; su propósito fué hacer predominar los intereses del arte, los derechos de la industria y las prerogativas necesarias del poder público. La alianza de la libertad con la accion paralela del Estado habia sido su programa. Ya hemos visto aplicado este sistema al ejercicio de muchos derechos, y parece ser el medio mas seguro de conducir sin sacudimientos las costumbres públicas, hasta el dia en que la libertad consolidada por un largo y pacífico reinado, pueda marchar sola y pasarse sin modelos ni trabas.

(1) Véase tomo 1.º, pág. 67.

§. II.—*La censura.*

Bajo formas y nombres diversos, la censura es tan antigua como el teatro. En el siglo xvii, la prévia censura de las obras dramáticas no se ve puesta en práctica, pero la vigilancia era inmediata, continua, y, por decirlo así, viva. Además la certidumbre de una represion pronta y severa, sin apelacion á ninguna ley, á ningun juez, bastaba para enseñar la prudencia. En 1697, habiendo aventurado los cómicos italianos, en un juguete cómico titulado la *Mogigata falsa*, algunas palabras que parecieron una alusion poco respetuosa á Mdme. de Maintenon, fué cerrado inmediatamente su teatro y ellos fueron lanzados del reino. La censura se estableció en el siglo xviii, y se ejerce siguiendo un método regular. El canciller nombra censores reales, en gran número; ninguna retribucion está señalada á sus funciones que, sin embargo, son aceptadas y solicitadas por escritores célebres, y algunas veces hasta por filósofos. Asi es que d'Alembert aprueba como censor el *Mahomet* de Voltaire, cuya representacion habia propuesto prohibir Crébillon, padre, con el mismo título.

La ley de 15 de enero de 1791 proclamó la libertad del arte al mismo tiempo que la de la industria dramática; sometió, no obstante, los teatros á la vigilancia de la autoridad municipal; y en el preámbulo que precede á la ley se espresa la esperanza «de que un sabio reglamento dirigirá esta parte de la instruccion pública.» El 51 de agosto de 1792, la Asamblea legislativa, consagrando de nuevo la libertad de las representaciones, declaraba «que no entendia prejuzgar nada sobre los decretos ó reglamentos de policía que pudiese dar en el código de la instruccion pública, en atencion á la influencia de los teatros en las costumbres y en las bellas artes.» Durante la tormenta revolucionaria la Convencion desaprobaba el decreto de la municipalidad de Paris, que prohibia *El amigo de las leyes*, pero anunciando, que «todo teatro

en que se representasen piezas que tendiesen á depravar el espíritu público y á despertar la vergonzosa supersticion de la monarquía, serían cerrados y detenidos los directores para ser castigados con todo el rigor de las leyes; y al mismo tiempo aprobaba la clausura del teatro Francés, á consecuencia de la acusacion de aristocracia lanzada contra sus actores y su repertorio.» Jamás será censura alguna tan opresora como semejantes amenazas, en tales circunstancias; así que teatros y autores se apresuraban á porfia á solicitar por favor el previo exámen de las obras. Hemos visto una carta de un escritor de la época que solicitaba la censura de la policía porque el director del teatro de los *Descamisados*, á quien este título no ponía á cubierto de las sospechas, no quería recibir ninguna obra sin esta condicion. Sabido es que el decreto de 12 germinal del año II habia suprimido los ministros y creado en su lugar doce comisiones; la de instruccion pública estaba encargada de la vigilancia de los espectáculos y fiestas nacionales. Esta comision dió el 25 floreal siguiente, un decreto que no ha sido publicado y que restablecia espresamente la censura, mandando á todo los teatros comunicarle su repertorio. Se han conservado, y nosotros hemos leído, las hojas remitidas en cumplimiento de esta disposicion y las notas de los administradores de aquel tiempo. Nada pinta mejor la época. En el espacio de tres meses, de 151 piezas censuradas, 33 son desaprobadas y 25 sometidas á enmiendas. Todo el repertorio antiguo fué examinado; la censura declara «malas» las obras mas irreprochables, casi todas las comedias de Moliére, *Nanina*, *Berverley*, *El Glorioso*, *El Juego del amor y el del azar*, *El disipador*, *El Jugador*, *El abogado Patelin* y otras veinte comedias; exigen correcciones en *El Adivino de Aldea*, *El Padre de familia* y *La Metromanía*; al *El Guillermo Tell* de Lemierre, á manera de salvo conducto, se le dió el segundo título de *Los descamisados suizos*; el desenlace de *Bruto* y el de la *Muerte de Cesar* debian variarse; *Mahomet* fué prohibido como «jefe de partido». En cambio, son autoriza-

das las siguientes piezas, de las cuales no conocemos mas que el título, pero indica demasiado el argumento: *Todavía un cura*, *No mas bastardos en Francia*, *La Papisa Juana*, *Esopo republicano*, *La Muerte de Marat*, *El Espiritu de los sacerdotes*, *Los Crímenes de la nobleza*. Los teatros sobre pujan estas mutilaciones, y anuncian que se han cambiado las calificaciones de los personajes sospechosos. El Ambigú Cómico escribe que «en todas las piezas antiguas se ha sustituido, en la escena, la palabra *ciudadano* á la de *señor*.» Al final del repertorio de la Opera Cómica se lee esta nota: «las anteriores piezas que tienen al márgen la palabra *arreglada*, son aquellas en que en otro tiempo habia señores, y que se han puesto á gusto del dia. En cuánto á las demás que no llevan nada al márgen, es porque no estaban en el mismo caso, y no tenian nada que recordase el antiguo régimen.»

El Directorio conservó de una manera indirecta la censura, hasta que la estableció espresamente el decreto de 8 de junio de 1806. Poco antes escribia el ministro de lo Interior á los prefectos: «Los espectáculos han provado la solicitud del gobierno; alejar de la vista del pueblo todo lo que no es digno de su estimacion y todo lo que pudiera herir las opiniones ó corromper las costumbres, es probarle el interés y el respeto que inspira.» La censura, aplicada durante todo el Imperio y bajo la Restauracion, promovió vivas reclamaciones despues de la Revolucion de julio; el mismo gobierno dudó un instante de su derecho. A falta de la censura, un momento suspendida, fué necesario recurrir á medidas violentas, pronunciar prohibiciones arbitrarias, apoyarlas en ciertos casos con la intervencion de la fuerza pública, sin llegar á impedir representaciones, no menos contrarias al orden, que al sentimiento moral. La política se apoderó del teatro, con gran disgusto del público, que no la quiere en los sitios donde busca el reposo y no la lucha. La ley de setiembre de 1855 puso término á estas incertidumbres, restableciendo formalmente la censura. Se formó en París, en el ministerio de lo Interior,

una comision para dar su dictámen sobre las obras nuevas. Desde el 11 de setiembre en 1855 hasta el 23 de febrero de 1848, se sometieron á su aprobacion 8,850 obra. Mas de la mitad obtuvieron una autorizacion pura y sencilla, 123 fueron prohibidas y las demás sujetas á varias modificaciones. De las obras reprobadas ninguna habia sido escrita con destino á los teatros líricos, 5 debian representarse en el teatro Francés y 3 en el Odeon; cuanto mas descende la censura en la escala de los teatros, mas despliega sus rigores. Despues de la Revolucion de febrero las representaciones dramáticas recobraron otra vez su libertad. Entonces se reprodujeron los escándalos que siguieron á 1850; los objetos del respeto público escarnecidos, las nuevas instituciones puestas en ridículo, los personajes contemporáneos, sirviendo de diversion al patio. Preciso es reconocer, sin embargo, en honor de las buenas costumbres, que no se advirtió ningun desórden material; pero el desórden moral llegaba al estremo. Una ley de 50 de julio de 1850, cuya duracion se prorogó hasta el 51 de diciembre de 1852, restableció la censura.

La censura es uno de los objetos sobre que principalmente ha girado la informacion del Consejo de Estado, hallando en él adversarios muy ardientes, pero tambien defensores llenos de conviccion. El Consejo de Estado, por su parte, creyó deber conservarla, pero introduciendo en su proyecto dos innovaciones de consideracion.

Segun la ley actual, conforme con todas las que le han precedido, no puede representarse ninguna obra sin el permiso del ministro, de donde resulta que la falta de autorizacion constituye un obstáculo absoluto, y que basta al ministro guardar silencio para que la representacion esté prohibida. Los autores y los directores de teatros se ven obligados á dar mil pasos para obtener una decision, y aunque en el uso esté determinado un plazo muy corto, no puede negarse que los interesados están enteramente á la discrecion de la administracion. El Consejo de Estado proponia exigir únicamente que

las piezas dramáticas fuesen depositadas en el ministerio de lo Interior, prohibir la representacion, salvo en el caso de una autorizacion especial, durante los quince dias que siguieren á este depósito, y permitir la pasado este plazo, si el ministro no habia declarado que se oponia á la representacion, en interés del orden público, de las buenas costumbres ó del honor de los ciudadanos. De esta manera, el silencio del ministro equivalia á la autorizacion y su opinion debia ser declarada en un plazo determinado. Sin embargo, siempre podian prohibirse las representaciones, pero el derecho del autor y el del teatro jamás estaban amenazados sino de una decision esplicita y formal. Esto es lo que se hace en Inglaterra.

La segunda innovacion era mas importante. En el dia la comision de exámen espresa un parecer que casi siempre adopta el ministro, de cuya decision no puede apelarse. El proyecto del Consejo de Estado daba al director del teatro, en caso de oposicion del ministro, el derecho de pedir un nuevo exámen, y en este caso, la autorizacion ó la prohibicion definitiva no podia pronunciarse sino despues de un informe dado por la comision de los teatros. Aun cuando la decision quedase aun en manos del ministro, suponíase con razon que el informe de la comision seria casi siempre reputado, y este informe, emanado de personajes tan graves parecia á proposito para suministrar á la censura dramática una garantía bastante á destruir las causas de las prevenciones y de las justas críticas de que era objeto, y á hacerla cumplir dignamente su cometido, es decir, la apreciacion inteligente é imparcial de las obras dramáticas, la exclusion de tentativas deshonestas, de ficciones corruptoras de la moral pública, sin ser jamás un instrumento servil é irritante de mezquinas susceptibilidades políticas, sin dar nunca motivo á disgustos inmerecidos, á inquietudes sin objeto, ni ser causa para los autores de justificaciones indignas.

Cuando se discuta de nuevo el sistema de la censura dramática, será deber del legislador inquirir las garantías que

los autores tienen derecho á reclamar. Sobre este punto, habrá todavía lugar á tener en cuenta la ausencia de la responsabilidad ministerial, suprimida por la Constitución de 1852, porque no hay uno entre los poderes reunidos á la administracion, respecto al cual no se haga sentir la pérdida de esta preciosa garantía.

En cuanto al mismo principio de la censura, en nuestro concepto, debe conservarse. Un régimen puramente represivo, desprovisto de eficacia, seria por lo demás, tan injusto como peligroso, porque conduciría al poder á la enojosa necesidad de ensañarse, no solo contra el autor, sino contra los espectadores escitados al desórden por las provocaciones de la escena. Y además, ¿no seria una causa frecuente de impunidad la dificultad de que cuerpos judiciales se entregasen á apreciaciones complexas y arbitrarias? ¿cómo proteger contra alusiones pérfidas los principios de nuestras instituciones, el carácter de los hombres públicos? ¿cómo alcanzar á esas obras peligrosas en que la perversidad de las doctrinas se oculta bajo la delicadeza del lenguaje? ¿puede aplicarse un castigo legal á simples inconveniencias, que son mas indecentes que inmorales, mas groseras que corruptoras, mas burlescas que impías?

Pero la censura tienen deberes, é importa que permanezca fiel á ellos. Es imposible fijarlos en artículos de ley. El gobierno debe encontrarlos en su sabiduría. Protejer las costumbres, sin prohibir la pintura, muchas veces saludable, del desórden y el vicio; perpetuar la tradicion del lenguaje honesto y decente; borrar toda palabra obscena sin proscribir las atrevidas que el ejemplo de nuestros padres y los escritos de nuestros mas ilustres autores han naturalizado en el teatro; afianzar las instituciones y los poderes públicos, sin sustraer á los juicios del patio las debilidades de la vida política; distinguir con prudencia los tiempos, lugares y opiniones; apreciar las conveniencias de cada género; estudiar las necesidades y los gustos de cada público; evitar

con igual cuidado la gazmoñería y la licencia, la debilidad y la intolerancia; tales son los deberes de la censura cuya enunciaci6n basta para mostrar cuanto tacto, saber y prudencia exigen. Sin llamar á juicio á los que hasta aquí han ejercido esta especie de magistratura, sin disimular las dificultades de su misi6n, podria preguntarse si no se han mostrado algunas veces harto indulgentes para las cosas que se refieren á la moral, y demasiado severos para las que atañen á la política. Si es cierto que el teatro debe ser el espejo del mundo, no deberia prohibírsele la pintura de nuestras costumbres políticas; se asustan hasta tal punto de la menor alusion, que no estamos seguros de sí el *Tartufe* y el *Casamiento de Figaro* estarían hoy autorizados, á no haberlos puesto al abrigo de la tijera de los censores, la omnipotencia de Luis xiv y la infatigable constancia de Beaumarchais.

§. III.—*Los autores dramáticos.*

En los primeros tiempos del teatro moderno, los derechos del autor no existían en manera alguna, al menos bajo su forma actual. Los cómicos ajustaban antes de la representaci6n la pieza que se proponían representar. El precio de esta venta era en extremo variable, y dependía naturalmente del mérito de la obra, y con mas frecuencia de la reputaci6n del autor. Quinault tuvo por último bastante crédito para conseguir que se le pagase al final de cada representaci6n á prorrata de la entrada. Hasta 1697, que se publicó un reglamento imponiendo esta obligaci6n á los actores, este negocio se habia regido por las costumbres ó por recíprocos convenios. La compaía de Molière, pagó á Corneille 2000 francos por *La Berenice* y otros 2000 por *El Atila*. La misma cantidad se concedió á Molière por *El Convidado de piedra*, pero solo con el carácter de gratificaci6n escepcional. En efecto, sabido es que Molière creyó cumplir un acto de pura complacencia al escribir una obra maestra.

El reglamento de 1697 se renovó muchas veces sin es-

perimentar importantes modificaciones hasta la revolucion de 1789. Los derechos del autor en la Comedia francesa, y en la Opera se fijaban por los decretos del consejo; ninguna prescripcion de la autoridad pública determinaba el tipo para los teatros de segundo orden. Estos derechos segun parece se arreglaban de grado en grado conforme á las circunstancias. La comedia italiana ofrecia una gratificacion de 1000 libras, ademas de la retribucion ordinaria al autor, cuya obra produjese 40,000 libras en quince representaciones. *Ricardo corazon de Leon* produjo segun se afirma unas 12,000 libras á Sedaine. En cuanto á los directores de provincia, se apropiaban, disfrazándolas, confrecuencia las obras de autores existentes, no solo sin darles participacion en la entradas sino hasta sin dignarse solicitar su permiso.

Aceptables en principio las condiciones propuestas por la antigua comedia francesa á los autores dramáticos, no siempre se observaban con lealtad irreprochable. Este estado de cosas sostenia una irritacion deplorable entre los autores dramáticos y sus necesarios intérpretes. Estos gozaban entonces por el prestigio de su talento el poder de la moda; pero sus adversarios tuvieron la felicidad de encontrar en Beaumarchais un abogado ardiente y de una causticidad terrible. El autor del *Matrimonio de Figaro*, que empezó su celebridad con escándalos judiciales, sostuvo durante cuatro años la lucha entablada contra los actores. «Despues de 12 años, decia á sus comitentes en 1791 en un informe que reasume la discusion. los autores dramáticos no han percibido mas que 58,000 francos en las anualidades en que, el producto de un millon. dejaba á los comediantes franceses 25, 26, y 27,000 francos por su parte. La insignificante suma que se os ha dejado no hubiera producido á cada autor mas que 1650 libras á lo mas si hubiesen hecho un fondo comun.» A fuerza de protestar contra la tiranía de los cómicos en nombre de la propiedad mas sagrada de todas, la de la inteligencia sobre sus propias creaciones, Beaumarchais consiguió apasionar al pú-

blico en favor de sus clientes. En 1794, la Asamblea nacional cortó un largo debate proclamando como un derecho natural y legítimo, la propiedad de los autores y la libertad de las transacciones entre ellos y los cómicos. El decreto de 8 de junio de 1806 consagró nuevamente esta libertad y encomendó á las autoridades locales, vigilar severamente la ejecución de los contratos estipulados entre los empresarios de los teatros y los autores. Tal es aun el estado de la legislación. La ópera y la comedia francesa, consideradas menos como empresas mercantiles que como establecimientos públicos, conceden á los autores los derechos establecidos por los reglamentos dictados por la autoridad superior. La ópera da 500 francos de derechos fijos por cada una de las veinte primeras representaciones de una gran ópera, divisibles entre el autor del libreto y el compositor. Una opereta se retribuye con menos. Pasada la vigésima representacion, el derecho baja á 500 francos. En la comedia francesa la tarifa de los autores se arregla del modo siguiente: Una pieza en cinco actos, la dozaba parte del ingreso total; de tres la décima octava; de un solo acto la vigésima cuarta. En la ópera cómica la retribucion consiste en el 8 1/2 por 100 de los ingresos, hecha la deducccion del derecho de pobres, para una pieza de tres á cinco actos; 6 y medio para las de dos actos, y 6 para las de un solo acto. Cuando una obra basta para cubrir todo un espectáculo, da derecho á un 6 por 100 mas. En los otros teatros los derechos se reglan gradualmente ó mas bien los impone la sociedad de autores dramáticos que tiende á imponer á todas las empresas teatrales un derecho invariable de 12 por 100 sobre el ingreso total. Esta costumbre está en práctica casi en todos los teatros de vaudeville y de melodrama. En las provincias los autores cobran un derecho fijo arreglado al género de la produccion y á la importancia de la poblacion.

Los derechos de los autores se graduan por término medio en 800.000 francos por año en París, y 200.000 en

las provincias, sin contar el producto de los billetes de gracia que negocian los autores y el de las ventas á los libreros de doscientas ó trescientas piezas impresas anualmente, cuyas cantidades accesorias se gradúan en 500 ó 600,000 francos por año. Estos derechos están sometidos á un descuento de 2 por 100 en París y de 15 por 100 en los departamentos en provecho de los encargados de la recaudación. Por considerable que aparezca esta suma, deja no obstante una cantidad muy pequeña á los autores secundarios después de descontar la de los de más créditos. Muchos sueños dorados se desvanecen en amargas decepciones. A pesar de todo, el ejemplo de algunas grandes fortunas y el esplendor de ciertas relaciones que agradan siempre á la imaginación ardiente de los jóvenes, reclutan sin cesar el cuerpo de escritores dramáticos, y entre todas las carreras abiertas á los hombres de talento, el teatro es una de las que ofrecen más recursos.

Desde fines del último siglo á instigación de Beaumarchais, los autores dramáticos manifestaron cierta tendencia á constituirse en corporación para sostener sus derechos. Una primer acta de sociedad, reunió en 1794 los nombres de Mehul, Chérubini, Sédaine, Picard y algunos otros escritores menos influyentes. En 1804 el contrato de sociedad se renovó y reunió 95 firmas. Otras sociedades análogas constituidas en diversas épocas, se refundieron en 1820 en la *Asociación general de autores* que ha tomado una consistencia sólida. Su objeto expresado en el acta de constitución es: 1.º la mutua defensa de los asociados contra las administraciones teatrales ó de las personas en relación de interés con los autores. 2.º La percepción con menos gastos de los derechos de los autores colocando en fondo común una parte de estos derechos. 3.º La creación de un fondo de socorro en favor de los asociados, como viudas y herederos ó parientes. 4.º La creación de un fondo común de beneficios divisibles. Esta sociedad renovada en 1857, tomó un desarrollo nuevo y está llena de

vida. A ella se han adherido unos 420 autores. Una comision elegida en junta general la administra y representa. A su cabeza figuran los mas célebres autores dramáticos. Los servicios que ha producido á los asociados son numerosos é incontestables: los fraudes que han cometido las empresas teatrales se han reprimido y castigado, la percepcion de los derechos del autor se ha hecho mas regular y menos costosa, los intereses de todos defendidos con celo atestiguan la eficacia de su intervencion. El fondo de socorro ha consolado numerosos infortunios y contribuido á sostener, preservar de la desesperacion y ayudar en momentos de crisis á los autores desgraciados, sus viudas y sus hijos. La sociedad ha estendido su mano á las familias mismas de los que muertos hacia muchos años, no le pertenecian mas que por su ilustracion.

Mas aparte de estos servicios y buenas obras se puede reprochar á la sociedad de autores dramáticos haber usurpado sobre los teatros una autoridad despótica. La comision que la dirige y que se elige entre los asociados por mayoría de votos ejerce una verdadera dictadura: se sustituye á los autores, reemplaza su voluntad individual por su influencia colectiva, y dirige casi esclusivamente todas sus transacciones. Compuesta de personajes políticos y de escritores de fama, sostenida por la prensa, funciona como un tribunal supremo y decide sin apelacion todas las cuestiones dramáticas.

El voto de los legisladores de 1794 era consagrar una independencia fecunda, una igualdad equitativa entre los escritores y los que esplotan sus obras. No estando limitado en aquella época el número de los espectáculos, existia la libertad de las transacciones, tanto respeto de los escritores como de los empresarios. El decreto imperial de 1808 rompió el equilibrio y constituyó un monopolio en favor de un pequeño número de empresarios privilegiados. Entonces los escritores no podian aprovechar la concurrencia de los empresarios, como hoy no pueden estos utilizar la de los autores. Se concibe que justamente alarmados los literatos se hayan colocado en apti-

tud de defender sus derechos. Por desgracia los hombres de letras no han sabido resistir á la tentacion de abusar de su poder y á fuerza de usurpaciones han venido á constituir una verdadera coalicion del mismo género que las que castiga el Código penal, cuando se forman en la esfera de la industria. Hoy la sociedad prohíbe á sus individuos celebrar contratos particulares bajo condiciones inferiores á las anotadas en los generales que impone por sí. Exigir mas está permitido, contentarse con menos es una infraccion penada con una multa de 6000 francos. Si un teatro rechaza acceder á la demanda de la asociacion, se le pone en *entredicho*, es decir, que la comision directriz retira á la vez en un dia, y sin escepcion todas las piezas de los autores que están adheridos á sus estatutos. Su decision obliga á todos sus individuos bajo, una multa tambien de 6000 francos. Por este medio ningun teatro se halla jamás en presencia de un autor libre, y tiene siempre que tratar con una corporacion, cuya voluntad colectiva es inmutable.

¿Qué extraño es, pues, que una sociedad semejante ejerza en materia de teatros una autoridad superior á la del mismo gobierno, gravitando, como gravita, sobre los poderes públicos por la influencia de sus miembros, y sobre los teatros por el temor al entredicho? No es una exajeracion, y esto es lo que ha provocado sin cesar el establecimiento de nuevos teatros, cuya concurrencia ha venido ha ser tan peligrosa para los antiguos. El gobierno no podria retirar arbitrariamente un privilegio; la comision puede matar una empresa recogiéndole el repertorio que es su alimento diario. El gobierno no podria eximir á ningun espectador del pago de la cuota de los indigentes: la comision impone condiciones en virtud de las que los billetes se espenden sin este derecho. Citemos el ejemplo de una flagrante usurpacion. En 1806, en el momento en que el gobierno imperial preparaba los nuevos reglamentos de teatros, los ministros del Interior y de la policia propusieron someter á un impuesto la representacion de las

obras que habian caído en el dominio público. El producto de este derecho debia formar un fondo especial que, bajo el título de Caja Dramática, se hubiera empleado en socorrer á los autores ó actores, y en estimular los progresos del arte. Se comprendió que esta percepcion debia autorizarla una ley y el proyecto se abandonó. Lo que el Emperador no se atrevió á hacer, los autores dramáticos lo han decretado en los últimos años. Los contratos celebrados con la Opera cómica y el Odeon, los autorizan á percibir un derecho de las obras del dominio público. ¿Semejante estipulacion no es una prueba manifiesta de la opresion que ejerce seta sociedad? Aun cuando el producto se emplee en actos de generosidad, la percepcion no es por ello menos ilegal.

§. IV.—*Los artistas dramáticos.*

La condicion general de los actores ofrece numerosas analogias con las de los autores. Antes de la revolucion los cómicos estaban deprimidos mas por la opinion que por las leyes; cuando en la sesion del 24 de diciembre de 1789 la Asamblea constituyente tuvo que resolver sobre la peticion que le habian dirigido, Mr. de Beumetz y Mirabeau, protestaron contra las opiniones intolerantes que se produjeron, aunque sin hallar eco. Un decreto del mismo dia declaró implícitamente que los artistas dramáticos no sufren ninguna exclusion; nuestras leyes les confieren los mismos derechos que á los demas ciudadanos, y las mismas distinciones pueden recompensar sus talentos ó sus servicios. Bajo la Restauracion, Talma fué llamado á desempeñar las funciones de escrutador en uno de los distritos electorales de París; despues de 1830, obtuvo la cruz de la Legion de Honor un artista de la ópera por servicios prestados en la guardia nacional. Hombres de letras, que en su juventud habian aparecido en la escena, han entrado en la Academia francesa y ocupado honrosos empleos. Los actores no estan ya espuestos á las prisiones arbitrarias que les alcanzaban en el antiguo régimen, y viven

bajo la proteccion de la ley comun. Sin embargo, algunas veces han sido necesarias estas prisiones para calmar al público y proteger contra sus violencias al artista que habia incurrido en su cólera. Perlet ofreció un ejemplo de esto, en tiempo de la Restauracion. Estos casos extraordinarios no han amenguado el derecho, y no creemos que se hayan reproducido desde 1850.

Para no hablar aquí sino de los cómicos que ejercen su talento, se hallan grandes desigualdades en su condicion respectiva. Los mas eminentes, que acumulan crecidas asignaciones, con el beneficio eventual de las representaciones en provincia, llegan á la opulencia. Otros viven desahogadamente en París y en las grandes poblaciones; el mayor número arrastra una existencia miserable. Las empresas de las ciudades pequeñas, y las compañías ambulantes, suministran apenas los medios de subsistir á los que las componen. Despues de una vida de privaciones y de sufrimientos, sus últimos dias están espuesto á todas las angustias de la mas horrosa miseria. Especialmente en provincias, su posicion no puede ser mas precaria; cada año vuelve á poner en pégro su estado, y pordecirlo asi, su existencia. El patio los juzga sin apelacion y muchas veces se muestra cruel con ellos. El teatro es una carrera, casi siempre sembrada de escolos; atrae á una juventud sin esperiencia, y no reserva á la edad madura y sobre todo á la vejez, sino la humillacion y la miseria.

Algunos corazones generosos se han conmovido con espectáculo de estos males. En 1840 se formó entre los artistas dramáticos una sociedad, cuyo objeto es, no coaligarse para elevar sus asignaciones, sino crear un fondo de socorro para aquellos á quienes trata la fortuna con mas rigor. El éxito de esta asociacion ha correspondido á los votos de sus fundadores. Las susericiones recogidas entre los sócios, los bailes y las representaciones á beneficio, han formado un capital empleado en parte en la adquisicion de rentas sobre el Esta-

do. Se reparten socorros mensuales á los artistas necesitados, y pensiones á los infelices ancianos encorvados bajo el peso de la edad. Autorizada por el gobierno, la sociedad de los artistas dramáticos continua desarrollándose, y el acrecentamiento de sus ingresos le permitirá estender mas y mas su benéfica accion. Tiene derecho á ser protegida por el gobierno, y á la simpatía general. Ninguna clase es al mismo tiempo menos previsora y mas generosa que la de los actores. Su caja de socorro tendrá por lo tanto siempre recursos fecundos y cargas pesadas. ¡Ojalá puedan compensarse! Hasta ahora, no se leen sin emocion, en sus cuentas anuales, la relacion de los dones recibidos y de las sumas distribuidas por su mediacion. Los artistas pobres se hacen un deber de pagar su tributo sobre los mas ínfimos sueldos. Los mas célebres dan en provincia representaciones, cuyo producto hacen ingresar en la caja de la sociedad. Muchos directores han contribuido con solicitud á estas buenas obras.

Los artistas dramáticos se forman en varias escuelas; los unos, escriturados desde su mas tierna edad en compañías de provincia, entran muy pronto, y al lado de su familia, en el ejercicio de un arte que para la mayor parte, no debe ser nunca otra cosa que un oficio duro y estéril. Otros entran en los teatros desde niños y repiten en ellos papeles que no siempre comprenden. Cierta número sale del conservatorio, plantel instituido por el Estado para educar músicos y actores. El conservatorio, simple escuela de canto en su origen, fué creado por decreto del consejo de 3 de febrero de 1784. Se abrió el 1.º de abril siguiente en el Hôtel del Menus-Paisir del rey, en el arrabal Possouniere. En 1786, á propuesta del baron de Breteniel, se estableció una cátedra de declamacion, que fué confiada á Molé. Como su objeto era formar actores para los grandes teatros, se juzgó necesario desarrollar su instruccion literaria, y al efecto se creó una cátedra de lengua francesa, de historia y geografia. El comisario general de la casa del rey, Mr. de la Ferté, asistia á los exámenes

que se hacian cada tres meses. Este establecimiento, destruido por la revolucion, fué restablecido el 18 brunario del año II bajo el nombre de *Instituto nacional*, y reorganizado el 16 de termidor del año III como *Conservatorio de música*. El Emperador se ocupó de él con interés; en 1806 fundó premio anuales; en 1809 estendió la enseñanza; se dieron por los discípulos representaciones públicas; se aumentó el número de cátedras, que fueron á ocupar Dugazon, Monvel, Dazin, Court y Lafon; Talma y Fleury compusieron el comité de vigilancia. El decreto de Moscou instituyó diez y ocho plazas de alumnos para el *teatro francés* y creó de nuevo una cátedra de gramática, historia y mitología aplicadas al arte dramático. La restauracion dió al conservatorio el título de *Escuela de declamacion*, y le colocó entre las atribuciones del ministro de la casa del rey. En 1850 la música destronó una vez mas á la declamacion; la cátedra consagrada á esta enseñanza no se abrió hasta 1856, y la de literatura ha quedado suprimida. En 1842 se restablecieron las representaciones públicas de los alumnos, con trajes y de dia, prohibidas durante la Restauracion, por temor de perjudicar á los teatros. Los concursos son juzgados por un tribunal, que se compone de literatos y de artistas. El conservatorio ha hecho grandes servicios al arte musical y formado miles de instrumentistas, que por el conjunto, el vigor y la elegancia de su ejecucion, no tienen rivales en el mundo. Su utilidad, relativamente á la comedia francesa está menos probada y algunos talentos elevados la ponen en duda. Sin embargo, nuestro gran trágico salió de sus clases (1). Ninguna escuela puede dar las cualidades que provienen de la naturaleza, la inteligencia, la sensibilidad el poder vocal; pero una escuela como el conservatorio puede guardar el depósito de las tradiciones y mantener las costumbres distinguidas, sin

(1) Se lee en las memorias de Bachaumont, fecha de 2 de diciembre de 1787: «La escuela de declamacion fundada por el duque de Duras, segun los consejos de Mad. Vestris, su querida, ha producido en la escena francesa su primer discípulo, Talma.

las cuales pierde su brillo la alta comedia. Pensamos, por consiguiente, que es satisfactorio que una institucion con tanta frecuencia atacada, haya en contrado favor ante la opinion pública.

CAPITULO III.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE DEBEN TOMARSE RESPECTO A LOS TEATROS.

Las diferentes medidas cuya necesidad han debido demostrar nuestras investigaciones, pueden reducirse á cuatro objetos principales. Conviene, segun nosotros: 1.^a reorganizar los teatros reduciendo el número de los que existen; 2.^a garantizar los derechos legítimos de los escritores dramaticos, pero al mismo tiempo, reprimir las usurpaciones de la sociedad ilegal que han formado; 3.^a facilitar á las escenas literarias los medios de proveerse de actores; 4.^a hacer mas vigilante y mas eficaz la tutela que el Estado debe ejercer sobre los teatros. Un rápido resúmen bastará para esplanar estas cuatro proposiciones.

1.^a La exageracion del número de teatros es la primera causa de todos los embarazos, de todos los desórdenes que hemos indicado, porque ha hecho al arte un gran perjuicio, favoreciendo el despilfarro de las producciones del talento, recompensando desmedidamente estas composiciones precoces que han agotado por un éxito pasajero, inteligencias felizmente dotadas. En vez de un corto número de teatros que reuniese actores de mérito, se permite abrir una multitud de ellos, de los cuales ninguno posee una compañía completa. La prosperidad material del teatro, tan necesaria al progreso del arte, ha llegado á ser imposible, puesto que los recursos suministrados por el público, son de todo punto insuficientes para hacer prosperar á tantas empresas, aun cuando todas estuviesen dirigidas con la mas incontestable habilidad.

La informacion del Consejo de Estado ha probado hasta

la última evidencia, según ya lo hemos dicho, que la libertad de la industria dramática sería el medio mas seguro de impedir la ruinosa multiplicacion de los teatros. La especulacion privada se mostraría mas perspicaz que la administracion y los mismos que, con el inventivo engañoso de un privilegio forman una empresa, se guardarían muy bien de correr sus riesgos, si se considerasen entregados á sus propias fuerzas y espuestos á todos los azares de una competencia ilimitada. Tal ha sido la opinion casi unánime de los que han sido interrogados en el informe.

Pero si el gobierno queda en posesion de los poderes que hoy reúne, depende de él prescribir una reforma cuya necesidad queda de aquí en adelante probada hasta la evidencia. La responsabilidad de la administracion, la equidad hácia las empresas antiguas, el interés bien entendido de los autores y de los artistas verdaderamente distinguidos, el interés mas apremiante aun del arte, son otros tantos argumentos en favor de la reduccion del número de teatros. La ejecucion de esta medida era fácil. No se trata de ningun modo, como en 1807 de destruir propiedades reconocidas por la ley. Con muy cortas escepciones, los teatros son explotados en virtud de privilegios temporales, de los que la mayor parte espiran dentro de pocos años. Bastará no renovar aquellos que no deben ser conservados, y hacer volver á los límites de su autorizacion á los simples teatros de curiosidad, que despreciando la ley y sus deberes, hacen usurpaciones en el género de los teatros propiamente dichos. Ningun deber será violado; nadie podrá quejarse. Los autores y los actores vulgares serán los únicos interesados en reclamar. En cambio, podrá contarse con la adhesion de los verdaderos artistas y escritores, á quienes la reforma propuesta ofrecería mas gloria, con una remuneracion igual.

2.^a Los escritores dedicados al teatro, se perjudican á sí mismos abusando de un poder usurpado. Su asociacion, tal como está concebida y se manifiesta, no podría tolerarse.

por mucho tiempo. Tarde ó temprano, el gobierno se verá en el caso de tomar medidas contra la dictadura de los diez ó doce miembros que componen el comité-director de la asociacion; poder absoluto, irresponsable, cuyos decretos sin apelacion encadenan, no solo á los que los aprueban, sino á cada uno de los 500 escritores que han firmado el acta social.

Con todo, reconociendo que las obras destinadas á la representacion escénica se producen en circunstancias particulares, y que, mientras la industria no sea libre, dificilmente admiten una libertad perfecta de transacciones, pensamos que el gobierno, antes de pronunciarse contra la sociedad de autores dramáticos, debe sustituir su accion por una tutela desinteresada y benévola, capaz de proteger á los escritores, sin alarmar á los directores.

3.^a. Entre todas las llagas del teatro, hay una que llegaría á ser mortal sino se le aplicase un remedio; hablamos de la progresion siempre creciente del sueldo de los actores, muchas veces medianos. En mas de una ocasion han intentado los directores ponerse de acuerdo para reducir los sueldos de los artistas: semejantes coaliciones, reprecensibles en sí mismas, quedarán siempre sin efecto, porque no es posible que un empresario dramático resista por mucho tiempo al deseo secreto de organizar su compañía, desorganizando las de sus rivales. Las pretensiones exajeradas no podrán moderarse sino por la competencia que los actores se harán á sí mismos. Es preciso que los directores se coaliguen, no para molestar á los talentos que existen, sino para crear y desarrollar los talentos nuevos.

Especialmente para los grandes teatros son insuficientes los medios de reclutamiento ó renovacion de actores. Para brillar en las escenas inferiores, no son necesarios mas que una inteligencia superficial, un ardoroso instinto y cierta aptitud para la imitacion, cualidades naturales que pueden rebelarse instantáneamente; pero el verdadero artista no se forma en un dia, por mas ricamente que esté dotado por la

naturaleza. Antiguamente el honor de aparecer en la escena era la ambicion de casi todos los artistas. Hoy no sucede lo mismo. Hay priesa de adquirir algo del oficio para explotarlo en una escena vulgar. Habría medio de contrabalancear esta funesta disposicion con algunas medidas en favor de los estudios que el arte y el buen gusto pueden indicar. La composicion de los teatros subvencionados no es tan irreprochable para justificar la indiferencia de la administracion acerca de esto. El conservatorio, cuya institucion hemos aprobado, reconociendo sus servicios, nunca bastará para la renovacion artística de los grandes teatros. No es mas que una escuela, y al salir de toda escuela, hay necesidad de coronar la educacion teórica por las lecciones de la esperiencia. El conservatorio no puede producir mas que discípulos, y seriamos felices si consiguiera formar muchos que prometiesen para el porvenir. En otro tiempo los teatros de los departamentos, dedicados á la tragedia y á la comedia, creaban reputaciones que tarde ó temprano eran consagradas en París por los sufragios de buenos jueces. Hoy son estériles; las escenas líricas no les deben ningun artista eminente: Monrose es el último actor que han dado al teatro Francés.

Es por lo tanto necesario que la autoridad intervenga cuanto antes, si quiere prevenir la decadencia irremediable del arte teatral. El programa de los estudios del conservatorio debe someterse á una severa revision. Deben crearse y fomentarse uno ó dos teatros de ensayo, para los discípulos que estudian aisladamente y bajo las inspiraciones de un profesor particular.

Las órdenes de estreno del antiguo regimen, restablecidas durante el Imperio, repugnan á nuestros principios de libertad. No se comprende ya de ninguna manera la obligacion impuesta á un cómico de aparecer, á su pesar, en un teatro á donde no le llama su gusto, ni acaso su vocacion. Sin embargo, es una disposicion que no nos parece incompatible con la legislacion general, y cuya adopcion favorecería la forma-

cion de las compañías para los teatros de primer orden. El obstáculo para ejecutar una orden de estreno puede proceder del cómico que la recibe ó del teatro á que se le destina. No puede obligarse al primero, si rehusa cumplimentar la orden; pero el gobierno podria, si el régimen de los privilegios estuviese en vigor, renovar las condiciones impuestas á los fundadores del Gimnasio, es decir, estipular en los privilegios que en el caso en que el actor diera su consentimiento, su compromiso anterior quedaba roto sin que pudiera aplicársele pena alguna por ello. La libertad personal del artista seria respetada y el director no podria quejarse de la ejecucion de una cláusula á la cual se habria sometido al recibir su investidura.

Sobre todo hay un teatro donde debería aplicarse esta disposicion; queremos hablar del Odeon. La creacion de un segundo teatro francés ha sido útil y buena; era conveniente que estuviesen consagrados dos teatros á la literatura seria, á la tragedia, á la alta comedia; pero se ha cometido la imprudencia de constituir al Odeon en rivalidad con el teatro Francés; debia únicamente ser su anexo, segun la intencion del decreto de 1807, organizar el Odeon de tal modo que llegue á ser una escena de estreno y de ensayo para el primer teatro, sin comprometer de modo alguno la libertad necesaria á los progresos del arte y la dignidad personal de los artistas, es un problema de una solucion difícil, lo confesamos, pero no imposible á lo que entendemos. Insistiremos únicamente sobre este pensamiento, que sería poco lógico subvencionar teatros, si no se les facilitasen los medios de formar su personal, y de justificar, por una incontestable superioridad, los sacrificios hechos en su favor.

4.^a Como complemento de estas medidas, y para asegurar su éxito, el gobierno debe robustecer en los teatros una autoridad que frecuentemente ha dejado debilitar. La reorganizacion general que solicitamos debe ser estudiada y arreglada en su conjunto, con cierta elevacion de pensamiento, con la constante preocupacion de los intereses de orden, buenas

costumbres , educacion pública y policia que con ella se relacionan. Desde que fueron puestos bajo la dependencia del ministro de lo Interior , los teatros carecen de una direccion especial y constantemente fija en ellos. La lista civil , en tiempo del Imperio y de la Restauracion , se honraba con sostener los grandes teatros ; les concedia cuantiosas gratificaciones , y los que la representaban consideraban como un deber defender establecimientos cuyo buen éxito interesaba en cierto modo al honor de la Corona. Esta solidaridad cesó el dia en que el gobierno de los teatros quedó á cargo de una simple oficina del ministerio.

El gobierno se vé muchas veces llamado á elegir directores para los teatros secundarios y para los de los departamentos. A creer noticias dignas de fé , estas elecciones no han sido hasta ahora muy afortunadas ; no siempre han recaido en los hombres mas irreprochables , en aquellos que por sus recursos estaban en mejor estado para subvenir á las obligaciones que contraian. Hemos visto á un director comprar un privilegio en millon y medio , y á falta de capital , pagarlo en billetes de espectáculo que , vendidos á mitad de precio , debian privarle por mucho tiempo de los beneficios , combinacion que hacia su ruina inevitable.

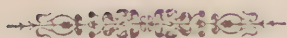
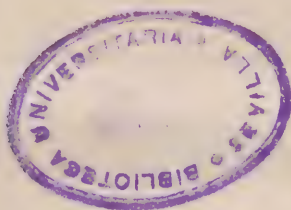
El primer deber de la administracion es no imponer á las empresas cargas inútiles. Habria poca dignidad de parte de los funcionarios públicos en armarse de sus títulos para obtener entradas gratuitas , para mendigar localidades , cuando este favor no está legitimado por las necesidades del servicio. La antigua aristocracia tenia por punto de honor el sostener los teatros. Los que poseen hoy la influencia ¿se espondrian por mas tiempo á una comparacion enojosa ? Los pequeños espectáculos , para los que son buenos todos los medios de conseguir un éxito satisfactorio , tienen una subvencion asegurada en el bolsillo de las personas de gustos é instintos vulgares. ¿Qué quedará á los teatros cuya mision es conservar las tradiciones y las conveniencias de la buena sociedad , si el

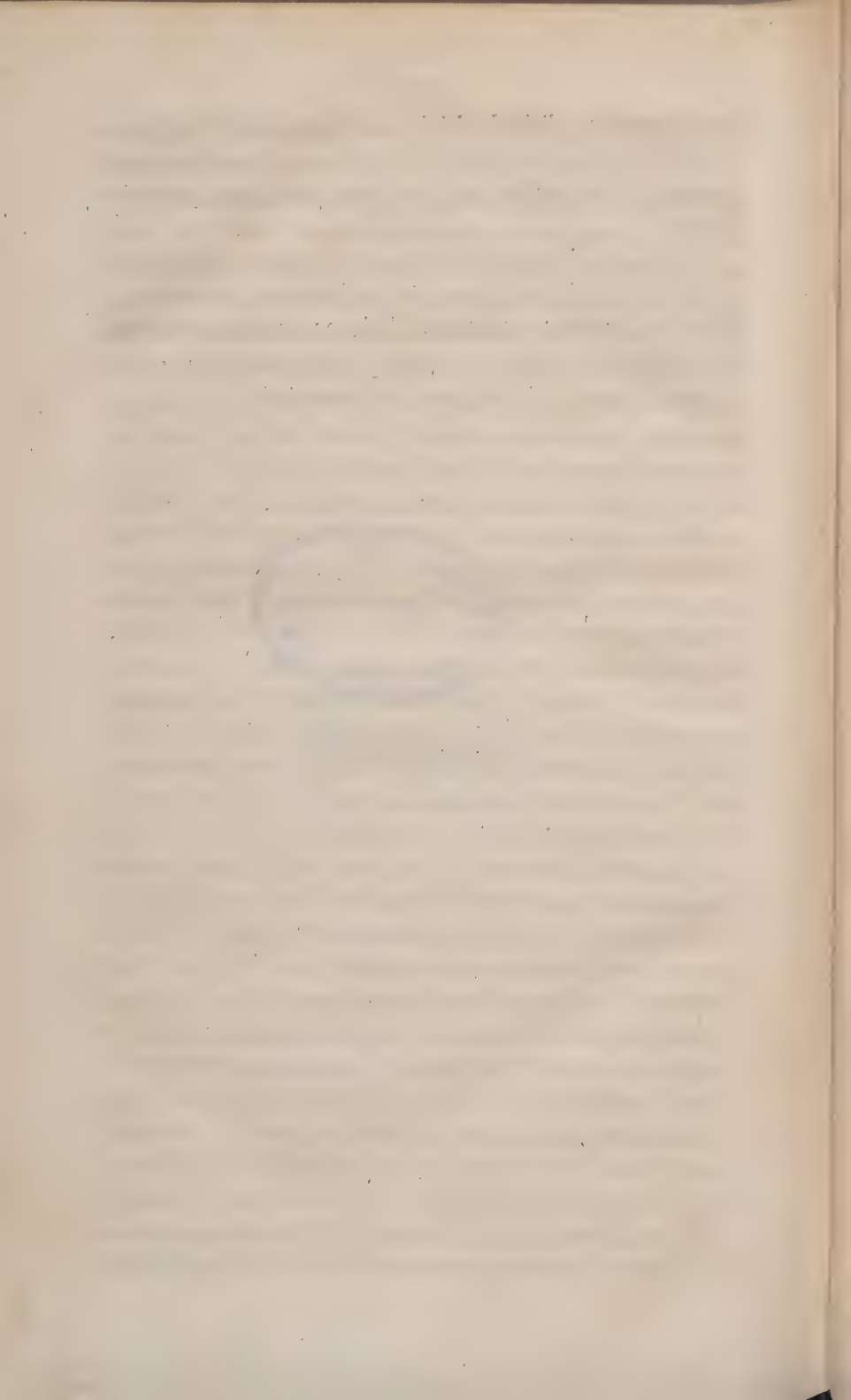
gobierno no se dedica á procurarles el útil patronazgo de las clases elevadas?

Nos hemos mostrado favorables al principio de la censura, sin admitir que el gobierno haya cumplido su obligacion cuando las tijeras de sus examinadores han mutilado las obras sometidas á su exámen. La censura es puramente negativa; previene la violacion del orden ó de la moral; pero no asegura su reinado. Un gobierno tiene una mision mas elevada: debe guiar al pueblo, puesto bajo su direccion suprema, vivificarle por medio de nobles emociones, inculcarle principios. Este deber es mas imperioso en un pais donde han quebrantado las creencias largas y profundas agitaciones, en una sociedad á quien ningun poder arrancará nunca la libertad del pensamiento y el derecho de exámen, en una nacion que encierra clases laboriosas, en considerable número, trabajadas por el espíritu de desorganizacion, y muchas irritadas por duros sufrimientos. Ningun medio de influencia es mas poderoso que el teatro, donde acude la multitud, ávida de placer y accesible á todos los sentimientos de grandeza, de generosidad y de sacrificio. Todos los gobiernos ilustrados han llamado en su ayuda las representaciones dramáticas. Se han señalado ya recompensas para el escritor que derrama en las familias producciones útiles á las costumbres. ¿Por qué ser menos genorosos hácia el que se dirige al pueblo en masa por medio del drama? Ofrezcánsele estímulos. Despues de la censura, que habrá impedido depravar las clases inferiores con espectáculos vergonzosos, presentarlas al pobre y al débil como la víctima obligada del rico y del fuerte, debe intervenir el poder público para honrar y enriquecer al escritor dedicado á hacer penetrar en el pueblo buenas y sanas doctrinas, á mostrarle en el trabajo, en la instruccion, en la sumision á las leyes de la Providencia, los medios seguros y honrados de mejorar su condicion ó de alijerar el peso de su miseria. ¿No seria tiempo de ensayar, á costa de algunos sacrificios, la direccion del placer de las clases mas numerosas, las mas dig-

nas de nuestra solicitud, hácia un objeto moral? Mr. Leon Faucher, durante su ministerio, realizó ya en parte este pensamiento y las medidas que tomó obtuvieron una aprobación general.

Tales son los objetos acerca de los cuales llamamos la atención del gobierno. Que el teatro halle en él protección y disciplina, premios y consejos. El día en que la administración pública desempeñe este papel, el porvenir de la escena francesa dejará de ser un motivo de inquietud.





INDICE DEL TOMO SEGUNDO.

TITULO PRIMERO.

LA ADMINISTRACION LOCAL.

	Páginas.
CAPITULO I. Del sistema general de la legislacion relativamente á la administracion local.	5
II. El Municipio.	22
§. 1.º Organizacion del poder municipal.	29
§. 2.º Atribuciones del maire y del consejo municipal.. . . .	38
— Gastos.—Ingresos.—Presupuestos.—Contabilidad.	50
III. El Canton y el Distrito.	59
IV. El Departamento.	70

TITULO SEGUNDO.

LA POLICIA.

94

I.

POLICIA GENERAL.

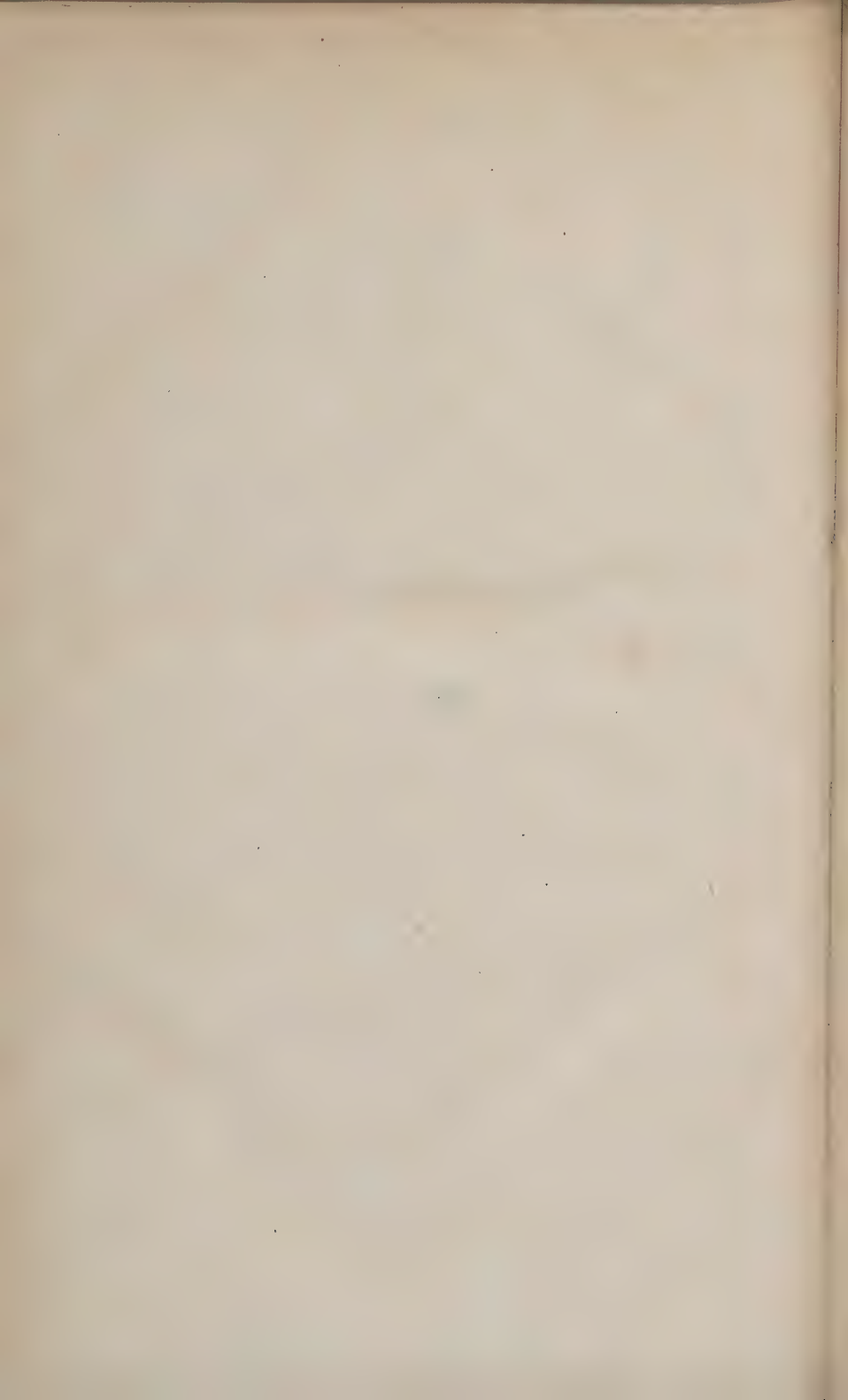
CAPITULO I. Policía relativa á la seguridad del Estado	95
II. Policía relativa á la proteccion de las personas.	105
III. Policía de Sanidad	108
IV. Policía relativa á la industria.	116
V. Policía relativa al comercio.	129
VI. De las autoridades encargadas de la policía.	134

II.

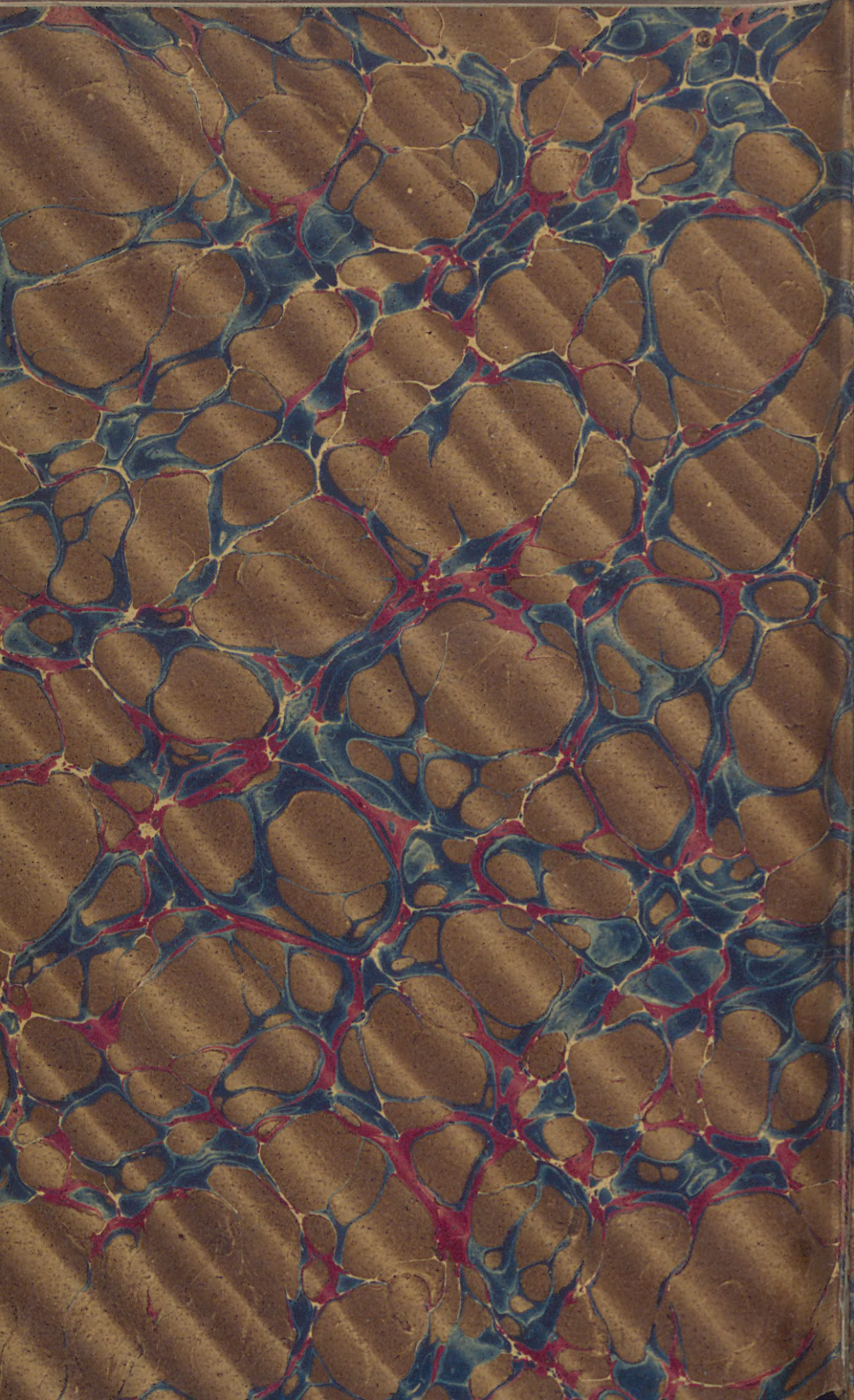
EL PREFECTO DE POLICIA.

138

CAPITULO I. Organizacion general.	142
II. Poderes del Prefecto.—Ordenanzas de Policía.—Derecho de detencion.	151
III. Policía Política.	158
IV. Policía de Seguridad.	165
V. Policía administrativa.. . . .	179
VI. Atribuciones diversas.. . . .	187







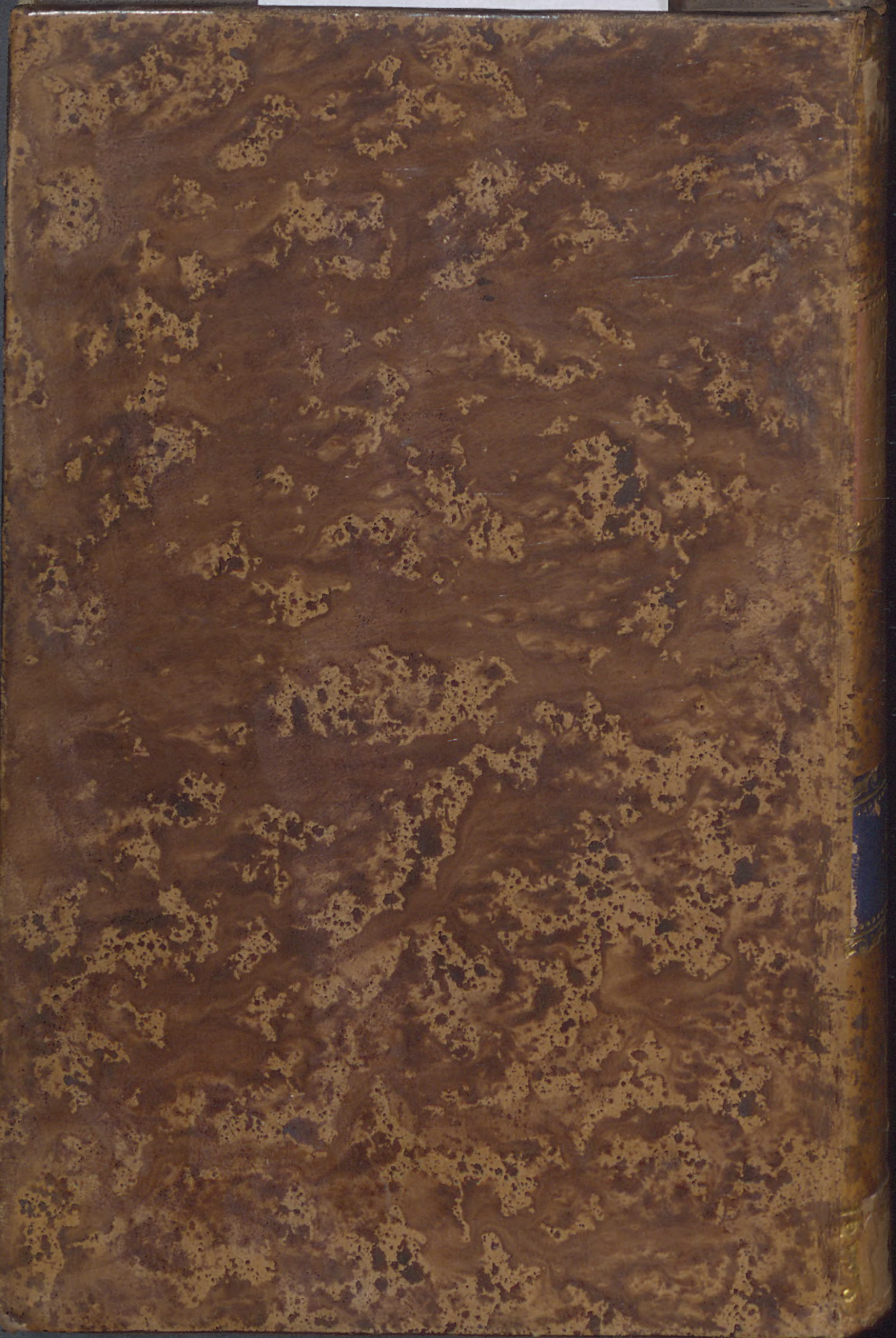


UNIVERSIDAD DE SEVILLA



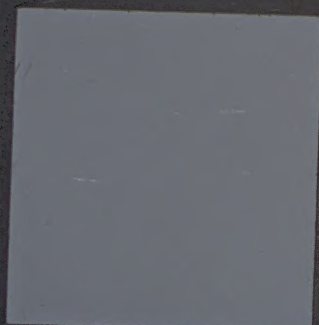
600703684

i2656547x



+ colorchecker classic

calibrite



100mm